HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI

el siglo XX

II. Europa después de la segunda guerra mundial 1945-1982. Tomo 2

WOLFGANG BENZ
HERMANN GRAML



HISTORIA UNIVERSAL

SIGLO XXI

Volumen 35

El siglo XX.
II. Europa después de la segunda guerra mundial, 1945-1982

Tomo 2

VOLUMEN COMPILADO POR

Wolfgang Benz

Nació en 1941 en Ellwangen/Jagst. Doctor en filosofía e historiador, es colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea y redactor-jefe de la Serie de Documentos de los Cuadernos Trimestrales de Historia Contemporánea *(Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte).*

Es autor de numerosos libros, entre ellos: *Süddeutschland in der Weimarer Republik* (1970); *Politik in Bayern. 1919-1933* (1971); *Quellenkunde zur Zeitgeschichte* (1973); *Einheit der Nation. Diskussion und Konzeptionen zur Deutschlandpolitik der grossen Partein seit 1945* (publicado en 1978 en colaboración con Günter Plus y Werner Röder); *Bewegt von der Hoffnung aller. Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes* (1979); *Rechtsradikalismus. Randerscheinung oder Renaissance?* (1980); *Die Bundesrepublik Deutschland. Politik, Gesellschaft, Kultur,* 3 vols. (1983).

Hermann Graml

Nació en 1928 en Miltenberg/Meno. Historiador y colaborador científico del Instituto de Historia Contemporánea en Munich. Es redactor-jefe de los *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte.*

Autor de numerosas publicaciones sobre temas de política exterior en el período de entreguerras, sobre la resistencia en el III Reich, las persecuciones nazis de los judíos, entre otros *Der 9. November 1938. «Reichskristallnacht»* (1953; 8.ª ed., 1962); *Europa zwischen den Kriegen* (1969; 5.ª ed., 1982); *Europa* (1972); como compilador, en colaboración con Wolfgang Benz, *Die revolutionäre Illussion, Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. Erinnerungen von Curt Geyer* (1976); *Aspekte deutscher Aussenpolitik im 20. Jahrhundert* (1976); *Sommer 1939. Die Grossmächte und der europäische Krieg* (1979).

Ambos son compiladores del volumen 36 de la *Historia Universal Siglo XXI. El siglo XX, III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder.*

TRADUCTORA

Marisa Delgado

DISEÑO DE LA CUBIERTA

Julio Silva

Historia Universal

Siglo veintiuno

Volumen 35

EL SIGLO XX.

II. EUROPA DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 1945-1982. 2

compilado por
Wolfgang Benz y Hermann Graml





siglo veintiuno editores, sa de cv
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310 MÉXICO, D.F.

siglo veintiuno de españa editores, sa
C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda
AV. 3a. 17-73 PRIMER PISO, BOGOTÁ, D.E. COLOMBIA

Creative Commons

primera edición en español, junio de 1986
© siglo xxi de españa editores, s. a.
segunda edición en español, 1986
© siglo xxi editores, s. a. de c. v.
ISBN 968-23-0009-6 (obra completa)
ISBN 968-23-1135-7 (volumen 35-tomo 2)

primera edición en alemán, 1983
© fischer taschenbuch verlag gmbh, frankfurt am main
título original: das zwanzigste jahrhundert
11. europa nach dem zweiten weltkrieg

derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico/printed and made in mexico

Indice

NOTA EDITORIAL

Al final de este tomo 2 se incluyen la Bibliografía e índices analítico y de ilustraciones, correspondientes a los dos tomos en que se ha dividido este volumen 35 de nuestra Historia Universal.

4. La evolución de Europa occidental hasta la elección directa del Parlamento Europeo

I. LA UNION EUROPEA

Tras la división de Europa entre 1945 y 1949, el «movimiento europeo», alimentado de las más diversas corrientes de pensamiento, sólo abarcaba los Estados de Europa occidental. El Consejo de Europa, fundado en 1949, aun siendo la mayor agrupación europea con sus 21 miembros, en importancia política iba cada vez más a la zaga de otras organizaciones europeas. El foro abierto del Consejo de Europa, sobre la base ideal de los derechos humanos («Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales», 1950), mantuvo la idea originaria de una Europa unida gracias a numerosas actividades culturales.

El proceso de unificación de Europa occidental, caracterizado por numerosas demoras, rodeos y rupturas, extrajo su dinamismo político de la unión de Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo para formar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951. El proyecto ligado a la CECA de una Comunidad Europa de Defensa excluía desde un principio a los países neutrales; también Gran Bretaña hubo de quedarse fuera debido a las diferencias franco-británicas en cuanto al papel de los Estados Unidos, a pesar de que la idea de un ejército europeo había sido concebida por Churchill. Sea como fuere, la voluntad de unión, simbolizada por políticos como Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer o Paul-Henri Spaak, era tan fuerte que, con la reconciliación germano-francesa, la prueba de la capacidad de trabajo de una institución comunitaria y la creación de una solidaridad de intereses más amplia, la CECA alcanzó sus objetivos más importantes en un corto espacio de tiempo y los seis «países del Plan Schuman» se pusieron manos a la obra para incluir en la integración todo el ámbito económico en una segunda fase mediante la creación de un mercado común. El Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, por el cual nacieron la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), se propuso como objetivo la

libre circulación de mercancías (Unión Aduanera), la libre circulación de servicios y de capital y la libre «circulación de personas» (libertad en la elección de lugar de trabajo y de residencia). Las demás intenciones en política de ordenamiento sólo se concretaron en el sector agrario y en la política de comunicaciones. El Euratom debía coordinar la investigación nuclear y el empleo de la energía nuclear con fines pacíficos [1].

Las esperanzas de que Europa occidental pudiese constituirse a la larga en la tercera fuerza política junto a las superpotencias se basaban en la confianza en un proceso dirigible conforme a la economía de mercado de la unión económica que, por sus resultados, habría de extenderse necesariamente a otros ámbitos políticos y desembocar en una unión política *(«spill over»)*. Dentro de la relación de fuerzas entre las instituciones recién creadas —la Comisión Europea y el Parlamento Europeo como asamblea común de la CECA, la CEE y el Euratom, el Consejo de Ministros y el Tribunal de Justicia—, el peso mayor radicaba en principio en la Comisión, «motor» de la unificación en palabras de su primer presidente, W. Hallstein, persona de confianza de Adenauer durante muchos años. En la medida en que se tratase de la supresión de leyes y disposiciones nacionales contrarias a la integración («integración negativa»), como en el caso de la unión aduanera, bastaba este organismo tecnocrático, libre de procesos nacionales de formación de la voluntad y de controles parlamentarios. Pero cuando se trataba de ceder derechos soberanos a las comunidades («integración positiva»), como en el caso del mercado agrícola, que afectaba por otra parte a los más diversos intereses de los grupos de presión nacionales, el Consejo de Ministros y las «cumbres», convocadas cada vez con más frecuencia desde finales de la década de 1960 e institucionalizadas como Consejo Europeo, cobraron mayor importancia. Para justificar los compromisos impopulares o las decisiones aplazadas, los gobiernos movilizaron a domicilio con no poca frecuencia la desconfianza, ampliamente extendida, contra los «eurócratas» de Bruselas [2].

La unión aduanera se llevó a cabo mediante reducciones aduaneras por etapas en el interior desde 1959 y mediante una tarifa exterior común hasta julio de 1968. La reconducción de las corrientes comerciales en favor de la CEE, reflejada en la mejora de las balanzas de pagos de los Estados miembros y en el aumento del intercambio de productos dentro de la Comunidad, impulsó al presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, a integrar también el comercio mundial en la política exterior americana de nueva fórmula. Con el lema de la «amistad atlántica»,

los Estados Unidos trataron de conseguir reducciones aduaneras en el comercio con Europa occidental, las cuales se hicieron realidad dentro del marco del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, desde 1947) en dos etapas: 1961-62 *(Dillon round)* y 1964-67 *(Kennedy round)*. Al mismo tiempo, algunos países del Tercer Mundo y los países de comercio estatal del Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon) tomaron parte en las

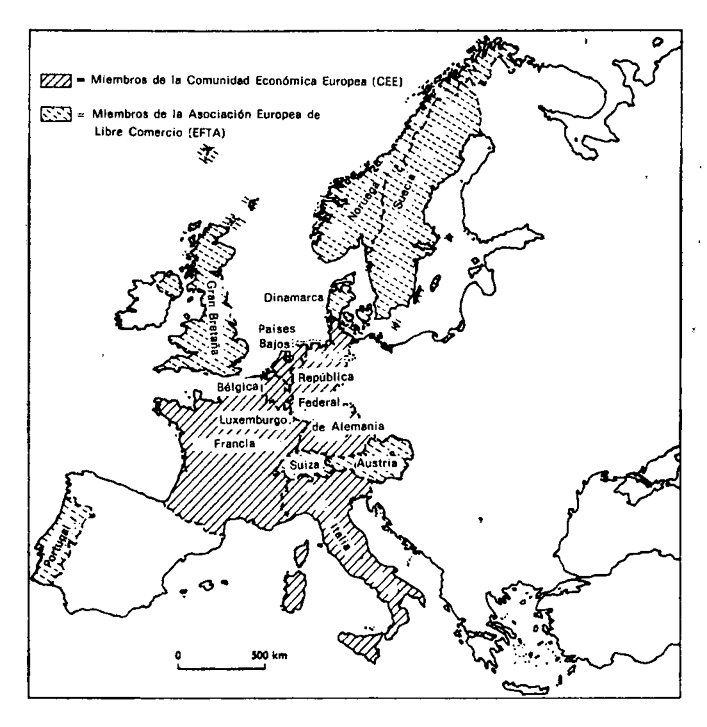


FIG. 5.—*Miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).*

Un tratado de fusión, que entró en vigor el 1 de enero de 1967, incluye a la CEE, la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) y el Euratom dentro de la Comunidad Europea, en la que Dinamarca, Italia y Gran Bretaña (antes miembros de la EFTA) integresaron en 1973 y Grecia el 1 de enero de 1981. La EFTA acogió a Islandia en 1970; desde 1978 existe un grupo de trabajo conjunto entre la EFTA y Yugoslavia.

negociaciones a través de Naciones Unidas. En la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo (1964), al igual que en la sesión de clausura del *Kennedy round* en Ginebra (1967), en la que se acordaron reducciones aduaneras del 35 al 40%, la Comisión actuó como directora de las negociaciones en representación de todos los Estados de la CEE.

Debido a sus relaciones económicas con la Commonwealth, Gran Bretaña permaneció alejada de las comunidades europeas en 1951 y 1957. Después de que hubieran fracasado en 1959 los esfuerzos por crear dentro de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, desde 1961 OCDE) una gran zona europea de libre comercio, Gran Bretaña siguió adelante con el proyecto de una pequeña zona de libre comercio instituida a través de reducciones aduaneras y abierta también por ello a los países neutrales. La convención de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) sería firmada el 20 de noviembre de 1959 por Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Austria, Portugal, Suecia y Suiza. Teniendo en cuenta el fraccionamiento geográfico de la EFTA, sólo Escandinavia constituía un espacio cerrado. Finlandia se unió en 1961 a la zona de libre comercio sin renunciar a sus relaciones especiales con el Comecon, fijadas en 1973 en un tratado de cooperación multilateral económica, científica y técnica [8].

Con ello, en 1959 Europa se hallaba dividida en tres partes desde el punto de vista de la política comercial, pues además de la CEE y de la EFTA existía también un grupo de «países europeos en desarrollo»: Islandia, Irlanda, Grecia, Turquía y España. En tanto que Islandia ingresaba en la EFTA en 1970, Grecia y Turquía intentaron asociarse a la CEE (tratado de adhesión de 1961; el tratado con Grecia quedó en suspenso durante el «régimen de los coroneles»). Irlanda permaneció alejada de la EFTA, a pesar de sus estrechas relaciones comerciales con Gran Bretaña y en 1961 —antes que Gran Bretaña— presentó su solicitud de ingreso en la CEE. España, que al igual que Portugal fue mantenida en «cuarentena» política por el Consejo de Europa en razón de su régimen, sólo en 1970 pudo firmar un acuerdo preferencial con la Comunidad Europea. Tras la muerte de Franco (1975), el acercamiento a Europa se realizó con más rapidez, siendo acogida en 1977 en el Consejo de Europa; desde 1979 se mantienen conversaciones sobre su ingreso en la CEE.

En vista de los éxitos logrados por la CEE, Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca (1961) y Noruega (1962) trataron de iniciar conversaciones acerca de su ingreso, interrumpidas por el presidente francés De Gaulle en su conferencia de prensa del 14 de febrero de 1963 con su famosa frase «Inglaterra no está preparada

para entrar en el Mercado Común»[4]. La aspiración a desempeñar el papel de gran potencia independiente dominó también la política europea gaullista. Por una parte, Francia dependía del potencial económico de la Europa occidental continental, principalmente de la República Federal de Alemania; por otra parte, y por tal aspiración, no podía aceptar la competencia de Gran Bretaña «atlántica» ni tampoco ceder a la voluntad de integración de los «europeos», sobre todo en la Comisión. Así, con la política de «silla vacía» en el Consejo de Ministros en 1965-65 y el rechazo de la segunda tentativa inglesa de ingreso en 1967, Francia provocó una grave crisis en las comunidades europeas, fundidas entretanto en una sola comisión. Para la vuelta de Francia al Consejo de Ministros, que hasta ese momento había tomado sus decisiones por mayoría, los restantes países de la CEE pagaron en enero de 1966 un alto precio con su aprobación del principio de unanimidad «en caso de intereses vitales».

Los ministros de Agricultura de la CEE se pusieron de acuerdo el 14 de enero de 1962 sobre el principio de la uniformidad de los precios agrarios en el interior y un sistema tributario en las fronteras exteriores de la Comunidad, pero la introducción de un mercado agrario financiado comunitariamente no pudo acordarse hasta el 1 de julio de 1968, después de la crisis de 1965-66. Los planes estructurales de la comisión para una «reducción saludable de la agricultura»[5], cuyo objetivo era el acercamiento entre la producción y el consumo, y con ello el establecimiento de mecanismos de mercado, chocaron con una fuerte oposición —tal como se puso de manifiesto en la polémica en torno al memorándum del vicepresidente de la comisión, S. L. Mansholt, en el invierno de 1968-69— por parte de las asociaciones de agricultores y de los gobiernos. El sistema de garantías de precios retrasó en la mayoría de los casos la adaptación estructural de la agricultura. La ampliación de la CEE en 1973 y 1981, el proyectado ingreso de España y Portugal, las diferentes tasas de inflación y fluctuaciones monetarias, las desigualdades regionales y, en buena medida, la relación con los países del Tercer Mundo que dependen de la exportación de productos agrícolas, se han convertido en una carga adicional para el mercado común agrario. Cierto es que la integración más avanzada es la que ha tenido lugar en este campo; en el presupuesto de la CEE, de un importe total de 37 000 millones de marcos alemanes (1979), sólo la agricultura consume las tres cuartas partes, de las cuales, a su vez, la parte del león recae en las medidas de protección de los precios. La disputa surgida en 1979 entre Gran Bretaña y los res-

tantes países de la CEE acerca de la redistribución de la financiación del presupuesto comunitario hizo más que patente la necesidad de una reforma del mercado agrario comunitario. Tras su debilitamiento a consecuencia de los disturbios de mayo de 1968 y retirada del general De Gaulle, Francia adoptó una actitud más conciliadora. En la cumbre de La Haya de 1969, el presidente Pompidou dio luz verde a las negociaciones para el ingreso de Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega. Al mismo tiempo, los jefes de gobierno acordaron una integración «al más alto nivel» que, según el Informe Werner de 1970, debía realizarse en tres etapas, a través de la armonización de la política económica y monetaria, de los mercados de capital y de los impuestos hasta 1980. Tras la ampliación de la CEE, que se convirtió en la Comunidad de los Nueve el 1 de enero de 1973 (la población de Noruega rechazó el 25 de septiembre de 1972 el ingreso en la CEE), los países restantes de la EFTA mantuvieron la zona de libre comercio, firmando con la CEE, a excepción de Finlandia, un acuerdo preferencial.

Un importante impulso para la creación de la CEE provino de la concentración de capital anterior. El Mercado Común favorecía por su parte, sobre todo tras el fin de la coyuntura favorable de 1963-64, un nuevo proceso de concentración que constantemente estaba muy por delante del proceso político de unificación. El «desafío americano», es decir, la elevada disposición de riesgo de los consorcios americanos en investigación y tecnología gracias a la gran concentración existente, pudo ser aceptado por las empresas europeas a principios de la década de 1970 para al menos impedir que se agrandase la «brecha tecnológica» respecto a los Estados Unidos. A pesar de que la concentración de empresas hace ya tiempo que ha superado el marco europeo y de que en numerosos sectores ha dejado sin validez un mercado en funcionamiento, todavía hoy falta una reglamentación europea de la competencia. Tampoco los sindicatos nacionales disponen de ninguna organización europea eficaz como contrapeso a la concentración internacional del capital [6].

La ampliación de la Comunidad Europea y el impulso inicial para la unión económica y monetaria coincidieron con la primera ofensiva de precios del crudo de los países exportadores de petróleo en el otoño de 1973 y con la crisis económica mundial provocada por ella. El informe del Club de Roma —organización informal de científicos e industriales prestigiosos—, aparecido en 1972, acerca de la «Situación de la Humanidad» agudizó la toma de conciencia de una amplia capa de la opinión pública

sobre los peligros del crecimiento de la población mundial, del consumo de materias primas no regenerables y de la contaminación ambiental[7]. El anunciado «fin de la sociedad del desarrollo» hizo nacer en muchos el deseo de «escapar» de la sociedad moderna para retirarse al supuesto idilio de las formas de vida preindustriales en el entorno abarcable de la propia región o provincia. La falta de diálogo entre los partidarios de tales «contraculturas» —principalmente jóvenes— y los defensores de la sociedad tradicional de consumo y logro ha favorecido en muchos países de Europa occidental un clima de violencia que, entre tanto, también ha alcanzado a «islotes de tranquilidad» como Suiza.

Ante la «crisis permanente» en que se encuentra la CEE «desde principios de la década de 1970; como muy tarde, desde 1973»[8], los gobiernos tendieron a seguir su propio camino, titubeando a la hora de «ceder competencias en ámbitos 'sensibles' de la política a la Comunidad». La tardía introducción del impuesto sobre el valor añadido, único «impuesto comunitario» auténtico, en Bélgica e Italia, los pasos en política comercial por separado de Italia, el aislamiento de los Países Bajos en el embargo árabe de petróleo de 1973, la política monetaria de Alemania Occidental bajo el ministro de Economía Schiller, la salida de Francia, Gran Bretaña e Italia de la «serpiente monetaria» (que desde 1972 debía limitar las fluctuaciones monetarias a una mínima frecuencia con la cooperación de los bancos centrales) y los cambios de «coalición» coyuntural dentro de la CEE documentan claramente el desencanto surgido. Con la unidad de cuenta europea (1975), independiente del dólar americano y con la creación de un sistema monetario europeo (1979), en el que Gran Bretaña, por cierto, no participa, el Consejo Europeo ha dado al menos los primeros pasos para llegar a la unión monetaria. En cuanto al abastecimiento energético y a la protección del medio ambiente, problemas a los que la crisis había conferido especial actualidad y que sólo es posible resolver a escala europea, todos los gobiernos insistieron en aplicar recetas nacionales. A consecuencia de la recesión se redujeron las importaciones de crudo en 1974-75 en comparación con el «año récord» de 1973, pero luego volvieron a aumentar hasta 1979, hasta que el segundo —y mucho más fuerte— empuje de los precios del petróleo y el desarrollo ascendente del dólar americano volvieron a frenar las importaciones a partir de 1980. Las previsiones estatales en cuanto a la demanda futura de energía resultaron poco fiables y han tenido que ser corregidas constantemente. A fin de reducir la depen-

dencia de las importaciones de petróleo, Francia forzó en solitario la construcción de centrales nucleares para el suministro de energía eléctrica, aceptando conscientemente los riesgos poco claros del almacenamiento del combustible utilizado. En 1978 funcionaban 18 en Gran Bretaña, 15 en la República Federal de Alemania, 6 en Suecia, 4 respectivamente en Suiza, Italia y Bélgica, 3 en España y una en los Países Bajos; en Francia funcionaban 13, pero había otras 37 en construcción o en proyecto[9].

Con el fin de asegurarse las materias primas necesarias, la CEE recurrió, en sus relaciones con el Tercer Mundo, a la política introducida en los tratados de Yaundé (1963 y 1969) y Arusha (1968) sobre reducciones aduaneras para aquellos países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP) que son antiguas colonias de Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos. Los tratados de Lomé (1975 y 1979), en los que se incluyó a los territorios africanos de habla inglesa —lo cual aumentó el número de países en desarrollo asociados hasta 1980 a 59—, eliminaron los aranceles y las limitaciones cuantitativas del 99,5% de los productos de exportación de los países ACP. La apertura del mercado europeo es, no obstante, relativamente poco problemática en la medida en que los países ACP tienen poco que ofrecer, exceptuando las materias primas. En lo que se refiere a los productos agrarios, la CEE siguió imponiendo restricciones a la importación, ante la existencia de excedentes propios. La Comunidad permitió, sin embargo, la creación de un fondo de estabilización para compensar las pérdidas en la exportación de materias agrarias básicas (STABEX). En tanto que las posibilidades de la política comercial se agotaron, las restantes partes del acuerdo eran objeto de controversia. La CEE no logró obligar a los países ACP a acogerse a las inversiones europeas en los países en desarrollo y a respetar los derechos humanos; por otra parte, sólo mediante presión pudieron los países ACP lograr que la Comunidad aumentara sus fondos para el desarrollo de 10 000 millones (1975) a 14 000 millones (1979) de marcos alemanes, lo que en muchos casos llegaba justamente para compensar la inflación.

En varias conferencias de las Naciones Unidas y del Movimiento de Países No Alineados, los países en desarrollo se esforzaron por completar el compromiso *moral* de los Estados industrializados de prestar ayuda al desarrollo con un compromiso *legal* de realizar una política de desarrollo. Pero en este caso la respuesta de los países de la CEE no fue unánime: principalmente la República Federal rechazó las propuestas presentadas por los países en desarrollo para impedir mediante una regla-

mentación internacional las fluctuaciones de los precios de las materias primas y crear un nuevo «orden económico mundial». Asimismo, la ayuda concreta al desarrollo por parte de Europa occidental no fue concedida a través de la CEE, sino de forma bilateral. Aunque sólo la ayuda pública al desarrollo de la República Federal de Alemania, por ejemplo, fue en 1975, con cerca de 1 700 millones de dólares, dos veces mayor que la de todos los Estados del Comecon juntos, la mayoría de los países de Europa occidental quedaron por debajo de la ayuda exigida por la ONU y por los 77 países en desarrollo en la «Carta de Manila» (1976) del 0,7% del producto interior bruto respectivo hasta 1980. En la conferencia de países industriales y en vías de desarrollo sobre energía, materias primas y ayuda al desarrollo impulsada por Francia (1975), así como en el informe de la Comisión Norte-Sur creada por el Banco Mundial bajo la presidencia de W. Brandt, los países de la OCDE reconocieron al menos en principio la necesadidad de una reforma del orden económico mundial y de una mayor participación del Tercer Mundo en los procesos decisorios [10].

La coyuntura favorable y el pleno empleo provocaron a fines de la década de 1950 un gran movimiento emigratorio de trabajadores extranjeros de las regiones económicamente menos desarrolladas hacia los países más industrializados: República Federal de Alemania, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Lo determinante, por parte de los emigrantes, era el deseo de obtener mejores salarios y, por parte de los empresarios de Europa occidental, la necesidad de mano de obra suplementaria, sobre todo de peones. A mediados de la década de 1960, Suiza registraba el porcentaje más elevado de extranjeros dentro de la población. Pero en tanto que la integración de trabajadores cualificados y culturalmente «similares» de Europa occidental no ocasionó apenas problemas, como lo demuestran los ejemplos de alemanes y franceses en Suiza o de finlandeses en Suecia, la afluencia de argelinos a Francia, de turcos a la República Federal y de trabajadores de color de los países de la Commonwealth a Gran Bretaña encerraba un considerable potencial de conflictos sociales no sólo con respecto a la integración estatal (lengua, escolarización de los hijos de los trabajadores extranjeros, vivienda...), sino también con respecto a los trabajadores autóctonos y a los sindicatos. El hecho de que los emigrantes ocupasen, por regla general, puestos de trabajo rehuidos por los trabajadores del país de acogida dio lugar al nacimiento de un nuevo proletariado que, debido a su diferente

manera de ser cultural y étnica, vivía en un gueto social. En los países de origen con la emigración se resolvió ciertamente a corto plazo más de un problema social, pero a la larga se consolidó el subdesarrollo. Con el aumento de las cifras de desempleo desde 1973, los gobiernos europeos occidentales trataron de frenar o cortar, por distintos caminos y con diferentes resultados, la afluencia de trabajadores extranjeros, contra lo cual reaccionaron no sólo los propios extranjeros afectados, sino también los empresarios de las ramas que no podían prescindir ya de los trabajadores extranjeros [11].

El Parlamento Europeo no ha podido democratizar el proceso de toma de decisiones dentro de las comunidades. La decisión del Consejo Europeo de 1976 de que desde 1978 los diputados no fuesen delegados de los Parlamentos nacionales, sino que fuesen elegidos por los pueblos, fue vinculado por Gran Bretaña y Francia a la condición de que no se ampliasen las competencias del Parlamento, por lo demás ya escasas. Los Estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a una ley electoral unitaria y en cuanto al número de 410 escaños y de su distribución nacional sino después de largos debates, de manera que la fecha de las elecciones hubo de ser pospuesta a junio de 1979. Los partidos que se formaban libremente a nivel europeo no lograron hasta este momento aparecer como correas de transmisión entre la población y la unión europea, toda vez que apenas concurrieron políticos de «primera fila» y que muchos se retiraron a la jubilación política con el escaño en el Parlamento Europeo. Al interrogante de si la idea de una «democratización desde arriba», por ejemplo mediante la ampliación de las competencias del Parlamento, basta para eliminar la falta de legitimación democrática de la Comunidad Europea se ha de responder con la duda, habida cuenta de la evolución que ha tenido lugar de 1957 a 1979 [12].

El ejemplo de las guerras de guerrillas modernas y la intervención de las organizaciones palestinas en Europa occidental provocaron desde finales de la década de 1960 una ola de actos de violencia terrorista. A las organizaciones secretas de las zonas tradicionalmente en crisis, como Irlanda del Norte y el País Vasco, se sumó un nuevo terrorismo de grupos de extrema izquierda tales como la Fracción del Ejército Rojo en la República Federal y las Brigadas Rojas en Italia. Los objetivos preferidos de la violencia terrorista fueron, además de los ciudadanos y las instalaciones israelíes y norteamericanos, los representantes de la política, la economía y la justicia del propio país. El atentado palestino contra el equipo olímpico de Israel en Munich (1972),

los atentados contra el presidente de la Audiencia Drenkmann en Berlín (1974), contra el fiscal general del Estado Buback (1977), y contra el director de banco Ponto (1977), el secuestro y asesinato del presidente de la patronal Schleyer (1977) y del dirigente democratacristiano italiano A. Moro (1978), el asalto a la embajada alemana en Estocolmo (1975), a la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena (1975), el secuestro de un avión de la Air France de París a Entebbe (Uganda) y la liberación de los rehenes por un comando israelí (1976), así como el caso paralelo de un aparato de la Lufthansa de Mallorca a Mogadiscio (Somalia) (1977), fueron los puntos culminantes, desconcertantes y espectaculares del terror. Los Estados de Europa occidental reaccionaron en parte con un recrudecimiento de las leyes penales, del ordenamiento procesal y de las condiciones de reclusión. Bajo la dirección del Servicio Federal de Investigación Criminal se mejoraron en la RFA los métodos de captura con ayuda de ordenadores y la colaboración entre las policías por encima de las fronteras. En el plano europeo, los Estados miembros del Consejo de Europa concluyeron el 27 de enero de 1977 un acuerdo para combatir el terrorismo. El terror de extrema izquierda, en el cual se entralazaba una maraña de motivaciones políticas y criminales, volvió a avivar el terrorismo, siempre latente, de las organizaciones de extrema derecha, como lo prueban el atentado de la estación de Bolonia, en el cual murieron 84 personas, y el realizado en la «fiesta de la cerveza» de Munich en 1980 [13].

II. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

El canciller Adenauer condujo indiscutiblemente a la victoria en las elecciones de 1957 al *Bundestag* a los cristianodemócratas (CDU/CSU). Bajo la impresión de las grandes crisis internacionales (Polonia, Hungría, Suez), la campaña electoral se centró enteramente en temas de política exterior y seguridad. Los cristianodemócratas que estaban en el gobierno se aprovecharon de la actitud básicamente anticomunista de la población, presentando la integración occidental y el creciente reconocimiento internacional de la República Federal como parte de una concepción occidental unida. Pero, tras la fachada, ya en 1957 aparecieron las grietas, que ni al canciller ni a sus más estrechos asesores habían pasado inadvertidas. El cambio de la estrategia americana por la «intimidación nuclear masiva» a costa de los ejércitos

convencionales, así como el abandono por británicos y franceses de la vinculación entre reunificación alemana, por un lado, y desarme y seguridad europeos, por otro, anunciaron el fin de una «política de fuerza» occidental común. La idea de que el ámbito de poder soviético podía ser confinado al Este *(«roll back»)* se había convertido, en cualquier caso, en algo obsoleto a la vista del empate atómico entre las potencias mundiales. De hecho la reunificación, constantemente proclamada como el objetivo más noble, quedó relegada a un futuro lejano con la integración occidental. El abismo entre la realidad y la reivindicación retórica se hizo patente para todos como muy tarde en 1961 con la construcción del muro de Berlín [14].

La «conmoción» (Alfred Grosser) provocada en los debates de política interior por el rearme un decenio después de la capitulación del militarismo alemán se había calmado. Tras la llamada de advertencia de los científicos de Gotinga (abril de 1957), la posibilidad de que el ejército federal fuera dotado de armas nucleares pasó al primer plano de la polémica. Cierto es que la República Federal se había comprometido a renunciar a la producción de armas ABC propias y a subordinar todas las unidades al mando supremo de la OTAN, pero el gobierno federal manifestó reiteradamente la intención de equipar al ejército con armas atómicas tácticas como «desarrollo de la artillería» (Adenauer) y con sistemas portadores de cabezas nucleares. No obstante, estos y otros esfuerzos posteriores por poseer armas atómicas o por tener acceso a ellas fracasaron (se habló de un ejército nuclear multilateral» y de una participación en la *«force de frappe»* francesa). La actitud discrepante ante esta cuestión fue abandonada primeramente por el gobierno de la «gran coalición» y de manera definitiva por el primer gobierno social-liberal presidido por Willy Brandt con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear el 28 de noviembre de 1969 [15].

Tras la restitución política de la región del Sarre a la República Federal el 1 de enero de 1957, el camino para la fusión de los seis «países del Plan Schuman» en la CEE y el Euratom estaba libre. El Tratado de Roma, que incluía a Berlín Oeste y garantizaba el mantenimiento del comercio interzonal (cláusula de Alemania), fue ratificado por el *Bundestag* el 5 de julio de 1957. No obstante, desde el punto de vista alemán, el tratado quedaba muy por detrás de la deseada unión política y militar de Europa occidental.

Con el lema de Ludwig Erhard: «Bienestar para todos», en el año electoral de 1957 se llevaron a cabo toda una serie de reformas sociales encaminadas a borrar la impresión de que se olvi-

daba a los grupos a la sombra del «milagro económico». El núcleo de todo ello fue la reforma de las pensiones, que en lo esencial perseguía dos objetivos: la pensión adquiría una «función sustitutiva del salario», esto es, los ingresos disponibles no debían reducirse abruptamente como hasta entonces en el momento de la entrada en vigor del seguro, sino que se debían ajustar dinámicamente, más allá de las tasas de aumento de los precios, al desarrollo general de los salarios. Las reformas sociales y el éxito económico (aumento del producto interior bruto, triplicación del volumen de negocios de la industria de 1950 a 1962, incremento real anual de los ingresos en un 5% aproximadamente hasta 1966) se atribuyeron a la «economía social de mercado» de Erhard, a la cual no tenía nada que oponer desde el punto de vista programático el Partido Socialdemócrata (SPD) en la oposición.

En las elecciones al Parlamento federal de 1957, la CDU/CSU alcanzó, con un porcentaje de votos del 50,2%, la mayoría absoluta, su mejor resultado en la historia de posguerra. El canciller Adenauer había llegado al cenit de su carrera. El SPD aumentó el porcentaje de sus votos en más de los votos comunistas que le correspondieron tras la prohibición del Partido Comunista (KPD) en 1956. La distancia respecto a la CDU/CSU en el gobierno se había agrandado entre tanto, de manera que sólo un cambio de contenido y de método, así como la apertura al «Partido Popular» prometían una irrupción decisiva en nuevas capas del electorado. El resultado electoral reforzó el proceso de concentración visible ya en las elecciones de los Parlamentos regionales: los partidos regionales perdieron importancia o quedaron triturados entre los partidos burgueses; junto a los liberales (FDP), sólo el Partido Alemán (DP) accedería al *Bundestag* gracias a un acuerdo electoral con la CDU. La Alianza de los Desterrados y Desposeídos (BHE) fracasó, al igual que los otros partidos pequeños por la cláusula del 5% de la ley electoral, ratificada el 23 de enero de 1957 por el Tribunal Constitucional [16].

La derrota electoral dio impulso a aquellas fuerzas del SPD que —siguiendo la línea de Kurt Schumacher— querían hacer el partido atractivo para la «nueva clase media» sin ahuyentar a sus tradicionales electores de la clase trabajadora. Con Willy Brandt como alcalde de Berlín, y Herbert Wehner (hasta su elección como vicepresidente del partido en 1958), Carlo Schmid y Fritz Erler como vicepresidentes de la fracción, los «reformistas» adquirieron un peso mayor frente al «aparato», controlado primordialmente por funcionarios del período anterior a 1933, en torno al presidente del partido Ollenhauer. Tras el episodio del «plan alemán» de Wehner, Erler y otros dieron a entender que el SPD

aceptaba la situación creada por la integración occidental, aunque no en lo que se refería al deseado armamento atómico. Conforme a ello, el programa de principio acordado en Godesberg en 1959 —el primero desde el programa de Heidelberg de 1925— no era el «camino de Damasco» del SPD, sino la conclusión de un proceso. Con la renuncia al lastre histórico, el «socialismo democrático» fue concebido no como el estado final paradisíaco de una sociedad, sino como la tarea de llevar a cabo reformas prácticas dentro del marco de la Ley Fundamental. La frase del párrafo final: «El Partido Socialdemócrata ha dejado de ser un partido de la clase obrera para convertirse en un partido del pueblo», es una prueba de que la importancia funcional del programa de cara al interior y al exterior se ha de valorar tanto como la del contenido. El Programa de Godesberg fue criticado desde la derecha y desde la izquierda como un «cursillo de adaptación». Para los «reformistas», con Erler a la cabeza, se trataba de demostrar en la República Federal, y sobre todo frente a la potencia protectora, los Estados Unidos, la capacidad de gobernar del SPD tanto desde el punto de vista del contenido como del personal. De ahí que el sensacional discurso de Wehner ante el *Bundestag,* pronunciado el 30 de junio de 1960, y la presentación de Brandt (que desde la construcción del muro de Berlín en 1961 gozaba de grandes simpatías en América) como «candidato a canciller» en vez de Ollenhauer, que renunció lealmente, no constituyeran una sorpresa. Con Brandt y la utilización de modernos métodos propagandísticos se tuvieron en cuenta los rasgos plebiscitarios de la elección, que se habían plasmado en la realidad constitucional mediante la transmisión de la política a través de los medios de comunicación de masas. Pero aunque el SPD consiguió mejorar sus posiciones en las elecciones al Parlamento federal de 1961 y 1965, así como, en general, en las de los Parlamentos regionales *(«Genosse Trend»),* no pudo reducir de forma notable la distancia que le separaba de la CDU/CSU. En este contexto maduró la decisión de demostrar su capacidad para gobernar también en coalición con los cristianodemócratas [17].

La división histórica de los liberales fue superada después de la segunda guerra mundial con el Partido Liberal (FPD), pero las tensiones entre los «liberales de derecha» y los «de izquierda» persistieron no obstante dentro de FPD y le depararon una borrascosa historia. Partido del gobierno la mayoría de las veces y en ocasiones de la oposición, «correctivo liberal» (Erich Mende) o «apéndice vermicular» (Schumacher) de la CDU/CSU, tras la escisión del Freie Volkspartei (Partido Liberal Popular) en las elecciones al Parlamento federal de 1957 se situó en una proximidad

preocupante a la cláusula del 5%. Las siguientes elecciones regionales produjeron sin excepción resultados catastróficos. Hasta 1957, el FDP había sido más bien una asociación de partidos regionales dependiente en gran medida de donaciones. Desde finales de la década de 1950 se había visto amenazado por los grandes partidos con una reforma de la ley electoral y con la perspectiva de una «gran coalición» (amenaza de la que se serviría reiteradamente Adenauer, aunque en general sólo de forma táctica). Con una declaración abierta de coalición —cuestión decisiva planteada al FDP antes de cada elección— y con el eslogan «Con la CDU, pero sin Adenauer», en 1961 los liberales alcanzaron un porcentaje de votos sorprendentemente elevado, del 12,8%. El incremento provino sobre todo de los electores que deseaban ver finalizado el mandato del canciller Adenauer, duramente afectado por la crisis de Berlín de agosto de 1961 y que contaba ya con 84 años de edad. En el transcurso de la difícil y larga formación del gobierno, el presidente del FDP, el nacional-liberal Mende, «cambió de opinión» y aceptó una coalición «burguesa» presidida por el anciano canciller para un proyecto legalmente dudoso de «acuerdo» determinado por la profunda desconfianza existente entre los partidos del gobierno. En la crisis de *Der Spiegel* (1962), el FDP, en unión del SPD, en la oposición, logró obligar a dimitir al sobrecargado ministro de Defensa Franz Josef Strauss (CSU). Tras el alejamiento de Adenauer de la cancillería (1963), el FDP prosiguió la coalición con su «canciller ideal» Erhard, incluso después de las ligeras pérdidas sufridas en las elecciones de 1965. Cuando el segundo gabinete de Erhard se deshizo por la cuestión del aumento de los impuestos en el otoño de 1966, el FDP no se decidió a unirse con el SPD, sin considerar ni la posibilidad de inducir al canciller, en unión de la oposición, a plantear la cuestión de la confianza, ni la del voto de censura constructiva. En el banquillo de la oposición, el FDP sufrió durante el período de la «gran coalición» (1966-69) un profundo proceso de regeneración, cuyo punto de partida no fue el rechazo parlamentario de las leyes de emergencia, sino la cuestión alemana y la política exterior: en el congreso del partido, celebrado en Hannóver en 1967, las tesis sobre la política alemana y la *Ostpolitik* del tesorero Rubin y el ponente Schollwer se convirtieron en el detonador de las reformas dentro del partido. Mende fue sustituido en su cargo de presidente del partido en 1968 por Walter Scheel que, en unión de los vicepresidentes Hans-Dietrich Genscher y Wolfgang Mischnick, perseguía el objetivo de hacer coaligable al FDP también con el SPD. La elección del presidente federal en 1969 fue la «prueba de fuego»: tras una larga lucha, la direc-

ción del partido pudo convencer a la gran mayoría de los miembros liberales de la Asamblea Federal de que apoyaran al candidato socialdemócrata Gustav Heinemann, que sería elegido en la tercera vuelta. Desde el punto de vista programático, el FDP logró presentarse como una fuerza progresista en el terreno de la política alemana, jurídica y educativa. Al mismo tiempo, cambiaba una gran parte de sus seguidores, pues tanto que los electores y los afiliados de simpatía nacionalistas se pasaban a la CDU/CSU o al NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Partido Nacionaldemócrata Alemán), el FDP «liberal de izquierda» encontraba apoyo en la generación joven, en las universidades y en la «nueva clase media» [18].

A los cristianodemócratas, en el gobierno desde 1949, no se les había planteado en absoluto durante años «el problema fundamental..., la cuestión de la relación de fuerzas entre la dirección del partido, el gobierno y el grupo parlamentario» [19]; era demasiado dominante la posición del canciller Adenauer, que se mantenía con el apoyo de los aliados occidentales, el «milagro económico» y los éxitos electorales. Ni los «partidos hermanos» CDU y CSU ni el grupo parlamentario conjunto, que siempre habían aceptado el estilo patriarcal de gobierno de Adenauer y sus actuaciones en solitario, estaban preparados cuando, en 1959, Adenauer declaró que estaba dispuesto a presentar su candidatura para el cargo de presidente federal, volviéndola a retirar con igual rapidez cuando el grupo parlamentario manifestó su actitud favorable a Erhard para sucederle en la cancillería. Con la pérdida de la autoridad de canciller a principios de la década de 1960, a los cancilleres de la CDU les nacieron rivales en las personas del presidente de la CSU, Strauss, y del portavoz del grupo parlamentario, Rainer Barzel (1964-72).

La crisis coyuntural, y en algunos ámbitos estructural, acabó en 1965-66 con el canciller Erhard y, al mismo tiempo, con el «mito» de la «economía social de mercado» como «capitalismo moderno y libre de riesgos» [20]. La reducción de las inversiones en el ámbito de la producción, el endeudamiento del Fisco —el gobierno federal disminuyó en la campaña electoral de 1965 el impuesto sobre la renta a costa de un fuerte recurso al crédito— y el aumento de los salarios por encima de la productividad real dieron lugar a una recesión en cuyo caldo de cultivo florecería el Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD), que en las elecciones al Parlamento federal de 1965 y 1969 habría de lograr unos resultados bastante respetables, ingresando también en los Parlamentos regionales de Hesse, Baviera, Renania-Palati-

nado, Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Bremen y Baden-Wurtemberg.

La «gran colación» formada por la CDU/CSU y el SPD bajo Kurt Georg Kiesinger (1966-69) superó la crisis económica con un instrumental de política coyuntural perfeccionado («dirección global»), aproximándose bastante a las metas de la estabilidad de los precios y del pleno empleo. Pero, tal como pusieron de manifiesto las deliberaciones acerca del presupuesto y de la «ley de estabilidad» (1967), los ministros de Economía y Finanzas, Schiller y Strauss respectivamente, no pudieron recortar sustancialmente las subvenciones y los privilegios tributarios, que habían proliferado a causa de las influencias de grupos y asociaciones. Kiesinger y el ministro de Exteriores Brandt (SPD) desentumecieron la política exterior heredada: volvieron a mejorar las relaciones con los Estados árabes, interrumpidas desde 1965, se dejó de aplicar la «doctrina Hallstein» frente a Rumania y Yugoslavia y se subsanaron las conflictivas relaciones franco-alemanas [21].

La ley de emergencia —que junto con la reforma financiera y la modificación (no realizada) de la ley electoral era uno de los objetivos con los que la CDU/CSU y el SPD habían justificado la formación de la «gran coalición»— provocó, tras la ley de defensa nacional de 1956, la división más profunda hasta ese momento en la historia constitucional de la República Federal. La «XVII Ley complementaria de la Ley Fundamental», promulgada el 24 de junio de 1968 por la mayoría requerida de los dos tercios de los diputados con los votos en contra del FDP y de algunos diputados del SPD, distingue entre «estado de emergencia interna», «caso de tensión» y «caso de defensa». Prevé en lo esencial: 1.°) la virtual exclusión de la vía legal en la violación de la correspondencia y las telecomunicaciones y la introducción de un «derecho de resistencia» independientemente del «estado de emergencia»; 2.°) la posibilidad de un contrato obligatorio para la población trabajadora; 3.°) la utilización del ejército federal como «fuerza policial» en caso de catástrofes naturales, accidentes graves y «rebeliones armadas», y 4.°) el traspaso de competencias legislativas a una «Comisión Conjunta» en «caso de defensa».

La ley de emergencia tropezó con una encarnizada resistencia en los sindicatos, los profesores universitarios y los estudiantes, los cuales consideraban que las posibilidades ofrecidas por la primitiva Ley Fundamental eran suficientes para evitar los peligros de la seguridad y el orden públicos y desestimaban el argumento de que las leyes eran necesarias para eliminar los derechos reservados a los aliados y con ello obtener la plena soberanía.

El movimiento estudiantil, dispuesto a poner en marcha la reforma de las universidades y los estudios, se había propuesto, bajo la dirección de la SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Federación Socialista Alemana de Estudiantes), obtener un «mandato político» general. Los temas y formas de protesta de la APO (Aussenparlamentarische Opposition, Oposición Extraparlamentaria), nuevos en la República Federal, chocaron en general con la incomprensión en una sociedad anticomunista. Tras el atentado perpetrado contra Rudi Dutschke, uno de los portavoces de la APO, en la Semana Santa de 1968 se produjeron violentas manifestaciones contra la editorial de Axel Springer. A diferencia de los disturbios de mayo en Francia, los sindicatos alemanes del *Kuratorium Notstand der Demokratie* (Inspección para el estado de emergencia de la democracia) no se mostraron dispuestos a utilizar el arma de la huelga política. Así la fallida campaña contra la ley de emergencia marcó al mismo tiempo el fin de la APO [22].

Los disturbios universitarios impulsaron la reforma educativa. El *Deutsche Bildungsrat* (Consejo Alemán de Educación) —institución integrada por científicos y creada en 1966 por el Estado federal y los *Länder*— constató la existencia de grandes deficiencias en el sistema educativo alemán occidental, confirmadas en 1970 en un estudio comparativo internacional de la OCDE: clase de media jornada, falta de educación preescolar, colegios cuantitativamente mal estructurados para continuar la preparación, estricta separación de las escuelas en el ámbito secundario y «discriminación social o existencia de privilegios». Mediante la creación forzada de institutos de bachillerato y universidades aumentó el número de bachilleres y estudiantes universitarios; la escasez de ingenieros y técnicos revelaba además que las asignaturas y especialidades científicas y técnicas habían sido descuidadas. La polémica en torno a los contenidos educativos y a las formas de escolarización *(«Integrierte Gesamtschule»)* fue muy controvertida y provocó en los *Länder* una «vuelta al particularismo de los pequeños Estados» cuya consecuencia fue una gran confusión en el ámbito escolar [23].

Los resultados de las elecciones de 1969 parecían ser completamente imprevisibles, toda vez que no era posible saber si el NPD lograría traspasar la barrera del 5%. Más importante que el resultado de los comicios, que dieron en 1969 al gobierno del SPD/FDP sólo tres escaños más que en 1965, fue el respaldo de la dirección del SPD a la unión con el FPD desde al elección de Heinemann como presidente federal, de manera que los presidentes de los respectivos partidos, Brandt y Scheel, todavía pudieron

llegar a un acuerdo en la noche de las elecciones para formar una coalición. El primer cambio de poder desde la fundación de la República Federal se produjo en las formas previstas por la Constitución. El gabinete social-liberal, con Brandt como canciller y Scheel como ministro de Asuntos Exteriores, se concebía como un gobierno de «reformas». En política exterior —especialmente en la bautizada con el nombre de *Ostpolitik*— la República Federal llevó a efecto, de acuerdo con las potencias occidentales, su incorporación a los procesos de la política internacional, obteniendo con ello libertad de movimientos en política exterior y consiguiendo en las relaciones interalemanas un «alivio de los sufrimientos humanos» tras años de estancamiento, por lo que en 1971 Brandt obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

Tras la firma de los tratados con el Este, no estaba en absoluto claro si contarían con la mayoría parlamentaria necesaria para su ratificación. En el FDP sobre todo, gracias a los votos de los nuevos electores liberales de izquierda habían sido reelegidos una serie de diputados liberales de derecha escépticos ante la idea de formar coalición con el SPD y opuestos a la *Ostpolitik*. Con el paso de éstos y de dos diputados del SPD a la CDU/CSU, la mayoría para la elección del canciller pareció perdida, de forma que el portavoz del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Barzel, se decidió a plantear el 26-27 de abril de 1972 una moción de censura constructiva, conforme al artículo 67 de la Constitución, que sin embargo fracasó. No obsante, el *Bundestag* rechazó al día siguiente también, por empate de votos, los presupuestos del canciller, con lo que la situación parlamentaria quedaba en tablas. La ratificación de los tratados con la Unión Soviética y Polonia (17 de mayo) —los *Länder* gobernados por la CDU/CSU dejaron que se aprobaran las leyes en el *Bundesrat* con su abstención— se convirtió en una prueba de fuerza para la CDU/CSU.

Después de que Brandt plantease el 20 de septiembre de 1972 la moción de confianza, el difícil camino de la Constitución quedaba libre para la celebración de nuevas elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, el *Bundestag* promulgó una reforma de las pensiones sobre la base del proyecto de la CDU/CSU que abría el seguro de vejez a los trabajadores autónomos, las amas de casa y otros grupos, establecía un límite de edad flexible e introducía una pensión ajustada al salario mínimo. La reforma de las pensiones, al igual que las anteriores leyes de política social, reforzaron la «seguridad social», si bien tuvieron que ser sufragadas con un recurso estatal cada vez mayor al crédito, y a largo plazo sólo pudieron ser financiadas con el pleno empleo y el crecimiento económico. La señal de aviso dada por el ministro de

Hacienda Alex Möller con su dimisión pasó inadvertida al hacerse cargo Karl Schiller de este ministerio junto con el de Economía. Además del endeudamiento estatal y la devaluación monetaria, la debilidad del dólar y la presión para la revaluación ejercida sobre el marco alemán siguieron siendo un problema sin resolver que, en julio de 1972, provocaría la dimisión de Schiller.

Las elecciones de noviembre de 1972 se convirtieron, a pesar de las dificultades de la coalición social-liberal, en el plebiscito sobre los tratados con el Este, presidido por el duelo Brandt-Barzel. La elevada participación electoral, el resultado récord obtenido por el SPD en Renania-Westfalia, el apoyo desproporcionado de los electores de 18 a 20 años, que votaban por primera vez, así como la mayoría entre el electorado femenino, proporcionaron la victoria a los partidos en el gobierno, convirtiendo al SPD en el grupo parlamentaria más fuerte [24].

En cuanto a la CDU/CSU, la derrota electoral puso nuevamente de manifiesto lo difícil que era pasar de ser la «asociación electoral del canciller», a ser un partido (en la oposición). A la tradicional contraposición de intereses dentro del partido se unió la polémica entre una tendencia conservadora y proclive a una oposición sin compromisos (CSU, CDU de Hesse) y los políticos que abogaban por una apertura hacia el «centro izquierda». El debate en torno a una alternativa práctica al programa del gobierno quedó relegado a una disputa en torno a personas, azuzada por las conversaciones celebradas por primera vez, acerca de la continuación del grupo parlamentario y la posibilidad de una ampliación de la CSU a todo el territorio federal. El fracasado candidato a canciller, Barzel, abandonó la presidencia del grupo parlamentario y del Partido.

La declaración gubernamental del segundo gabinete Brandt-Scheel mostraba una mayor atención hacia la política interior y aspiraba a conseguir el «centro» político para el SPD y el FDP. Con el éxito electoral también aumentaron los problemas internos del SPD: por una parte, las relaciones en la «troika» directiva (Brandt, el ministro de Hacienda Helmut Schmidt y el portavoz del grupo parlamentario Wehner) habían empeorado; por otra parte, el «ala izquierda» había experimentado una gran afluencia de políticos jóvenes que tras el fracaso de la APO habían ingresado en el SPD e iniciado la «larga marcha a través de las instituciones». Además de criticar cuestiones concretas, como el acuerdo tomado por los primeros ministros, a propuesta de Brandt, de excluir a los «extremistas» de la Administración pública (1972), esencialmente exigían: 1) una mayor planificación estatal en el terreno económico para hacer prevalecer las exigencias sociales

y el carácter competitivo de la «economía social de mercado» amenazada por la concentración de capital; 2) la prevención, mediante soluciones democráticas y a través de tareas estatales y comunitarias, de los peligros tecnológicos y ecológicos de la sociedad superindustrializada; 3) la toma de conciencia de que existe «un solo mundo» y el fin de la explotación de los países en vías de desarrollo también por parte de la República Federal. Esta última idea fue tomada en consideración, al menos parcialmente, por Erhard Eppler en la nueva política de desarrollo concebida en Alemania Occidental[25].

Tras la dimisión de Brandt en mayo de 1974 al asumir la «responsabilidad política» de la «negligencia» en el empleo de un agente de la RDA en la cancillería[26] y la elección de Scheel como presidente federal, los hasta entonces «delfines», Schmidt como canciller y Genscher como ministro de Exteriores, ante los imperativos económicos y la existencia de una mayoría de *Länder* gobernados por la CDU/CSU dentro del *Bundesrat* iniciaron una fase más pragmática dentro de la política social-liberal. La crisis económica mundial derivada de la subida de los precios del petróleo elevó vertiginosamente las cifras del desempleo. Entre 1974 y 1978, el gobierno trató de estimular la actividad inversora con diferentes «programas coyunturales» y de contrarrestar el empeoramiento de la situación del empleo, viéndose obligado a hacer recortes en el terreno de la política social. A pesar de todo, a la vista de la «sociedad reivindicativa», no era posible una «cosecha» de servicios sociales ni siquiera con déficits presupuestarios. La ley de cogestión de 1976 para las empresas con más de 2 000 empleados (exceptuando las «empresas de tendencia» y las de la industria del carbón y del acero) se quedó por detrás de la cogestión paritaria de la minería[27].

En las elecciones al Parlamento Federal de 1976, los partidos del gobierno perdieron votos; la CDU/CSU, con un porcentaje del 48,6%, no logró, por muy poco, la mayoría absoluta, pero debido a la coalición de los liberales permaneció en la oposición. A pesar de haber conseguido el segundo mejor resultado de su historia, la CSU inició de nuevo una polémica en torno al candidato a canciller, esta vez Helmut Kohl, con la ruptura del grupo parlamentario. El conflicto no quedó resuelto en modo alguno con el restablecimiento de la unidad del grupo parlamentario el 12 de diciembre de 1976, pues la CDU tuvo que aceptar en 1980 como candidato común a canciller al presidente de la CSU y (desde 1978) primer ministro de Baviera, Strauss. Sólo la derrota electoral, explicable en esencia por la aversión de una amplia mayoría de

la opinión pública hacia el político Strauss, desactivó la crisis de la prueba de fuerza entre la CDU y la CSU.

Aunque por regla general más del 95% de los votos emitidos en las elecciones son para la CDU/CSU, el SPD y el FDP, la distancia entre los partidos «establecidos» y la población ha aumentado. Prueba cierta de ello es la creciente disposición de muchas personas a participar en «asociaciones ciudadanas». Dado que el grupo en la oposición en el *Bundestag* es con frecuencia el grupo en el gobierno en varios *Länder,* y corresponsable, a través del *Bundesrat,* de la legislación federal, a pesar de la acritud verbal de la lucha política no existe una separación tajante entre el gobierno y la oposición. Y dado que los partidos apenas logran reclutar, a la hora de seleccionar candidatos, a «expertos» fuera de unos pocos grupos profesionales y que los diputados han delegado muchas de sus competencias en la burocracia, mejor informada y equipada, la democracia amenaza ahogarse en la «arrogancia sacerdotal de los expertos» y en la profusión de leyes y de disposiciones fabricadas por ellos [28].

III. FRANCIA

La guerra de Argelia, que estalló en 1954, fue la piedra con que tropezó la IV República, que en sus doce años cumplidos de historia había conocido 25 gabinetes formados entre los bastidores de la Asamblea Nacional, con cerca de 600 ministros, principalmente de las filas del centrismo (MRP), de los radicales conservadores-liberales y de los socialistas. La República había superado las secuelas de la segunda guerra mundial y allanado para Francia, desde el punto de vista económico, el camino hacia la construcción de un Estado moderno. La herencia colonial, salvo Argelia, estaba liquidada. Pero en tanto que el ya designado primer ministro Pflimlin (MRP) negociaba durante semanas, en 1958, sobre la nueva formación de gobierno, los acontecimientos se precipitaban fuera de los partidos y del Parlamento. Tanto los generales golpistas del 13 de mayo de 1958 en Argel, apoyados por la mayoría de cerca de un millón de franceses argelinos, como el presidente de la República, Coty, instaron a De Gaulle, que en 1946 se había retirado a su residencia campestre, a tomar de nuevo el poder. Ambas partes creían al hacerlo que De Gaulle actuaría en su nombre: los ultras de Argelia que en mayo, como «ensayo general» para la metrópoli, se apoderaron de Córcega, esperaban que siguiese adelante la guerra colonial, aún no decidida, con el objetivo de la «Algérie française»; Coty consideraba

a De Gaulle la única personalidad que, salvaguardando las formas legales, podía atajar un golpe de Estado de la derecha. Dotado de poderes extraordinarios, De Gaulle mandó elaborar una Constitución presidencialista a su medida que sería ratificada por el referéndum popular de octubre de 1958. El nacimiento de la V República significó, al mismo tiempo, el fin de la Argelia francesa, a la que De Gaulle tuvo que conceder la independencia con la oposición de los franceses argelinos y el terrorismo de la Organisation de l'Armée Secrète (OAS)[29].

El gobierno del general, que con Pflimlin, Guy Mollet y los gaullistas Debré y Malraux reunía a los adversarios de antaño, puso de manifiesto que la simbiosis entre la alta burguesía y el poder era duradera y que la Francia burguesa, como ya lo hiciera en 1799, 1851 y 1940, en los momentos de peligro se refugiaba bajo el amparo de un «hombre fuerte». En las elecciones al Parlamento de 1962, sobre todo el centro sucumbió a este efecto de resaca. La polarización en dos grandes campos en política interior *(«la droite»* y *«gauche»)* no dejaba espacio para una tercera fuerza: el centro restante en la oposición, dirigido por Lecanuet, fue absorbido paulatinamente por el campo del gobierno (en 1974, Lecanuet entró en el gobierno del gaullista Chirac como ministro de Estado); todos los intentos de crear un partido socialdemócrata suprarregional fracasaron. La posición dominante del presidente de la República, elegido por el pueblo para ocupar el cargo durante siete años, que decide el nombramiento del primer ministro y puede disolver la Asamblea Nacional y dirigirse al pueblo directamente mediante referéndum, así como la ley electoral, relegaron a los partidos a un papel secundario, obligándoles a concentrarse. En el campo del gobierno, la *«majorité presidentielle»* de gaullistas y no gaullistas burgueses asumió en esencia la tarea de respaldar la política del presidente en materia legislativa. Dentro de la oposición que, perjudicada por la ley electoral y por la amenaza gubernamental de que un cambio de poder significaría un cambio de sistema, disponía de poca libertad de movimientos, se formaron, junto al Partido Comunista (PCF) firmemente organizado, diversas corrientes socialistas que bajo la influencia de François Mitterrand se convirtieron en el Partido Socialista (PS) unitario[30].

De Gaulle no dejó desde un principio lugar a dudas en cuanto a la aspiración de Francia a ocupar, como a finales de la segunda guerra mundial, un lugar junto a los Estados Unidos y Gran Bretaña con los mismos derechos. Las cuestiones de estrategia occidental deberían ser decididas por un «triunvirato» y la zona de actuación de la OTAN ser ampliada al Sahara y al Oriente

Próximo, regiones en las que Francia había hecho valer tradicionalmente «intereses vitales». De Gaulle quería intercambiar el costoso poder atómico francés por una entrada... en el club de las potencias mundiales»[31], pero, al serle negado el ingreso por los presidentes americanos Eisenhower y Kennedy y por el respaldo británico en el potencial nuclear de Estados Unidos, para De Gaulle pasó a un primer plano la idea de desempeñar un papel independiente de gran potencia.

El tratado franco-alemán del 22 de enero de 1963, en el que por parte de Francia también desempeñó un papel el temor históricamente fundado a una Alemania fortalecida y equipada con moderno armamento americano, debía permitir a la República Federal liberarse de la dependencia atlántica; en la misma dirección apuntaba el lema de la «Europa de las patrias... desde el Atlántico hasta el Ural». En 1966, Francia pudo retirarse sin riesgo del mando supremo de la OTAN, ya que de hecho seguía perteneciendo a la esfera de intereses americanos y disfrutaba de la protección militar de los Estados Unidos. Tras la negativa a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, la ausencia de la conferencia de desarme de Ginebra, el inicio de relaciones diplomáticas con la República Popular China, cuyo camino a convertirse en una gran potencia fue interpretado como análogo al camino de Francia, el apoyo prestado a los Estados no alineados, la prosecución de pruebas nucleares en tierra en el Pacífico meridional, y la decisión del presidente Giscard d'Estaing de iniciar el desarrollo de las armas de neutrones (1976) se escondían los mismos principios de política exterior que con frecuencia se habían ocultado tras el lenguaje metafórico de los tiempos de De Gaulle.

La fuerza de disuasión atómica (*«forces atomiques de dissuasion» o «force de frappe»*) tampoco era cuestionada ya en Francia por los socialistas y los comunistas. La decisión de construir la bomba atómica se había tomado ya durante la IV República, teniendo lugar la primera prueba con armas nucleares el 13 de febrero de 1960. La *«force de frappe»* concentra una buena parte de los esfuerzos de investigación humanos y financieros. En 1980 absorbía, con el equivalente de cerca de 13 000 millones de marcos alemanes, un tercio del presupuesto militar. Bajo los sucesores de De Gaulle, Pompidou (1969-1974) y Giscard d'Estaing (1974-1981), la sobreestimación de las propias fuerzas dejó paso a una valoración más realista: en lo que al reconocimiento por satélite y al sistema de alarma anticipada se refiere, Francia confía por completo en los Estados Unidos, trabajando estrechamente con otros Estados occidentales en el costoso desarrollo de nuevos sistemas de armamento.

Exceptuando algunos sectores privilegiados (industrias armamentísticas y afines, electrónica, ordenadores, circuitos integrados, técnica nuclear), los defectos estructurales de la economía francesa persistieron en la era de De Gaulle. En el sector agrario, en contra de la declaración de intenciones, las subvenciones para proteger los precios primaron sobre las inversiones. La política estatal de subvenciones no pudo evitar que las diferencias de renta existentes en la agricultura y el desnivel regional se agrandasen. El éxodo rural y la despoblación de comarcas enteras, sobre todo al sudoeste del Loira, aumentaron.

Junto a los pequeños campesinos, los pequeños comerciantes y los artesanos eran los problemas sociales típicos de Francia. El efímero movimiento de masas del «poujadismo» se había fraccionado a mitad de los años cincuenta en numerosas organizaciones que ahora protestaban con no menos vehemencia contra los impuestos y las cargas sociales, los supermercados, los sindicatos, las altas finanzas, la gran industria y el centralismo. Estos grupos y los numerosos empresarios pequeños y medianos organizados en la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) representaban la Francia provinciana y pequeñoburguesa que, si bien era cortejada como clientela política, se hallaba amenazada cada vez más por el proceso de concentración económica. El gran número de empresas pequeñas y medianas, así como la escasa concentración de capital, en comparación con la situación internacional, en la gran industria francesa proporcionaban un importante impulso a la ideología gaullista de Europa. El acercamiento defensivo al Mercado Común, la desconfianza frente a los «eurócratas» de Bruselas y el rechazo de la solicitud británica de ingreso en la CEE hallaron un amplio eco entre la burguesía.

En la política económica y financiera gaullista se hallaban entretejidos de una forma muy particular la modernidad con los anacronismos, los rasgos liberales con los mercantilistas. Tras la reforma monetaria del 8 de enero de 1959 («franco nuevo»), las finanzas estatales pudieron ser saneadas y hasta 1962 se consiguió una estabilidad relativa de precios. A instancias de su asesor financiero, J. Rueff, De Gaulle hizo convertir en oro el superávit de la balanza de pagos, pues aquél veía una salida de las crisis monetarias en el aumento del precio del oro y en la vuelta a un patrón oro estricto. Las ambiciosas políticas exterior, armamentista y monetaria sólo podían ser financiadas mediante una fuerte presión fiscal sobre la población y a costa de sacrificar las necesarias reformas internas. De todos los Estados industrializados comparables, Francia era el que registraba un mayor desnivel de

rentas; la regionalización iniciada en tiempos de la IV República quedó paralizada y de la planificación territorial se beneficiaron sólo unos pocos centros de concentración urbana que, no obstante, quedaron muy por detrás de París. Las zonas rurales sólo disponían de una infraestructura sumamente rudimentaria. El centralismo existente en todos los campos de la vida pública despertó en las provincias de la periferia deseos autonomistas que en Bretaña, País Vasco, «Occitania» y Córcega desembocaron también en actos de violencia.

Aunque la economía francesa dependía de la mano de obra extranjera —sobre todo de la procedente del Mogreb—, siempre hubo un cierto nivel de desempleo. El paro y el problema de la vivienda afectaban principalmente a la generación más joven, a la que por otra parte, tampoco llegaba la retórica de De Gaulle. Con este telón de fondo y el aumento del coste de la vida desde 1962, el número de conflictos laborales creció. Ello dio lugar al adversario político interno más poderoso del régimen: el movimiento sindical francés. El sindicato comunista CGT con los secretarios generales Frachon y Séguy (desde 1967) cuenta con cerca de dos millones de afiliados. Force Ouvrière, escindida de la CGT y con cerca de 600 000 afiliados, se asemeja en su concepción a los sindicatos alemanes occidentales. Junto a la CGT se desarrolló a partir del movimiento sindical católico un sindicato socialista que en 1964 halló su propia forma de organización en la Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT) y que comprende unos 700 000 afiliados. La dinámica CFDT se encontró —a menudo en unidad de acción con la CGT— a la cabeza de muchas luchas obreras. La huelga de 200 000 mineros de los pozos estatales del norte de Francia y Lorena en el invierno de 1963 llevó a la economía al borde del precipicio, porque De Gaulle, en contra del consejo de su primer ministro Pompidou, quería poner fin a la huelga con la incorporación forzosa al trabajo, a lo que los sindicatos respondieron con huelgas de solidaridad en otros sectores. La victoria del sindicato fue, al mismo tiempo, la primera gran derrota interna del general.

Las elecciones presidenciales de 1965, en las que De Gaulle no se impuso a Mitterrand hasta la segunda vuelta, y las elecciones al Parlamento de 1967, en las que las fuerzas del gobierno sólo alcanzaron la mayoría absoluta gracias a la distribución de los distritos electorales y a las provincias de ultramar, pusieron de manifiesto la pérdida de confianza en política interior.

El primer ministro, Pompidou, se propuso como objetivo desde 1966 el crecimiento industrial. El ministro de Economía y Finanzas, Debré, instó a las empresas industriales, bancos y segu-

ros estatales a concentrarse para poder afrontar la competencia germanooccidental. El régimen gaullista, ahora constituido por una alianza de burgueses y tecnócratas, tuvo que imponer la modernización a una sociedad reacia y arcaica[32]. El sistema educativo francés se basaba en un estricto proceso selectivo. Los exámenes escolares y universitarios eran por regla general *concours,* esto es, oposiciones en las que, con no poca frecuencia, eran rechazados el 70-80% de los candidatos. La élite dirigente del Estado y de la economía se reclutaba entre los diplomados de las *grandes écoles,* la *École Normale Supérieure* y la *École Nationale d'Administration.* Las universidades, al igual que en los demás países europeos, se habían quedado por detrás del profundo cambio técnico y social que tuvo lugar después de la segunda guerra mundial. En las *sciences humaines,* que seguían siendo predominantes, los estudiantes eran educados ciertamente dentro del pensamiento crítico, pero apenas tenían perspectivas de realización profesional[33]. La revolución estudiantil, provocada por el problema de la reforma universitaria y de los estudios, cuestionaba fundamentalmente la modernización incontrolada y vivida como dominación y explotación. Los disturbios, que estallaron en la universidad de Nanterre y en la Sorbona, iniciaron una escalada en mayo de 1968 hasta desembocar en una crisis de Estado, ya que una parte de la población de París tomó partido en favor de los estudiantes rebeldes y la reapertura de la Sorbona por orden de Pompidou dio la impresión de que el gobierno cedía. Los grandes sindicatos se unieron a las primeras convocatorias de huelga de los sindicatos estudiantiles y de enseñantes, y el 13 de mayo hicieron un llamamiento a la huelga general, en la que, en toda Francia, participó más de la mitad de toda la población activa. En tanto que la CFDT exigía una reforma social fundamental, la CGT consideraba el enfrentamiento como una lucha obrera tradicional. El aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la disminución de la edad de jubilación sólo podían ser negociadas por «interlocutores serios y adecuados» (Séguy), por los sindicatos, los empresarios y el gobierno. En tanto que Pompidou tomaba el camino de salida de la crisis indicado por la CGT, De Gaulle, en un llamamiento por televisión, ofreció el 24 de mayo reformas sociales; por otra parte, sin informar de ello al gobierno, voló el 29 de mayo a Baden-Baden para hablar con el comandante en jefe del ejército francés en Alemania, Massu, acerca de la posible «reconquista» de París en caso de que los comunistas tomasen el poder. El 30 de mayo renunció por consejo de Pompidou a celebrar el referéndum anunciado y disolvió la Asamblea Nacional. La manifestación

masiva organizada por los gaullistas la noche del 30 de mayo y el gran éxito de éstos en las elecciones celebradas en junio testifican el «reflejo del miedo» en muchos franceses [34].

Un año después, De Gaulle perdió esta confianza, cuando hizo en serio las reformas sociales y vinculó el referéndum sobre la regionalización a su permanencia en el cargo. La consulta popular había sido convertida en 1945 por De Gaulle «en el símbolo del renacimiento de la democracia en Francia» [35] y desde 1958 se había servido repetidamente de este instrumento. Los planteamientos de las preguntas fueron siempre simples, y la vinculación con su persona era también evidente por su importancia. No analizaremos aquí por qué convirtió la compleja regionalización en tema de consulta popular. Lo cierto es que veía amenazada la identificación entre su persona y Francia desde que en 1967-68, con un primer ministro fuerte que podía apoyarse en el partido y el grupo parlamentario gaullista entre tanto bien organizado, resultara concebible la idea de un gaullismo sin De Gaulle. Con De Gaulle se corría el peligro —como más tarde con Giscard— de que se ampliaran constantemente los ámbitos en los que sólo decidía el presidente. La tan loada estabilidad de la V República sólo se podía aplicar al presidente; los *premiers* y los ministros cambiaban con tanta frecuencia como en los tiempos de su predecesora.

La retirada de De Gaulle no fue un éxito de la izquierda. En las elecciones presidenciales, que, con Pompidou y el presidente del Senado Poher, sólo fueron disputadas en la segunda vuelta por candidatos burgueses, los comunistas, los socialistas y los diferentes grupos de izquierda obtuvieron uno de los peores resultados de su historia. Con el liberal gaullista Chaban-Delmas como primer ministro, el nuevo presidente Pompidou mantuvo el rumbo de las reformas sociales. La oposición dentro de su propio campo y las secuelas económicas de la crisis de Mayo pusieron sin embargo estrechos límites a esta política, de manera que en julio de 1972 Chaban fue sustituido por el gaullista ortodoxo Messmer.

En la izquierda, la fundación del Partido Socialista (1969), el programa común de gobierno del PS y del PCF y el consenso sobre Mitterrand como candidato presidencial conjunto en 1974 impulsaron una dinámica que hizo más accesible un cambio de poder.

A la muerte de Pompidou, las elecciones presidenciales se convirtieron en una carrera muy igualada, con resultado favorable para Giscard d'Estaing por un escaso margen frente a Mitterrand. Giscard, antiguo alumno de la ENA, que del centro de Pinay se había pasado al campo gubernamental con sus «republicanos

independientes», ministro de Hacienda en varias ocasiones, había podido distanciarse del candidato gaullista Chaban-Delmas gracias al apoyo de una parte de los gaullistas encabezada por el ministro de Agricultura Chirac. Anunció su deseo de distender la relación entre los bloques políticos internos. De esta manera se tomaron decisiones importantes, como la reducción de la edad electoral y de la mayoría de edad a los 18 años, así como la liberalización del aborto («proyecto» de Simone Weil) en la primera fase de su mandato. Los intentos de ampliar la mayoría del gobierno con personalidades independientes como J. J. Servan-Schreiber y F. Giroud no pasaron de un ser «bello sueño de un liberal incorregible» [36], pues precisamente de estos círculos provendrían las más duras críticas a los símbolos dèl *status* gaullista, tales como la *«force de frappe»* y el avión ultrasónico *Concorde*. La política económica bajo el primer ministro Chirac osciló entre el freno y la aceleración. Tras la ruptura con Chirac (1976), el nuevo primer ministro de Giscard, Barre, dio prioridad a la lucha contra la inflación, confiando en los mecanismos del mercado y elevando los precios fijados por el Estado. En los mercados mundiales, Francia pudo mejorar claramente su posición. Con una tasa de desempleo del 7-8% y un índice de aumento de los precios del 12% (1980), Francia ocupó un lugar intermedio entre Gran Bretaña e Italia, por una parte, y la República Federal, por otra. En lugar de reducir las desigualdades entre las rentas mediante la modificación de la recaudación y el importe de los tributos, el gobierno elevó por encima de la media las rentas y los salarios mínimos garantizados por el Estado. En una época de crisis energética, se redujo el porcentaje del petróleo en la balanza energética, que pasó del 66% (1973) al 53% (1980), y se impulsó el desarrollo de otros recursos (agua +2,7%, gas +3,9%, energía nuclear +5%). El ambicioso programa de construcciones de centrales nucleares no provocó, a diferencia del resto de Europa occidental, ninguna clase de oposición política interna.

La estructura administrativa centralista siguió como antes, pero al nivel de las *«collectivités locales»* se inició entre tanto una amplia reforma para dotar de mayor autonomía financiera y administrativa a los municipios y provincias. La reforma escolar del ministro de Educación, Haby, cuyo objetivo era incrementar la igualdad de oportunidades, se quedó en una disminución del abandono de los estudios por falta de apoyo en el campo del gobierno y por la resistencia de la oposición y de los sindicatos de enseñanza.

Europeísta convencido, Giscard tropezó con la resistencia de los gaullistas. Su entendimiento con el canciller federal Schmidt, interpretado con frecuencia como un «directorio franco-alemán», irritó a Gran Bretaña y a los pequeños países de la CEE que, debido a la diplomacia de «cumbres» de los Estados más importantes de la OCDE, eran excluidos de muchos procesos decisorios.

La asunción de la herencia gaullista en el Africa francófona resultó difícil, pero había que hacer realidad las promesas y esperanzas despertadas por el general. Giscard consiguió mejorar las relaciones con Marruecos, Argelia y Tunicia mediante visitas pendientes desde hacía mucho tiempo. El montaje escenificado por Francia en Africa central con la coronación como emperador y la caída provocada del dictador Bokassa perjudicó mucho a Giscard, sobre todo en política interior. Las malas relaciones con Libia llevaron consigo en la guerra civil del Chad una pérdida de influencia francesa. Es dudoso que el reforzamiento de la presencia militar en Gabón y en Africa central pudiera estabilizar la posición francesa; no obstante, Francia subrayó con ello, así como con la intervención en Kolwezi (Zaire) en mayo de 1978, que no estaba dispuesta a abandonar sin más sus esferas de influencia en Africa occidental y central.

Durante la presidencia de Giscard cambiaron las relaciones de fuerzas dentro de los bloques políticos internos. Tras su salida del gobierno y su elección como alcalde de París (1977), Chirac guió a los gaullistas, rebautizados con el nombre de Rassemblement pour la République (RPR), hacia la oposición dentro de la mayoría presidencial; los gaullistas que quedaban en el gobierno y Chaban-Delmas fueron excluidos de los órganos rectores del partido. El giro de Chirac contribuyó efectivamente a debilitar a la mayoría, pues, ante la fuerza de la oposición de izquierdas, los gaullistas no podían arriesgarse a un auténtico cambio de poder. Por otra parte, Giscard no logró dividir a los gaullistas y conducir a las fuerzas del antiguo centro, que le apoyaban, hacia la formación de un verdadero partido más allá de la mera alianza electoral. En la izquierda fueron los socialistas quienes más se beneficiaron de la dinámica del programa común. El partido construyó un sólido aparato y amplió de forma metódica su potencial electoral. En muchos municipios, ya en 1977 contaba con alcalde y mayoría en el Ayuntamiento. El Partido Comunista, que bajo la dirección de G. Marchais había abandonado la tesis marxista de la «dictadura del proletariado» y se había esforzado por adoptar la imagen de partido eurocomunista moderado en el XXII Congreso de 1976, ante los éxitos electorales socialistas abandonó el programa común de gobierno para volver

a tomar un rumbo ortodoxo, influido por el agravamiento de la situación internacional (la intervención soviética en Afganistán fue valorada por Marchais como «globalmente positiva»)[37].

Para hacer un balance del mandato del presidente Giscard d'Estaing y, con ello, de la cuestión de las causas de su derrota electoral frente al socialista Mitterrand en 1981, hay que tener en cuenta su estilo de gobierno. Giscard dirigió Francia a los ojos de muchos como un monarca ilustrado. Tecnócrata brillante, nunca estuvo próximo al pueblo, a pesar de servirse como ningún otro presidente anterior de ese medio de comunicación que es la televisión. La prensa independiente fue sin embargo muy crítica con él. Muchas de las reformas anunciadas y muchas de las medidas se quedaron en la superficie, produciendo la impresión de un efectismo sin principios. El deseo de cambio contribuyó, tras más de veinte años de poder de la «derecha», de forma decisiva al resultado electoral de 1981. La victoria de los socialistas en las elecciones presidenciales y parlamentarias refutó además la inveterada amenaza propagandística de que el cambio de poder significaría un cambio de sistema y puso de manifiesto que la Constitución de la V República no sólo podía soportar la retirada de De Gaulle, sino también a un presidente socialista.

IV. GRAN BRETAÑA

La evolución de Gran Bretaña desde la posguerra hasta el presente se ha visto influida por tres problemas relacionados entre sí:

— el abandono, tanto en política exterior como interior, de las tradiciones del imperio y la búsqueda de un nuevo papel dentro de la Commonwealth y de la política internacional;
— la orientación hacia la Europa (occidental) continental;
— las crisis económicas y sociales, tachadas con frecuencia y de forma simplista en Europa occidental de «enfermedad inglesa».
Con el estallido de los disturbios en Irlanda del Norte se añadió una cuarta clase de problemas que afectó en conjunto a las relaciones del centro político con las regiones[38].

La fracasada campaña anglo-francesa de Suez en 1956, puesta en marcha por el primer ministro, el conservador Anthony Eden, y por su «gabinente secreto», reclutado entre la antigua élite dirigente, no sólo provocó la caída de Eden, sino que también marcó el inicio de una larga crisis de confianza respecto al Partido Conservador. La influencia dominante del *establishment* —un

sector comprometido con las tradiciones imperiales, relativamente homogéneo debido a su educación y a las relaciones de parentesco y consciente de su posición de clase— sobre el Partido Conservador, la banca y muchas ramas de la industria disminuyó. Ante la existencia de problemas económicos sin resolver, el nuevo primer ministro, Harold Macmillan, aunque con la imagen aparente de «antigua élite», recurrió cada vez más a las ideas y a las personalidades de las filas del «Bow group», círculo de intelectuales, tecnócratas y personalidades de la economía fundado en 1951 que representaba dentro del partido una tendencia pragmática, atenta a las exigencias económicas y orientada hacia Europa [39].

En cuanto a las causas de la crisis estructural permanente que había hecho que la nación industrial antes más importante se quedara rezagada con respecto a otros países, la liberalización y la renuncia de los conservadores a la dirección estatal de la economía no cambiaron nada tras el auge experimentado en 1953. La aventura de Suez provocó un nuevo debilitamiento de la libra esterlina. La libra era, al mismo tiempo, la moneda comercial de 34 países de la zona de la libra y, junto con el dólar americano, una moneda de reserva y, como tal, convertible con una cotización fija en oro o divisas. Las crisis monetarias, que se repetían con regularidad, se abordaron siempre con la misma receta: los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los Estados Unidos y de otros países impedían a corto plazo la salida de oro y divisas, pero las causas de la crisis subsistían. El endeudamiento exterior obligó al gobierno a recortar los gastos de defensa mediante la reducción de la presencia militar en ultramar, la reducción de las fuerzas armadas y, por último, la eliminación del servicio militar obligatorio (1960). El desarrollo de una fuerza nuclear propia, concebida como compensación, fue imposible de mantener económicamente, y sólo pudo ser llevado adelante con el firme apoyo de los Estados Unidos tras el encuentro de Macmillan con el presidente Kennedy en las Bahamas (1962). Los conservadores se limitaron a hacer frente a la situación mediante la reducción del tipo de descuento, el alza de los límites superiores en los créditos y compras a plazos, y otras facilidades en tiempos de recesión (1952, 1958) y mediante medidas restrictivas en fases de auge (1953-55, 1959-60). Los intentos de contener los salarios, los precios y el consumo privado a través de intervenciones estatales (*«price freeze»*, 1956-57; *«pay pause»*, 1961-62) fracasaron. A diferencia de otros países de la OCDE, la situación empeoró visiblemente: las escasas tasas reales de crecimiento del producto interior bruto, el aumento de la

inflación, los incrementos salariales sin un incremento equiparable de la productividad, las bajas inversiones privadas y el rápido aumento de los precios de exportación eran las preocupaciones más importantes. El empeoramiento de la competitividad internacional llevó, sólo en los últimos diez meses del gobierno conservador de Sir Alec Douglas-Home, a contraer deudas comerciales por valor de más de 7 000 millones de marcos[40]. En el momento de la firma del Tratado de Roma en 1957, Gran Bretaña había quedado al margen de la CEE y, en su lugar, había dado preferencia a una zona europea de libre comercio (EFTA). Ello se debió en gran parte a la mayor concentración de capital, en comparación con Europa occidental, y a la escala mundial de muchos consorcios británicos. Sólo el fracaso de las esperanzas puestas en la EFTA y la concentración creciente en Europa occidental impulsaron al gobierno y a los empresarios a solicitar en 1961, «con pesadumbre, pues se trataba del reconocimiento de la inevitable pérdida del papel independiente de una clase»[41], el ingreso en la CEE. La recesión y la nueva crisis de la libra en 1961, en la que no se pudo imponer el ministro de Hacienda, Selwyn Lloyd, con medidas restrictivas, y los asuntos escandalosos llevaron a los conservadores a una crisis de confianza de la que ni siquiera la dimisión de Macmillan y la formación del gabinete Douglas-Home podrían sacarles.

En las elecciones de 1964, el Partido Laborista obtuvo, con 317 diputados, una exigua mayoría en la Cámara Baja (los conservadores obtuvieron 303 escaños y los liberales 8). El laborismo, que desde 1922 era el adversario más importante del Partido Conservador, ya había salido vencedor de las primeras elecciones celebradas después de la segunda guerra mundial. La peculiaridad del partido radicaba en la estructura de sus miembros: además de cerca de 800 000 miembros individuales, pertenecían a él 60 sindicatos con cerca de 5,5 millones de afiliados y 6 asociaciones con aproximadamente 20 000 miembros. Los sindicatos sufragaban el 80% de la financiación del partido. De ahí se deriva la poderosa influencia de la confederación sindical, el Trade Union Congress (TUC), sobre el partido. En el momento de tomar decisiones, los sindicatos no centraban todos sus esfuerzos únicamente en conseguir de forma prioritaria los objetivos sindicales, sino también, frecuentemente, en rechazar las exigencias de los teóricos de izquierda. El jefe del partido no es elegido —como en el caso de los conservadores y los liberales— por los congresos anuales del partido, sino por el grupo parlamentario de la Cámara Baja, que adquiere con ello una importancia especial[42].

Las relaciones entre empresarios, empleados y Estado, la *«in-*

dustrial democracy», con frecuencia caótica para un europeo del continente, se caracterizan, «en una tradición prácticamente ininterrumpida hasta hoy de más de cien años, sobre todo por el *'self government'* y el *'voluntarism'*, la autonomía social y concepción como contrapoder, así como por una notable *'abstention of law and State'*»[43]. El tema central son las negociaciones colectivas de los convenios entre empresarios y sindicatos *(«collective bargaining»)*, que tienen lugar a nivel de ramas *(«industrywide»* o *«industrial bargaining»)* y a nivel de empresa *(«workshop»* o *«domestic bargaining»)*. Esta autonomía de los convenios colectivos, voluntarista y basada en poder y contrapoder, fue defendida tanto por los sindicatos como por la confederación empresarial, la Confederation of Britisch Industry (CBI, desde 1965), frente a las intervenciones del Estado y la formalización legal. La firma de los convenios a nivel de rama por comisiones paritarias conducía, por regla general, a convenios colectivos fijados por escrito, pero no reclamables judicialmente. De hecho, la estructura de los salarios se vio fuertemente afectada por los acuerdos, en general sólo verbales, entre los empresarios y los *«shop stewards»*, representantes de grupos de 30 a 40 trabajadores en la empresa. Además de la diversidad de los sindicatos ingleses, estructurados por profesiones y no por ramas (1967: 591, 1975: 450 sindicatos distintos, de los que sólo un tercio escaso pertenecía al TUC), sobre todo los *«shop stewards»* han contribuido a dar esta imagen de caos que muchos europeos occidentales, y principalmente los alemanes, acostumbrados al sindicato unitario y a la disciplina sindical, tienen de las luchas laborales en la isla. En el *«domestic bargaining»*, que regula entre otras cosas las horas extraordinarias, el trabajo a destajo, la descripción del puesto de trabajo, los niveles salariales, los dictámenes y la distribución de las máquinas, es donde los *«shop stewards»* emplean toda la gama de medidas de presión, desde la «huelga de brazos caídos» hasta la *«wild cat strike»*, la «huelga salvaje» no aprobada por los sindicatos, de consecuencias catastróficas para la economía nacional. Las «huelgas salvajes», que constituían más del 90% de todas las huelgas, tenían como objetivo, tras el fin del pleno empleo en 1958, cada vez más el intento de asegurar los puestos de trabajo a costa de la modernización y de la automatización. Esto paralizó la disposición empresarial a realizar innovaciones técnicas y llevó en numerosas empresas, tales como los consorcios estatales British Leyland Motor Corporation y British Steel Corporation, o las empresas periodísticas de Fleet Street, a una sobrecarga de personal de una media del 40%, con máximos de hasta el 300%. Los medios de producción obsoletos

hicieron que ramas de la industria y del sector terciario antes florecientes (puertos, navegación) conocieran dificultades.

El gobierno laborista, con el nuevo Departement for Economic Affairs dirigido por el dinámico George Brown, se encontró ante la difícil tarea de asegurar el pleno empleo, frenar las tasas de inflación, equilibrar la balanza de pagos y contener el debilitamiento de la libra sin poner en peligro el crecimiento económico. En 1964, el FMI y varios bancos occidentales concedieron un crédito por un equivalente a 12 000 millones de marcos alemanes. Gran Bretaña pudo equilibrar efectivamente su balanza de pagos en junio de 1967 gracias a la deseada duplicación de las exportaciones y la reducción de las importaciones y del consumo privado (impuestos especiales sobre los productos industriales importados, aumento del impuesto de lujo, control de la salida de capital, limitación de las compras a plazos y reducción del gasto público).

El problema central radicaba, sin embargo, en ajustar los aumentos de salarios y rentas al incremento real de la productividad (*«productivity agreements»*). La política de precios y rentas» iniciada en 1964 por el primer ministro Harold Wilson adoleció de una «característica oscilación entre los llamamientos oficiales a la moderación y la cooperación voluntaria de las federaciones centrales, por una parte, y el recurso a los gestos amenazadores y a la regulación legal de los salarios, por otra» [44], sin atreverse a abordar las deficiencias fundamentales del *«collective bargaining»*. Con la victoria electoral de 1966 a sus espaldas y la espiral de salarios y precios a su vista, el 20 de julio de 1966 Harold Wilson decretó una congelación total de precios, salarios y dividendos por un período de medio año, al que habían de suceder seis meses más de «moderación estricta». Tras un año de relativa tranquilidad, en septiembre de 1967 los diferentes sindicatos rompieron las hostilidades contraviniendo las directrices del Consejo General del TUC. Ante la nueva ola huelguística, la confederación empresarial CBI tampoco se mostró dispuesta a controlar los precios por más tiempo, de modo que los acuerdos de congelación renovados en 1967 y 1968 quedaron prácticamente invalidados.

Tras la guerra del Oriente Próximo, en junio de 1967, los clientes árabes cancelaron sus cuentas en libras de Londres, sumiendo a la divisa británica en una nueva crisis. Los bancos centrales del Club de los Diez concedieron un crédito por el equivalente de más de 6 600 millones de marcos alemanes en noviembre; un segundo crédito se frustró entre tanto por la oposición del presidente francés De Gaulle, de forma que el 18 de

noviembre el gobierno laborista tuvo que tomar la decisión de devaluar la libra en un 14,3%. Con ello, por tercera vez tras 1931 (MacDonald) y 1949 (Attlee), un jefe de gobierno procedente de las filas del partido de los trabajadores tuvo que dar este paso ante el que los gobiernos conservadores siempre habían retrocedido. Las crisis económicas y monetarias crónicas no podían afrontarse si no era mediante «reformas radicales» (A. Sampson), que el gobierno laborista sólo se decidió a llevar a cabo de mala gana.

El regreso, demasiado lento, de las tropas británicas de ultramar seguía pesando sobre la balanza de pagos. En 1967 se abandonaron las posiciones «al este de Suez». La declaración unilateral de independencia de Rhodesia (1965) y la guerra civil de Nigeria-Biafra (1967-70) debilitaron la posición de Gran Bretaña dentro de la Commonwealth. La inmigración de gente de color de los países de la Commonwealth trajo consigo, por añadidura, una carga explosiva para la política interior y social que el gobierno trató de desactivar mediante la fijación de cuotas de inmigración (febrero de 1968), por una parte, y una ley contra la discriminación racista (julio de 1968), por otra.

Los planes presentados en 1969 por la ministra de Trabajo, Barbara Castle, para la reforma del derecho de huelga preveían una limitación de las polémicas intersindicales, una regulación del procedimiento para las negociaciones de los convenios y una reglamentación ministerial del arbitraje y el referéndum en caso de huelga, que iban más allá, por lo que respecta a la amenaza con sanciones, de las recomendaciones del informe final de la Royal Commission on Trade Unions and Employers' Associations *(Donovan Report)*, publicado en 1968. Con ello se rompió por completo el proceso de toma de decisiones y el difícil equilibrio entre el primer ministro-jefe del partido, los diferentes ministros, el grupo parlamentaria y el TUC, agravado por la cuestión de la solicitud británica de ingreso en la CEE [45].

Tras la victoria electoral de los conservadores en 1970, Edward Heath recogió en la *Industrial Relations Act* (1972) las propuestas de su partido, considerablemente más duras. A causa de la catastrófica situación existente (más de un millón de parados, quiebras, aceleración de la espiral salarios-precios), la ley debía sobre todo disuadir de la huelga. Además de la obligación de registro para las *«trade unions»* —eludida, no obstante, por los sindicatos—, tras la declaración del «estado de emergencia nacional» se podía amenazar con sanciones, disponer plazos de «enfriamiento» en caso de amenaza de huelga, imponer un referéndum sobre la huelga y velar judicialmente por la observancia

de los convenios colectivos. La aprobación en la Cámara Baja del ingreso en la CEE (28 de octubre de 1972) pasó a un segundo plano tras la lucha entre el gobierno y los sindicatos. La coincidencia temporal de la crisis del petróleo y la huelga minera, que estalló el 12 de noviembre de 1973 por el rechazo de las horas extraordinarias y desembocó el 1 de febrero de 1974 en una paralización total de las labores de extracción, provocó retrasos en la producción industrial y dificultades en el abastecimiento eléctrico. Dado que Heath temía que la aceptación de las reivindicaciones de los mineros provocase una oleada de reivindicaciones salariales, esperaba poder asegurar su proyectado pacto de salarios y precios mediante la celebración de elecciones anticipadas (febrero de 1974). El Partido Laborista, que en la campaña electoral no ofreció ninguna idea para resolver los problemas económicos del momento, hizo de la inflación el blanco de sus críticas y prometió volver a negociar las condiciones de ingreso en el Mercado Común. El resultado de los comicios, que dio al laborismo una pequeña ventaja de cinco escaños, aunque no la mayoría absoluta, reflejó la pérdida de confianza en los grandes partidos, de la cual se beneficiaron los liberales y diversas formaciones regionales. Al rechazar Heath la coalición con los liberales a cambio de una modificación de la ley electoral, el Partido Liberal, rico en ideas y en personalidades, que desde 1945 no había formado parte de ningún gabinete, se mostró dispuesto a aceptar un gobierno laborista minoritario presidido por Wilson.

En las nuevas elecciones de octubre de 1974, los pequeños partidos de los antiguos territorios celtas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte siguieron subiendo. Estas tres regiones subdesarrolladas confiaban en mayor medida que el gobierno central de Londres en las asignaciones del fondo regional de la Comunidad Europea. En Escocia, el Scottish National Party, dado ya por muerto en 1970, recibió un inesperado impulso relacionado con el inicio de la extracción de petróleo del mar del Norte, previsto para 1975, dado que en el «asilo para pobres» del Reino Unido se temía que el *boom* del petróleo pudiera pasar de largo por Escocia, dejando sólo problemas de medio ambiente en el Nordeste (St. Fergus-Peterhead, islas Orcadas, islas Shetland), tradicionalmente caracterizado por la pesca y el turismo. Los autonomistas galeses (Plaid Cymru) reclamaban una mayor autonomía lingüístico y cultural, así como competencias regionales sobre las reservas de carbón y los posibles yacimientos marítimos de petróleo. El gobierno laborista trató de responder a estas reivindicaciones con un libro blanco de autonomía limitada para Escocia y Gales (1976); el correspondiente proyecto de ley, no aprobado

por la Cámara Baja sino en un segundo intento, en 1978, fue rechazado en las consultas populares realizadas en Gales y Escocia (1979), de manera que el primer ministro retiró al menos la ley de autonomía parcial para Escocia [46].

El gobierno laborista archivó la *Industrial Relations Act* del anterior gobierno conservador, volviendo a la política de negociaciones con los sindicatos acerca de la productividad iniciada en 1964. Tras la renuncia a medios intervencionistas y recurriendo sólo a directrices salariales —vinculación de los aumentos de salario por encima de la media al incremento de la productividad, unificación de la fraccionada estructura salarial dentro de las empresas y ocupación de puestos de trabajo técnicos de acuerdo con la cualificación real— se habían de eliminar las causas principales de las «huelgas salvajes». Wilson quería asegurar esta política mediante un «pacto social» entre el gobierno y las partes negociadoras del convenio, en el que se tratasen informalmente temas tales como la política de precios, la distribución de la riqueza, el control de la inversión, los impuestos y las cargas sociales. A este respecto, no está claro si las asociaciones empresariales fueron invitadas a colaborar por el gobierno o si se quedaron al margen de las conversaciones por propia decisión [47]. Aunque Wilson consiguió salirse con la suya frente al parecer del presidente de su partido en la cuestión del ingreso en la CEE gracias a su aprobación en la consulta popular (5 de junio de 1975: 67,2% de los votos afirmativos), ante la evolución de la economía tiró la toalla el 16 de marzo de 1976, dando como explicación del paso dado que no tenía fuerzas para abordar de nuevo los problemas que ya se habían planteado en una ocasión. La cifra de desempleo había aumentado en un año en más de 1,5 millones y la tasa de inflación en más del 20%; el ministro de Trabajo, Michael Foot, había aprobado un aumento salarial del 32% en la minería y el Estado había tenido que coger las riendas de un número cada vez mayor de empresas al borde de la quiebra. En una votación con posturas enfrentadas en el grupo parlamentario laborista, James Callaghan se impuso a Foot como sucesor de Wilson en Downing Street 10. Su gabinete cayó en marzo de 1979 por una moción de censura en la Cámara Baja; en las elecciones de mayo, el Partido Conservador logró, con su presidenta Margaret Thatcher (desde 1975), la mayoría absoluta.

Irlanda del Norte

Tras un decenio de relativa tranquilidad, en 1968 estalló de nuevo el secular conflicto entre la mayoría protestante y la mi-

noría católica de la población de Irlanda del Norte. El primer ministro, O'Neill (desde 1963), había tratado de superar, mediante cautelosas reformas económicas y sociales, así como mediante un acercamiento a la República de Irlanda, las diferencias confesionales. En la medida en que creció el nivel de vida en el Ulster gracias a las reformas —financiadas por Gran Bretaña—, perdió importancia el objetivo de la reunificación con la República de Irlanda frente al deseo de lograr la igualdad de derechos políticos y sociales para la minoría católica. Un movimiento de derechos civiles heterogéneo y muy fluctuante en su composición, que se unió en 1967 a la Civil Rights Association de Irlanda del Norte (NICRA), supo movilizar en favor de sus objetivos, con medios de protesta no violentos, a círculos hasta entonces pasivos, así como a la Iglesia católica. Renunciando al nacionalismo tradicional, los defensores de los derechos civiles exigían una nueva ley electoral municipal *(«one man, one vote»)*, el fin de las manipulaciones de los distritos electorales, la reforma de la concesión de puestos de trabajo y de viviendas, la supresión de los poderes especiales ejecutivos *(Civil Authorities Act* o *Special Powers Act,* desde 1922) y la disolución de la Policía especial *(B-Specials).* El objetivo del movimiento era, sobre todo, el gobierno laborista de Londres, que debía ejercer una presión sobre los protestantes. Si las reformas de la élite unionista encabezada por O'Neill ya habían encontrado resistencia en la Orden de Orange, las empresas protestantes, el Partido Unionista y la Administración, las acciones no violentas del movimiento de derechos civiles alarmaron a las clases media y baja protestantes, entre las cuales los políticos radicales, tales como el sectario Ian Paisley, reclutaban a sus seguidores. Paisley, impulsor de la Ulster Volunteer Force, prohibida en 1966, y de las organizaciones que la sucedieron (Ulster Constitution Defence Committee, Ulster Protestant Volunteers), llamó a la lucha por igual contra la élite unionista y contra los católicos. Los abusos cometidos por los protestantes contra los defensores de los derechos civiles en el verano y el otoño de 1968 iniciaron una nueva fase de violencia en Irlanda del Norte que se ha prolongado hasta la actualidad y ha causado hasta 1980 casi 2 000 víctimas mortales. Las acciones aisladas desempeñaron un importante papel en la escalada del conflicto, porque despertaban la solidad en el campo enemigo e incitaban a los adversarios a dar respuestas que —con el fin de ganarse el favor de la opinión pública internacional— debían ser espectaculares, y porque cada vez implicaban más en los enfrentamos a Gran Bretaña, que se había presentado como árbitro. Un ejemplo típico nos lo ofrece

la marcha por los derechos civiles que tuvo lugar en Derry el 5 de octubre de 1968, en la que la policía no sólo no protegió a los manifestantes de las agresiones de los protestantes, sino que además reaccionó de forma exagerada contra aquéllos. La responsabilidad política de todo ello la tuvo el ministro de Interior, Craig, que calificaba al movimiento de derechos civiles de apéndice del Irish Republican Army (IRA) —en aquel momento carente de toda importancia— y había informado de forma conscientemente errónea al gabinete sobre la inminente marcha a Derry. Craig veía también en una mayor represión del movimiento de derechos civiles la posibilidad de poner la zancadilla al primer ministro, dispuesto a hacer concesiones. En diciembre de 1968, Craig fue destituido por O'Neill, pero como fundador del movimiento Vanguard siguió siendo uno de los instigadores de los conflictos por parte protestante. Las diferencias dentro de la dirección unionista no podían ya pasar inadvertidas. El lugarteniente de O'Neill, Brian Faulkner, se presentó abiertamente como su rival. Tras las elecciones parlamentarias de febrero de 1969 y la dimisión de O'Neill en abril, el mayor Chichester-Clark mantuvo la supremacía por un estrecho margen frente a Faulkner.

La amnistía concedida al acceder al cargo no sirvió para resolver la crisis. En la universidad de Belfast se había formado, tras los sucesos del otoño de 1968, un ala radical del movimiento de derechos civiles, la People's Democracy, que con el lema de «No lucha religiosa, sino lucha de clases» aspiraba a lograr una República de Irlanda socialista. Sin embargo, sólo sirvió para atemorizar a los trabajadores protestantes con su activismo. En las segundas elecciones para la Cámara Baja, en 1969, se impuso su candidata, Bernadette Devlin; la PD no perdió nunca, sin embargo, su carácter sectario y en 1972 se unió al IRA provisional. Los primeros atentados terroristas en la primavera de 1969 corrieron a cuenta de los unionistas radicales. El desfile anual de la Orden de Orange y la marcha de los Apprentice Boys[48] protestantes en Derry desembocaron en batallas callejeras y provocaron la revuelta del gueto católico de Bogside.

El gobierno del Ulster reconoció por primera vez en agosto de 1969, a instancias británicas, el principio de la igualdad de derechos para ambos sectores de la población, seguido de una serie de reformas: los *B-Specials* fueron disueltos y se creó una ley electoral municipal de carácter general, así como oficinas de reclamación y arbitraje. Estas resoluciones quedaron en buena medida sin efecto, o fueron eludidas, como en el caso de la policía, con la creación de las milicias privadas.

La policía regular (cerca de 3 000 hombres) se veía desbordada, de manera que con el envío de tropas británicas se dio un nuevo paso en el conflicto. Los soldados (1970: 11 000 hombres), enviados para separar a las partes en discordia, demostraron muy pronto no ser los más apropiados para esta tarea, por su formación y su armamento; por otra parte, la minoría católica veía en ellos únicamente un instrumento de dominio de los unionistas. La presencia de tropas británicas, así como los gestos amenazadores de la República de Irlanda, que exigió el envío al Ulster de tropas de paz de la ONU y construyó hospitales de sangre a lo largo de la frontera, impulsaron el resurgimiento del IRA, dado por muerto. El Irish Republican Army, fundado en 1916, se había fraccionado ideológica y regionalmente como lo había hecho ya frecuentemente a lo largo de su historia, tras la última oleada de terror que tuvo su momento culminante en 1957. Los marxistas y los nacionalistas tradicionalistas se disputaban la influencia sobre la dirección política del IRA (Sinn Fein), y los activistas del Norte pedían armas para defender las «zonas libres» («Free Derry», «Free Belfast») contra los protestantes y contra el ejército británico; pero el cuartel general del IRA en Dublín denegó los suministros de armas. El gobierno Lynch apoyó a los republicanos nacionalistas con armas y municiones para fortalecerlos frente a los marxistas del IRA. En 1969 se produjo la división entre el IRA oficial, que aspiraba a una República de Irlanda socialista, y el IRA provisional, que comprendía sobre todo a los nacionalistas e inició una campaña terrorista indiscriminada que se extendió también a Gran Bretaña.

El primer ministro Chichester-Clark resumió el conflicto en la fórmula *«at war with the IRA»*. Con la ayuda de tropas británicas fueron registrados los barrios católicos y se produjeron sucesivas oleadas de detenciones. Los detenidos, casi exclusivamente católicos, fueron encerrados en campos de internamiento que no serían suprimidos hasta 1975 a consecuencia de las protestas internacionales. Entre estos frentes inflexibles, el Social Democratic and Labour (SDLP), predominantemente católico, trató de llegar a un entendimiento con Faulkner, el sucesor de Clark. Tampoco desapareció la tradición de la protesta civil no violenta. Como muy tarde el 30 de enero de 1971, cuando soldados británicos abrieron fuego sobre una marcha en defensa de los derechos civiles, fracasó definitivamente el intento de pacificar Irlanda del Norte con ayuda del ejército. En el otoño de 1976, el «movimiento pacifista» de mujeres católicas y protestantes recuperó la tradición de la no violencia. Betty Williams y Mairead Corrigan fueron distinguidas por ello en 1977 con el Premio No-

bel de la Paz. El reconocimiento internacional de estos esfuerzos fue mayor que el efecto político en Irlanda del Norte, ya que la mayoría consideraba toda concesión a la minoría como un peligro para su propia posición, y se oponía a ella.

En esta difícil situación, el primer ministro británico Heath disolvió el 24 de marzo de 1972 el gobierno y el parlamento de Belfast, y colocó a la provincia directamente bajo la Administración británica. En la Asamblea Constituyente del Ulster (1975), los protestantes volvieron a rechazar la mayor participación política de la minoría católica. Frente a la actitud cerrada de los unionistas fracasaron también todos los esfuerzos ingleses por mover a los partidos de Irlanda del Norte a ponerse de acuerdo acerca de la autonomía provisional de la provincia. El último punto culminante del conflicto fue la campaña de huelga de hambre de los presos del IRA, que trataron de alcanzar de esta manera el reconocimiento de su *status* de presos políticos. El gobierno conservador de Thatcher permaneció sin embargo inflexible, incluso tras la muerte del miembro del IRA Bobby Sands —elegido para la Cámara Baja en abril de 1980— y, poco después, de otros presos a consecuencia de la huelga de hambre.

V. ITALIA

El auge económico que tuvo lugar ininterrumpidamente en Italia desde comienzos de la década de 1950 se aceleró tras la firma del Tratado de Roma en 1957. La economía italiana, que se beneficiaba grandemente de las comunidades europeas, experimentó entre 1958 y 1962 tasas de crecimiento extraordinariamente elevadas. Aunque registraba el porcentaje más alto en las empresas estatales de Europa occidental, no había perdido su carácter capitalista. La duplicación de la renta nacional en diez años escasos permitió la creación de programas estatales para mejorar la infraestructura que debían reducir, ante todo, el desnivel existente entre el Norte industrializado y las regiones en vías de desarrollo del Sur. Con cerca de un tercio del total, las «obras públicas» se llevaron la parte del león de las inversiones del Estado —por ejemplo, la red de autopistas llegó a 5 800 kilómetros en 1978 (1938: 575; 1968: 2 400 km)— seguidas, con un porcentaje de casi una cuarta parte, por los fondos para la Cassa per il Mezzogiorno (Caja del Sur), con los cuales se financiaron las amplias medidas de reforma agraria e industrialización del Sur. Para el período 1976-80, la Cámara y el Senado aprobaron un último programa de inversiones por un valor de 16,5 bi-

llones de liras para el Mezzogiorno, antes de que se suprimiera la Caja en 1980, tras treinta años de existencia. El «milagro económico» italiano, que incluyó a Italia en el grupo de los Estados modernos industrializados, aceleró la concentración urbana, redujo hasta mediados de la década de 1960 el desempleo estructural y sustituyó la emigración tradicional por el éxodo rural y la inmigración interior, que desactivaron la explosiva cuestión agraria. La importancia de la agricultura para la economía nacional, que hasta 1930 no habría de ser superada por el sector secundario, disminuyó rápidamente: la participación de la agricultura en el producto interior bruto descendió al 7% en 1977 (en comparación: República Federal de Alemania 3%, Francia, 5%); el porcentaje de la mano de obra agrícola, que en 1966 ascendía aún al 24,3% de todos los trabajadores, en 1977 se redujo al 13% (República Federal de Alemania, 5%; Francia, 10%).

La industria automovilística, así como la de bienes de consumo, que se encontraban entre los sectores de crecimiento más importante, dieron lugar en Italia, al igual que en la República Federal y Francia, a una sociedad de consumo y «despilfarro» cuya demanda de materias primas y energía podía ser cubierta a través de las Comunidades Europeas y con ayuda de una política energética flexible. Bajo la dirección del democratacristiano E. Mattei, la Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), de carácter semiestatal, firmó ventajosos contratos de exploración con países petrolíferos y descubrió grandes yacimientos nacionales de gas natural. Mattei fundó el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), de carácter estatal, la mayor empresa de Italia con capital del Estado junto con el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) y el Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), incluido dentro de la política de reformas de 1962. La elevada demanda de capital para la renovación de las fuerzas productivas dio lugar a procesos de concentración y fusión en la mayor parte de las ramas. Gracias a los más modernos métodos de producción, y en parte también al entramado internacional de capital, pudieron imponerse en los mercados mundiales Montecatini Edison y Snia Viscosa (química), FIAT (automóviles), Pirelli (goma) y Olivetti (máquinas de oficina, procesamiento de datos). La industria del acero, reagrupada en múltiples ocasiones (Finsider, Italsider) produjo por primera vez en 1974 más acero bruto que Gran Bretaña, ocupando desde 1975 el segundo lugar en Europa occidental detrás de la República Federal de Alemania y ligeramente por delante de Francia.

El auge económico de Italia se debió también a una población en aumento, cada vez más cualificada, tanto a nivel escolar como profesional. El crecimiento demográfico —con unas tasas de natalidad en descenso y una esperanza de vida más elevada, la población pasó de 47 millones (1951) a 57 millones de habitantes (1978)— registró un claro retroceso en el excedente de nacimientos, sobre todo en los últimos años, con algún retraso frente a otros países industrializados [49].

A pesar de los programas regionales, el ritmo de la industrialización ahondó el foso existente entre el Norte y el Sur. Sólo los consorcios IRI y ENI cumplieron la obligación legal, prescrita en 1957 para las grandes empresas, de efectuar en el Sur el 40% de sus inversiones, de manera que la industrialización no pudo ir allí al paso de la concentración urbana. Por otra parte, el cambio social se produjo de forma más lenta en el Mezzogiorno, más aferrado a las tradiciones y controlado en muchos ámbitos por sociedades secretas como la Mafia, que en el Norte, en el triángulo urbano de Milán, Turín y Génova concentró el capital, convirtiéndose Milán en el centro económico del país. La existencia de un «país en vías de desarrollo» dentro de un Estado industrializado provocó un movimiento migratorio hacia el Norte. En este sentido, la integración de los italianos meridionales en el norte de Italia causó no menos problemas que la corriente de emigrantes llegados a Suiza y a la República Federal de Alemania, en donde en 1973 trabajaban más de 400 000 italianos. No sólo resultaban atractivos los puestos de trabajo del sector industrial, sino también los de la metrópoli administrativa, Roma, que ofrecía a muchos italianos meridionales y a muchos sicilianos posibilidades de ascenso en la escala social que su tierra no podía ofrecerles. En tanto que la industria absorbía el potencial de mano de obra excedente del Sur, la burocracia privaba a las regiones meridionales de los especialistas familiarizados con la situación allí existente, de manera que incluso el sector agrario acabó por desmoronarse en el Sur [50]. En el Tirol meridional, Italia dio largas a la igualdad de derechos prometida a la población de habla alemana en el tratado con Austria (1946). El Tirol meridional permaneció al margen del desarrollo económico. Sólo después de la presión internacional ejercida a través de las Naciones Unidas, inició Italia conversaciones con Austria (1958), concediendo finalmente en 1969, al tiempo que se producían numerosos actos terroristas, mayor autonomía regional al Tirol meridional [51].

El desfase regional se reflejaba también en la vida artística, cultural e intelectual, que se desarrollaba principalmente en

Roma y en las grandes ciudades del Norte. El idealismo de un Benedetto Croce y de sus discípulos cedió el pasó a corrientes neorrealistas y materialistas empeñadas en aplicar los conocimientos psicológicos y psicoanalíticos. Literatos y cineastas (Moravia, Fellini, Pasolini, Visconti) trazaron un retrato fiel de la Italia moderna; la «Nueva Izquierda» y los intelectuales de las filas del Partido Comunista (PCI) dominaban las polémicas intelectuales. En ningún otro régimen parlamentario de Europa occidental se apartaron tanto como en Italia «de la realidad tan 'de derechas' del país, con el poder de la Iglesia y la fuerza de las tradiciones más antiguas» [52]. Pero justamente la distancia existente entre la realidad social y los intelectuales, que anticiparon en sus visiones buena parte de la crisis de los años setenta, reveló un profundo cambio político social.

Italia, cuya historia como Estado nacional presenta hasta finales de la segunda guerra mundial muchos paralelismos con la evolución alemana, como república se asemeja en algunas cosas, por lo que respecta a la política interior, a la IV República francesa. Prescindiendo de los monárquicos y de los fascistas de la derecha y de los diversos grupos extremistas de la izquierda, la formación de una mayoría constituyó el problema central de la democracia parlamentaria italiana en relación con las cuatro corrientes principles: los democratacristainos, que dominaron durante mucho tiempo (Democrazia Cristiana/DC), los socialistas y liberales, que se reorganizaron en múltiples ocasiones, y los comunistas. Bajo la influencia de su secretario general, Fanfani, de su sucesor, Moro, y del jefe del Estado, Gronchi (1955-62), en la DC ganó terreno la idea de una «apertura a la izquierda», propugnada también por el sindicato democratacristiano CISL [53]. El clero y el Vaticano se habían opuesto durante mucho tiempo a este plan, estimulando la formación de gobiernos unipartidarios de la DC. La Iglesia católica, que, a diferencia del protestantismo, estrechamente unido a la Revolución industrial, se había quedado más anclada en las sociedades agrarias, había reaccionado a la secularización de las sociedades industriales con dogmas y prohibiciones. A la muerte de Pío XII (1958), el papa Juan XXIII (1958-63) y Pablo VI (1963-78) iniciaron una reforma que tuviese en cuenta el cambio del papel de la Iglesia. Para ello centraron las discusiones en las reformas internas (liturgia, movimiento ecuménico), en la responsabilidad social de la Iglesia, sobre todo en el Tercer Mundo, subrayada en diversas encíclicas, y en un nuevo debate abierto con el comunismo. El Concilio Vaticano II (1962-65) provocó sin embargo confusión en algunos aspectos tanto entre los tradicionalistas como entre los progre-

sistas. En tanto que la escisión de los tradicionalistas hizo un cierto proselitismo en Francia y Holanda, los dignatarios progresistas tendieron a «hacer de Karl Marx un quinto evangelista» [54]. La situación de inseguridad existente en la Iglesia católica concluyó en principio con la elección del cardenal polaco Wojtyla como el papa Juan Pablo II (1978), el primer papa no italiano en la silla de Pedro desde el siglo XVI.

La «apertura a la izquierda» fue tan controvertida entre los democratacristianos como entre los socialdemócratas de Saragat y los socialistas de Nenni. El resultado electoral de 1958 reforzó el acercamiento de los socialistas a los socialdemócratas e hizo plausible, por razones de cálculo, la formación de un gobierno de centro-izquierda. En 1962, los socialistas de Nenni se mostraron dispuestos a aceptar el gabinete Fanfani. Tras las elecciones de 1963, Aldo Moro formó la primera coalición de «centro-izquierda». De los socialistas se escindió a continuación el Partido Socialista de Unidad Proletaria, que perseguía la alianza histórica con los comunistas y que en muchos puntos actuaba «a la izquierda» del PCI.

Las coaliciones de centro-izquierda, que abordaron una serie de reformas estructurales (nacionalización de la red eléctrica, eliminación del sistema de arrendamiento feudal, planificación estatal de la economía, regionalización), siguieron siendo inestables, ya que la recesión iniciada a mediados de la década de 1960 favorecía las prácticas habituales del clientelismo y el patronazgo. La DC, que disponía de muchos campos de influencia social además del papel político, como por ejemplo en el ámbito de las empresas estatales, ofrecía cada vez más la imagen de un partido quebrantado por las luchas internas y por la corrupción que únicamente se mantenía del poder. La reunificación de los socialistas y los socialdemócratas en 1966 no creó a la izquierda —a diferencia de Francia— un Partido socialista similar al comunista, pues tan sólo tres años después se volvieron a separar tras los disturbios de Turín. Nenni dimitió como jefe del partido y como ministro de Asuntos Exteriores, siendo reelegido sin embargo en 1973 con un resultado triunfal en la cúspide socialista. Nada ilustra mejor la falta de acuerdo y la escasa predisposición al compromiso dentro del campo del gobierno como la introducción del divorcio en la legislación italiana. Tras un primer proyecto de ley de 1962, esta polémica acompañó a todos los gabinetes de centro-izquierda hasta el referéndum de 1973, que arrojó una clara mayoría en favor del divorcio. Con ello, la DC sufrió una grave derrota, viéndose gravemente quebrantada

su base ideológica con el rechazo de los principios cristianos como normas básicas del orden estatal [55].

El «otoño caliente» de 1969 anunció con sus huelgas masivas una crisis social en Italia, hasta hoy no superada, que se puede resumir en los términos de recesión económica, graves luchas por la distribución de la renta, actos violentos por motivos políticos, debilidad permanente de la dirección política y conjuras. El crecimiento real del producto interior bruto se hizo más lento («años problemáticos» por su variación con respecto a años anteriores: 1971 = +1,4%; 1975 = —3,7%; 1977 = +1,7%). Debido a la escasa actividad inversora en el sector privado y a las grandes inversiones inútiles en los consorcios estatales, las tasas de crecimiento de la producción industrial se redujeron, e incluso retrocedieron en algunos años en particular. A causa de la elevada deuda exterior y de los déficits en la balanza de pagos, la lira perdió constantemente valor. La fuga de capitales estaba a la orden del día. La relación entre el aumento de los precios al consumo (con máximos del 25,2% en 1974 y del 21,3% en 1976) y la frecuencia de las huelgas es evidente en el caso de Italia. De 1969 a 1974 hubo en Italia 5 083 días de huelga por cada 100 trabajadores (en Gran Bretaña 3 035, en Francia 901 y en la República Federal 240). Las cifras del desempleo superaron a comienzos de la década de 1970 la barrera del millón; en 1977-78 el número de italianos desempleados ascendía a 1,5 millones (7,1%), si bien los datos oficiales no muestran las diferencias regionales (10,5% en el Mezzogiorno) y el elevado número de subempleados [56].

El sindicato comunista CGIL contaba en 1974 con 3 800 000 afiliados, el democratacristiano CISL con 2 200 000 y el socialdemócrata republicano UIL con 800.000. En el otoño de 1969, los sindicatos trataron de arrancar a la débil dirección política, más allá de las meras reivindicaciones salariales, el derecho de intervención en todas las cuestiones sociales y económicas, abordando en la huelga general contra la escasez de viviendas (19 de noviembre de 1969) uno de los temas sociales más candentes. Los tres sindicatos, bajo la amenaza constante de ser superados por los activistas maoístas y trotskistas, como puso de manifiesto el «tribunal» contra el presidente de la FIAT, Agnelli, y ante el peligro de perder seguidores por la derecha en favor de la asociación sindical neofascista CISNAL, se fusionaron en 1972 en una confederación bastante laxa [57].

En las elecciones de 1972, el neofascista Movimento Sociale Italiano (MSI) registró un importante aumento. Tras la unión de fascistas y monárquicos en julio de 1972, la Nueva Derecha Na-

cional superó a los socialdemócratas con el 8,7% de los votos y 56 diputados y casi igualó al PSI. Dado que la derecha podía contar con las simpatías de algunos círculos de las fuerzas armadas, el peligro de un golpe conforme al modelo de los coroneles griegos desempeñó un papel muy importante en los debates políticos [58]. Tras el fracaso de los gobiernos de centro-izquierda, la coalición de centro formada en 1972 por democratacristianos, socialdemócratas y liberales bajo Andreotti no ofrecía tampoco ninguna salida de la crisis. No existían perspectivas de que en torno a la DC, por una parte, y al PCI, por otra, como aglutinantes se pudiesen formar dos campos políticos que hicieran posible en Italia la alternancia entre gobierno y oposición. Con este telón de fondo, el PCI hizo en 1973 un llamamiento a los democratacristianos y a los socialistas para buscar juntos una salida de las dificultades. Este llamamiento fue muy importante, tanto desde el punto de vista de la política interior como de la exterior. Extraía del fracaso del gobierno frentepopulista de Allende en Chile la conclusión de que un gobierno de izquierda dirigido por comunistas en un país dentro de la esfera de influencia americana tropezaría con obstáculos insuperables. Ya en el momento del distanciamiento de la Unión Soviética y la República Popular China, el PCI había defendido la tesis de que cada país debía seguir su propia vía al socialismo, rechazando con ello toda posibilidad de revitalizar al antiguo Komintern. La línea del policentrismo siguió adelante con la condena de la invasión de Checoslovaquia por los Estados del Pacto de Varsovia en 1968 y se completó a partir de 1970 con una nueva «política occidental»: los comunistas italianos se declararon dispuestos a cooperar de forma constructiva con la Comunidad Económica Europea y aceptaron la OTAN hasta la creación de un sistema de seguridad para toda Europa. Bajo la dirección de su secretario general Togliatti (fallecido en 1964), muy marcado por la época del bloque antifascista-democrático de 1944-47, el PCI se convirtió en el partido comunista más fuerte fuera del bloque oriental. La discusión ideológica dentro del partido, aireada públicamente, entroncaba con las ideas voluntaristas y basadas en la democracia asamblearia de Antonio Gramsci (1891-1937), cuyas obras completas fueron reeditadas por la prestigiosa editorial Einaudi de 1947 a 1955. En el XIV Congreso, en marzo de 1975, el PCI dio al «compromiso histórico», el renacimiento de la alianza de todas las fuerzas democráticas del tiempo de la Resistencia, el carácter de línea política general. En el camino hacia el objetivo lejano de una «gran coalición» de la DC y el PCI, para la que, por el rechazo existente dentro de la propia Italia

y en el mundo occidental, aún no había llegado la hora, los comunistas contaban con dos etapas intermedias. Las elecciones municipales, provinciales y regionales de julio de 1975 hicieron avanzar al PCI un buen trecho. La distancia de la DC se redujo en pocos puntos; en muchas grandes ciudades y regiones del norte y del centro de Italia, el PCI se convirtió en el partido más fuerte y formó gobierno —a menudo con los socialistas—, como en Turín, Milán, Venecia, Florencia, Nápoles y, desde 1976, Roma, así como en Emilia Romana, Toscana, Umbría, Piamonte, Liguria y Lacio. Desde el punto de vista del electorado, el PCI está en camino de convertirse en un partido popular de izquierda que, además de sus militantes tradicionales —obreros, artesanos y campesinos cooperativistas— ha podido atraer a nuevos grupos de votantes entre los empleados, los intelectuales e incluso los pequeños y medianos empresarios. Frente a la mal avenida DC, el PCI ofrecía la imagen de un partido abierto, pero al mismo tiempo disciplinado y racionalista que en muchas luchas obreras, así como a la hora de rechazar el terrorismo, constituía un factor de orden de primera fila. Cierto es que, con cerca de 1,8 millones de afiliados, sigue estando por detrás de la DC (más de 2 millones), pero está mejor organizado y ha podido extender su influencia en el movimiento sindical más allá del CGIL. No obstante, también dentro de sus propias filas surgió la protesta contra la creación de una «gran coalición», por cuanto las elevadas cifras de desempleo y los déficits presupuestarios en los municipios dirigidos por comunistas habían demostrado claramente a los responsables del PCI que el margen político en tiempos de crisis económica era muy escaso, así como que la participación en el gobierno no tenía que verse necesariamente recompensada con mejores resultados electorales. Así, el porcentaje del PCI en las elecciones parlamentarias bajó del resultado récord de 1976 (34,4%) al 30,4% en 1979, en tanto que la DC (38-39%) y los socialistas (cerca del 9,5%) registraban una constancia asombrosa.

Las «nuevas formas de colaboración» exigidas por el secretario general del PCI, Berlinguer, en 1976 cristalizaron en una cooperación abierta de los «partidos del arco constitucional» (DC, PCI, socialistas, socialdemócratas, republicanos, liberales), que tras el asesinato de Aldo Moro acordaron un programa común de seguridad nacional, así como de saneamiento de la economía y de regionalización. Tras la caída del gobierno Andreotti en enero de 1978, los comunistas se declararon dispuestos a apoyar un nuevo gabinete encabezado por Andreotti, obteniendo como contrapartida el derecho de intervención en la elaboración de los programas de gobierno y de los proyectos de ley. Habrá que espe-

rar para saber si la «mayoría parlamentaria programática» así creada desembocará en una participación del PCI en el gobierno y si Italia encontrará realmente una situación mayoritaria estable[59].

VI. LOS NEUTRALES

a. *Austria*

Tras la firma del tratado del 15 de mayo de 1955 y la retirada de las tropas de ocupación, el Consejo Nacional promulgó el 26 de octubre de 1955 la Constitución con el párrafo acerca de la neutralidad permanente. No obstante tuvieron que transcurrir dos décadas para que el principio de la neutralidad como elemento constitutivo de la política austriaca se consolidase. Ya en diciembre de 1955 Austria ingresaba en las Naciones Unidas y en marzo de 1956 en el Consejo de Europa. La gran coalición formada por el Volkspartei (ÖVP) y los socialistas (SPÖ), cuya existencia se veía justificada por el tiempo de la ocupación y las negociaciones en torno al tratado internacional y que, bajo el lema de «fraternidad social», habían ahorrado a Austria los graves enfrentamientos sociales de la época de antes de la guerra, paralizó con su sistema proporcional toda la vida pública. Las elecciones siguientes, en las que el ÖVP se benefició primeramente del prestigio del «canciller del tratado», Julius Raab (hasta 1961), y más tarde de la reputación del canciller federal, Joseph Klaus, dificultaron cada vez más las negociaciones para crear una coalición, de manera que en 1966 Klaus formó un gobierno del ÖVP en solitario. Tras algunos éxitos iniciales (reforma de la radio, política exterior, fundación de universidades en Linz y Klagenfurt), el gobierno Klaus permaneció inactivo frente al aumento de los precios registrado a partir de 1968 y en 1970 tuvo que encajar una dura derrota electoral. El ÖVP quedó muy por detrás en número de votos y de escaños del SPÖ, que por primera vez en la historia de la II República nombró al canciller, Bruno Kreisky. El Partido Socialista había eliminado en gran medida las posiciones marxistas y se responsabilizó durante mucho tiempo del gobierno mientras duró la gran coalición. Por otra parte, todos los presidentes federales, elegidos cada seis años por el pueblo, provenían de las filas del socialismo (Renner, 1945-51; Körner, 1951-57; Schärf, 1957-65; Jonas, 1965-74; Kirchschläger, 1974-80 y reelegido en 1980). Kreisky formó un gobierno minoritario y consignó para el SPÖ en las nuevas elecciones de 1971

la mayoría absoluta de votos y escaños (SPÖ, 93 escaños; ÖVP, 80; Partido Liberal-FPÖ, 10).

El rumbo reformista del gobierno socialista se asemejaba en muchos aspectos a la evolución de la República Federal de Alemania. Frente a la encarnizada resistencia de los círculos conservadores y católicos se impuso la solución de los plazos en lo relativo a la interrupción del embarazo. La organización de radio y televisión se modernizó, se realizó una reforma del Derecho y las universidades obtuvieron una mayor autonomía. La puesta en práctica del Artículo 7 del tratado internacional, relativo a la protección de las minorías —caso, por ejemplo, de la colocación de letreros bilingües en Carintia— agitó los fantasmas nacionalistas alemanes del pasado.

La crisis económica alcanzó a Austria más tarde que a otros Estados equiparables. A diferencia de lo sucedido en otros tiempos y en otros países occidentales industrializados, las cifras del desempleo siguieron siendo relativamente bajas, si bien creció vertiginosamente el endeudamiento público. El porcentaje de capital extranjero dentro de la economía austriaca, procedente de Suiza, la República Federal de Alemania y los Estados Unidos, aumentó constantemente. La oposición de los ecologistas a la puesta en funcionamiento de la única central nuclear, la de Zwentendorf, obligó al gobierno a dar marcha atrás tras la celebración de un referéndum en 1978. El Consejo Nacional aprobó a continuación una ley única en Europa occidental, que prohíbe la utilización de la energía nuclear para la obtención de electricidad.

Desde el punto de vista de la política exterior, Kreisky aprovechó el margen de maniobrabilidad que le ofrecía un país neutral para llevar a cabo servicios de mediador en las relaciones Este-Oeste, siendo el primer jefe de gobierno de Europa occidental que en 1978 visitó la RDA. Desde la crisis de Hungría de 1956, Austria ha de afrontar, como país de asilo y tránsito para los fugitivos y emigrantes de Europa oriental, problemas muy importantes.

El éxito del gobierno socialista —el SPÖ pudo ampliar su porcentaje de votos del 50,49% (1975) al 51,03% (1979)— no se vio afectado por los escándalos en torno a algunos ministros particulares, pero no es posible desligarlo de la persona del canciller federal Kreisky[60].

b. *Suiza*

Suiza ha conservado su fama de paladín de la estabilidad más allá de la segunda guerra mundial, pudiéndola incluso acrecentar

gracias a una buena coyuntura favorable de larga duración. Las políticas interior y exterior se desarrollaron ininterrumpidamente; las reformas —en caso de tener lugar— no se efectuaron sino a pequeños pasos. La tradición de la «democracia directa» en los cantones y en la Confederación resultó un factor de moderación y perseverancia. El derecho de voto para las mujer a nivel confederal no se introdujo hasta 1971, mediante referéndum, después de que varios cantones se hubiesen adelantado en esta cuestión, en tanto que en otros cantones la población masculina sigue rechazando todavía el derecho de la mujer al voto. En 1981 se incluyó en la Constitución, igualmene mediante referéndum, un artículo relativo a la igualdad de derechos, que entre otras cosas debe asegurar para las mujeres igual salario a igual trabajo.

Con el instrumento del plebiscito, los autonomistas lograron —por vez primera en la historia de la Confederación— crear un nuevo cantón, el Jura (bernés). Tras las votaciones en los distritos oficiales afectados sobre el trazado de fronteras, el 82,3% de la población se pronunció en septiembre de 1978 por el nuevo cantón (el vigesimotercero). El referéndum como elemento constitucional esencial para decidir los asuntos más diversos de la vida pública se impuso frente a las protestas demagógicas. El referéndum sobre los trabajadores extranjeros lanzado por formaciones derechistas tales como el Movimiento Republicano y la Acción Nacional en 1974 —«iniciativa contra la extranjerización»— fracasó; no obstante, posteriormente se ha impuesto un proyecto de limitar la afluencia de extranjeros, cuyo porcentaje se eleva al 15% (1980: 5,4 millones de suizos, 893 000 extranjeros), con cerca de 100 000 trabajadores fronterizos y 12 000 trabajadores temporeros.

La proporción entre los grandes partidos (Liberal, Partido Popular Cristianodemócrata, Socialdemócrata, Partido Popular Suizo) dentro del Consejo Federal (Gobierno), que es un órgano colegiado, condena a las dos cámaras del Parlamento (Consejo de los Estados y Consejo Nacional) a desempeñar un papel secundario, toda vez que carece de una oposición digna de mención y que la mayor parte de las iniciativas legislativas corren por cuenta del Consejo Federal. En el país modelo del federalismo que es Suiza, el equilibrio entre la Confederación y los cantones se ha desplazado en favor de la primera, ya que sus nuevas tareas —como en el caso de la reforma de las finanzas y del ejército, la construcción de carreteras interurbanas, la ayuda al desarrollo y la energía atómica—, que refuerzan su importancia, han ido en aumento.

Bajo el lema de «neutralidad y solidaridad», Suiza se mantuvo alejada de todas las organizaciones internacionales de carácter claramente político o militar. Sin ser siquiera miembro de la ONU, se adhirió sin embargo a muchas suborganizaciones de las Naciones Unidas, a la zona de libre comercio (EFTA) en 1960, y al Consejo de Europa en 1963. Con la Comunidad Europea existe desde 1972 (referéndum) un tratado de libre comercio; Suiza está asociada al GATT desde 1958. Ginebra siguió siendo, como antes de la segunda guerra mundial, la sede favorita de las organizaciones y las conferencias internacionales.

Favorecida por una coyuntura propicia desarrollada en onda corta, las relaciones económicas y sociales se caracterizan por su gran estabilidad. La firmeza de la moneda, su fama de oasis tributario y el secreto bancario atrajeron una inmensa afluencia de capital al país. Tras la crisis económica mundial de 1974-75 arreciaron las críticas —expresadas, por otra parte, desde siempre por escritores como Max Frisch y Friedrich Dürrenmatt— contra la sociedad suiza. Como para ilustrar las acusaciones realizadas por el miembro del Consejo Nacional ginebrino Jean Ziegler de «imperialismo secundario», las prácticas de venta del consorcio de alimentación Nestlé en el Tercer Mundo y los acuerdos sobre los precios de la empresa farmacéutica Hoffmann-La Roche dieron que hablar de las multinacionales suizas. La catástrofe del gas venenoso en una planta química suiza en Seveso (Lombardía) en 1976, la desconsiderada agresión al medio ambiente, entre otros, en el Alto Rin, cerca de Basilea, y la expansión del turismo de invierno en los Alpes hicieron tambalearse la imagen de la Suiza «intacta». Al igual que en otros países occidentales, aparecieron síntomas de crisis: como país de tránsito, Suiza se convirtió también en campo de acción del terrorismo; los disturbios juveniles, sobre todo en Zurich, trastornaron fuertemente la idea de sí mismos de muchos suizos[61].

c. *Suecia ¿«un modelo»?*

En muchos aspectos, Suecia es considerada por otros países de Europa occidental como un ejemplo digno de ser imitado o espantoso; muy próximo a una de las visiones del *Brave new world* de Aldous Huxley para unos, «modelo del futuro» para otros y experimento fracasado de una vía socialdemócrata entre el capitalismo y el comunismo para unos terceros.

Después de 1945, Suecia prosiguió su rumbo neutral tradicional, una vez que la Unión Soviética, ante el temor de que Suecia pudiese aliarse al bloque occidental, renunció a incluir a Finlandia

en su ámbito de poder como «democracia popular». La neutralidad de Suecia, que ha deparado al país una paz de más de siglo y medio, descansa en un ejército poderoso y en su moderna industria armamentística. A diferencia de la neutralidad de Austria y Suiza, de base contractual o constitucional, la de Suecia es definida reiteradamente por el Parlamento y el gobierno. Suecia se mostró dispuesta a cooperar con los otros Estados escandinavos e ingresó en la EFTA, pero permaneció al margen de las comunidades europeas [62].

Bajo la dirección del Partido Socialdemócrata, que gobierna desde 1932, Suecia, gracias a los recursos naturales, a una población homogénea y a las elevadas tasas de crecimiento de la productividad y del producto interior bruto, alcanzó los primeros puestos a nivel internacional en todos los campos de la política social, así como en las prestaciones públicas para la ayuda al desarrollo. Con el progreso social aumentaron la participación estatal en el producto interior bruto y la carga de los ciudadanos mediante impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. En tanto que los impuestos sobre la renta, el patrimonio y la herencia son más altos que en otros países similares, la contribución de las empresas se mantuvo dentro de ciertos límites. La «curiosa mezcla» de «política social total» y «cura de mimos para la industria privada» [63] permitió un elevado crecimiento económico, de manera que en 1979 Suecia ocupaba, con un producto interior bruto anual de 9 340 dólares por habitante, el tercer lugar del mundo tras Kuwait y Suiza. Después de la recesión de 1968-69, el gobierno, en el que el primer ministro Erlander, que llevaba 23 años en el cargo fue sustituido por O. Palme, optó por un aumento de los precios y un endeudamiento más elevado en favor del pleno empleo. El porcentaje de votos del Partido Socialdemócrata, que en las elecciones parlamentarias de 1968 aún había obtenido el 50,1% de los votos, fue disminuyendo de forma continuada en 1970 y 1973, de manera que las elecciones de 1976 arrojaron una escasa mayoría para una coalición formada por el centro, los conservadores y los liberales bajo T. Fälldin (escaños y cambios frente a 1973: socialdemócrtas 152/—4; centristas 86/—4; conservadores 55/+4; liberales 39/+4; comunistas 17/—2). Los partidos burgueses se beneficiaron, al igual que había sucedido en 1973 en Noruega, del «voto de castigo» de los agricultores y los detractores de las centrales nucleares, que en 1979 volvieron a desertar en su gran mayoría. Los límites del «modelo sueco» no los pondría de manifiesto el resultado electoral de 1976, sino la crisis económica mundial desde 1973-74, si

bien, gracias a su política social, Suecia puede afrontar mejor las consecuencias sociales de la crisis que otros Estados.

VII. LA DICTADURA MILITAR EN GRECIA

La historia de la Grecia moderna es un «balance de la inestabilidad»[64]. La dictadura del general Metaxas había llevado al país a la época más sangrienta de su historia, que no acabaría hasta 1949 con la derrota de las formaciones comunistas en la guerra civil. Las fuerzas de la derecha dominaron el país en los años siguientes, apoyadas en el ejército y en la policía. Cierto es que el presidente de gobierno desde 1955, Karamanlis, había impulsado la industrialización del país —a costa de la dependencia militar y económica de los Estados Unidos—, había aproximado Grecia a Europa occidental (asociación a la CEE en 1961) y había puesto fin de momento, en 1959, al conflicto de Chipre, que surgía una y otra vez. El poder político se encontraba entre tanto fuera del gobierno y del Parlamento, en manos del rey y de sus consejeros, del ejército, de su servicio secreto controlado por la CIA, de sus sociedades secretas, de la policía y de las milicias paramilitares que controlaban la Grecia rural. La esperanza en el fin de las prácticas ilegales y seudolegales, que culminaron en la manipulación electoral de 1961 y el asesinato de un diputado de izquierda en 1963[65], nació con la victoria electoral de la oposición, una unión de centro de liberales y socialdemócratas bajo la dirección de G. Papandreu que en 1963 obtendría la mayoría relativa y en 1964 la absoluta. Con su cautelosa política de reformas, Papandreu perseguía la liberalización del régimen y una economía expansiva y social. Los contratos extremadamente ventajosos para los inversores extranjeros volvieron a ser negociados en parte. Esta política no sólo tropezó con la resistencia de la extrema derecha, sino también con la de la oligarquía y el rey, ya que el desarrollo político y social iniciado habría significado a la larga el fin de sus privilegios. Papandreu tuvo que seguir en su heterogéneo gobierno una línea media, sin atreverse a abordar la depuración del aparato del Estado y la lucha contra la corrupción y el nepotismo. Frente a los Estados Unidos, Papandreu se mostró menos complaciente que sus predecesores. En la cuestión de Chipre apoyó la política independiente del arzobispo Makarios, que rechazaba los planes americanos de dividir la isla, así como el estacionamiento permanente de tropas de la OTAN, y aspiraba a mantener la integridad de la isla a

través de la ONU, para lo cual buscó también el respaldo de la Unión Soviética y del Egipto de Nasser.

Papandreu fracasó cuando se propuso depurar el ejército. Un asunto nunca aclarado en torno a la asociación de oficiales de izquierda ASPIDA, que al parecer había pensado en la posibilidad de establecer una dictadura de tipo nasserista y había estado en contacto con el hijo de Papandreu, Andreas, así como con algunos ministros, sirvió al rey Constantino de pretexto para negar su firma al decreto de destitución del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor (15 de julio de 1965). Tras su golpe de fuerza contra la Constitución, el rey intentó, sin gran éxito, gobernar con el movimiento de derechas ERE y con algunos diputados aislados de centro. Así, la política seudoparlamentaria del rey sólo sirvió para desacreditar al propio sistema parlamentario y para crear ante la inminencia de las elecciones (mayo de 1967) un clima en el que florecieron los rumores golpistas.

Pero el golpe que tuvo lugar en la noche del 21 de abril de 1967 y que puso a Constantino ante unos hechos consumados no fue el golpe de Estado de una «gran Junta» formada por la Corona y los generales que Grecia ya había conocido más de una vez, sino el de un pequeño grupo de conjurados en torno al coronel Papadopoulos, al teniente general Pattakos y al general Zoitakis. Tras el fracasado contragolpe del rey en diciembre de 1967, Papadopoulos eliminó a sus rivales dentro del Comité Revolucionario y se convirtió con la ayuda de oficiales de grado medio deseosos de hacer carrera, en dictador único. Los coroneles, ejercitados en las tareas del servicio secreto, pudieron impedir acciones espectaculares de protesta —las manifestaciones en el entierro de Georgios Papandreu, los disturbios en la Universidad Técnica de Atenas y la revuelta de los obreros de la construcción fueron una excepción—, con una tupida red de confidentes, medidas de excepción, detenciones masivas, deportaciones y crueles torturas, pero los militares no lograron romper la resistencia pasiva de las élites profesionales y del pueblo ni con el terror, ni con una nueva Constitución, ni tampoco con la proclamación de la República. Grecia fue condenada en enero de 1969 por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa por sus violaciones de los derechos humanos; los coroneles se anticiparon con su salida a su exclusión del Consejo.

Con el relevo de Papadopoulos por Joannides, teniente coronel y comandante de la policía militar, la dictadura «más dura» de Grecia entró en su fase «más tonta»[66]; el diletantismo en política económica, que había permanecido oculto en un primer momento gracias al capital extranjero y al turismo, se puso plena-

mente de manifiesto en 1973 y supuso un fracaso económico para Grecia, con la paralización del crecimiento, un elevado déficit en la balanza de pagos, la reducción de las reservas de divisas y la inflación (más del 30% en 1973).

La decisión de animar a la guardia grecochipriota bajo el general Grivas a dar un golpe de Estado contra el arzobispo Makarios, en torno al cual se habían congregado muchos adversarios griegos del régimen, supuso una ruptura de todos los tratados existentes, movió a los turcos a intervenir militarmente en la isla y llevó a Grecia al borde de una guerra sin perspectivas contra su «compañero» oriental de la OTAN. En julio de 1974, los militares arrojaron la toalla ante el montón de escombros de su política. Karamanlis, primer ministro de 1955 a 1963 y jefe del movimiento ERE, fue llamado de su exilio en París como «salvador». Una política económica pragmática, una democratización cautelosa y un nuevo acercamiento a Europa occidental (en 1974, reingreso en el Consejo de Europa; en 1981 miembro de pleno derecho de la CEE) condujeron a Grecia a una fase más tranquila de su historia reciente.

VIII. LA PENINSULA IBERICA

El anacrónico Portugal del dictador Salazar se mostró a finales de la década de 1950 incapaz de resolver los problemas del desarrollo económico, la democratización y la descolonización. Después de que Salazar delegase en 1968 sus cargos en Caetano a consecuencia de un derrame cerebral, los salazaristas más derechistas dirigidos por el general Kaulza de Arriaga endurecieron la lucha contra los movimientos independentistas de las colonias africanas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Los industriales y banqueros portugueses, que veían en peligro la industrialización de la metrópoli y sus propios intereses en las colonias por el rumbo de los acontecimientos, publicaron a principios de 1974 un artículo del antiguo comandante de Guinea-Bissau, el general Spínola, en el que éste abogaba por la retirada de las colonias y por una confederación portuguesa de Estados más flexible. El artículo cayó como una bomba, ya que la guerra colonial, que se prolongaba desde 1961, había desencantado a una gran parte del ejército. La sublevación del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) el 25 de abril de 1974 fue el inicio de la caída de una dictadura de más de cincuenta años, que se convirtió en una especie de fiesta popular de forma rápida e incruenta; los presos políticos fueron puestos en libertad, la censura fue suprimida, se

interrumpieron las persecuciones policiales y regresaron del exilio políticos de la oposición tales como el socialista Soares y el comunista Cunhal. Una Junta Militar, con Spínola a la cabeza, nombró un gobierno provisional formado por políticos de centro y de izquierda y convocó elecciones para elegir una Asamblea Constituyente.

La necesidad de poner un pronto fin a las guerras coloniales ocultó en un principio las contradicciones existentes dentro de la nueva dirección. El MFA, en parte en contra del titubeante Spínola, impulsó la descolonización: Guinea-Bissau (1974), Cabo Verde (1975), Mozambique (1975) y Santo Tomé-Príncipe (1975) obtuvieron la independencia. En Angola, Portugal dudaba entre los movimientos independentistas rivales MPLA (Neto, Andrade), FNLA (Roberto) y UNITA (Savimbi); tras el tratado de Alvor (enero de 1975), Portugal dejó el país sumido en una guerra civil, de la cual salió vencedor el MPLA, marxista, gracias a la ayuda cubana [67].

Después de la revolución, Portugal vivió durante año y medio bajo el «doble dominio» permanente de la dirección política y militar. En tanto que los socialistas querían convertir al país, mediante unas elecciones, en una democracia pluralista y buscaban la unión con Europa occidental, un grupo de jóvenes oficiales en torno al organizador del golpe del 25 de abril, Carvalho, cobró una influencia decisiva dentro del MFA. Estos oficiales aspiraban a lograr con acciones directas la unidad del pueblo y el ejército, siendo apoyados por los comunistas. El PC de Cunhal dominaba los medios de comunicación y organizó las expropiaciones de los grandes terratenientes por los pequeños campesinos y trabajadores del campo. El MFA reaccionó contra los rumores de que Spínola, destituido entre tanto, planeaba un contragolpe con la reintroducción parcial de la censura y el retraso de la fecha de las elecciones. Los partidos políticos tuvieron que comprometerse a no atentar durante los dos años siguientes contra el poder del MFA. No obstante, en las elecciones del 25 de abril de 1975 los socialistas se convirtieron en el partido más fuerte con el 37,8% de los votos, en tanto que el PC sólo obtenía el 12,5%. El MFA y los comunistas trataron de pasar por alto el resultado electoral y no accedieron a las exigencias de los socialistas tras las elecciones municipales. Una oleada de ocupaciones de empresas y de expropiaciones de tierras provocó una primera y amplia corriente contrarrevolucionaria, que en el verano de 1975 se extendió por todo el norte de Portugal. La formación de un triunvirato por los generales Gomes, Gonçalves y Carvalho el 25 de julio de 1975 y la concentración de unidades militares bajo el

mando de Carvalho con el objetivo de destituir a los militares moderados del Consejo de la Revolución tuvieron el efecto contrario. Los oficiales moderados obligaron al jefe del gobierno provisional, Gonçalves, a dimitir, sustituyéndole por el almirante Azevedo (5 de septiembre de 1975). A continuación, los socialistas ingresaron en el sexto gobierno provisional. En diciembre, los militares reconocieron la primacía de la dirección política; las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1976, de las que salieron vencedores los socialistas y el general Eanes, apoyado por los socialistas y por los partidos de centro, sellaron este proceso[68].

España permaneció largo tiempo aislada después de la segunda guerra mundial y atrasada en su desarrollo económico. Cierto es que el interés militar de los Estados Unidos por establecer bases en la península Ibérica había abierto el país a la ayuda económica y al capital extranjero, pero hasta el cambio de la política económica española de 1958-63 no se inició la industrialización, por cierto vertiginosa. El «caudillo» Franco designó en 1958 a miembros de la orden católica laica del Opus Dei expertos en economía para ocupar puestos claves. Tras el ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en la OCDE, la economía nacional se modernizó y liberalizó. Con la nacionalización del Banco de España surgió un moderno banco central y, con los planes para varios años, un mínimo de planificación estatal. Los inversores extranjeros, que apreciaban España por su bajo nivel salarial y su dirección política, se convirtieron en el motor de la industrialización. Si a las cifras de 1961 se les da el valor de 100, en 1974 ascendían en el sector del acero a 474; en el del cemento a 385; en el de los fertilizantes a 217; en el textil a 133; en el de los televisores a 644; en el automovilístico a 1 196; en el de los teléfonos a 365. La participación de capital extranjero aumentó rápidamente en más del 50% en las industrias químicas, la construcción de maquinaria y la industria eléctrica y electrónica. Los déficits crónicos de la balanza de pagos pudieron ser transformados en superávits gracias al turismo y las remesas de los emigrantes. Si el número de turistas extranjeros que habían visitado España en 1952 era de 1,2 millones aproximadamente, en 1961 fue ya de 7,4 millones y en 1975 de más de 30 millones, que proporcionaron unos ingresos de cerca de 3 400 millones de dólares. Los trabajadores españoles en Europa occidental remitieron en 1966 cerca de 346 millones de dólares a su país y en 1973 las remesas alcanzaron la cifra récord de 913 millones[69]. El contacto con Europa occidental hizo que se tambalearan muchos de los principios de la España franquista, católica y

puritana. La población rural se redujo a causa del éxodo y la emigración en tres cuartas partes, desapareciendo la influencia de los grandes terratenientes. El abismo existente entre la España interior rural, por una parte, y las grandes aglomeraciones urbanas en aumento y las zonas costeras abiertas al turismo, por otra, se hizo cada vez mayor. La creciente clase media impulsó la liberalización. Los trabajadores de la industria que no querían formar parte de los sindicatos «verticales» estatales se organizaron en sindicatos socialistas y anarquistas o en las Comisiones Obreras, de influencia cristiana y comunista. Con los sindicatos libres surgió el adversario interno más poderoso del régimen. Entre los partidos prohibidos de la oposición, los comunistas eran quienes disponían de una organización más sólida. Desde la guerra civil, el PCE era acusado de «estar al servicio de Moscú» por otros grupos de la oposición. Cierto es que dependía de las ayudas económicas del bloque del Este (al igual que los socialistas dependían de la ayuda de la Internacional Socialista), pero entre tanto y bajo la influencia de su secretario general, Carrillo, seguía un rumbo «eurocomunista». Carrillo se impuso frente al intento de Moscú de conseguir una mayor influencia para la línea ortodoxa en torno a antiguos luchadores como Líster y Pasionaria dentro del PCE. Las aspiraciones autonomistas de algunas regiones (Cataluña, País Vasco) no pudieron ser controladas ya por Franco, pero no fueron el gobierno vasco en el exilio y el Partido Nacionalista Vasco, sino los grupos extremistas bajo la dirección de ETA (Euskadi y Libertad) quienes determinaron con sus exigencias de independencia total y con un socialismo vagamente perfilado el rumbo de los acontecimientos. La espiral de terror y contraterror alcanzó su primera cima en el proceso de Burgos de 1970. Las penas de muerte impuestas fueron condenadas unánimemente por la opinión pública internacional.

Franco siguió su camino entre la liberalización (supresión de la censura previa en 1966, designación de Juan Carlos como rey en 1969) y la represión (estado de excepción de 1969, penas de muerte). En 1973 se derrumbaron las dos columnas más importantes del régimen: la continuidad política y el bienestar.

El presidente de gobierno, Carrero Blanco, figura falangista simbólica de la alianza entre el Ejército y la Iglesia, fue víctima de un atentado de ETA; la crisis económica produjo una tasa de inflación del 20% y un paro del 5%, así como una balanza de pagos negativa, un debilitamiento de la peseta, un retroceso de las inversiones extranjeras y huelgas constantes. Pero hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975 no quedaría despejado el camino hacia la democracia. El Ejército y la Iglesia —la últi-

ma se había mostrado asombrosamente adaptable— garantizaron el feliz término de la coronación de Juan Carlos. El rey permitió la existencia de partidos y sindicatos libres y dispuso la celebración de elecciones en municipios y provincias. Desde el nombramiento de Adolfo Suárez González como jefe de gobierno en julio de 1976, tampoco los grandes partidos de la oposición —los socialistas y los comunistas— habrían de cuestionar ya el rumbo de la reforma y sus presupuestos: monarquía, capitalismo liberal, pertenencia a la OCDE, estrecha vinculación a la OTAN y orientación hacia Europa occidental. El resultado de las elecciones libres para formar las Cortes Constituyentes el 15 de junio de 1977 confirmó el camino elegido [70].

5. De la muerte de Stalin a la era Breznev. Los países del Comecon desde 1953

I. LA HERENCIA DE STALIN

a. *La dirección colectiva*

La muerte de Stalin colocó a los dirigentes soviéticos ante una tarea difícil. Se trataba de llenar el hueco que había dejado la figura central del dictador. Pero tras la muerte de Zdánov ninguno de los integrantes del reducido círculo del poder había podido alcanzar una autoridad que le permitiera ocupar el puesto de Stalin por cuanto la personalización del poder había establecido límites al descuello de la élite política. Georgi Maximilianovich Malenkov, designado sucesor, a pesar de estar familiarizado tanto con el manejo de los instrumentos del poder como con la política y los planes de Stalin debido a los muchos años de trabajo como secretario privado suyo y (desde 1939) como secretario del Comité Central (CC) del PCUS y director de la sección de cuadros del CC, carecía de las indispensables condiciones de dirigente. El poco definido *aparatchik*, que en un principio se había mantenido totalmente a la sombra de Zdánov, a la muerte de éste avanzó paulatinamente, pero no fue conocido por el público en general hasta principios de la década de 1950. Las reservas contra él en la cúspide del partido eran compartidas también por los militares; se le veía con buenos ojos como segundo de a bordo, pero para un primer puesto le faltaba altura y carisma. Ante la situación crítica tanto interior como exterior de la Unión Soviética y el desconocimiento de las cargas que era posible imponer a los regímenes satélites, hubo que dejar a un lado estos reparos y demostrar, en aras de la estabilidad, un máximo de armonía entre las altas jerarquías del Partido y del gobierno.

Además el poder de Stalin seguía siendo tan grande que una decisión en contra de su parecer habría originado crisis suplementarias. Así pues, según los acuerdos de la dirección del Partido y del Estado dados a conocer el 7 de marzo de 1953, Malenkov ocupó el cargo de jefe de gobierno de la URSS y el primer puesto en el Presidium del CC del Partido. Para contra-

rrestar la falta de una autoridad central se intentó establecer, en lugar del sistema de dominio personal de Stalin, una «dirección colectiva», cuyo principio se remontaba a Lenin y era por tanto sacrosanto. Ya en las honras fúnebres de Stalin, el 9 de marzo, se situaron junto a Malenkov el ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, y el jefe de la policía secreta, Laurenti Pavlovich Beria, y el 14 de marzo el tenaz y enérgico Nikita Sergeievich Jruschov pasó a ocupar, en descarga de Malenkov, el antiguo puesto de éste en el CC. Pronto se comprobaría que en el nuevo órgano dirigente confluían diversas tendencias en el seno del Partido, cuyas interpretaciones divergentes se harían más patentes cuanto más se consolidara el nuevo sistema.

Todos en general estaban persuadidos de que era indispensable realizar un cambio, al menos en el sistema económico estalinista. Los datos sobre el cumplimiento de los planes evidenciaban continuamente un crecimiento económico impresionante, pero la calidad de los productos seguía siendo a todas luces insuficiente y el progreso tecnológico exiguo. Justamente en el momento del enfrentamiento de la «guerra fría» y de la guerra de Corea se hicieron claramente perceptibles estas deficiencias; se evidenció que la «ideología de las toneladas», que había dominado la producción industrial, actuaba como un freno. La introducción de nuevas tecnologías más racionales en la industria llevaría, aunque fuera a corto plazo, al estancamiento o incluso a un descenso de las cifras de producción. Pero esto repercutiría, de acuerdo con el sistema, en la totalidad del personal. Los directivos corrían por tanto el riesgo de ser acusados de incapacidad e incluso de sabotaje, pero para el personal acarreaba un deterioro económico: pérdida de primas o incluso descuentos por incumplimiento de las normas de producción. Las autoridades encargadas de la planificación reforzaron aún más esta aversión existente dentro de las empresas a la racionalización y a la innovación. El reparto de los fondos de inversión perjudicaba el desarrollo de ramas industriales deprimidas como la industria química, que justamente por aquel entonces alcanzaba en los países occidentales tasas de crecimiento extraordinarias. La estrechez de miras de una política de inversión tan «conservadora» tampoco podía corregirse por medio del aprovechamiento de las experiencias llevadas a cabo en los Estados Unidos, que habían alcanzado mayor desarrollo. El afán totalitario de la ideología prohibía rigurosamente, dentro de la «campaña anticosmopolita», semejante préstamo del «capitalismo». La «guerra fría» resultó una carga cada vez mayor para la economía. El aumento de las tropas de 2,9 millones en 1948 a 5,8 millones en 1955 [1] (teniendo en cuenta que ya en 1952 se

había producido la mayor parte de este incremento). privaba a la economía de mano de obra y el aumento desproporcionado de los gastos de armamento, de fondos para inversión; finalmente, el incremento de la producción armamentística iba en detrimento de la producción de bienes civiles: al desequilibrio propio de la ramificación se sumó el sectorial tradicional con el subdesarrollo de la industria de bienes de consumo y del sector servicios. El abastecimiento de la población no había mejorado con respecto a la época anterior a la guerra y la calidad de la exigua oferta de artículos de consumo continuaba siendo mala. Por tanto cabía preguntarse si la mala situación del abastecimiento no conduciría a un hundimiento de la moral de trabajo, lo cual pondría en peligro el rápido crecimiento ulterior de la economía con los métodos de producción de trabajo intensivo existentes, como ya se había previsto en el plan quinquenal de 1951-1955 (no aprobado hasta octubre de 1952).

No obstante, era primordial descongestionar la política exterior de la Unión Soviética, pues únicamente la supresión de tensiones internacionales podía hacer que desapareciera la carga del armamento forzoso y posibilitar las necesarias reformas internas. Por supuesto seguía vigente la tesis de Stalin de la agudización de la lucha de clases en el «campo imperialista», desarrollada en su obra *Problemas económicos del socialismo en la URSS* de septiembre de 1952, pero los nuevos dirigentes encontraron que la Unión Soviética estaba lo suficientemente armada como para rechazar eficazmente un ataque. Los avances en la técnica armamentística del ejército soviético —tal como era llamado el Ejército Rojo desde 1946— eran considerables (a principios de 1955 se pudo poner término a la renovación del armamento), el desarrollo de los cohetes había alcanzado un grado elevado y en el ámbito de las armas atómicas la Unión Soviética podía equipararse a los Estados Unidos, pues desde 1949 poseía bombas atómicas. El 8 de agosto de 1953 —aniversario de Hiroshima— Malenkov proclamaba el éxito de la activación de la primera bomba de hidrógeno soviética. Al mismo tiempo se ponía de manifiesto que, con el paso del *«containment»* al *«roll back»,* bajo el nuevo gobierno de Eisenhower, la política americana, calificada de amenazadora, tropezaba con grandes problemas en el campo occidental, por lo que no existía un serio peligro para el dominio soviético. Una política soviética basada en la distensión entre los dos bloques tendría además que contrarrestar los intentos militares y políticos de integración de los Estados Unidos. Ya en marzo de 1953, los nuevos dirigentes soviéticos pusieron de manifiesto con algunas decisiones su propósito de llegar a un com-

promiso. El acuerdo para la elección de Dag Hammarskjöld como secretario general de la ONU el 31 de marzo fue un claro signo de ello. También en el Extremo Oriente se puso fin a la política de enfrentamiento; al concertarse el armisticio en Corea el 27 de julio de 1953 terminaron las hostilidades.

Estos esfuerzos de descongestión de la política exterior fueron paralelos a los intentos de solucionar los problemas económicos de la Unión Soviética. La designación en los ministerios de altos funcionarios del Partido, una de las medidas de seguridad del nuevo equipo dirigente tras la muerte de Stalin [2], si bien supuso en un principio una austeridad administrativa mediante la reducción de personal de los ministerios de rama (así por ejemplo se unificaron los ministerios de Agricultura, Sovjoses y Cultivo del Algodón, los ministerios de Metales Ferrosos y No Ferrosos), se fue anulando paulatinamente hasta el fin de año. Por el contrario siguió su marcha la ampliación de competencias de los ministerios y de la oficina de planificación central (Gosplan), a la que se volvió a conceder una parte considerable de las atribuciones perdidas en 1947. (El hecho de que con ello no se iban a solventar las dificultades de la dirección central de la economía nacional, cuya estructura se había hecho mucho más compleja que en la época de creación de este sistema, se puso pronto de manifiesto y llevó a nuevos cambios, no muy eficaces, en la administración económica.)

Mucho más significativos fueron los esfuerzos, unidos al nombre de Malenkov, por mejorar el abastecimiento. Ya el 1 de abril de 1953 anunció un descenso en los precios de venta al público en un 10% como promedio, llegando a un 50% en algunos productos alimenticios. Dado el notorio estrangulamiento de la producción agraria soviética, esta medida favorable a los consumidores, que tan poco tenía en cuenta la realidad, debió de ser concebida para remediar a corto plazo, en aquella fase transitoria, el descontento de la población, pues la oferta de productos alimenticios disponibles no era en modo alguno suficiente para cubrir la demanda creciente por el descenso de los precios, cosa que no debía ser un secreto para los dirigentes del Partido ni del gobierno. La reducción de la pérdida de poder adquisitivo mediante una drástica disminución de la emisión de empréstitos estatales, cuya suscripción tenía para la población un significado de «obligación voluntaria», sirvió únicamente para aumentar el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Sólo el 8 de agosto de 1953, en la reunión del Soviet Supremo de la URSS mediante los acuerdos de la directiva del Partido sobre una nueva política económica más orientada hacia el consumo, se establecieron las

bases para una auténtica mejora, se intensificaron las inversiones en la industria de bienes de consumo y su producción aumentó considerablemente. A pesar de que los objetivos ampliados del plan no se alcanzaron plenamente, la producción de bienes de consumo en 1955 evidenció un aumento extraordinario con respecto a la de 1952[3].

Parecidos esfuerzos se realizaron para elevar la producción agraria. Jruschov había presentado al Soviet Supremo una imagen no falseada de la situación agrícola como complemento a las explicaciones de Malenkov sobre la industria; ante todo criticó la baja productividad de las explotaciones del Estado (sovjoses). Siguiendo sus propuestas, se llevaron a cabo una serie de medidas y reformas que debían suprimir el tradicional estrangulamiento del abastecimiento soviético. Para ayudar a los koljoses en su carencia crónica de capital, que impedía cualquier medida de racionalización, y al mismo tiempo para elevar los ingresos de los koljosianos, se aumentaron de forma drástica los precios estatales de compra de los productos agrícolas; en 1954 aumentaron un 207% por término medio y en 1955 hasta un 251% por encima del nivel de 1952. También se impulsó la producción privada mediante la reducción de los impuestos. Ulteriores disposiciones complementaron estas medidas; además se procuró elevar la efectividad de los servicios de máquinas y tractores. A pesar de las dificultades con que tropezaron estas innovaciones (en el ámbito administrativo se puede hablar de una fase de experimentación), los incentivos materiales y las inversiones dieron lugar a un considerable aumento de la producción agraria y a un incremento de las reservas de ganado[4]. Al mismo tiempo, en la llamada «campaña de nuevas tierras» se roturaron grandes superficies de terreno, aumentándose la superficie de cultivo hasta unos 40 millones de ha en 1956. Esta colosal ampliación fue en detrimento de las regiones agrícolas tradicionales, a las que se privó tanto de maquinaria agrícola como de mano de obra.

Estos grandes esfuerzos por elevar el nivel de vida no podían dejar de surtir efecto sobre la población, sobre todo porque fueron acompañados de un abandono de la política cultural estalinista. Inesperadamente, en el verano de 1953 comenzó un cambio, que enseguida fue designado por todo el mundo como el «deshielo», según el título de una novela corta de Ilia Ehrenburg, que fue elocuente portavoz de esta nueva línea. La rígida unión del arte y la ciencia con la ideología ortodoxa se fue paulatinamente suavizando y la atmósfera relajada llevó rápidamente a un florecimiento (todavía limitado) de las artes. Los científicos soviéticos, hasta entonces aislados del extranjero, se

sintieron liberados de las cadenas, lograron conectar con la investigación internacional y pudieron por fin tomar parte en las discusiones de congresos y conferencias. Este cambio en las condiciones de vida intelectual y material (aunque ésta última fuera muy a la zaga) actuó como nueva motivación entre la población. El entumecimiento de la época de Stalin se había superado; surgía una nueva esperanza. A pesar de los reparos puestos por los estalinistas ortodoxos a esta libertad limitada, pues temían abusos que pudieran amenazar al sistema social soviético, los dirigentes del Partido mantuvieron aquellas áreas de libertad aun cuando siguieran procurando que el control no se les escapara de las manos e impidieran todo aquello que eventualmente pudiera remover las bases del sistema soviético. Este tabú continuó por supuesto vigente (tampoco en otras partes las élites dirigentes se hallan dispuestas a que se cuestione el poder), pero el totalitarismo de la ideología estalinista, es decir su afán de abarcar tanto la vida pública como la privada y de tomar las normas y las opiniones de Stalin prácticamente como la máxima encarnación de la razón —por muy teórico que pudiera ser incluso en la práctica— quedó así destruido. En la época posterior el ámbito de las libertades toleradas (preservando estrictamente las posturas fundamentales) fue cautelosa y paulatinamente ampliado. Esta apertura precavida, caracterizada por frecuentes retrocesos, tenía su origen en la preocupación profunda que un cambio de este tipo podía suscitar en los funcionarios del Partido y de la Administración imbuidos de estalinismo, que durante dos décadas habían sido educados para calificar a toda manifestación de disconformidad de «enemiga de la clase obrera», «reaccionaria», etc. En conjunto, la llamada «desestalinización» —no sólo en el ámbito cultural— puede ser descrita como un «proceso de aprendizaje» de larga duración, hipotecado en parte con fricciones importantes, por el que tenían (y tienen) que pasar no sólo los funcionarios de cualquier nivel, sino también toda la sociedad de la Unión Soviética. La dosificación sumamente escrupulosa por parte de la dirección del Partido, al igual que la preocupación de la élite intelectual, consciente de los límites, contribuyeron a que se pudiera evitar hasta los años sesenta un conflicto más profundo entre los que ostentaban el poder y los intelectuales, representantes espirituales y portavoces de la sociedad.

El hecho de que este proceso —que en la época posterior fue adquiriendo una cierta dinámica propia— fuera puesto en marcha por los mismos hombres que durante muchos años, incluso décadas, habían sido estrechos colaboradores de Stalin, no es cosa que pueda explicarse únicamente por el temor a que, tras la

muerte de Stalin, surgieran acciones espontáneas contra el sistema por parte de la población. Este temor existió tras el fallecimiento de Stalin —como lo prueba la urgente concentración en Moscú de unidades del servicio de seguridad del Estado ordenada por Beria—, y las medidas tomadas durante las primeras semanas por la nueva dirección —precipitadas por no haberse analizado sus consecuencias— fueron de carácter preventivo. Sin embargo, los acuerdos del 8 de agosto de 1953 se adoptaron cuando el sistema de dirección colectiva ya se había impuesto y su autoridad se había consolidado. Como pone de manifiesto sobre todo la exposición hecha por Jruschov de la situación real en el sector agrario, anteriormente se había realizado un inventario completo que hacía patentes los déficits no sólo económicos sino también sociales de la herencia estalinista, cuyo aspecto más grave consistía en el distanciamiento de amplias capas de la población del partido estalinista. El «nuevo curso» tenía por tanto como objetivo un consenso entre dirigentes y dirigidos que posibilitase la solución de los múltiples problemas del país. Al espacio intelectual más amplio que el «deshielo» político-cultural había reservado a los intelectuales poco motivados a participar en un sistema escalonado de privilegios materiales le correspondió una doble función: no sólo ofrecía a los intelectuales una nueva posibilidad de identificación con el Partido, sino que contribuía a una mayor movilización intelectual necesaria para superar la rigidez del programa estalinista y la falta de iniciativa personal. Entre las medidas con las que los hombres del círculo de Malenkov intentaron ganarse la confianza de la población y suprimir el potencial conflictivo estaba también el abandono de las tendencias a la rusificación masiva de los años anteriores.

Sin duda sería erróneo, si se quiere escoger un único motivo del cambio iniciado por los hombres del «nuevo curso», sostener que fue un simple oportunismo destinado a la pura adquisición de poder. Se trataba por supuesto de comunistas convencidos, cuyas creencias habían sido probadas a lo largo de dos decenios en renovadas pruebas cada vez más duras, que no tenían la menor duda de que el sistema soviético ofrecía básicamente la mejor y más avanzada forma de organización de la vida social, dadas las circunstancias. Pero no por ello debían ser ciegos a sus faltas y perpetuarlas. El bienestar de los seres humanos a los que gobernaban en virtud de su cargo no les era indiferente, si bien la parcialidad del sistema les imponía unos límites estrictos cuando se trataba de definir en qué radicaba el bien común y cómo había de promoverse. Teniendo en cuenta esta limitación,

inherente al sistema, no se les pueden negar las buenas intenciones a la hora de considerar el «nuevo curso».

El cambio de rumbo, el abandono de principios de poder probados y acreditados, no estuvo libre de controversias en el círculo restringido de los dirigentes, considerando además la inseguridad que provocaba entre los cuadros medios y bajos. La polémica sobre el grado de humanización y el riesgo que conllevaba estaba en estrecha relación con las ambiciones personales de poder de los dirigentes y se hallaba influenciada por las rivalidades entre grupos, por lo que es difícil detallar qué posiciones se tomaron por motivos de poder y qué argumentos tuvieron su origen en un íntimo convencimiento. De los conflictos habidos en el más reducido círculo del poder tuvo conocimiento la opinión pública por primera vez cuando la prensa soviética publicó el 10 de julio de 1953 la sorprendente noticia de que Beria, que durante años había sido jefe del servicio de seguridad y vicepresidente del Consejo de Ministros, había sido destituido de sus cargos, expulsado del Partido y encarcelado. Las acusaciones formuladas contra él eran en su mayor parte sumamente inverosímiles y servían únicamente para encubrir las auténticas divergencias. Además de su rechazo de la política agraria de Jruschov y de su intervención en favor de una mayor autonomía cultural de las nacionalidades de la Unión Soviética, y también acaso de una mayor libertad de movimiento de los países satélites, y además de la desaprobación del relajamiento de la política cultural, había un desacuerdo fundamental en lo referente a la posición de las fuerzas de seguridad que en la época de Stalin se habían convertido en un poder casi autónomo, sustraído al control del Partido y del Estado y de responsabilidad exclusiva de Stalin, cuya fuerza e ímpetu habían quedado claramente demostrados en la actuación de Beria en Moscú el 5 de marzo. Tras la muerte de Stalin dependían exclusivamente de Beria; ahora se trataba de subordinarlas a la nueva dirección colectiva del Partido. Era evidente que Beria no estaba dispuesto a aceptar esta merma de poder, pero fue el perdedor en la decisiva discusión del 26 de junio (cuyo desarrollo, de gran impacto en la vida pública, fue calificado de sumamente dramático), en buena medida porque los militares estaban también en su contra. Sus más estrechos colaboradores fueron igualmente encarcelados, incriminados con él y ejecutados a finales de diciembre. Incluso entre los cuadros medios del servicio de seguridad hubo grandes cambios de personal; transitoriamente el servicio estuvo bajo las órdenes del ministerio del Interior, hasta que, tras su reorganización, en marzo de 1954 volvió a ser autónomo bajo Ivan Alexandrovich Serov,

como ministerio para la Seguridad del Estado (MGM, *Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopasnosti*), sin llegar a alcanzar realmente la posición extraordinaria que tuvo antes.

En la acción contra Beria, las fuerzas armadas, que se habían puesto decididamente de parte de los hombres del «nuevo curso», se mostraron dispuestas a enfrentarse a las fuerzas de seguridad en caso necesidad. El nuevo gobierno había reforzado su lealtad mediante una serie de medidas. El popular mariscal Georgi Constantinovich Shukov, relegado por Stalin a un puesto de tercera categoría fue nombrado viceministro por el nuevo ministro de Defensa Bulganin, cosa que las fuerzas armadas en general celebraron y consideraron como un cierto desagravio. Sus exigencias —tales como el aumento de sueldo a los oficiales— fueron aprobadas, el sistema armamentista no se vio afectado por el cambio de política económico, y el gobierno veló por la seguridad de la esfera militar de la Unión Soviética: los lazos con los Estados satélites no se aflojaron, el «nuevo curso» quedó limitado a los asuntos internos. Bajo la dirección de Shukov —que desde 1955 ocuparía el cargo de ministro de Defensa— los jefes y oficiales pudieron concentrarse plenamente en su tarea: el fortalecimiento de las fuerzas de combate; «las exigencias político-militares tuvieron prioridad absoluta en todo orden de cosas» [5], incluyendo el adoctrinamiento político, después que A. S. Sheltov fuera nombrado director de la Administración Política Central de las Fuerzas Armadas.

El final del año 1953, cuyo comienzo había hallado al país todavía temeroso de nuevas y más amplias «depuraciones» por parte del dictador, contemplaba a una Unión Soviética consolidada internamente y menos acosada en política exterior bajo los nuevos dirigentes. Gracias a los nuevos objetivos e iniciativas políticas se había podido evitar una crisis más profunda.

b. *El «nuevo curso» en las democracias populares*

El «nuevo curso» de los dirigentes moscovitas, con su primacía de la política interior, tenía como condición previa que la posición imperial de la Unión Soviética permaneciera inalterada y que su dominio se mantuviera en los países europeos del Este. Ni los comunistas ortodoxos del círculo del principal ideólogo del PCUS, Suslov, ni el ministro de Asuntos Exteriores Molotov, ni las fuerzas armadas habrían tolerado recortes en este ámbito, porque ello habría afectado profundamente la idea que de sí mismo tenía el Partido y habría desconcertado también a la pobla-

ción. Ante la situación de las democracias populares, cuyos regímenes debían su estabilidad —todavía relativa— en gran parte a la masiva ayuda soviética, la esfera de influencia de la Unión Soviética sólo se podía asegurar por medio de los instrumentos de poder ya utilizados por Stalin. Los cuadros comunistas nacionales establecidos por Stalin continuaban siendo los mejores garantes del dominio soviético y como es lógico tenían en los «ortodoxos» del Kremlin a sus portavoces. Sin esto, las relaciones entre los hombres del «nuevo curso» y los dirigentes de los PC de las democracias populares no habrían sido fáciles. Algunos de estos dirigentes habían prestado grandes servicios al movimiento comunista internacional, habían trabajado en puestos de gran responsabilidad junto a Stalin y a su servicio cuando los actuales dirigentes de la Unión Soviética estaban todavía al comienzo de su carrera. Por tanto las relaciones entre ambos grupos no estaban exentas de tensiones y crispaciones que las repercusiones económicas del «nuevo curso» aumentaban aún más: las inversiones adicionales en la industria de bienes de consumo y en la agricultura de la URSS, junto a las demás cargas financieras de las reformas, obligaban a reducir los créditos soviéticos a las democracias populares, con lo que ésta quedaban abandonadas a sus propias fuerzas en un momento en el que habían puesto en marcha proyectos económicos muy ambiciosos.

En la RDA la política soviética de restricción de créditos condujo de hecho al colapso del gobierno Ulbricht. Este Estado alemán corría especial peligro, no sólo por las peculiaridades de la situación alemana sino también porque sobre él pesaban prestaciones múltiples a la Unión Soviética además del pago de reparaciones. Después de que las consecuencias negativas de la ambiciosa política de industrialización y colectivización —también visibles en su competencia con las demás democracias populares— alcanzaran entre 1950 y prncipios de 1953 unas proporciones alarmantes, los dirigentes del SED solicitaron ayuda a Moscú en abril. Debido a la necesidad del consumo personal soviética, la respuesta no contenía una promesa de ayuda, sino simplemente un consejo: «...El SED [tenía que] modificar su política. La socialización, el 'duro curso', tenían que cesar»[6]. Pero Ulbricht no podía prestarse a ello. El 28 de mayo de 1953 se decretó un aumento del 10% en las normas de trabajo para superar las dificultades incrementando la producción. Al intensificarse peligrosamente la oposición de los trabajadores, Moscú exhortó de nuevo a la moderación el 3 de junio; dos días más tarde apareció como nuevo alto comisario de la URSS en Berlín Semjonov, a instancias del cual los dirigentes del SED dispusieron un cambio de rumbo

y ejercieron públicamente la «autocrítica». Pero como el aumento de las normas de trabajo no se había revocado aún, el 16 de junio se produjo en Berlín Oeste una huelga que se extendió con gran rapidez y al día siguiente se había convertido en un levantamiento contra el régimen que se propagó por todo el territorio. Sólo la intervención de tropas soviéticas pudo salvar a Ulbricht y al SED.

Esta advertencia asustó a los dirigentes de Moscú. Cuando las explicaciones oficiales del SED, ofrecidas ante el XIV Pleno del CC del SED, convocado urgentemente, pretendieron hacer aparecer el levantamiento como una «provocación fascistas» [7], sólo lograron que los autores de ellas quedaran en ridículo, pues las causas no podían ser falseadas. Si el SED quería continuar manteniéndose en el poder había de superar las difíciles condiciones del Partido y del Estado y la profunda exasperación de la población. Asimismo era inevitable que hubiera consecuencias personales incluso para los dirigentes del SED donde, en torno al ministro para la Seguridad del Estado Wilhelm Zaisser y a Rudolf Herrnstadt, se había formado un grupo que se oponía al estalinismo ortodoxo de Ulbricht. Para éste fue una feliz coincidencia que justamente en esos momentos Malenkov y Jruschov se esforzasen por derrocar a Beria, que era el verdadero jefe de Zaisser. Así que, paradójicamente, no cayó Ulbricht, cuya intransigencia —contra las consignas expresas de Moscú— había provocado el estallido de la cólera popular, sino Zaisser, a quien se atribuyó el fracaso y una postura «claudicante», acusación esta que bien se podía aplicar a Beria. Tras la caída, la RDA logró un respiro financiero con la supresión de la obligación de pagar reparaciones (22 de junio de 1953) y la reducción de los gastos de ocupación; un mes más tarde, Moscú concedía dos créditos considerables, por una suma total de 1 075 millones de rublos, que resultaron una «ayuda inestimable» [8] para la economía de la RDA. En parte estaban destinados explícitamente a ser invertidos en la industria de bienes de consumo. En el XV Pleno del CC del SED, que se reunió dos días después del arreglo del asunto de las reparaciones y se prolongó hasta el 26 de julio, se impuso en la RDA el «nuevo curso» de los dirigentes de Moscú. El crédito soviético salvó al régimen del SED. Era a la vez una señal inequívoca de que Moscú no estaba dispuesto a renunciar a la RDA, lo cual constituía un apoyo moral para el maltrecho SED. Con ello las relaciones entre ambos Estados entraron en un nuevo período.

Las causas del levantamiento de junio de 1953 no se circunscribían únicamene a la RDA. A principios de 1953 llegaron a Moscú noticias igualmente alarmantes sobre la situación económica

y social de Hungría: Matyas Rakosi, secretario general y primer ministro, fue llamado a Moscú en mayo para informar pero, al igual que Ulbricht, desdeñó las proposiciones de un cambio de rumbo. Sin embargo, después del 17 de junio los dirigentes del Kremlin fueron enérgicos. Rakosi fue obligado a rehabilitar a Imre Nagy, que el 4 de julio de 1953 pasó a ocupar el cargo de primer ministro e inmediatamente inició una amplia reforma de la política económica que, no obstante, tropezó con la oposición del aparato estalinista del Partido. Hasta su caída, Nagy libró una dura lucha contra Rakosi en favor de una mejora de las condiciones de vida, encontrando sobre todo el apoyo de Malenkov. Con ello quedaba condenado al fracaso, pues después de la liquidación de Beria, la lucha por el poder en el Kremlin se agravó con el conflicto entre Malenkov y Jruschov. Con la caída de su mentor, el destino político de Nagy estaba sellado. La asociación entre rivalidades personales y decisiones políticas —en este caso la de Jruschov a favor de Rakosi—, que pasaban por alta las exigencias de la realidad, acabó conduciendo a Hungría a la catástrofe.

Sin embargo Nagy, por desconocimiento de la posición inalienable de la Unión Soviética, provocó su propia perdición, pues aspiraba a lograr «para Hungría ya en 1954 una postura prácticamente neutral entre los dos bloques de poder, para poder cumplir convenientemente la tarea de construir el comunismo»[9]. Pero con ello cuestionaba la hegemonía soviética y violaba un tabú, ya que la soberanía de las democracias populares, sobre la que se apoyaba su pretensión, siguió estando restringida por los intereses de la Unión Soviética tras la muerte de Stalin.

Pocos días después de la muerte de Stalin, el 14 de marzo de 1953, moría Klement Gottwald en Checoslovaquia, donde se estableció, siguiendo el modelo soviético, una «dirección colectiva» con Antonin Zapotocky como presidente, Viliam Siroky como primer ministro y Antonin Novotny como primer secretario del Comité Central. La situación económica del país no era tan mala como en la RDA y Hungría, puesto que Checoslovaquia había salido bastante indemne de la guerra y su industria había alcanzado un alto grado de desarrollo antes de la segunda guerra mundial, gracias a una preparación técnica adecuada y a una mano de obra cualificada. Pero a partir de 1948, precisamente a causa de esta capacidad industrial, tuvo que producir intensamente para cubrir las necesidades soviéticas a unos precios impuestos. Además de esto, la industrialización forzada por el estalinismo había ido también aquí en detrimento de la producción de bienes de consumo y la colectivización de la agricultura, unida a la emigración de trabajadores del campo hacia el sector

industrial, había provocado un hundimiento tan grande de la producción agrícola que el país dependía de la importación de productos alimenticios de la URSS. El exceso de capacidad adquisitiva, motivado por la falta de bienes de consumo, condujo a un desarrollo inflacionista. Para detenerlo, el gobierno anunció el 30 de mayo de 1955 una reforma monetaria radical. A excepción de las cuentas de ahorro y de una suma básica, la corona se devaluó en una proporción de 50 a 1 y las rentas y los salarios se redujeron a una quita parte. Cuando un mes más tarde se hicieron públicos los nuevos aumentos en las normas de producción, se produjeron acciones de protesta en Pilsen y en otros centros industriales (reprimidas rápidamente y sin gran esfuerzo) que decidieron un cambio de rumbo. Se suspendió el aumento en las normas de producción; el descenso de los precios y el aumento de la producción de bienes de consumo tuvieron un efecto tan tranquilizador como el cese de la colectivización forzada y la reorganización del Partido y del aparato del Estado.

De momento en Polonia no cambió nada en las altas esferas. Bierut seguía uniendo al cargo de primer ministro el de jefe del Partido. Puesto que su poder seguía siendo indiscutido y no estaba expuesto a crisis como las de la RDA o Checoslovaquia, los dirigentes del Kremlin no presionaron para que se produjera un cambio y hasta el 28-30 de octubre de 1953 no resolvió el CC del POUP la implantación del «nuevo curso». En marzo de 1954 tuvo lugar la división de poderes siguiendo el modelo soviético; Bierut permaneció como dirigente del Partido —desde entonces «primer secretario»— y Cyrankievicz fue nombrado primer ministro. A esta disminución de poder contribuyó el llamado caso Sviatlo (la huida de un teniente coronel del Servicio de Seguridad polaco en diciembre de 1953), cuyas revelaciones causaron mayor sensación en Occidente que la ya enorme atención suscitada por las prácticas del Servicio Secreto comunista, conocidas a raíz de la ejecución de Beria (13 de diciembre de 1953). Como consecuencia de este asunto, el Servicio de Seguridad perdió también en Polonia su posición privilegiada. Los errores del sistema —la proclamación del «nuevo curso» estuvo asociada como de costumbre a la crítica de las equivocaciones precedentes, pues el cambio político-económico necesitaba una fundamentación— fortalecieron a aquellos grupos polacos que apoyaban una liberalización más amplia de la vida pública, es decir, al «tercer estado», los intelectuales que «seguían viviendo en gran parte del recuerdo de normas privadas anteriores». El gobierno tenía que contar con su colaboración para la realización de sus objetivos políticos y así esta capa social se convirtió en un factor político cuya

postura llevó «a aquella peculiar alternancia de concesiones a medias y exigencias de amplio alcance que caracterizó las relaciones entre el Estado y la nación hasta el 'Octubre polaco'» [10].

En Albania, Hoxha entendió la defensa de su posición del mismo modo que Bierut en Polonia. Cuando al fin, el 20 de julio de 1954, renunció a su cargo de primer ministro, había tomado las medidas necesarias para que su poder no sufriera ningún detrimento con su sucesor; había traspasado los asuntos de gobierno a Mehmed Shehu, un hombre fiel que siguió siéndole leal en conflictos posteriores. Menos hábil fue la elección de Jervenkov, que permaneció como jefe de gobierno en Bulgaria y en febrero de 1954 dejó el puesto de primer secretario del Partido a su protegido Todor Jivkov. Este fue ganando cada vez mayor influencia y en 1956 logró desbancar a su antiguo protector. En agosto de 1953, en Rumania, Gheorghiu-Dej se hallaba en una situación apurada al haber sido fuertemente atacado por la oposición, favorecida por los dirigentes del Kremlin, a causa de su insistencia en las prácticas estalinistas. La notoria relación con Moscú de sus oponentes debió de ser lo que salvó al «nacionalcomunista» Dej cuando en abril de 1954 siguió el ejemplo de Jervenkov. Había encontrado un lugarteniente dentro del Partido más fiable que el búlgaro, no resultándole difícil permutar en diciembre de 1955 el puesto de primer ministro por el de primer secretario del Partido cuando se hicieron públicos los cambios en la situación del Kremlin.

Así, en el tanscurso de algo más de un año, en las democracias populares se operaron unos cambios que se acomodaban la «modelo soviético». Se disolvió la unión personal entre la dirección del Partido y la del Estado. El Partido debía limitarse a determinar las directrices y las prioridades políticas, función que aun siendo de vigilancia era en definitiva de control, y el Ejecutivo podía desarrollar una mayor independencia y una mayor responsabilidad y por ello iniciativas más importantes. En la época de Stalin la identificación entre Partido y aparato de Estado había hecho que todos los errores y deficiencias del ejecutivo aparecieran como errores también del Partido; la intención de esta separación era aligerar la carga del Partido. Así, éste debía situarse en condiciones de que, dado el caso, se pudiera presentar como defensor del pueblo frente a las decisiones erróneas del Ejecutivo, de modo que paulatinamente se vencieran las actitudes de desconfianza y se restableciera el consenso entre el Partido como «fuerza dirigente» y la población. Ciertamente la nueva autonomía libraba al Ejecutivo del peligro de las fricciones con el Partido; la realidad política podía inducir a solu-

ciones de los problemas contrarias a las intenciones del Partido. Este proceso de separación de poderes tuvo lugar en las diversas democracias populares de forma diferente no sólo en cuanto al tiempo sino también en cuanto a la función. Mientras que en las tres democracias populares balcánicas, Rumania, Albania y Bulgaria (pasando por alto el intento de Jervenkov), la estructura de poder cambió de hecho tan poco como en la RDA, en la que Ulbricht pudo mantener su régimen, en Polonia y Hungría —a pesar del fracaso de Nagy— se operó un cambio silencioso. Las tradicionales élites intelectuales y técnicas de estos países, conscientes de su propio valor, evolucionaron en su patriotismo hacia una verdadera oposición, de modo que el estalinismo disimulado del aparato del Partido no continuó incontrovertido como en las democracias populares ya mencionadas. En Checoslovaquia no se dio esta merma del poder del Partido, pues aquí precisamente los intelectuales se sentían muy unidos a la Unión Soviética, hacia la cual se orientaban.

Por los motivos mencionados, los dirigentes del Kremlin instaron una y otra vez a la reorganización según el modelo soviético y lograron formalmente la disolución de la unión en una persona de las jefaturas del Partido y del gobierno, pero con ello no se alcanzó la pretendida meta de la modernización. Por una parte, quienes habían gobernado hasta entonces ofrecían la máxima seguridad para la continuación de la hegemonía soviética, eran personas probadas y experimentadas, y por lo tanto había que concederles poder discrecional. Desde la perspectiva de Moscú este poder tal vez fue mayor de lo pretendido, puesto que los dirigentes nacionales de los distintos PC supieron aprovechar las disputas internas del Kremlin. Pero, por otra parte, los lazos entre Partido y ejecutivo no eran en modo alguno fáciles de romper y el intento de hacerlo podía incluso llevar a profundas crisis, pues el dominio comunista no estaba aquí tan consolidado en el tiempo como en la Unión Soviética. Así pues, el Kremlin tuvo que conformarse con ciertas modalidades nacionales de dominio comunista en las democracias populares, aunque procuró al mismo tiempo crear nuevos instrumentos que aseguraran su dominio frente a emancipaciones parciales.

c. *El Pacto de Varsovia*

También por motivos de política exterior era necesario un cambio preventivo en los instrumentos de dominio soviéticos en el área de influencia de Europa oriental. Malenkov, en su discurso

del 8 de agosto de 1953, que despertó gran expectación y marcó el comienzo de la «política de distensión» soviética, había proclamado la fórmula de la «coexistencia pacífica» entre los Estados socialistas y capitalistas, principio del «nuevo curso» en política exterior. Esta estrategia para prevenir un conflicto armado entre las dos potencias mundiales exigía vínculos contractuales fundamentales entre los países del Comecon. La práctica del dominio estalinista y sus instrumentos estaban desacreditados, eran un obstáculo para la distensión y tenían por ello que ser cuidadosamente desmontados a fecha fija, pues no había que excluir el peligro de desarrollos «nacionales» en las democracias populares. Ya en el tratado con la República Popular China de octubre de 1954, la delegación soviética tuvo que aceptar la exigencia china de que las relaciones entre Estados comunistas se basaran en los principios de igualdad de derechos y soberanía y de que los intentos de recuperar a Tito, «desviado nacionalista», llevaran a una sanción de las «vías nacionales al socialismo».

Justamente en el caso de Yugoslavia se había puesto de manifiesto que la ideología y el interés en conservar el poder, por sí solos, no poseían suficiente capacidad de consolidación. Sin duda las democracias populares estaban ligadas a la Unión Soviética a través del poderoso medio de la dependencia económica; sus economías no podían librarse de esta ligazón a corto plazo. La unilateralidad estructural de la industrialización y el bajo nivel tecnológico de los productos frente a la competencia internacional los colocaba en una situación casi sin salida y les cerraba en gran parte las puertas del mercado mundial, en el que únicamente lograban compradores a base de un *dumping* económicamente ruinoso. El mercado interior del Comecon, por el contrario, con su enorme demanda, aislado de la competencia internacional, absorbía mucho más fácilmente los artículos de consumo. El mayor desarrollo de este mercado, logrado mediante la activación del Consejo de Ayuda Económica Mutua que al poco tiempo de su creación se convirtió en algo inoperante —evolución que Malenkov en su discurso de abril de 1954 ante el Soviet Supremo de la URSS ya había dejado entrever—, no sólo ofrecía la ventaja de un comercio más intenso entre los países del Comecon, con un mayor aprovechamiento de las fuentes económicas nacionales, sino que a la vez aumentaba las interdependencias económicas dentro del bloque y con ello la dependencia de las economías nacionales individuales, percibiéndose en ello la posición dominante de la Unión Soviética. Su superior fuerza económica y sobre todo sus reservas de materias primas garantizaban a los dirigentes del Kremlin la última palabra. La des-

aparición de las «sociedades mixtas», con la que comenzó 1954, era una concesión aparente a la soberanía de las democracias populares; la participación soviética tuvo que ser reemplazada la mayoría de las veces por obligaciones a largo plazo, que beneficiaban al mercado de capital soviético.

También en las relaciones políticas y culturales se pusieron en práctica nuevas modalidades, acordes con el espíritu de la «igualdad de derechos» entre los Estados comunistas. Se formalizaron las funciones de control y mando en el marco de los tratados de cooperación y amistad vigentes y las consultas oficiales entre partidos comunistas y gobiernos —con el obligado ritual tanto de la afirmación de la comunidad de intereses como de la profesión de fe comunista y la advertencia del peligro a que estaba expuesta la unidad ideológica— ocuparon el lugar de la solapada influencia de la época de Stalin. El intercambio cultural y científico que Stalin había suspendido fue paulatinamente impulsado; las autoridades estatales intermediarias actuaron como órganos de control contra la transmisión de ideas contrarias a sus deseos y con ello se creó una amplia red de contactos, posibilidades de información e influencias (para quienes viajan al extranjero es obligatoria una información detallada de las causas). También las asociaciones pro amistad con la Unión Soviética se hermanaron con organizaciones soviéticas análogas.

Con todo, estas medidas podían tener, en el mejor de los casos, un carácter auxiliar, pero no bastaban para garantizar la hegemonía soviética. El proceso iniciado, que debía convertir paulatinamente a los países satélites (según el estalinismo) en países hermanos —aunque menores— y librarlos de su condición de simples receptores de órdenes, exigía garantías que excluyeran positivamente un peligro para la hegemonía soviética similar al que supuso la pérdida de Yugoslavia. Estas garantías sólo podían darse en el terreno militar. Ya en los últimos años de Stalin se dieron los primeros pasos hacia una mejor coordinación de los ejércitos nacionales y sus planes defensivos. Los nuevos dirigentes no los continuaron de momento para no poner en peligro su política de distensión. En 1954, cuando la discusión sobre el ingreso de la República Federal de Alemania en la Comunidad Europea de Defensa estaba al rojo vivo, Moscú, a la vista de la oposición sobre todo de Francia, intentó convocar una conferencia de seguridad europea, pero fue en vano. La conferencia para la seguridad colectiva de Europa, apoyada por iniciativas polacas y checoslovacas, celebrada a finales de noviembre y principios de diciembre en Moscú, sólo contó con la participación de representantes de gobiernos comunistas. En su comuni-

cado final, la conferencia advertía contra el rearme de la República Federal y anunciaba que si se llevaba a cabo se tomarían medidas para intensificar su propio armamento. Al ratificarse el 5 de mayo de 1955 los acuerdos de París por los que la República Federal lograba su ingreso en la OTAN, Moscú dio pruebas de hallarse bien preparado: el 14 de mayo los jefes de gobierno de los países del Comecon firmaron en Varsovia el «Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua», llamado «Pacto de Varsovia». La RDA, que tomó parte como observador, pasó a ser miembro de pleno derecho en la primavera de 1956 tras el cambio de nombre de la Policía Popular Acuartelada, que pasó a llamarse *Nationale Volksarmee* (Ejército Popular Nacional), NVA.

Este tratado multilateral complicaba los acuerdos de asistencia bilaterales hasta entonces vigentes; también aligeraba algo, por lo menos teóricamente, la carga de la Unión Soviética, pues en caso de agresión a un país miembro estaban obligados a prestarle ayuda todos los Estados asociados. Con este pacto la Unión Soviética consiguió establecer unos lazos fuertes y duraderos con los países del Comecon. El texto del Pacto no sólo prohibía toda adhesión a otras alianzas, sino que además no contenía ninguna disposición sobre la posible retirada de un Estado signatario. En aplicación del Pacto se constituyó en 1956 un Comité Consultivo Político con una serie de organismos subordinados, pero no pudo desempeñar el papel que se le había asignado de entidad independiente con capacidad decisoria, ya que había grandes reservas en los diferentes países frente a la idea de someterse a la decisión de la mayoría. En el ámbito militar se creó un Alto Mando conjunto en Moscú, cuyo mando supremo se hallaba en manos soviéticas y los puestos de mando de él dependientes estaban ocupados por representantes del ejército soviético. Junto a las maniobras llevadas a cabo regularmente, en las que se ejercitaba la cooperación de las unidades nacionales, se crearon en las democracias populares Estados Mayores propios que funcionaban como órganos de coordinación y control del Alto Mando, formados exclusivamente por militares soviéticos. Sus miembros obtuvieron incluso en 1962 el *status* diplomático [11]. Con ello el control de los ejércitos de las democracias populares estaban en manos soviéticas y los Altos Mandos nacionales estaban formalmente vinculados a las órdenes recibidas. El propio Pacto ofrecía además la posibilidad de intervenir militarmente, llegado el caso, ante una evolución no deseada. Institucionalizó por tanto en los países del Este el dominio soviético, lo que se evidenció en la persistencia del estacionamiento

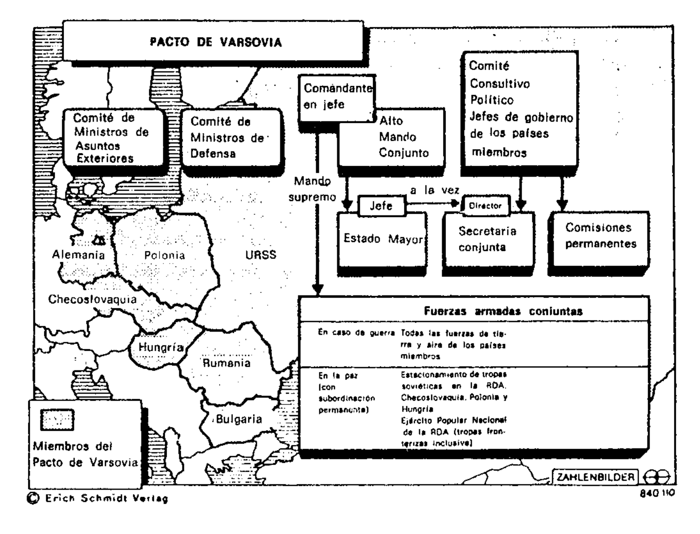


FIG. 6.—*Miembros y organización del Pacto de Varsovia en Europa.*

Si los dirigentes de las democracias populares consintieron en la limitación de la soberanía de sus países no fue solamente por la presión de Moscú. El rearme de la República Federal fue interpretado en general como un gesto de amenaza dirigido contra los países del Comecon y como la confirmación de las supuestas tendencias siempre agresivas de la OTAN, que adquiría así un nuevo carácter en el contexto del *roll-back* americano. Al igual que en la RDA, que se sentía especialmente amenazada a causa de la exigencia de reunificación, también en Polonia y Checoslovaquia, en las que todavía se hallaba en plena virulencia (y se alimentaba) el recuerdo de la política de violencia de la Alemania nacionalsocialista, creció el temor a un «revanchismo» alemán en Polonia, existía una preocupación por los llamados «territorios occidentales recuperados» que se veían amenazados porque el gobierno de Bonn se aferraba a las posiciones jurídicas recogidas en el comunicado de Potsdam. En Praga estaban preocupados por las pretensiones de los sudetes alemanes expulsados, cuyas organizaciones no carecían de influencia sobre la política de Bonn. Tanto en Varsovia como en Praga los gobiernos estaban seguros de encontrar amplio apoyo, incluso entre la población no comunista, a su rechazo de las pretensiones de Bonn, y de

obtener el beneplácito patriótico a las medidas defensivas que hubieran de tomarse. Por lo demás, la limitación de la soberanía por el Pacto de Varsovia constituía la garantía más firme para su conservación del poder, garantía por la que merecía la pena hacer una concesión formal a la política practicada desde hacía tiempo por Moscú. La ambigüedad de la postura de los gobiernos nacionales puede verse en el caso de Rumania. A pesar de que Gheorghieu-Dej en 1953-54 se había resistido a las influencias soviéticas, en 1955 pidió que establecieran más tropas en su país, cuando ya no existía una base jurídica legal para su presencia debido al tratado concertado con Austria.

d. *El ascenso de Jruschov*

La legitimación de la hegemonía soviética sobre los países del Comecon, con el abandono del estalinismo y sus prácticas de dominio, convenía fundamentalmente a los intentos de los dirigentes de Moscú de lograr para la URSS aquella confianza internacional cuya condición previa era el cese de una política exterior orientada ante todo hacia la afirmación y el afianzamiento del propio imperio, tal como se había llevado a cabo hasta 1952. Con el establecimiento de regímenes comunistas en el Extremo Oriente había que encontrar forzosamente estructuras nuevas —siempre que se asegurase el ámbito del Comecon— para el movimiento comunista mundial, pues la integración de China y Corea del Norte, al igual que la de Vietnam del Norte, al sistema estalinista sobrepasaba con mucho las posibilidades políticas y económicas de la Unión Soviética. Aquí jugaba un papel clave la actitud hacia el comunismo nacional de Yugoslavia. Una reconciliación con Tito podía servir como prueba del sincero abandono del pasado por parte de los dirigentes soviéticos y de su buena disposición a un trabajo conjunto en igualdad de derechos con otros Estados socialistas y para hacer más creíble la política de la «coexistencia pacífica».

El entendimiento con Yugoslavia tenía una importancia adicional, ya que Tito estaba desde 1954, juntamente con Nehru y Nasser, al frente del «movimiento de países no alineados», que intentaba unir a los países del Tercer Mundo sin tener en cuenta su respectivo orden social. El fortalecimiento de los dos bloques —socialista y capitalista— sólo permitía adquirir influencia en esta zona «neutral», por la que desde 1954 se interesaba con intensidad creciente la política de Moscú. Ganándose a Tito, las perspectivas de éxito y las posibilidades de influencia soviéticas aumentarían considerablemente.

El motor para una normalización de las relaciones con Yugoslavia fue Jruschov. En contra de la oposición de los ortodoxos, aceptó las ofertas ciertamente vagas que Tito, esforzado en aliviar la continua presión de los países del Comecon sobre su régimen, hizo en mayo de 1953 a los nuevos dirigentes del Kremlin. A pesar de que el 17 de junio se intercambiaron embajadores, pasó más de un año hasta que la aproximación revistió una forma solemne. No sólo entre los dirigentes soviéticos existía oposición; también los dirigentes de las democracias populares y de China tenían sus reservas. Si en el caso de los comunistas chinos eran sobre todo cuestiones ideológicas básicas las responsables de su actitud de rechazo, ésta estaba ocasionada en las democracias populares por consideraciones políticas internas. En las depuraciones de los partidos comunistas a partir de 1949, la acusación de «titoísmo» había sido la más importante para suprimir a los adversarios, desatándose la propaganda en ultrajes e injurias a Tito y sus colaboradores.

Dos acontecimientos trajeron por fin la solución: el triunfal viaje a Asia de Tito (del 17 de diciembre de 1954 al 11 de febrero de 1955), que fue una prueba de su prestigio en el Tercer Mundo, y el rearme de la República Federal de Alemania, que produjo en Yugoslavia un profundo resentimiento hacia los Estados Unidos e impulsó el acercamiento a la Unión Soviética. Pero en Moscú fue la causa de la caída de Malenkov. El 8 de febrero de 1955 presentó él mismo su renuncia ante el Soviet Supremo, aduciendo como motivos, además de las dificultades habituales en la agricultura, el crecimiento insuficiente de la industria de bienes de equipo. El aumento de la producción de bienes de consumo, derivado del «nuevo curso», iba inevitablemente unido a la disminución de las tasas de crecimiento de aquel sector; la disminución era pues la consecuencia calculada de una política económica propiciada no sólo por Malenkov. Tampoco los pobres resultados de la agrictulra, que ya en el pasado habían llevado a buscar soluciones siempre nuevas, constituían razones suficientes. La pérdida del poder de Malenkov estuvo estrechametne ligada a la crisis de la política de distensión de finales de 1954 y principios de 1955, y es difícil discernir en los aspectos concretos hasta qué punto fue su pretexto o su motivo. Si en Moscú se interpretaba la inclusión de la República Federal en la alianza defensiva occidental como una negativa a la distensión, no sólo había fracasado esta política, sino que la relativa disminución de la producción de bienes de equipo, basada en un aminoramiento de la tensión, resultaba un error político. Sin embargo, ello no cobró toda su importancia hasta

que Jruschov, a finales del otoño de 1954, bajo el efecto de su entrevista con Mao Zedong, abandonó la política económica del «nuevo curso» y exigió un regreso a un desarrollo preferente de la producción de bienes industriales. Esto se armonizaba con los intereses chinos, que pretendían la mayor ayuda posible de suministros soviéticos para su propia industrialización. Con esta exigencia, Jruschov se situaba en el lado del grupo ortodoxo de los dirigentes del Kremlin y con ella respondía también a los deseos de los militares, cuya palabra tenía en esta crisis un peso específico. Para él, a quien profundas diferencias de opinión en una serie de cuestiones, tales como las relaciones con Yugoslavia, separaban del grupo de Molotov, la alianza con los mandos de las fuerzas armadas era de enorme valor. Esta alianza se consolidó con el nombramiento de Bulganin como sucesor de Malenkov y el de Shukov como nuevo ministro de Defensa. En esta nueva cumbre de la dirección, Jruschov era la figura dominante. Lo primero que hizo fue reconciliarse con Tito, pues en su opinión la «expulsión» de Yugoslavia había sido un grave error de Stalin [12]. Pocos días después de la firma del Tratado Nacional Austríaco viajó con Bulganin a Belgrado, tras intensos preparativos diplomáticos. Las conversaciones con los dirigentes yugoslavos, a pesar de las diferencias existentes y algunas sorpresas —como cuando Jruschov echó toda la culpa de la ruptura únicamente a Beria— produjeron una reconciliación parcial. La declaración a la que se llegó el 2 de junio dejaba de lado las cuestiones ideológicas conflictivas; los cargos formulados en la resolución del Kominform de Bucarest del 18 de junio de 1948 permanecieron en pie. Basándose en los principios no injerencia, se llegó al acuerdo de normalizar y reforzar las relaciones mutuas de soberanía e igualdad de derechos de ambos Estados. A esto siguieron pactos políticos, culturales y de cooperación económica. Con ello sólo quedaba pendiente la cuestión alemana en la frontera occidental de la zona de influencia soviética. La conferencia de Ginebra del 18 al 23 de julio de 1955, en la que junto a Jruschov, Bulganin y el ministro del Exterior Molotov, también Shukov representaba a la Unión Soviética, no llegó a acuerdo alguno. El modelo austríaco no era susceptible de ser aplicado a las relaciones alemanas. Además quedó claro que también los Estados Unidos estaban interesados en la prosecución de la política de distensión, en la que la parte soviética —teniendo en cuenta los problemas económicos, para cuya solución se precisaba tiempo— se esforzaba sinceramente.

Para lograr una solución a la cuestión alemana, la Unión Soviética, como ya Molotov había puesto de manifiesto en la con-

ferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Berlín del 25 de enero al 18 de febrero de 1954, intentaba conseguir arreglos por separado con los dos Estados sucesores del Reich alemán. Ya el 7 de junio de 1955 se cursó al gobierno federal una invitación para mantener conversaciones en Moscú que «debían contribuir a solucionar los problemas nacionales conjuntos —la restauración de la unidad del Estado democrático alemán— del pueblo alemán» [13]. Pero ya en los preliminares se hizo patente —como también en Ginebra— que la reunificación no iba a ser objeto de seria discusión. La delegación alemana que llegó a Moscú a principios de septiembre de 1955, sin perjuicio de ser tratada con todos los honores, tropezó con posturas irreductibles, de modo que la reanudación de las relaciones diplomáticas y la liberación de los prisioneros de guerra «condenados» fueron los únicos frutos logrados en esta difícil misión. Tres días después del cierre de las negociaciones (14 de septiembre) llegó a Moscú una delegación de la RDA. Con ella se estableció el 20 de septiembre de 1955 el pacto por el que la RDA obtenía plena soberanía, aunque con las limitaciones derivadas para ambas partes de los tratados internacionales que atañeran a Alemania. Así pues, la cuestión alemana sólo podía solucionarse en adelante con la participación de la RDA, como ya Jruschov había explicado en su discurso del 26 de julio de 1955 en Berlín Este: «No se puede solventar la cuestión alemana a costa de los intereses de la República Democrática Alemana» [14]. El bastión occidental de la Unión Soviética, cuya estabilidad era de suma importancia sobre todo para Polonia, no sólo fue en lo sucesivo reforzado económicamente mediante créditos, sino que los dirigentes soviéticos se esforzaron en lograr su reconocimiento internacional.

Mientras tanto Moscú continuaba de modo intensivo con su política de distensión de alcance mundial, en la cual los esfuerzos para ganarse al Tercer Mundo ocupaban el primer puesto. Los viajes de Jruschov y Bulganin a la India, para devolver la visita de Nehru a Moscú de junio de 1955, y a Birmania (noviembre-diciembre de 1955) trataron de atraerse a los dirigentes de la conferencia de Bandung. Siguió una visita a Gran Bretaña en abril de 1956. Estos viajes al extranjero se completaron con numerosas visitas oficiales a Moscú e intensas gestiones diplomáticas; el aislamiento en el que se había sumido la Unión Soviética en los últimos años de Stalin estaba superado. El hecho de que esta política era atribuible al compromiso de Jruschov se puso de manifiesto en su cooperación con la «diplomacia viajera». Como primer secretario del PCUS, en modo alguno era tarea suya llevar a cabo negociaciones diplomáticas y menos aún en el ex-

tranjero como representante oficial de su país; los países anfitriones de las visitas oficiales que Bulganin y él emprendieron conjuntamente se vieron ante un difícil problema de protocolo. Es cierto que en los actos oficiales Bulganin actuaba como primer representante de la URSS, pero había que tener muy en cuenta la posición de Jruschov, lo cual era un cometido difícil, dada su susceptibilidad. Con su despreocupación característica, no tenía en cuenta los escrúpulos existentes en el aparato soviético de política exterior en cuanto a la correcta observancia de las formas. El aumento del prestigio alcanzado también con ello entre los propios soviéticos fortaleció además su posición dentro del Partido.

II. JRUSCHOV Y LA DESESTALINIZACION

a. *El XX Congreso del PCUS*

En el espacio de tres años, la política de los nuevos dirigentes había variado fundamentalmente la situación interna y externa de la Unión Soviética. Se habían dado los primeros pasos para elevar el nivel de vida de la población y el «deshielo» político-cultural comenzaba lentamente a relajar el agarrotamiento intelectual. Es cierto que seguía existiendo el peligro de «heladas» provocadas por los guardianes de la ortodoxia ideológica a los que la nueva libertad restringida les resultaba sospechosa, pero estaba en contraposición al inmovilismo reglamentario del sistema jerárquico de la época de Stalin, cuya función estabilizadora del poder parecía probada. La flexibilidad de los nuevos dirigentes tenía que tener un efecto irritante sobre los cuadros del aparato del Partido y del Estado. También los dirigentes nacionales de las democracias populares desconfiaban de la nueva política, que cuestionaba su acreditada técnica de gobierno, aunque Moscú les proporcionara un ámbito más amplio para tomar decisiones. Pero a pesar de la oposición y las dificultades que se originaron, Jruschov y sus compañeros de lucha perseveraron en la nueva política.

La clave para comprender estas actividades políticas la suministró el propio Jruschov al declarar que el estalinismo como sistema político y social no correspondía ya al estado de avanzado desarrollo de la Unión Soviética y de las democracias populares, y que estaba superado. De hecho la política soviética de la época postestalinista mostró rasgos de mayor dinamismo y estuvo caracterizada por la búsqueda de nuevas vías y posibili-

dades para la realización de la misión ideológica de llevar al socialismo a una victoria mundial. El período de consolidación del «campo socialista» se remató en gran parte con la institucionalización de la supremacía soviética mediante vínculos contractuales. Paralelamente a ello se había consumado la integración de la esfera de hegemonía americana y puesto que ambos campos se mantenían en sus posiciones, la rigidez de los frentes sólo podía superarse mediante el aumento de influencia en el Tercer Mundo. En consecuencia el Kremlin recurrió a India y Birmania, cuyos dirigentes políticos, sobre todo U Nu, se inclinaban por una vía socialista —independientemente de cuál fuese— para la configuración de sus países, emancipados de la dominación colonial. En este complejo sistema de relaciones internacionales, junto a China le correspondía a Yugoslavia como país comunista ocupar un puesto importante al lado de la Unión Soviética, para lo que había que ganarse a Tito, pero era condición indispensable su reconocimiento como comunista y esto quería decir revocar el anatema de Stalin. Se llegó a ello, aunque con reservas: las diferencias ideológicas sobre la legitimidad de la vía yugoslava subsistieron.

Pero el arreglo con Yugoslavia cuestionaba el estalinismo y al propio Stalin. La nueva política había dejado de lado los principios políticos, declarándolos no acordes ya con los tiempos, pero el caso de Yugoslavia hizo que el debate se centrara en este tema fundamental. Las reservas formuladas por Molotov en el Pleno del PC del 4 al 12 de julio de 1955 con respecto a la firma del Tratado Nacional austríaco y al acuerdo con Tito, provocaron una crítica igualmente severa por parte de Jruschov a la política de Stalin con respecto a Yugoslavia (política que Molotov había compartido), según la cual su arbitrariedad, su conducta explotadora y su violación del Derecho habían puesto en peligro el socialismo de Yugoslavia y perjudicado gravemente también al movimiento socialista internacional. Mikoyan amplió aún más estas acusaciones diciendo que los mismos errores de Stalin podían observarse en el comportamiento frente a las democracias populares. Con ello el conflicto latente entre los estalinistas y los partidarios de Jruschov en la dirección del Partido se convertía en disensión manifiesta en el seno del Partido. Sería un error de graves consecuencias considerar esta polémica como una simple lucha por el poder producida por ambiciones personales, al igual que una diferenciación entre «halcones» y «palomas» únicamente puede explicar algo sobre los medios de realización de un objetivo político común a ambos grupos. La cuestión de la valoración de Stalin y su práctica de gobierno era de máxima

importancia también para la política interna, porque atañía a la propia idea que de sí mismo tenía el Partido. Éste había partido de una exigencia moral —la supresión de la explotación del hombre por el hombre, la consecución de la igualdad social— y se concebía como la consumación del desarrollo iniciado con la Revolución francesa. El hecho de que no se cuestionaran los criterios morales en la lucha contra el «capitalismo» era lógico, pero si eso no se hacía dentro de la comunidad socialista, si los socialistas trabajaban con aquellos medios que reprochaban al capitalismo, desaparecería la justificación de la política e ideología socialistas, que se degradaría convirtiéndose en una mera política de poder y perdiendo su credibilidad. Los últimos años de Stalin, con el distanciamiento entre el Partido y la población, habían puesto de manifiesto cuán grande era la pérdida de confianza que el sistema padecía y esto se había confirmado con los primeros pasos, aún titubeantes, de los intelectuales durante el «deshielo». El deterioro del movimiento comunista internacional también exigía una renovación y un retorno a la verdadera misión de los principios expuestos por Lenin y aprobados por el X Congreso del Partido en relación con la organización y las tareas de éste, cuya validez había ratificado Jruschov en las negociaciones con Tito al insistir en las recriminaciones formuladas contra Yugoslavia en la primera resolución del Kominform.

No es posible decir con exactitud si el grupo de Molotov estaba de acuerdo en la renovación moral del Partido y, en caso afirmativo, determinar hasta qué punto, pero lo que sí es seguro es que estaba a favor de una legitimidad ininterrumpida del Partido y en contra de una condena *a posteriori* de Stalin, que no sólo habría de provocar una grave conmoción en el Partido y en todo el campo socialista sino también en el movimiento comunista internacional. Además la pregunta que se planteaba era hasta qué punto habían participado los entonces dirigentes de la Unión Soviética en la práctica de gobierno estalinista. Un abandono sin más de los excesos estalinistas, uno de los habituales cambios en la «línea del Partido», eludiría el riesgo con todas sus incalculables consecuencias. Pero Jruschov quería ir más allá. El estalinismo había desacreditado no sólo a la Unión Soviética sino también la idea comunista en todo el mundo. Ciertamente dentro de la esfera de influencia soviética se podía soslayar el dominio por el terror de Stalin con el silencio, pero con ello salía perjudicada la política internacional de la Unión Soviética. Una crisis dentro del propio campo podría ser mantenida bajo control, pero una confesión sincera de los errores

del pasado, un rotundo distanciamiento público tendría mucha más credibilidad a nivel mundial.

En este ajuste de cuentas con el estalinismo, Jruschov fue apoyado por Tito, para quien significaba una rehabilitación parcial. Sentimientos y resentimientos personales influyeron también en los participantes; así, Jruschov, que era ucraniano, inció la liquidación de los dirigentes del Partido nombrados por Stalin en Ucrania. Pero todo esto, incluso la cuestión del poder, tuvo en este conflicto una importancia accidental, lo que no excluye que ciertas consideraciones oportunistas influyeran en algunas decisiones.

El conflicto fue dirimido en el XX Congreso del PCUS (del 14 al 25 de febrero de 1956). Mikoyan, que ya se había destacado en el pleno del CC de julio de 1955, sometió a discusión el asunto en su discurso del 15 de febrero refiriéndose a sus anteriores exposiciones. En un principio Jruschov mantuvo una actitud reservada y solamente propuso la redacción de un nuevo manual sobre la historia del Partido que debía sustituir al *Breve tratado* del año 1938 atribuido a Stalin y estar basado en hechos históricos. Pero en su gran «discurso secreto» (llamado así porque el texto no se publicó en la Unión Soviética) al final del Congreso, procedió a una crítica fundamental de Stalin, comenzando por su conducta ante la muerte de Lenin y terminando por las últimas «depuraciones», en una acusación que no pasó por alto casi nada de lo que pudiera reprocharse al dictador muerto; lo único que no se trató fue la persecución de Trotski, Bujarin y los partidarios de ambos. Ante el catálogo de delitos perpetrados contra comunistas convencidos y adictos a la causa, el mito del «gran Stalin» quedó irreparablemente desmontado; el culto que se había elaborado en torno a él y que todavía el 21 de diciembre de 1954, con motivo del aniversario de su nacimiento, pervivía en los artículos conmemorativos de la prensa soviética, se consideró desde ese momento una «degeneración». En la época posterior fueron paulatinamente rehabilitadas las víctimas del estalinismo —con excepción de Trotski—, los grandes y pequeños funcionarios del Partido de forma oficial y los muchos seres anónimos que habían muerto en los campos de la policía secreta de forma encubierta: sus parientes recibieron solamente la escueta noticia (a menudo juntamente con la partida de defunción oficial) de que la sentencia contra el interesado había sido revocada.

El «discurso secreto», destinado a los cuadros medios del Partido y a los dirigentes de los partidos comunistas del extranjero allí presentes, a los que se dio con ello pautas de opinión

y comportamiento, no conmocionó el sistema en la propia Unión Soviética. La ideología comunista y el patriotismo soviético se evidenciaron como verdaderos factores de estabilización en las polémicas que siguieron con los estalinistas. Mientras que en Occidente, a donde se hizo llegar su texto para fomentar la política de distensión, provocó un espectacular efecto como condena *ex officio* de los crímenes ligados al nombre de Stalin, en el «campo socialista» supuso únicamente un punto destacado en un proceso que ya estaba en marcha desde la muerte de Stalin, continuado bajo una forma muy especial por el informe de Jruschov. Este informe marcaba las pautas para el futuro con su exposición del cometido de los partidos comunistas. Partiendo del potencial de seguridad de los países del Comecon, reforzado mediante armas nucleares y una puesta al día del armamento, y de una apreciación más diferenciada de la situación mundial, caracterizada por la existencia de cinco grupos —la URSS, los demás Estados del «campo socialista», los no alineados, los países capitalistas y finalmente los Estados Unidos—, no sólo revisaba la tesis de la inevitabilidad de la guerra entre capitalismo y socialismo, cimentando con ello la «coexistencia pacífica» en la ideología, sino que también rompía con la tesis de la transición evolución de Checoslovaquia y Hungría en los años 1945-1948, exclusivamente revolucionaria al socialismo, citando para ello la que había puesto de manifiesto la posibilidad de una toma de poder parlamentaria por parte de los comunistas. Añadía que en el futuro las formas de transición al socialismo serían múltiples, según la oposición de la «clase explotadora», a la que habrían de ajustarse las acciones de los marxistas revolucionarios y que determinaría la cuestión del empleo de la fuerza. Por tanto, las respectivas realidades nacionales eran determinantes. Estas tesis estaban estrechamente unidas entre sí, como consecuencia del cambio en la situación mundial: la vía de la transformación evolutiva brindaba la posibilidad de llevar a cabo el cometido del Partido —el triunfo del socialismo en todo el mundo— manteniendo la «coexistencia pacífica» sin el riesgo de tener que emplear la fuerza, ni el peligro de las intervenciones militares. La actualización de la ideología justificaba el cambio de la estrategia política.

Con ello se legitimaban al mismo tiempo los procesos nacionales de Yugoslavia y China, y también la vía parlamentaria de los PC francés e italiano, que contaban con muchos miembros y que en el pasado habían sufrido con frecuencia una censura ideológica. Con este complejo espectro de comportamientos políticos surgió un mayor margen de acción y se justificaron los tra-

bajos parlamentarios conjuntos y las coaliciones con los Partidos y grupos socialistas. Aunque no se renunció al uso de la fuerza revolucionaria —en una serie de países capitalistas la caída de los regímenes existentes habría de lograrse necesariamente por la fuerza— parecía más bien un gesto obligado de amenaza.

b. *Crisis del sistema en Polonia y Hungría*

La esperanza de un nuevo «frente popular» en los países occidentales no se cumplió y la intervención soviética en Hungría en el otoño de 1956 la alejó más que nunca. En lugar de ello, la tesis de las diferentes vías nacionales al socialismo producía resultados que ponían seriamente en peligro la hegemonía soviética tanto en lo político como en lo ideológico [15], es decir en el ámbito de la legitimación del poder, y forzaban a los dirigentes del Kremlin, para mantener la esfera de influencia soviética, a emprender acciones que provocaban transitoriamente un retroceso en la política de distensión. Porque con la admisión de posibilidades alternativas al desarrollo del modelo soviético, éste dejaba de ser el único válido y en consecuencia también cesaba el papel de Moscú como instancia ideológica central. El «policentrismo», como denominó programáticamente a la nueva situación el jefe del Partido Comunista italiano, Togliatti, implicaba ni más ni menos que la existencia de centros decisorios ideológicos —y por tanto políticos— con igualdad de derechos y sin un partido rector institucionalizado. Estos esfuerzos fueron fomentados por Tito, cuyas opiniones pesaban extraordinariamente en el ánimo de Jruschov. Por «deseo expreso» de Tito, se procedió a la disolución [16] del Kominform el 17 de abril de 1956; su viaje a través de la Unión Soviética (1-23 junio) se convirtió en un triunfo personal. El comunicado conjunto del 20 de julio ratificaba de nuevo «que las vías del desarrollo socialista son diferentes en los diversos países y contextos y que la riqueza de formas del desarrollo del socialismo contribuye a su fortalecimiento» [17]. Con ello los dirigentes soviéticos iban más allá de las tesis del XX Congreso del Partido: no sólo el camino hacia la toma del poder, sino también el posterior desarrollo del socialismo podían llevarse a cabo de diversas formas, constatación que entrañaba importantes consecuencias. Pues aunque la política comunista es en primer lugar una política de poder, una salvaguardia de los propios intereses, sobre la base de la función legitimadora del poder de la ideología surge una determinada necesidad de hacer que las decisiones políticas parezcan confor-

mes con los postulados ideológicos, para lo cual la interpretación tropieza con pocas dificultades para encontrar en el casi inagotable pozo del legado de Lenin justificaciones, como en el caso del «principio leninista de la coexistencia pacífica». Pero, por otra parte, también los principios ideológicos pueden adquirir una efectividad propia y legitimar decisiones que no estén conformes con sus motivos ideológicos originales. Cuando, en su informe, Jruschov presentó a los países socialistas como un grupo autónomo, diferente de la Unión Soviética —ajustándose a la realidad— y endosó a los dirigentes nacionales la responsabilidad de desarrollo de sus países, no era consciente del carácter de esta diferencia. Las democracias populares se hallaban aún lejos del grado de consolidación interna del sistema que la Unión Soviética ponía de manifiesto, sus conflictos sociales y económicos apenas estaban resueltos y el terreno intelectual y cultural estaba lleno de tensiones a las que se sumaban ahora resentimientos nacionales. La revelación de los crímenes de Stalin y la rehabilitación de Tito añadieron una carga adicional, pues justamente la acusación de «titoísmo» había sido capital en las depuraciones del Partido, con ayuda de las cuales se habían librado los estalinistas de los comunistas «nacionales». Su rehabilitación había de convertirse en una prueba de resistencia para el régimen. Así, aquellos partidos que habían hecho pocas concesiones a la política del nuevo curso (Rumania, Bulgaria y sobre todo Albania) habían mantenido un sistema estalinista con pocas modificaciones. Excepto un rechazo verbal del «culto a la personalidad» y, como mucho, del sacrificio de algunos funcionarios de segunda fila, no se produjo en ellos ningún cambio. También Ulbricht, que con el criterio expuesto el 4 de marzo y con el discurso del 17 de ese mismo mes emprendió la táctica de afrontar los hechos y asumió plenamente la condena de Jruschov a Stalin hecha —al que hizo responsable de graves violaciones de las «normas leninistas de la vida del Partido»— [19], sentó las bases de su poder en la RDA sobre los mismos dispositivos ya experimentados por Novotny en Checoslovaquia. Las manifestaciones de malestar entre la clase intelectual fueron rápidamente sofocadas; una distensión pasajera y algunas concesiones al consumo, aunque escasas, fueron suficientes para tranquilizar a gran parte de la población.

En Polonia, por el contrario, los dirigentes del Kremlin utilizaron la muerte de Bierut (12 de marzo de 1956) para lograr que se eligiera sucesor a Eduard Ochab, un hombre de cuya lealtad y capacidad de acción se tenían pruebas. Sin embargo tropezó con una amplia oposición, que además había sido alentada por

el XX Congreso del PCUS. Las dificultades económicas del país, cada vez mayores, llevaron a los economistas a exigir reformas profundas, la Iglesia instaba a que se suprimieran las restricciones y los intelectuales, por encima de sus intereses de una mayor libertad de expresión, se convirtieron en portavoces de la mayoría de la población reclamando la subida del nivel de vida y el restablecimiento del Estado de Derecho. Puesto que en el ámbito económico la situación crítica no permitía alivio alguno, Ochab se contentó con una amnistía de amplio alcance y con algunos cambios de personas que ocupaban puestos directivos en el Partido y el gobierno. Con ello no logró calmar el descontento, que estalló con la «insurrección de Poznan» del 28 de junio de 1956. Ésta fue rápidamente sofocada, pero los dirigentes del Partido no infravaloraron esta señal de advertencia, que también intranquilizó a los dirigentes soviéticos por cuanto se empezaban a manifestar reivindicaciones nacionales. A la sesión plenaria del CC del POUP del 18 al 28 de julio de 1956, los dirigentes del Kremlin enviaron al primer ministro Bulganin y al ministro de Defensa Shukov, que explicaron de un modo inequívoco que «la solidaridad del campo de la paz» había de tener preferencia sobre las evoluciones nacionales y las tendencias a la democratización. La situación geopolítica de Polonia como punto de unión entre la Unión Soviética y su glacis centroeuropeo, la RDA y Checoslovaquia, establecía estrechos límites a la libertad nacional en el campo socialista. Pero también hay que mencionar el motivo ideológico: los dirigentes del Kremlin no querían ni podían permitir que un país en el que ya se había implantado el «avanzado» sistema socialista de procedencia soviética se desviara ahora, dejando por mentirosos a Partidos e ideólogos. Para aliviar la situación de los atribulados dirigentes del Partido, se prometieron suministros soviéticos que suplieran los fallos de aprovisionamiento más graves.

La población polaca no se dejó sin embargo comprar con ello y entre los intelectuales se extendió la idea de que sin reformas básicas el país no se podía curar. Mientras que en la dirección del Partido los estalinistas —el llamado grupo de Natolin— y los partidarios de una reforma y una menor orientación de Moscú (conservando el dominio del Partido) aún intentaban llegar a un acuerdo, al *establishment* del Partido y del gobierno le surgió un rival en la persona del anterior jefe del Partido, Wladislaw Gomulka —detenido a causa de sus «desviaciones nacionalistas» pero puesto en libertad en 1955— hacia el que se orientaron las esperanzas de los descontentos del país. De su rehabilitación esperaban los dirigentes de Varsovia un efecto estabilizador. Las di-

vergencias entre el grupo de Natolin y Gomulka no admitían, sin embargo, ningún compromiso. Hubo que agradecer al patriotismo de Ochab que, renunciando a su propia situación de poder, aportara una solución a la escalada del conflicto en la dirección del Partido que acabó llevando de nuevo a Gomulka al cargo de primer secretario del POUP, con lo que cortó la confrontación de la Polonia nacional con la Unión Soviética. Gomulka era considerado como un garante para la salvaguardia de los intereses nacionales polacos y gozaba de esa capacidad de integración que el Partido y el país necesitaban para superar una crisis que sólo aparentemente era de carácter económico. Los estalinistas del grupo de Natolin intentaron evitar la elección de Gomulka como primer secretario del Partido por el CC el 19 de octubre de 1956, poniendo en juego todas sus posibilidades. Alarmada por ellos y por el embajador de la Unión Soviética en Varsovia, contrario a Gomulka, el 19 de octubre por la mañana llegó a Varsovia una nutrida delegación soviética encabezada por Jruschov y Molotov y un gran número de militares para pedir cuentas a los dirigentes polacos. En su discurso del día siguiente, donde ponía al Comité Central al corriente de las negociaciones, Gomulka calificó a éstas de «francas, difíciles y enconadas». Finalmente, la delegación polaca logró convencer a los dirigentes soviéticos de que los cambios de personal en la dirección del Partido en Polonia —entre otros se destituyó al ministro de Defensa Rokosovski— contribuirían a la consolidación del sistema y con ello al fortalecimiento de las relaciones polaco-soviéticas. La seguridad ofrecida de que Polonia no pensaba tampoco retirarse del Pacto de Varsovia y el compromiso de seguir consintiendo en el estacionamiento de tropas soviéticas en territorio polaco (realmente el argumento más convincente) determinaron tanto a Jruschov como a Molotov a admitir que fuera el propio Partido polaco quien eligiera a sus dirigentes. El resultado de esta misión, tan marcialmente iniciada —al mismo tiempo las tropas soviéticas estacionadas en la frontera con Polonia realizaban «maniobras» que finalizaron tras el acuerdo— sorprendió por cuanto sobre todo los militares soviéticos habían abogado por la intervención. Aun teniendo en cuenta que un sojuzgamiento por la fuerza de Polonia —cuya firme resolución a oponer resistencia no ofrecía duda— habría causado un fuerte perjuicio a los objetivos políticos de la dirección del Kremlin, proclamados en el XX Congreso del Partido, una ojeada a los acontecimientos de Hungría pone de manifiesto que esto no constituía ningún obstáculo cuando las pretensiones de hegemonía soviéticas se veían seriamente amenazadas. En el caso de Polonia hay que tener en

cuenta que era evidente que los dirigentes soviéticos habían sido informados por sus fuentes estalinistas —incluyendo a sus propios embajadores— de modo unilateral y conscientemente exagerado.

También en Hungría las tensiones políticas internas se agudizaron, llevando a una crisis al régimen estalinista de Rakosi. Para prevenir un enfrentamiento abierto, los dirigentes soviéticos, influidos por la insurrección de Poznan, enviaron en julio a Budapest a Anastas Mikoyan, que en estos meses críticos hacía las veces de apagafuegos del Kremlin. Por indicación suya, Rakosi renunció al cargo de primer secretario del Partido, pero su protegido, Ernö Gerö, creía poder perseverar en la política económica estalinista, ganarse a la población mediante mejoras insignificantes y obligar a los intelectuales de la oposición a cambiar de conducta por medio de represiones. La rehabilitación de una serie de víctimas preminentes de Rakosi no produjo sin embargo un efecto de apaciguamiento; más bien introdujo entre los dirigentes del Partido discusiones sobre el estalinismo. A principios de octubre Mikoyan, esta vez apoyado por Suslov, tuvo que encargarse de las dificultades húngaras, que intranquilizaban a la dirección del Kremlin tanto más cuanto que el proceso polaco también afectaba ahora a Hungría. Hacia el 20 de octubre se produjeron en Budapest manifestaciones contra el régimen en las que participaron conjuntamente intelectuales, estudiantes y obreros. El 23 de octubre los tumultos se extendieron hasta llegar a la huelga general. Con el nuevo nombramiento del «nacional-comunista» Imre Nagy para la presidencia del Consejo de Ministros, la proclamación del estado de excepción y la movilización de tropas soviéticas, la dirección del Partido, aconsejada por Mikoyan y Suslov, llamados urgentemente, pudo reprimir los tumultos a corto plazo. Pero justamente la movilización de unidades soviéticas desató la cólera nacional y la disposición revolucionaria, sobre la cual ya no surtió efecto el relevo de Gerö por Janos Kádár. Puesto que las tropas húngaras ya habían dado pruebas de ser «de poca confianza», el 27 de octubre, con la reestructuración del gobierno Nagy, se llegó al acuerdo de retirar las tropas soviéticas, cuyos efectivos —unos 50 000 hombres— no eran de todos modos suficientes para una rápida liquidación del movimiento nacional. Este éxito de la revolución, que estimulada por estos progresos planteaba exigencias cada vez mayores, condujo a una evaluación errónea, de fatales consecuencias, de las posiciones soviéticas. Al declarar Nagy los días 30 y 31 de octubre que Hungría continuaría siendo socialista, aunque introduciría una democracia pluralista y abandonaría el Pacto

de Varsovia para acogerse al status de país neutral, traspasó los límites de la tolerancia soviética. La decisión de intervenir militarmente les fue facultada a los dirigentes del Kremlin por el ataque franco-británico a Egipto (29 de octubre), que indignó especialmente al Tercer Mundo e hizo que las protestas de Occidente contra la ocupación de Hungría parecieran poco dignas de crédito. El 1 de noviembre de 1956, las unidades soviéticas, reforzadas por unidades estacionadas en la Ucrania carpática y en Rumania que desde finales de octubre estaban en estado de alerta [20], iniciaron el avance sobre Budapest que fue cercada pese a la declaración del status de neutralidad de Hungría (Nagy, 1 de noviembre). Mientras el general húngaro Pál Maleter estaba todavía gestionando con los generales soviéticos la retirada del Ejército soviético la mañana del 4 de noviembre fue detenido contraviniendo todo Derecho internacional. Los soviétivos trajeron nuevas tropas para reforzar su fuerza de combate. El 4 de noviembre comenzó el ataque a la capital; cuatro días después la encarnizada resistencia había sido vencida; únicamente en provincias duraron los combates hasta el 10 de noviembre. Oficialmente, con el ataque soviético Moscú accedía a la petición del contragobierno formado por Kádár el 4 de noviembre bajo la tutela soviética, pero era evidente que ello no obedecía a la voluntad de la nación sino a la del poder hegemónico [21].

En el caso de Hungría se puso de manifiesto que los nuevos dirigentes soviéticos, pese a la igualdad de derechos y soberanía nacional de los Estados socialistas proclamada por Jruschov, no estaban dispuestos a aceptar la decisión de una nación, si tal decisión iba en contra de los intereses de la Unión Soviética. Los dirigentes del Kremlin practicaban aquel principio político más tarde formulado como «doctrina Breznev» y declarado obligatorio para las relaciones entre los Estados socialistas: la soberanía de los países del Comecon está limitada por los intereses preferentes del «campo socialista» y del «internacionalismo proletario». En la práctica esto significa que la Unión Soviética se declara autorizada a impedir, por la fuerza si es preciso, el abandono de su esfera de influencia a todo Estado que esté incluido en su imperio y en el que en alguna ocasión se haya establecido un régimen comunista, ya sea Checoslovaquia o Afganistán. Mientras que los dirigentes polacos consiguieron mantener un compromiso —si bien alcanzado con dificultad— entre intereses nacionales y soviéticos y hacer caso omiso de otras reivindicaciones que se plantearon sobre todo durante el mes de octubre, Nagy, apoyado por un movimiento nacional que agrupaba a un espectro muy amplio de fuerzas y tendencias políticas, confiando en los princi-

pios expuestos por Jruschov y sin duda también en la opinión mundial, traspasó aquel límite que Moscú había establecido para él y su país. La Unión Soviética tuvo que soportar una grave pérdida de prestigio internacional por su intervención militar en Hungría; incluso entre los comunistas de Europa occidental se alzaron voces de crítica. La insurrección húngara, a duras penas evitada, dio lugar sin embargo a opiniones encontradas sobre la política de Jruschov dentro del propio Kremlin.

El grupo de los «ortodoxos», que preferían, por lo menos frente a las democracias populares, los medios estalinistas ya acreditados, se escandalizó sobre todo con las concesiones ideológicas que Jruschov hizo como paso previo a la aproximación a Yugoslavia. Hungría, y también Polonia, habían dado muestras de la fuerza de atracción de la orientación nacionalcomunista de Tito, que había tenido una gran influencia en esta evolución. No fue casual que Enver Hoxha, jefe del PC albanés, enemigo acérrimo de Tito y duro estalinista, fuera quien en su artículo publicado el 8 de noviembre de 1956 en *Pravda* iniciara la polémica; como jefe de un partido pequeño era la persona idónea para comprobar las reacciones ante un ataque semejante, indirecto aún. No citaba nombres; sólo decía «algunas personas... con sus consignas del tipo de 'socialismo especial'...» [22], pero el objetivo estaba claro. Cuando Tito, tres días después de su alocución en Pula, recogió el reto e insistió en que no habían sido las actividades de los partidarios de Horthy y los extremistas de derechas, patrocinadas por los enemigos capitalistas del sistema socialista, las que habían dado lugar al levantamiento, como afirmaba la explicación soviética de los incidentes húngaros del 30 de octubre, sino que más bien éstos habían sido el resultado de los errores y crímenes del sistema estalinista de estos países, la confrontación se hizo inevitable. Tampoco Jruschov podía admitir el reproche poco disimulado de no haber hecho nada en contra o por lo menos no lo suficiente. En Moscú no se hicieron comentarios hasta que Nagy, a quien se le había garantizado un salvoconducto, fue encarcelado el 22 de noviembre al abandonar su asilo en la Embajada yugoslava de Budapest. Al día siguiente *Pravda* atacó violentamente a Tito, sobre todo por sus exigencias de independencia con respecto a la Unión Soviética para los países socialistas y los partidos socialistas. Esta aclaración parecía tanto más necesaria cuanto hasta entonces únicamente la RDA, Checoslovaquia y Rumania habían tomado claramente partido, junto con Albania, en contra de Tito.

En la sesión plenaria del PCUS de diciembre de 1956, en la que se discutieron principalmente las relaciones con las demo-

cracias populares y cuestiones internacionales, se necesitaron algunos esfuerzos por parte de Jruschov para hacer frente a los ataques de los ortodoxos, que aprovecharon el asunto de Yugoslavia para cuestionar toda la concepción de la política de distensión y la teoría de los cinco grupos. Si Jruschov logró imponerse, tuvo que agradecérselo en buena medida a los funcionarios de grado medio, pues este sector, gracias a sus estrechos contactos con la población, estaba sensibilizado para percibir la fuerte resonancia que encontraba en ella una política cuyos objetivos eran evitar la fuerza y mejorar el nivel de vida. Además, la inestabilidad del «campo socialista» no era ni mucho menos tan crítica como quería presentarla el grupo de Molotov. La dependencia económica con respecto a la Unión Soviética de los otros países del Comecon y el estacionamiento de tropas soviéticas en sus territorios ofrecían una amplia garantía de salvaguardia de la hegemonía soviética y justamente las negociaciones de noviembre con los dirigentes polacos habían puesto de manifiesto que los lazos económicos obligaban a transigir incluso a nacionalcomunistas como Gomulka. Jruschov pudo por fin imponerse con una política cuyo objetivo era intensificar la dependencia económica; la alternativa —el retorno a las prácticas de dominio de Stalin— había puesto en serio peligro al imperio soviético. Para ello tuvo que superar la oposición de sus economistas, pues la consolidación de los partidos y gobiernos de las democracias populares requería concesiones por parte de la economía nacional que no podían realizarse sin una asistencia soviética masiva y que exigían rectificaciones en la fijación de los objetivos de Moscú, así como sacrificios entre la población soviética. No obstante, los dirigentes soviéticos estaban interesados en aquel momento en asegurar contractualmente su hegemonía. En los pactos bilaterales, las democracias populares tenían que reconocer el papel rector de la Unión Soviética para obtener su ayuda económica; también se daba cabida en ellos a otras formulaciones que reforzaban la supremacía soviética.

Los acontecimientos de Polonia y especialmente los de Hungría llevaron a los dirigentes soviéticos a un análisis concienzudo de las causas. A pesar de su disimulo propangandístico se apreciaban muy bien los verdaderos motivos y la «Declaración del gobierno soviético sobre las relaciones de la URSS con los demás Estados socialistas» del 31 de octubre de 1956 señalaba «numerosas dificultades, tareas sin cumplir y fallos directos». Y de acuerdo con esto se debía suprimir «toda posibilidad de violación del principio de soberanía nacional, del beneficio mutuo y de la igualdad de derechos en las relaciones económicas»[23]. Para superar las difi-

cultades económicas existentes, la Unión Soviética no sólo puso a disposición de Polonia créditos a largo plazo que ascendían a 700 millones de rublos para importar productos alimenticios soviéticos a fin de mejorar el abastecimiento, sino que se mostró dispuesta a condonar deudas por un valor de 500 millones como compensación por el carbón polaco suministrado desde 1946 muy por debajo del precio del mercado mundial. También la economía húngara recibió créditos: sin contar los suministros adicionales de bienes para 1957 por un valor de mil cien millones de rublos, un préstamo a largo plazo de 700 millones. La RDA, Checoslovaquia y Bulgaria pusieron a disposición del país casi 300 millones de dólares adicionales. Los demás países del Comecon obtuvieron igualmente ayuda económica de la Unión Soviética. A la RDA que, al desaparecer las importaciones de carbón polaco se encontró en apuros, se le ofrecieron 340 millones de rublos en moneda libremente convertible, además de amplios suministros de materias primas. Bulgaria y Albania recibieron créditos y Checoslovaquia fue recompensada por los suministros de uranio mediante la amortización de deudas. La reducción de la explotación de las democracias populares mediante la fijación de los precios fue contemplada por regla general en los nuevos tratados comerciales y los términos de intercambio fueron alterados en favor de los socios comerciales de la Unión Soviética dentro del Comecon. Las cargas que de ello se derivaron para la economía nacional soviética fueron considerables; solamente la condonación de las deudas supuso una suma de 1 800 millones de dólares[24]. Cierto es que esto era sólo una parte de los beneficios suplementarios obtenidos hasta entonces por los soviéticos en el comercio interior del Comecon, pero exigía nuevos planes para compensarlos.

Estas concesiones no resultaron fáciles, sobre todo para los economistas y la burocracia financiera, pero era indispensable una mejora de la situación económica de las democracias populares como medida preventiva. Los esfuerzos en favor de un apaciguamiento que sirviera a la consolidación exigían además conceder a los dirigentes nacionales una mayor libertad de decisión, que se dejó notar sobre todo en Polonia y Hungría. Tras una breve fase de duras medidas —castigo a los revolucionarios, depuración inexorable en el Partido y colectivizaciones masivas fueron las más destacadas— Kádár consiguió no sólo ganarse la confianza de los dirigentes soviéticos, sino también disipar paulatinamente las reservas de la población con respecto a su régimen mediante una cautelosa despolitización, dentro de lo que permitía la doctrina del Partido, con una reducción del adoctrinamiento ideo-

lógico y —no en último término— mediante el fomento del crecimiento económico; la producción creció entre los años 1955 y 1959 un 24%, lo cual se debió en gran parte a los criterios de eficacia hacia los que se orientaron los dirigentes económicos no ortodoxos. En el mantenimiento de los comités obreros, que impulsó frente a la fuerte oposición de los ortodoxos, Kádár encontró también el apoyo de los dirigentes soviéticos, del mismo modo que en el arrinconamiento de los viejos estalinistas, a los que marginó de la dirección política del país. Moscú no quería poner en peligro la estabilidad de este régimen leal y sumiso con medidas de fuerza que habían sido ya superadas en la propia Unión Soviética y que, como símbolos de una política que había llevado a la catástrofe de 1956, obstaculizaban el proceso de fomento de la confianza entre la población. Puesto que, por lo demás, Kádár evitó herir los sentimientos nacionales, concedió también mayor derecho de participación a los intelectuales y permitió que reinara la tolerancia en el ámbito artístico siempre que no se tocaran los principios del orden político y social, puesto que además, mediante el drástico aumento de las inversiones para la producción de bienes de consumo (la proporción entre la industria de bienes de equipo y de consumo fue de 12 a 1 en 1950-1955 y de 5 a 1 en 1956-1960) hizo subir la demanda de bienes de consumo considerablemente y puesto que Kádár inició finalmente una cauta apertura hacia Occidente (el número de viajeros húngaros a Occidente por ejemplo pasó de 1 000 en el año 1953 a 21 000 en 1958, aumentó a 32 000 en 1960, 65 000 en 1962 y llegó incluso a 120 000 en 1963), su régimen, con la política comunista pragmática llevada a cabo, consiguió una estabilidad en el país que redundó también en provecho de las relaciones con la potencia soviética dirigente y con el Comecon.

Considerablemente más difícil que sintonizar con el régimen de Kádár era sintonizar con los intereses de Polonia, donde Gomulka había llegado al poder como representante de corrientes nacionales dirigidas contra la hegemonía soviética. Al mismo tiempo, en los niveles más bajos se habían desarrollado unas tendencias de carácter antisocialista que no eran reversibles a corto plazo si no se quería provocar disturbios graves. La descolectivización tolerada en la agricultura —establecido bajo Ochab y encaminada a la reprivatización de las explotaciones agrícolas de un 85% de todas las colectividades—, la aparición de comités obreros que reclamaban un derecho de cogestión similar al de Yugoslavia y que únicamente con la ayuda de la ley de comités de empresa del 19 de noviembre de 1956 pudieron paulatina-

mente ser sometidos de nuevo a la economía planificada y centralizada, y muy especialmente la crítica libre a la doctrina marxista eran vistas con preocupación por los dirigentes soviéticos. Puesto que no había una alternativa válida a Gomulka y puesto que éste seguía además firmemente aferrado a una estructura de partido leninista, Moscú aceptó su «vía polaca» confiando en el efecto a largo plazo de las fuerzas centrípetas que se habían institucionalizado en el Comecon y en el Pacto de Varsovia. Con la nueva regulación de las relaciones polaco-soviéticas del 18 de noviembre de 1956, en la que se fijó el principio de la igualdad de derechos de ambos Estados, así como una nueva garantía de mantener la frontera Oder-Neisse por parte de la Unión Soviética, con un nuevo acuerdo sobre el estacionamiento de tropas (7 de diciembre de 1956) que contemplaba los derechos polacos, y con los nuevos tratados comerciales, Gomulka logró el necesario apoyo para hacer extensiva también la restructuración de la dirección del país al gobierno y al Sejm. Por lo demás, pronto se vio que estaba resuelto a restablecer la supremacía absoluta del Partido. La censura se agudizó, el Partido fue depurado rigurosamente (alrededor de 200 000 miembros fueron expulsados), se restauró la centralización de la economía planificada y se recortaron los derechos de reunión y asociación. El fortalecimiento de la autoridad del Partido y del Estado por medio de una centralización renovada se detuvo ante la tercera fuerza de Polonia, la Iglesia católica. La liberación del cardenal Wyszynski de su reclusión monacal fue seguida de un acuerdo que otorgaba de nuevo un puesto en la evolución del país a esta institución tan hondamente arraigada entre la sociedad. El acuerdo con la Iglesia de 7 de diciembre de 1956 devolvió a ésta el derecho a ostentar cargos (los cuatro «vicarios generales» nombrados por el gobierno fueron destituidos) y le autorizó a ejercer de nuevo la enseñanza religiosa en los colegios y la asistencia espiritual en los establecimientos penitenciarios y las fuerzas armadas. Con ello quedaba asegurada la lealtad de los dirigentes eclesiásticos al nuevo régimen. «La Iglesia no actuó de forma 'colaboracionista' en modo alguno, sino exclusivamente en su propio interés bien entendido; sabía perfectamente que las libertades entonces permitidas eran las máximas que el gobierno soviético estaba dispuesto a conceder y que por consiguiente, toda persistencia en la revolución, toda oposición enérgica sólo habría de llevar a un endurecimiento de la política gubernamental»[25]. Con este convencimiento, también los grupos políticos no comunistas del país se mostraron dispuestos a ayudar a Gomulka a evitar en Polonia una evolución semejante a la húngara.

En la Unión Soviética, fueron sobre todo los viejos estalinistas, hasta ser destituidos por el Pleno del Comité Central de julio de 1957, los que se escandalizaron ante la insistencia de Gomulka en el principio de igualdad de derechos de los partidos y Estados comunistas. El viaje de Gomulka a Belgrado, donde trató con Tito una posible postura conjunta en la Conferencia comunista mundial de Moscú de noviembre de 1957, despertó la desconfianza, al igual que su obstinada negativa a conceder el «papel rector» en el movimiento comunista a la Unión Soviética. El hecho de que hubiera inducido [26] a Tito al reconocimiento diplomático de la RDA contaba poco. Sólo después del reconocimiento de la primacía del PCUS y de la Unión Soviética, al que se vio forzado en la conferencia de Moscú, pudo privar de su poder, con el consentimiento soviético, al grupo de Natolin, de tendencia neoestalinista e institucionalizar un régimen que, a pesar de todos los errores de la nación polaca, permitió éxitos considerables y un claro aumento del bienestar, así como de la cultura nacional.

c. *Leninismo contra estalinismo*

Ya la condena de los crímenes de Stalin y del sistema estalinista en el XX Congreso del PCUS había tenido como consecuencia entre los dirigentes y la élite del Partido una honda disensión entre los «ortodoxos» en torno a Molotov, que se oponían a un cambio del sistema de dominio, y los «leninistas» en torno a Jruschov, que, según el principio de la «dirección colectiva» y bajo la advocación de Lenin, pretendían una democratización del proceso de decisión a diferentes niveles (conservando la estructura y las competencias jerárquicas). Las repercusiones de la desestalinización en las democracias populares agudizaron aún más la oposición, y las facilidades económicas concedidas a las democracias populares a finales de 1956 y principios de 1957 hicieron que el grupo de Molotov obtuviera el apoyo de la burocracia económica, que veía perjudicados los intereses de la Unión Soviética. El plan quinquenal concluido en 1955 había traído consigo un rápido crecimiento de la producción industrial: «...Fue un quinquenio razonablemente fructífero en términos cuantitativos» [27]. Pero el final del año 1956 auguraba considerables retrasos de los que se culpó a los organismos responsables del plan. Se había comprobado que los programas de inversión previstos en el Plan no eran factibles, pues no se había dispuesto de la maquinaria, obras, etc., para ampliar la capacidad

de producción a su debido tiempo. La revisión del Plan era ineludible. Jruschov utilizó esta oportunidad para proceder contra la alianza establecida en contra de él en el Pleno de diciembre entre los dirigentes de la economía y el grupo de Molotov. Sus planes reformistas, expuestos por primera vez en febrero de 1957, no fueron adoptados, sin embargo, únicamente por motivos políticos. El problema de la coordinación entre las instancias responsables de la planificación y los casi 30 ministerios de ramas industriales venía ya de antiguo; las fricciones entre las diversas instancias ya habían dado lugar a que Malenkov llevara a cabo cambios estructurales. El Pleno de diciembre había evidenciado además el peligro que podía emanar de una burocracia económica; el poder creciente de los tecnócratas y de los ejecutivos amenazaba con mermar la competencia decisoria política del Partido. El 30 de marzo Jruschov formuló sus propuestas de reforma que el Soviet Supremo de la URSS aprobó en mayo. «Se dijo que la ejecución de estas medidas era la mayor revolución interna de la Unión Soviética desde 1928»[28]. La reforma trajo consigo la supresión de casi todos los ministerios de rama (sólo siguieron en funcionamiento los ministerios de Industria y Armamento y de Industria Química, así como el de Producción Eléctrica). La realización y el control de los objetivos económicos a largo plazo, presentados por la comisión de planificación (Gosplan), se encomendaron a organismos regionales llamados Consejos de Economía Nacional (Sovnarjozy), que coordinaban el desarrollo económico de una zona determinada. Con ello debían acoplarse mejor entre sí los múltiples aspectos de una economía nacional, tales como el empleo de mano de obra, la política de inversiones, las concesiones de créditos y demás. En total se crearon 105 consejos económicos, 70 de ellos en el territorio de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia (RFSSR). A ellos estaban subordinadas todas las empresas de la región, con excepción de las locales, y ellos a su vez dependían del Consejo de Ministros de la República; en la RFSSR, Ucrania, Kazakistán y Uzbekistán, el trabajo conjunto de los distintos consejos económicos de cada República era coordinado por el Gosplan (en las demás Repúblicas sólo había un consejo económico). La comisión de planificación de todas las repúblicas estaba encargada de la planificación general, la aprobación de los planes de cada una de las Repúblicas y algunas otras cuestiones centrales similares, pero no tenía facultades ejecutivas, que eran ostentadas formalmente por el gobierno de cada República. Esto significaba privar de poder a la burocracia económica central. Su oposición a la reforma no tuvo ningún éxito pues se le hizo responsable de la deficiente

ejecución del Plan de 1956 y además los cuadros medios del funcionariado apoyaron las exigencias de Jruschov, logrando con ello una mayor influencia. Los ortodoxos, que con razón temían que una reestructuración de tal magnitud en la dirección conjunta de la economía acarreara grandes pérdidas por fricción, es decir un retroceso en la producción, pusieron todo su empeño en hacer caer al ferviente reformador que era Jruschov, uniéndose a la burocracia económica. La mayoría de los miembros del Presidium del Partido estaban de acuerdo a finales de junio en destituirle de su puesto de primer secretario, pero dado que el asunto era de competencia del Comité Central, se convocó con escaso margen de tiempo una sesión de este organismo para el 29 de junio. El grupo de Molotov no contaba, sin duda, con que en tan poco tiempo llegasen a Moscú los miembros del CC de provincias. Sin embargo, gracias a la ayuda de Shukov y de la aviación, estuvieron a tiempo en sus puestos para lograr que Jruschov venciera en la votación. Con la expulsión del Comité Central de Molotov, Malenkov, Kaganovich y Chepilov se libró de sus máximos oponentes (Bulganin dejó su cargo de primer ministro en marzo de 1958). A diferencia de lo ocurrido en tiempos de Stalin, el «grupo hostil al Partido» no sufrió represalias; los miembros del grupo que no conservaron funciones subalternas pudieron disfrutar de una vejez tranquila como jubilados, signo este también del cambio interno que se había operado desde 1953.

Con ello Jruschov había eliminado la oposición dentro del Partido y su pretensión de dirección absoluta se había impuesto en contra de los «economistas» y ejecutivos. La única tarea que quedaba pendiente era someter al ejército. Shukov, cuyos esfuerzos iban encaminados a obtener la máxima efectividad del aparato militar, había refrenado cada vez más el trabajo del Partido, es decir el adoctrinamiento ideológico, y había reforzado el poder de los comandantes. Mientras Jruschov no tuvo al Partido completamente en sus manos, tuvo que tolerar esta actitud de su ministro de Defensa, que también supo agradecer el poder que se le había concedido en aquellos días de junio, críticos para Jruschov. Pero la sólida posición del mariscal, que sostenía con demasiado énfasis sus opiniones, basadas en las necesidades militares, hacía que diera la impresión de que se estaba creando un grupo de presión que escapaba al control del Partido. El temor al «bonapartismo», es decir a una dictadura militar, es un viejo trauma de la ideología comunista proveniente de la evolución de la Revolución francesa, que desembocó en la dictadura de Bonaparte. Así que el primer ministro comprendió que su siguiente

y urgentísima tarea política interna era someter el ejército a la voluntad del Partido. El cuidado con el que se preparó la destitución de Shukov prueba la magnitud de los temores existentes. El 4 de octubre de 1957, el ministro de Defensa emprendió un viaje —planeado ya hacía tiempo— a Yugoslavia y Albania, que le mantuvo alejado de Moscú hasta el día 26. El 19 de octubre tuvo lugar una sesión del Presidium en la que se examinó el trabajo de Shukov bajo la óptica del Partido. A continuación se celebró una sesión del Comité Central sobre esta cuestión y al volver a Moscú el 26 de octubre de 1957, Shukov fue informado de que ya no ocupaba el cargo de comandante en jefe y ministro de Defensa. Poco después, a pesar de una «autocrítica» de arrepentimiento, se le excluyó del Presidium del Partido y del Comité Central. Su sucesor fue Rodion Malinovski, un ucraniano que había trabajado con Jruschov en la recuperación de Ucrania. En época posterior también fueron sustituidos los más estrechos colaboradores de Shukov.

Con ello se había restablecido el papel dirigente absoluto del Partido, debilitado por las luchas entre las diferentes tendencias que siguieron a la muerte de Stalin, cuando los grupos rivales dentro de la dirección del Partido se aseguraron mediante concesiones el apoyo de los diversos «pilares» del sistema —aparato del Estado, economía y Ejército— a sus propios intereses. El cuarto «pilar» (sin contar al Partido), la *intelligentsia* del país, no había cuestionado hasta el momento la aspiración rectora del Partido, y en su exigencia de mayor movilidad intelectual coincidía incluso con la opinión de Jruschov. La dirección del país estaba pues íntegramente en manos del Partido, es decir de su primer secretario; parecía pues lógico que éste personificara la unión entre el Partido y el Estado. El 26 de marzo de 1958, después que el Soviet Supremo relevara de su cargo a Bulganin (más tarde se le expulsó del Comité Central y del Partido por haber pertenecido al grupo «hostil al Partido»), Jruschov fue nombrado primer ministro de la URSS; la dirección del Estado y del Partido, al igual que en época de Stalin, estaban unidos. Cierto es que Jruschov no alcanzó nunca la acumulación de poder de su antecesor, ni tampoco lo pretendió. Para ello habría sido preciso restablecer la policía secreta estalinista y todas aquellas prácticas que el nuevo dirigente del país había condenado en el XX Congreso del Partido. Además, Jruschov tenía un carácter totalmente diferente. Mientras que Stalin era profundamente desconfiado, reservado y cada vez más obstinado con la edad, Jruschov mostraba un carácter abierto y unas inclinaciones impulsivas, pero a pesar de su olfato para la oportunidad política

así como para ganarse a la opinión pública, se dejaba siempre «guiar por su vivo sentido de las posibilidades reales, basándose en un optimismo arrollador con respecto a la realización de la idea comunista»[29].

Pero era justamente en este punto donde la evolución de 1953 a 1956 había suscitado problemas. El ideal permanecía invariable y era común a todos los dirigentes comunistas, pero en cuanto a los instrumentos y métodos para llevarlo a cabo había importantes diferencias que iban desde el principio de autogestión obrera del titoísmo, que presentaba ciertos rasgos corporativos, y el de la agricultura privada de corte capitalista de la Polonia de Gomulka, hasta el estalinismo de Mao Zedong y Enver Hoxha. El líder del Partido Comunista italiano, Palmiro Togliatti, definió en 1956 la situación del movimiento comunista mundial, con sus centros de poder rivales, mediante el término de «policentrismo» con la consecuencia de una permanente «emulación socialista» por la consecución de soluciones óptimas. Sin embargo el caso de Hungría había puesto de relieve la inestabilidad de esta estructura y la necesidad de un mecanismo regulador para la coordinación de las cuestiones ideológicas y políticas. Tras el abandono de las prácticas de dominio de Stalin y la reinstauración del Partido como «fuerza rectora» la unidad del movimiento comunista dependía del trabajo conjunto de todos los partidos comunistas, a pesar de mecanismos de seguridad adicionales tales como el estacionamiento de tropas y la dependencia económica que sólo servían al control de la esfera de hegemonía soviética, es decir de los Estados del Pacto de Varsovia; este procedimiento se basaba en Lenin, que desde entonces volvió a ser —junto a Marx y Engels— la gran figura directriz y la instancia legitimadora en el ámbito de poder soviético, y además estaba orientado hacia el futuro, porque respondía a la tesis de «extinción del Estado». La conformidad ideológica se complementaba perfectamente con el interés político por una nueva vinculación más estrecha de todos los partidos comunistas a la central moscovita, asegurada por una trama múltiple de tratados y organizaciones bilaterales y multilaterales con mecanismos de mando complejos. Según la concepción de los dirigentes del Kremlin —y en esto estaban de acuerdo la mayor parte de los partidos estatales comunistas— el núcleo del movimiento comunista internacional lo formaba el PCUS con los partidos de los Estados pertenecientes al Pacto de Varsovia. A él se integraron los partidos de China, Corea del Norte (pronto lo haría el de Vietnam del Norte) y, en Europa, el PC de Yugoslavia. El anillo exterior del sistema estaba formado por los demás partidos comunistas,

cuyo peso específico dependía de su fuerza y su influencia en la política de su país o de su independencia con respecto a las ayudas económicas de Moscú. El retorno a la política comunista internacional de doble vía, tal como había existido en los tiempos del Komintern, cuando la política exterior de un Estado comunista y las acciones políticas de los partidos nacionales estaban coordinadas para favorecer la fijación de un objetivo revolucionario mundial, se realizó ciertamente en condiciones distintas: en lugar de un Estado socialista había ahora doce, entre los cuales por lo menos China y Yugoslavia tenían una posición especial. Una nueva central comunista mundial que actuara como órgano de mando, apoyada por los votos de los Estados del Pacto de Varsovia dignos de toda confianza, ofrecería la posibilidad de vincular también a estos dos países más estrechamente a la política de Moscú mediante acuerdos mayoritarios, cegando así la fuente de crispaciones del movimiento comunista internacional.

Jruschov aprovechó la oportuidad de los festejos del 40.° aniversario de la Revolución de Octubre para discutir los planes soviéticos con los dirigentes de los partidos comunistas reunidos en Moscú. Ya en la fase preparatoria de la conferencia, Tito y Gomulka, en su encuentro de principios de agosto de 1957 en Belgrado, habían puesto de manifiesto graves reservas; ambos temían que se pudiera poner fin a su libertad de decisión política interna, tan trabajosamente lograda, y en el caso yugoslavo a su independencia política exterior. Pero Jruschov tenía el apoyo de Mao Zedong y los partidos conservadores de Checoslovaquia, la RDA, Bulgaria y Albania se habían unido para respaldarle. En estas circunstancias Tito no inició siquiera el viaje a Moscú y a la delegación yugoslava, que ya durante la negociación de los doce partidos estatales (del 11 al 14 de noviembre de 1957) había quedado aislada después de que Gomulka hubiera tenido que plegarse a la presión masiva, no le quedó más opción que negarse a firmar el comunicado final de la conferencia de los 64 partidos que se desarrolló a continuación hasta el 19 de noviembre de 1957.

A pesar de todo, Jruschov obtuvo únicamente un éxito parcial, y el beneplácito para la creación de un órgano central de información, dirigido por los soviéticos, que debía exponer las directrices políticas para todos los partidos comunistas, órgano que apareció en Praga en septiembre de 1958 bajo el título de *Problemas de la Paz y del Socialismo,* sólo puede ser calificado de compromiso: ciertamente se había aprobado un órgano de mando, pero no una instancia de control. El papel rector de la Unión Soviética tanto en el movimiento comunista como dentro del

«campo socialista» fue contundentemente ratificado, pero a la vez se hizo patente que ese papel rector no se podía imponer por medio de una política estatal de disciplina sino mediante una política de argumentos.

En el comunicado de la conferencia, la República Popular China ocupó el lugar debido, apareciendo en segunda posición detrás del PCUS. Durante las sesiones también se había hecho patente el peso del Estado más populoso de la tierra. El apoyo de Mao Zedong a la Unión Soviética estaba basado en una serie de motivos: la dependencia de este país, aislado internacionalmente, cuyo desarrollo económico necesitaba del suministro de bienes de equipo de los países del Comecon, la incesante amenaza del régimen del Kuomingtang de Taiwan, que estaba apoyado por los Estados Unidos, y especialmente el empeño en oponerse a las tendencias centrífugas que reducían la unidad del movimiento y por tanto su potencial de actuación. El rechazo y la enemistad con que abiertamente se trataba a la China comunista dieron como resultado una reacción de militancia extrema. De ella surgieron divergencias profundas en cuanto a la política de distensión de Jruschov; el diferente grado de evolución socioeconómica de China y la URSS y la diferente consolidación del «socialismo» en ambos países crearon una situación de intereses muy distintos, que finalmente condujo a la ruptura entre los partidos y los Estados. La República Popular China se hallaba inmersa en un proceso de disciplinamiento social, único capaz de garantizar la transformación forzosa de una sociedad agraria en una sociedad socialista industrial de procedencia comunista, proceso que la Unión Soviética había concluido en los años anteriores a la segunda guerra mundial[30]. Así pues, no fue casual que los dirigentes de Pekín se sirvieran de los métodos de dominio estalinistas; el experimento de Mao de las «cien flores» fue tan efímero como periférico. También aquí la militancia interna y la militancia externa tenían un efecto recíproco. De este modo Pekín, con el radicalismo propio de quien nada tiene, instaba a la agudización de la lucha de clases y al enfrentamiento con el enemigo tradicional capitalista para acelerar la victoria del comunismo en todo el mundo.

Sin embargo los dirigentes soviéticos se enfrentaban a una situación muy diferente, tanto interior como exterior. Tenían que tomar en consideración tanto la compleja realidad social de su propia población como el deseo de paz que ésta tenía, y además sabían que, a pesar de la sensación producida por el lanzamiento del primer Sputnik el 4 de octubre de 1957, eficaz preparación de la fiesta del 40.° aniversario de la Revolución de

Octubre, Estados Unidos seguía poseyendo la superioridad técnica en armamento. Un análisis desapasionado de la situación de las fuerzas internacionales demostraba que no existía motivo alguno para abandonar la política formulada en los años 1953-1955. El «campo socialista» se creyó capaz de evitar las amenazas, pues la evolución política, según la doctrina del materialismo histórico, había de discurrir en beneficio del movimiento comunista. Se consideró oportuno procurar una vida mejor y más fácil a la población después de cuarenta años de esfuerzos llenos de privaciones. Este comunismo «de puchero» de Jruschov sólo podía llevarse a cabo si el producto de la economía soviética se quedaba en el país y la ayuda económica soviética a los demás países socialistas se mantenía dentro de unos límites. Los dirigentes chinos, sobrecargados de problemas económicos extraordinarios, se lamentarían más tarde amargamente de la falta de «solidaridad proletaria». Jruschov, apoyado en ello por la totalidad de los dirigentes del Kremlin, seguía la política precavida de Stalin en cuanto a China, pues un rápido aumento del poder chino no interesaba a la Unión Soviética. Los dirigentes chinos, en el reducido círculo demarcado por la dependencia de la Unión Soviética, podían estar seguros del apoyo de los países conservadores del Comecon, y especialmente de Albania, Rumania y Bulgaria, que atravesaban un proceso de transformación similar, aun cuando no se enfrentaban a dificultades tan extremas, motivadas por la situación demográfica. En especial el plan surgido en el marco de la división de trabajo del Comecon, bien acogido en los países industriales más avanzados como Checoslovaquia y la RDA, consistente en adjudicar a los países balcánicos el papel de suministradores de productos agrarios y materias primas dentro del Comecon, llevó a intensificar los contactos de estos Estados con Pekín. Los dirigentes rumanos aprovecharon la situación para sustraerse a la tutela soviética. Gheorgiu-Dej había conseguido en 1957 la dirección del Partido con hombres afectos a él. La unidad así lograda le permitió disponer, tras la retirada de las tropas soviéticas de Rumania (junio de 1958), de capacidad de maniobra política para la consecución de objetivos nacionales que en lo sucesivo, teniendo un extremo cuidado formal con los acuerdos vigentes y ateniéndose estrictamente a los principios de dominio del Partido, aseguraron al país una posición especial, no siempre exenta de peligro, dentro del ámbito del Comecon. Con ayuda de créditos occidentales se consiguió impulsar la industrialización sobre una amplia base, apoyándose en los amplios recursos naturales y humanos del país, y tanto el nacionalismo rumano, calculado y cultivado, que en algunas oca-

siones rozaba los límites de lo que los dirigentes soviéticos estimaban tolerable, como la rigurosa aplicación de la legislación y el temor, continuamente presente, a la policía secreta, movieron a la población a soportar el sacrificio necesario. En Bulgaria, por el contrario, Jruschov consiguió poner fin rápidamente al breve flirteo de Sofía con Pekín, que se oponía al programa de desarrollo del Comecon. De modo análogo a Rumania y a la campaña de industrialización de Pekín denominada «el gran salto adelante» con que se inició el II Plan Quinquenal chino de 1958-1962, Jivkov había puesto en marcha un ambicioso programa económico que, sin embargo, estuvo a punto de convertirse en un desastre por la falta de una base propia de materias primas. Para suavizar la controversia chino-soviética, siendo China un país tan importante por su situación estratégica, la Unión Soviética le concedió créditos muy generosos, con cuya ayuda pudo proseguirse la industrialización, aunque con objetivos limitados.

Por el contrario, todos los esfuerzos por conseguir la aprobación de Albania para la política de Moscú, que Hoxha calificaba de «capitulacionista» y «revisionista», fracasaron. Al disminuir paulatinamente a finales de 1958 las tensiones que caracterizaron las relaciones soviético-yugoslavas tras la conferencia de Moscú en noviembre de 1957, se hizo palpable en Tirana una reserva creciente frente a Moscú, que en este caso también aumentó con los planes de división del trabajo dentro del Comecon y que no pudo superarse tampoco con las ayudas económicas soviéticas. Hoxha era tan imposible de convencer como Mao Zedong respecto a la aceptación del principio de la «coexistencia pacífica» de Jruschov. También se dejó sentir aquí, además de la rigidez ideológica, el relativo retraso socioeconómico de este pequeño país balcánico y la profunda enemistad que Hoxha sentía por Tito, pues aceptar la línea moscovita significaba reconocer al mismo tiempo los principios de política exterior formulados por Tito desde el comienzo de la década de 1950 y hacer las paces con la Yugoslavia «revisionista». Las consecuencias para el régimen de Hoxha eran imprevisibles. Así pues, el dirigente albanés persistió en su actitud y de modo paradójico fue precisamente Yugoslavia quien se lo facilitó: el aislamiento geográfico con respecto a los demás países del Comecon proporcionó uno de los requisitos para que Tirana siguiese su camino en solitario.

Los demás países del Comecon no podían pensar en una oposición seria contra Moscú. Tanto Checoslovaquia como la RDA dependían económicamente en gran medida de la Unión Soviética, y la existencia de la RDA como Estado se debía únicamente a la garantía de la Unión Soviética. A pesar de las posturas dogmá-

ticas, la razón de Estado exigía tomar partido por Moscú. En Hungría, el régimen apenas consolidado de Kádár no podía ni siquiera plantearse una postura que discrepara de Moscú, y Gomulka, más cercano a Tito, se inclinaba por un «revisionismo» aún más amplio que el de Jruschov. De este modo, durante 1958 y 1959 se formaron dos grupos contrapuestos, después que fracasara a principios de 1959 el intento de Jruschov de convencer a los chinos para que transigieran y de que un préstamo soviético a Pekín de cinco mil millones de rublos no surtiera efecto político alguno. La distensión entre «revisionistas», como Pekín calificaba a los partidarios de Jruschov, haciendo alusión a la polémica con Yugoslavia, y los «dogmáticos» ajenos a la realidad, como Jruschov llamaba a la intransigentes líderes de Pekín, fue superando cada vez más los límites del terreno ideológico para convertirse en un conflicto abierto entre dos potencias rivales, orientado más hacia la hegemonía en el Tercer Mundo que al ámbito de ambas partes. La agravación del conflicto, que los chinos hicieron pública en el congreso de la Federación Mundial de Sindicatos de Pekín de junio de 1960 y que los dirigentes soviéticos intentaron resolver a su favor con un nuevo congreso comunista internacional en noviembre de 1960, llevó a nuevas revelaciones sobre el estalinismo en el XXII Congreso del Partido y a la retirada del cadáver de Stalin del mausoleo de Lenin —cosa que Pekín consideró como una grave provocación— y finalmente, en 1962, a la ruptura abierta, ocasionando un enorme perjuicio a la economía china la retirada de los especialistas soviéticos y la supresión subsiguiente de los suministros soviéticos. Los incidentes a lo largo de los más de 5 000 km de frontera y las reclamaciones formuladas por primera vez en 1963 sobre los territorios de Amur y Usuri, anexionados por Rusia en 1858 y 1860, enfrentaron a los dirigentes y al ejército soviéticos a un nuevo flanco del imperio difícil de asegurar, del que, aun cuando no surgía ningún peligro grave, dada la superioridad técnico-militar de la Unión Soviética, sí provenía una falta de seguridad latente a la que la política asiática del Kremlin intentaba proporcionar un contrapeso renovando sus esfuerzos por ganarse a India, Corea del Norte y Vietnam del Norte.

En comparación con esto era de poco peso la deserción de Albania que, tras el malogrado intento soviético de eliminar el régimen estalinista de Hoxha, ya en el Congreso Mundial de Partidos Comunistas de diciembre de 1960 en Moscú había atacado abiertamente a Jruschov. Tampoco fue posible influir en ella mediante presiones económicas, ya que China se había comprometido a brindarle ayuda; la pérdida de las bases navales de

Vorë (Valona) y Sazan no era asunto del cual no se pudieran consolar, por cuanto los dirigentes soviéticos creían que el país no podría renunciar por mucho tiempo a la ayuda de la Unión Soviética.

En esta fase de la distensión, los dirigentes soviéticos no dejaron de defender enérgicamente sus intereses, al igual que los de sus países satélites, siempre que les pareció conveniente. La política de distensión no significaba para Moscú en modo alguno una *détente* a cualquier precio; conservar el poderío soviético y asegurar la esfera de hegemonía continuaron siendo cuestiones de interés primordial. Esto llevó a frecuentes crispaciones en el mundo occidental, tales como la revocación del Tratado de Berlín en noviembre de 1958 (que en marzo de 1959 sería reconsiderada), con la que Jruschov hacía suyas las preocupaciones de los dirigentes del SED que veían en peligro sus esfuerzos económicos y políticos por la fuga de mano de obra cualificada a través de Berlín, o como el caso del U-2 en el año 1960, con el que se impusieron consideraciones de política de seguridad. El hecho de llevar a cabo este tipo de acciones en momentos determinados vino dado en gran medida por las diferencias en el seno del «campo socialista»; no existe la menor duda de que se debieron a determinantes tácticos, pero lo que se obtuvo primordialmente con ello fue la definición de posturas políticas básicas. El viaje a los Estados Unidos de Jruschov en septiembre de 1959, después de la malograda Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Ginebra, donde fracasaron las propuestas de las potencias occidentales debido justamente a los presupuestos esenciales de la autoconcepción soviética (y viceversa), fue una demostración de perseverancia en los esfuerzos por lograr esta distensión que sin embargo se vería sensiblemente alterada al año siguiente. Los aviones U-2 de las fuerzas aéreas estadounidenses eran conocidos por los soviéticos hacía ya tiempo, pero el derribo del piloto y las declaraciones de éste brindaron la oportunidad de poner fin a una práctica que lesionaba profundamente la concepción soviética de la seguridad. Jruschov hizo fracasar la cumbre de París de mayo de 1960; el espectacular incidente provocado en la Asamblea General de la ONU de octubre fue también una demostración calculada. Con este telón de fondo, la ruptura de las negociaciones de desarme de Ginebra, que se malograron por la incompatibilidad de los principios de seguridad política, cobró una significación distinta, que encajaba de modo demasiado evidente en la imagen de la nueva «guerra fría». El viaje a Africa del nuevo jefe de Estado, Leónidas Ilich Breznev, y la evolución del Congo pusieron de relieve que la

política imperialista soviética ganaba influencia en una zona que hasta entonces había sido considerada como dominio natural del mundo occidental, y con el acercamiento a Fidel Castro, documentado por primera vez con el viaje de Mikoyan a La Habana en febrero de 1960, que llevó finalmente a la integración de Cuba en el «campo socialista», la Unión Soviética logró un punto de apoyo centroamericano que serviría en los años posteriores como base logística a los movimientos comunistas revolucionarios de Centroamérica y de América del Sur. La evolución en el Tercer Mundo dio pie a una mayor precisión de la tesis de la evitabilidad de las guerras: el 6 de enero de 1961 Jruschov explicó que las «guerras de liberación nacional» y los «levantamientos populares revolucionarios» eran inevitables en el contexto de la lucha contra las potencias coloniales o en la edificación de nuevos Estados socialistas. La Unión Soviétiva, que desde hacía tiempo era un elocuente portavoz de los países del Tercer Mundo, se fue mostrando cada vez más también como promotor material de los movimientos de independencia, ayudada en ello por los demás Estados socialistas, e intentó desviar la descolonización hacia una «revolución socialista» a través de la influencia así adquirida. El año 1960 ya había traído un claro empeoramiento de las relaciones Este-Oeste y este proceso se agudizó después del encuentro de Jruschov con el nuevo presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en Viena en junio de 1961. La anunciada reducción de tropas se anuló y el 8 de julio se aumentó drásticamente el presupuesto de defensa. El 13 de agosto de 1961, Ulbricht, con el consentimiento y el respaldo soviéticos y rompiendo con los acuerdos de Potsdam, levantó el muro de Berlín que consumaba la división de Berlín y bloqueaba la puerta de huida de la RDA. Finalmente Moscú, con una serie de experimentos de armas nucleares, rompió unilateralmente el acuerdo sobre el cese de pruebas de armas nucleares. El adelanto de la técnica de los cohetes de los soviéticos, que lograron en septiembre de 1959 que un cohete no tripulado alunizara y añadieron el punto culminante a sus demás empresas sensacionales con el primer vuelo espacial tripulado en abril de 1961, indujo a Jruchov a establecer bases de cohetes soviéticos en Cuba, con lo que creía lograr un contrapeso a los cohetes americanos que los Estados Unidos habían estacionado en Turquía. La firmeza con que los Estados Unidos se enfrentaron a esta provocación obligó a Jruschov a ceder el 28 de octubre de 1962. Fatalmente había sobrevalorado sus fuerzas. Pero los Estados Unidos, que se habían sobresaltado con el éxito del Sputnik, aumentaron sus esfuerzos por recuperar el retraso en la técnica armamentística, cosa que

lograron en poco tiempo gracias a su superior potencia económica. Los dirigentes soviéticos también intensificaron la modernización y el desarrollo de su ejército. La empresa transatlántica había puesto al descubierto[31] el punto débil de la potencia continental tradicional, es decir la insuficiencia de sus fuerzas navales. Sin un apoyo efectivo de la flota, los dirigentes soviéticos no podían hacer valer las exigencias de su país. Gorschkov, almirante de la flota, comandante en jefe de la marina soviética desde 1956 y estrategia naval tan prestigioso como hábil organizador, logró en el transcurso de la década siguiente dotar a su país de este instrumento de poder.

d. *La colaboración socialista*

Las diferencias entre los dirigentes soviéticos y chinos en la lucha del revisionismo comunista impulsaron el proceso, comenzado por Jruschov en la fase de desestalinización, de participación de los partidos comunistas de Europa occidental en las decisiones internacionales y supranacionales. El derecho de intervención en asuntos de interés nacional, concedido en un principio de modo limitado, que aliviaba la carga de la Unión Soviétca y creaba una nueva lealtad por parte de los dirigentes nacionales, aunque también les hacía conscientes de su responsabilidad, reforzó el intento de eliminar las diferencias ideológicas mediante discusiones y acuerdos mayoritarios vinculantes en las decisiones sobre cuestiones del movimiento comunista mundial. Fueron justamente las vacilaciones de los dirigentes dogmáticos que, como Ulbricht, sabían justificarlas con necesidades «nacionales», las que hicieron necesarias las concesiones soviéticas. Con el crecimiento de las economías nacionales las democracias populares obtuvieron también mayores competencias en el ámbito económico; además, la nueva fijación de objetivos políticos imperialistas a nivel mundial (al igual que el conflicto con China) hizo necesaria una nueva división de tareas en materia de política de seguridad, que atribuyó una mayor responsabilidad a los ejércitos nacionales de los países del Pacto de Varsovia.

En cuanto a la política de partido, Jruschov tuvo que renunciar a la institucionalización de un órgano rector de todo el ámbito comunista, como había sido en su momento el Comité Ejecutivo del Komintern, ante las múltiples objeciones y reservas existentes. Dado que los dirigentes chinos y albaneses persistían en sus posiciones ideológicas, tampoco una institución central podía poner fin a este conflicto. Para ponerse de acuerdo con

los demás dirigentes de partidos comunistas de Europa occidental, las consultas bilaterales y multilaterales habían demostrado ser absolutamente suficientes y eficaces. Desde 1957 se intensificaron progresivamente estos contactos; tanto las fiestas nacionales del Partido y del Estado, como los encuentros en el marco del Comecon y del Pacto de Varsovia proporcionaron suficientes ocasiones para entrevistas conjuntas. Las relaciones dentro del Comecon fueron puestas totalmente en manos de los partidos y sus funcionarios desempeñaron el papel de embajadores bajo las órdenes de un jefe de sección del Comité Central. El cometido del ministerio de Asuntos Exteriores y los diplomáticos se limitaba a las relaciones con los países no socialistas de acuerdo con la teoría de que las relaciones entre los países socialistas tenían un carácter especial.

El más profundo de los cambios fue el que se operó a partir de 1960 en la organización del Pacto de Varsovia. En los primeros cinco años siguientes a la firma del acuerdo no pudo hablarse de integración de las fuerzas armadas nacionales y además los delegados soviéticos se mostraron más interesados en vigilar la fidelidad al régimen que en la ampliación de su fuerza de combate. La «desconfianza» que inspiraban las unidades húngaras que lucharon durante el levantamiento contra las tropas de ocupación soviéticas confirmó las dudas de los militares soviéticos respecto a la lealtad de los ejércitos nacionales. Ni Shukov ni los demás dirigentes militares soviéticos habían hecho nada para asegurarse esa lealtad. Para estos vencedores de la segunda guerra mundial, la seguridad de la Unión Soviética y de su esfera de hegemonía, de acuerdo con la concepción estalinista, descansaba únicamente en el ejército soviético, acreditado en la lucha; los ejércitos nacionales tenían más bien una función política interior, como factor de estabilización de los regímenes democráticos populares. La subordinación estricta de las fuerzas armadas a la dirección de los partidos comunistas tras la caída de Shukov hizo de los ejércitos nacionales instrumentos de confianza. Cuando la crisis de Berlín de 1961 puso a los militares soviéticos ante la alternativa de elevar el contingente de tropas del ejército soviético o reforzar los ejércitos nacionales para desempeñar tareas militares conjuntas, aquéllos se decidieron por su integración y modernización. En ello influyeron el nuevo espíritu de colaboración y además criterios económicos, pues la economía soviética se encontraba en una fase crítica, por lo que parecía arriesgado privarla de un enorme potencial de mano de obra. Las maniobras conjuntas, tanto bilaterales como multilaterales, con tropas soviéticas preparaban a los ejércitos nacio-

nales para su nuevo cometido: aplastar, en caso de guerra, a los países europeos de la OTAN junto con las tropas soviéticas [32]. Los ejércitos (especialmente entrenados) de Polonia, Checoslovaquia y la RDA se igualaron al ejército soviético en lo que a armamento se refiere. También el Comité Consultivo Político, que desde 1955 sólo se había reunido tres veces, inició en lo sucesivo su turno de conferencias dos veces al año, conforme al reglamento.

El Consejo de Asistencia Económica Mutua, constituido en 1949 como órgano de coordinación y control de la economía de las democracias populares, que había tenido desde entonces una eficacia muy reducida, cobró poco después de la muerte de Stalin nueva importancia. En la cuarta sesión del Consejo (26-27 de marzo de 1954) se hicieron visibles las primeras medidas encaminadas a una función integradora de esta institución. La copia del modelo soviético por parte de las democracias populares había llevado a la adopción de una estrategia de desarrollo autárquico de la economía nacional, correspondiente a la situación soviética anterior a la guerra que, determinada por ideas de prestigio nacional, desatendió en múltiples ocasiones la conveniencia económica y no tuvo en cuenta las fuentes de riqueza propias de cada país. De este modo se llegó a un desarrollo paralelo de las diferentes economías nacionales, con la consiguiente estructura uniforme y una desproporcionalidad extrema también en el ámbito de los bienes de equipo en beneficio de la industria siderúrgica. La extrema afluencia de capital para el desarrollo de la industria pesada no permitía ningún margen financiero para el desarrollo de otro tipo de producción, como por ejemplo la química o la electrotécnica. La hegemonía económica soviética, orientada en su producción nacional hacia sus propias necesidades, con su estricta bilateralización de las relaciones había impedido además un trabajo conjunto efectivo con las democracias populares. En adelante, la coordinación de los planes económicos de las democracias populares debía preceder a la coordinación con la Unión Soviética. También se acordó aplicar un mayor rigor organizativo al trabajo del Comecon y mantener contactos más intensos entre los representantes de los diversos regímenes. Ya en junio tuvo lugar una nueva sesión del Consejo con resoluciones complementarias. La caída de Malenkov interrumpió de hecho estas actividades del Consejo; en diciembre de 1955 se deliberó exclusivamente acerca de los tratados comerciales hasta 1960. Los miembros más pequeños del Comecon aprovecharon este tiempo para aumentar su comercio con Occidente, que les permitía introducir nuevas tecnologías, si bien a una escala modesta. La mayor sintonización de las economías

nacionales, acordada en 1954, entrañaba sobre todo para los países de menor desarrollo industrial el peligro de un sensible recorte de su propia industrialización en evitación de evoluciones paralelas y del desarrollo de una excesiva capacidad por parte de los miembros más desarrollados del Comecon y al tiempo impedía el desarrollo de ramas industriales muy rentables y de gran porvenir. Hasta después del XX Congreso del PCUS, celebrado del 18 al 25 de marzo de 1956, no se reunió de nuevo el Consejo, que estuvo completamente marcado por los objetivos económicos fijados por Moscú. El hundimiento de las tasas de crecimiento en 1955-56 dio pie para que inmediatamente se impulsara la coordinación propuesta en 1954. Se discutió sobre la utilización óptima de las capacidades existentes, sobre cuestiones de emplazamiento y finalmente sobre la racionalización del proceso general de producción; se estableció una división del trabajo entre los Estados miembros, con excepción de la Unión Soviética, para la construcción de maquinaria; y se coordinaron también, a instancias soviéticas, los planes de producción e inversión. Para intensificar el trabajo conjunto en el terreno económico y técnico, se constituyeron las diez primeras comisiones permanentes de expertos, que iniciaron en la época posterior un intercambio activo de especialistas, conocimientos y experiencias entre los países miembros. Para facilitar la compensación en el comercio exterior, el Consejo estableció en 1957 un sistema de *clearing* a través del banco estatal soviético que, sin embargo, no podía efectuar compensaciones multilaterales, por lo que de hecho sólo se creó un nuevo instrumento de control soviético para el comercio (bilateral) entre las democracias populares. De todos modos, con ello el Consejo disponía de cifras concretas para sus transacciones. Pero, por lo demás, había que reconocer que las exigencias planteadas hasta entonces por la Unión Soviética habían supuesto una carga excesiva para las economías nacionales. La escasez de fuentes de energía y materias primas había obligado a una disminución de las inversiones de un 20% aproximadamente, con la correspondiente reducción de los objetivos de la planificación. Los métodos de producción, que todavía requerían mucho material, habían chocado con una barrera que exigía no sólo una reorientación y la introducción de nuevas tecnologías, sino también una revisión de los sistemas de planificación y dirección, y una planificación a largo plazo del desarrollo global. Entretanto el problema se había hecho tan grave que sobrepasaba las competencias del Consejo y de los funcionarios económicos; los intereses nacionales bloqueaban la posibilidad de hallar una solución, como se puso de manifiesto en la oposición a los intentos de

división del trabajo por parte de los países más agrarios, especialmente Rumania, Bulgaria y Albania; la solución sólo era posible a nivel político.

Cuando los dirigentes del Partido de los países del Comecon se reunieron en Moscú en marzo de 1958 gracias a la enérgica gestión de Jruschov, no sólo se hallaban bajo la presión de sus propias dificultades económicas, que habían obligado a interrumpir el plan quinquenal en curso, sino también bajo el efecto de la integración económica de Europa occidental iniciada con la creación de la CEE y el Euratom el 1 de enero de ese mismo año. Los países del Comecon estaban todavía muy lejos de lograr una integración análoga a pesar de que desde 1955 venían cooperando en el campo de la energía nuclear y de que en 1956 había iniciado su labor el centro de investigación conjunta de Dubna, cerca de Moscú. Jruschov insistía constantemente en una división del trabajo especializada y específica de cada país, de la cual se esperaba un aprovechamiento más efectivo de las capacidades y de los medios de inversión existentes. Nuevamente encontró para ello el apoyo de los países industrialmente más avanzados, es decir Checoslovaquia y la RDA, mientras que los demás Estados miembros mantuvieron sus reparos y no se pudo llegar a un acuerdo sobre una auténtica solución. De todos modos, en la siguiente reunión del Consejo, que se celebró en Praga en el mes de diciembre, se decidió mejorar el suministro de petróleo a los países miembros mediante la construcción conjunta del «oleoducto de la amistad» y proporcionar así una base de materias primas para los planes de Jruschov, encaminados a fomentar la industria química. Para ello había que ganarse también a los países «agrícolas», pues solamente la producción de abonos debía aumentar un 300% a fin de impulsar la producción agrícola, crónicamente insuficiente. Al año siguiente se acordó en Tirana la especialización en este sector industrial. Sin embargo hasta este momento no se habían dado pasos fundamentales; incluso los dirigentes de la RDA, políticamente dóciles y económicamente interesados en este tema se oponían —tal como se vio en el XXI Congreso del PCUS (1959)— a la tesis de que la Unión Soviética debía permanecer al margen del desarrollo industrial y de la división del trabajo, y de que su industria debía seguir siendo más o menos autárquica en todos los sectores, si bien gracias a los acuerdos sobre cooperación técnica y científica debía poder desarrollar las experiencias obtenidas por los países miembros. Por tanto, en la reunión de diciembre de 1959 en Sofía, la Unión Soviética tuvo que hacer concesiones. Hasta entonces las decisiones del Consejo se habían tomado *ad hoc*,

siendo el superior potencial económico de la Unión Soviética lo que había garantizado su preponderancia. El estatuto del Comecon aprobado en Sofía y el «Convenio sobre capacidad jurídica, privilegios e inmunidades del Consejo de Asistencia Económica Mutua» dieron a éste por primera vez una base jurídica clara. El párrafo 3.° del artículo IV, incluido por sugerencia de Rumanía, otorgaba además una garantía legal frente a las decisiones mayoritarias: «Las recomendaciones y decisiones [del Consejo] no se aplicarán a aquellos países que han manifestado no estar interesados en el asunto en cuestión» [33]. A pesar del estatuto, la hegemonía de la Unión Soviética se mantuvo, dado que las funciones más importantes dentro de los organismos permanentes del Comecon eran desempeñadas por especialistas soviéticos. Pero la resistencia a la integración por parte de los Estados miembros persistió y Jruschov, que precisaba el apoyo de éstos en el conflicto de China, hubo de renunciar a sus ambiciones. La prioridad de los intereses nacionales se hizo patente cuando a finales de 1961 Gheorghiu-Dej anunció ante el Comité Central del Partido rumano la ampliación del comercio con los países occidentales para fomentar la industrialización rumana, naturalmente en aras de un progreso más rápido en la vía rumana al socialismo. Gomulka ya había abordado en junio de 1961 el problema fundamental, basándose para ello en el economista nacionalista polaco Oskar Lange: la afluencia de capital a los países menos desarrollados del Comecon iba cada vez más a la zaga de la afluencia a los países más desarrollados, a pesar de que justamente los primeros tenían mayor necesidad de capital para inversiones indispensables. Mientras no se estableciera una solución satisfactoria, la evolución económica dentro del Comecon habría de tener un rumbo divergente; en resumen, los países «ricos» se harían cada vez más ricos y los «pobres» relativamente cada vez más pobres, de tal modo que dentro del ámbito del Comecon habrían de surgir tensiones graves; con ello quedarían perpetuadas las diferencias en el nivel de desarrollo económico. Así se llegó al conflicto surgido en la XV sesión del Consejo en Varsovia al aprobarse el programa del Comecon «Principios de la división del trabajo socialista internacional» y decidirse la creación de una institución supranacional a la que Jruschov, a mediados de 1962, quiso adjudicar el poder de decisión sobre la actividad inversora en el Comecon y con ello lograr la dirección fáctica de las economías nacionales. Rumania se negó consecuentemente a permitir la limitación de su soberanía en el ámbito económico, para lo que invocó el principio de igualdad de derechos proclamado por Jruschov como fundamento de las relaciones

entre los países, sabiéndose segura del apoyo de China. Puesto que por lo demás Rumania cumplía sus compromisos y el orden político y social del país también respondía a las exigencias ideológicas, Jruschov tuvo que conceder a Gheorghiu-Dej su propia vía «rumana» al socialismo en 1963, con lo cual Rumania se benefició del conflicto chino-soviético, ya que Moscú no deseaba suministrar nuevos argumentos a la propaganda china. La conferencia de dirigentes de los PC, celebrada en Moscú en 1963, sólo pudo contabilizar como avance —en cierto modo como compensación por la retirada de Albania en 1961— el propósito de Yugoslavia, representada por «observadores», de asociarse al Comecon. Los intentos de Jruschov de forzar a Bucarest a un cambio de actitud mediante intimidaciones y amenazas también fracasaron; sus planes de sustituir a Gheorghiu-Dej por alguien más de su agrado endurecieron más aún los frentes y la amenaza de efectuar una revisión de fronteras en Transilvania en favor de Hungría no hizo sino fortalecer el nacionalismo rumano que, por otra parte, reivindicó de forma apenas encubierta sus derechos sobre Besarabia y la Bucovina septentrional. En tales circunstancias, la integración del Comecon no prosperó, limitándose a la coordinación del comercio exterior de los países del Comecon y su planificación económica, que se hizo por ello aún más compleja, burocrática e inflexible. Pero con ello no se superó la crisis de crecimiento de las economías nacionales del Comecon que éstas atravesaron en la primera mitad de la década de 1960. Y puesto que la estructura de las relaciones económicas interestatales hasta entonces existentes no era suficiente para superar los problemas y la solución supranacional estaba bloqueada, sólo quedaba la vía nacional, es decir la reforma de la economía propia de cada país. En este sentido los diversos países del Comecon habrían de seguir en lo sucesivo caminos diferentes.

e. *Experimentos económicos*

La concesión soviética de una igualdad de derechos esencial a todos los partidos comunistas y países socialistas, que puso fin en Europa oriental a la fase de estructuración monolítica del imperio soviético y estableció en su lugar una comunidad de Estados ligados por los principios de la doctrina del partido comunista y por los objetivos conjuntos, llevó a una evolución muy diferente en cada uno de los Estados, con lo que la colaboración socialista planteó problemas inesperados a los dirigentes soviéticos. La idea de sí mismo tenía el PCUS requería que la Unión

Soviética desempeñase el papel rector, pues por una parte tenía una amplia experiencia y había sido la primera en modificar revolucionariamente la estructura socioeconómica de su país y por otra parte —a excepción de Yugoslavia y China— los demás regímenes comunistas de Europa oriental habían logrado llegar al poder únicamente gracias a la aplicación masiva de los instrumentos de poder soviéticos. No fue casualidad por tanto que en los casos de conflictos de intereses entre Moscú y otros Estados socialistas se hablara públicamente de desagradecimiento y tampoco fue casualidad que Yugoslavia y China, donde los comunistas se habían hecho con el poder sin la ayuda soviética, pudieran sustraerse a la influencia soviética. El intento de Jruschov de crear una nueva instancia central de dirección del movimiento comunista internacional, que fracasó justamente a causa de esta autoconcepción soviética, le creó problemas con Yugoslavia y China, en los que necesitó el apoyo de los regímenes antes satélites y ahora aliados, lo que contribuyó a su revalorización y a una nueva concepción del papel que debían desempeñar. La mayor autoconciencia adquirida por los gobiernos de las democracias populares, que había experimentado una especie de impulso inicial con la crítica interna soviética al estalinismo, esto es a un régimen en definitiva soviético, se acrecentó especialmente a través de los probemas con los que se enfrentaron los países del Comecon a principios de la década de 1960, que hicieron indispensable una reforma profunda de la estructura del modelo económico soviético.

Ya a mediados de la década de 1950 se habían discutido en las democracias populares, y sobre todo en Polonia, en el círculo del economista nacionalista Oskar Lange, planes de reforma, pero estos planes se habían quedado en un nivel académico al hacer el levantamiento húngaro que tanto las direcciones de los Partidos como las burocracias se amedrentaran por el riesgo que suponían las reformas. Por lo demás, la evolución económica, positiva en su conjunto, de la segunda mitad de la década de 1950, con una renta nacional creciente y unas altas tasas de crecimiento de la producción industrial, daba pie al optimismo. Esta evolución resultó beneficiosa sobre todo para Jruschov, que con ello se sintió justificado frente a quienes le criticaban. Así, aceptó el desafío cuando Mao Zedong, en 1959, invocando su teoría de la revolución proletaria campesina, explicó que con el establecimiento de las «comunas populares» campesinas China había alcanzado el estadio de la transición al comunismo. Al año siguiente, Jruschov hizo lo propio con la Unión Soviética y el nuevo programa del PCUS, aprobado en el XXII congreso del

Partido (17-31 de octubre de 1961 en Moscú) tras una minuciosa discusión, ratificó esta nueva etapa alcanzada por la Unión Soviética en la vía hacia el comunismo. (El hecho de que en este congreso se asociaran las nuevas «revelaciones» sobre el estalinismo y sus adeptos en la Unión Soviética con ataques contra el estalinista albanés Hoxha evidenciaban cuál era el objetivo.) Su anuncio de que en el año 1980 la URSS alcanzaría el estadio del comunismo y aventajaría económicamente a los Estados Unidos suscitó serias dudas ya entonces, aunque es cierto que en el programa del Partido se había formulado la salvedad de que la aspiración contenida en la fórmula «De cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades» no podía ser interpretada en absoluto de manera individual, sino que era el Partido quien había de determinar las necesidades. [Gracias a esta nueva etapa en la evolución de la Unión Soviética, el solícito régimen de Praga fue autorizado en 1960 a proclamar oficialmente la transformación de la República de Checoslovaquia (CSR) en la República Socialista de Checoslovaquia (CSSR), sin perjuicio del «papel rector» soviético, paso que en breve darían también los demás Estados socialistas.] Muy pronto se puso de manifiesto que el optimismo de Jruschov era infundado. El rápido descenso de las tasas de crecimiento cuestionó el desarrollo económico conjunto; los resultados de los planes anuales fueron tan alarmantes que tanto los dirigentes del Partido como la burocracia económica tuvieron que optar por una revisión de todo el sistema. El sistema de consejos económicos, creado en 1957 para superar la inmovilidad de las instancias centrales, sólo había servido para acumular dificultados en la economía dirigida. Si bien es cierto que quienes tenían el poder de decisión se habían acercado con ello a la base de producción, en lo fundamental no había variado nada, pues el plan establecido a partir de los indicadores extraídos de las estadísticas seguía siendo el fundamento de todo el desarrollo económico y los indicadores se basaban en los informes de producción de la base, difícilmente controlables. (El control de las cifras de producción comunicadas por las empresas era de la incumbencia del comité de empresa del Partido, el cual intervenía en los pagos de primas y sobre el cual también recaía el descontento del personal cuando no ratificaba los informes.) Además, los 105 sovnarjoses consideraban prioritarios sus intereses regionales y ya en 1958 habían expuesto sus quejas al respecto. Para contrarrestarlas y salvaguardar las prioridades económicas generales fue necesario dotar al Gosplan de un poder de decisión cada vez mayor que a su vez restringió el de los consejos económicos. Pero con ello las em-

presas obtuvieron una mayor autonomía y se produjo una zona ciertamente indefinida que no todos los ejecutivos utilizaron para el bien común. La introducción de la pena de muerte para determinados delitos económicos el 7 de mayo de 1961 fue una señal de alarma. Puesto que la descentralización no había conseguido el éxito esperado, se volvió a recurrir al medio ya probado de la centralización de la economía dirigida. Ya en 1962 se creó un gran número de comités estatales que sin embargo tenían una función indicativa, pero no capacidad ejecutiva. Se sucedieron algunos experimentos más, de corta duración, y finalmente, en 1962, se redujo el número de los sovnarjoses; no se libró de la búsqueda febril de un remedio ni siquiera la propia organización del Partido, que en 1962 se dividió en una sección industrial y otra agrícola. Así pues, 1963 trajo consigo una situación en la que ya nadie sabía a quién correspondía cada competencia, y se dejaron oír las primeras críticas. La «campaña de la química» de Jruschov, que tenía por objetivo triplicar la producción del sector químico en el espacio de siete años, estaba en conexión con los nuevos cambios del Plan que afectaban a todos los sectores de la producción. Otras prioridades divergentes del Plan denotaban también la misma precipitación, al no haber sido maduradas y ser el resultado de decisiones espontáneas. Esta búsqueda casi febril de remedios institucionales para aumentar la eficacia económica, que iba acompañada de estímulos psicológicos a la producción, constantemente renovados pero pronto inútiles, se explica por el rápido retroceso del crecimiento económico, reflejado en las tasas de crecimiento de las inversiones. En 1958 el crecimiento era de un 13%; en 1961 había bajado hasta un 4% y en los dos años siguientes alcanzó un 5%. En 1963 el producto nacional bruto llegó incluso a un aumento de tan sólo un 2,5%, lo cual sin embargo se debió en gran parte al mal resultado de las cosechas. Al mismo tiempo aumentaron las exigencias económicas del país debido al comienzo del rearme y a la modernización de las fuerzas armadas, pues solamente la construcción de cohetes y la introducción de sistemas de armamento electrónico absorbían el potencial, por otra parte no excesivo, de alta tecnología y exigían además un capital enorme (tan sólo en 1961 los gastos de armamento se elevaron en un 30%)[34].

El desarrollo de la agricultura planteaba problemas similares. El plan septenal iniciado en 1959 preveía un aumento de la producción de un 70%; el crecimiento efectivamente alcanzado ascendía en 1965 a un 14%. Este fracaso de la política agraria de Jruschov estuvo motivado en gran medida por el fracaso de

la reforma del sistema de koljoses de 1958. La reforma se basaba en la idea de conceder a los koljoses mayores competencias económicas y revitalizar así sus propias iniciativas. Pero al faltar medidas adicionales que hubieran servido de apoyo a la autodeterminación, el efecto final fue un aumento de sus cargas, de modo que lo que había sido concebido como estímulo a la producción acabó siendo un freno para ésta. Con la supresión de los parques de máquinas y tractores, los koljoses se vieron obligados a comprar las máquinas y aperos de labranza necesarios, lo cual hizo que se elevaran los costos de la producción. Pero los precios de venta de los productos agrícolas no se elevaron en consonancia y además se carecía de personal técnico cualificado, cuya emigración al sector de la industria, al bajar los ingresos de los koljoses, no se pudo impedir. Puesto que ni los precios ni la normativa de cultivo estaban diferenciados por regiones y puesto que no se tenían en cuenta condiciones naturales como el clima o la calidad del suelo, sólo los koljoses de las zonas de tierras negras y las explotaciones agrícolas especializadas (por ejemplo en el cultivo del algodón) podían prosperar y esto en condiciones meteorológicas favorables. Jruschov intentó constantemente mejorar la producción agrícola mediante nuevas «campañas» pero, aparte de la inseguridad que con ello provocó, no consiguió ningún éxito duradero. Las medidas tomadas en el contexto de la «transición al comunismo», tendentes a suprimir los cultivos privados de los koljosianos, reliquias de la forma de producción capitalista, no sólo llevaron a un retroceso de esta producción agrícola privada (que suponía la cuarta parte de la producción agraria del país) sino que amenazaron también con quitar a los campesinos su más importante fuente de ingresos sin poder encontrar una compensación a cambio de su mayor esfuerzo en el marco del koljós. En cualquier caso, ello no constituyó un estímulo a la producción.

Esta crisis condicionada por el sistema no podía ser abordada con experimentos organizativos, ni con parches, y mucho menos podía remediarse con un cambio de ministro tomado por chivo expiatorio. El reconocimiento de la necesidad de auténticas reformas fue ganando terreno paulatinamente entre los dirigentes del Partido; solamente así es explicable que el periódico del Partido, *Pravda,* publicara en otoño de 1962 el artículo del economista soviético Liberman en el que éste, en la línea de las ideas del economista polaco Oskar Lange, proponía una participación de las empresas en la confección del plan para evitar las revisiones continuas de sus datos con sus consecuencias negativas y proponía además una fijación de los precios que cu-

briera los costes para lograr una producción más racional y suprimir el entramado poco claro de las subvenciones. Con esto, lógicamente no sólo atrajo las iras de la burocracia central; el Pleno del CC de noviembre de 1962 le advirtió que la tarea de la economía soviética no consistía en la obtención de beneficios sino en la satisfacción de necesidades, respuesta de unos dogmáticos que, de la forma más evidente, eludían las propuestas de Liberman. Sólo cuando los días 14 y 15 de octubre de 1964, en la sesión del Comité Central, Jruschov perdió su puesto en el Partido y en el gobierno —de forma asombrosa para el resto del mundo— quedó libre el camino para emprender las reformas.

III. EL GOBIERNO DE BREZNEV

a. *Reformas económicas*

Al igual que tras la muerte de Stalin, tras la caída de Jruschov se resucitó el «principio leninista de la dirección colectiva». Leónidas Ilich Breznev, presidente del Soviet Supremo de la URSS desde 1960, se hizo cargo de la dirección del Partido. Los asuntos de gobierno fueron dirigidos por Alexei Nikolaievich Kosiguin, que había sido lugarteniente de Jruschov en este cargo y era una persona de fría exactitud y meticulosidad exagerada que por su carrera conocía a fondo tanto la burocracia estatal y económica como los problemas inmediatos. Hasta su muerte (1980) dirigió el enorme y extremadamente complicado aparato burocrático del país con éxito considerable, trabajo éste difícil de apreciar en todo su valor. Como tercer hombre de esta *troika* actuó en un principio Anastas Mikoyan, ocupando el cargo de jefe del Estado pero, como justamente durante las reformas económicas no se podía prescindir de su competencia, tuvo que ser sustituido en su cargo de jefe del Estado en 1965 por el anodino Podgorny, hasta que por fin en junio de 1977 asumió esta función el propio Breznev. Breznev y Kosiguin, principales protagonistas de la escena política soviética, desarrollaron a lo largo de una década y media un buen trabajo conjunto. Breznev se dedicó sobre todo a los asuntos del Partido —ya en noviembre de 1964 deshizo la reorganización de Jruschov— y de acuerdo con las exigencias de aquél se dedicó a la dirección política del país propiamente dicha, mientras que Kosiguin asumió la dirección del aparato estatal en cuanto órgano ejecutivo de la voluntad política del Partido.

La nueva dirección del Partido y el Estado comenzó ya en 1965 a dar los primeros pasos hacia una reforma económica en la línea de las ideas de Liberman que originó un cambio profundo en la economía soviética y mejoró la situación social de amplios sectores de la población, sobre todo los miembros de los koljoses. En comparación con los bruscos y breves experimentos (inmanentes al sistema) de Jruschov, demostró ser mucho más consecuente y perseverante en cuanto a los fines fijados. La dinámica postestalinista pareció canalizarse hacia objetivos claros a largo plazo que, salvaguardando explícitamente las cuestiones ideológicas básicas, es decir la economía centralizada, tendían a un proceso de adaptación permanente a unas exigencias económicas siempre cambiantes. Independientemente de cómo se juzguen las diferentes medidas desde una óptica occidental, no se puede dejar de apreciar que, en su conjunto, las reformas dieron lugar a un aumento de la eficacia económica, al igual que un afán permanente de suprimir sistemáticamente los puntos débiles.

El plan agrícola de marzo de 1965 indicaba ya un defecto manifiesto: la falta de capital y de estímulos a la producción en el sector agrario. A pesar de la «campaña de nuevas tierras» de Jruschov, que había ampliado la superficie de cultivo de cereales, la producción agraria total del país quedó por debajo de las expectativas. A esto se unía el hecho de que en el sector industrial se perfilaba una escasez de mano de obra que, dada la baja productividad *per capita* de la agricultura tampoco podía resolverse mediante un trasvase mayor de población campesina a la industria. Ambos aspectos presionaban para elevar perceptiblemente la eficiencia de las explotaciones agrícolas, es decir lograr una racionalización y una mecanización mayores. Pero para ello faltaban capital y estímulos a la producción. El plan agrícola debía propiciar el cambio; las cuantiosas deudas de los koljoses fueron canceladas y se aumentaron considerablemente las inversiones en el sector agrario. Aparte de esto las cuotas (estatales) de suministros de los koljoses se redujeron, lo cual les permitió poner a la venta mayores cantidades de alimentos en el mercado libre para los que además se acordó elevar los precios. Paralelamente a esta afluencia de capital, considerando la diferente rentabilidad de cada koljós, determinada por la calidad del suelo, etc., se implantó un sueldo fijo para los miembros de los koljoses que puso fin a la total dependencia existente hasta entonces con respecto a las ganancias obtenidas al margen del producto de sus cultivos privados. La implantación de pensiones de vejez estatales para los miembros de los koljoses fue el comienzo de una serie de medidas con las que se mejoró la

situación de la población campesina y con las que se equiparó a esta capa social, hasta entonces carente de privilegios, con el resto de la población.

En septiembre de ese mismo año el Comité Central decidió implantar también en el sector industrial el «principio de los incentivos materiales» como estímulo a la producción. Las empresas obtuvieron de los «fondos sociales» medios para el pago de primas, etc. (los baremos en los que se basaban para ello experimentaron en los años siguientes cambios de diversa índole; a partir de 1981 se introduciría también una participación en los beneficios) a fin de remunerar el rendimiento personal. En el curso de las reformas también se reconoció a las empresas un cierto derecho de participación en el establecimiento de los planes; sobre todo en el sector de la industria de bienes de consumo se hizo un esfuerzo por introducir los criterios de rentabilidad y demanda a la hora de hacer la planificación; en el sector de la industria de bienes de equipo se siguió manteniendo el viejo sistema de determinación centralizada de los datos de la planificación para poder así imponer mejor los objetivos políticos del desarrollo económico general, fijados por la dirección del Partido y realizados por el aparato estatal.

Pero todas las disposiciones administrativas para aumentar la eficiencia económica y todos los esfuerzos de los empleados seguían tropezando con limitaciones. La ampliación de la moderna producción industrial —la cifra de los métodos de producción pasó de 120 en el año 1918 a más de 400 a finales de la década de 1970— había agotado el potencial de mano de obra del país; un crecimiento económico mayor sólo podía alcanzarse a través de la racionalización, es decir introduciendo técnicas nuevas. Bajo la presión de la época y en competencia con la economía «capitalista», los dirigentes soviéticos, mediante importaciones procedentes de países industriales occidentales —tanto en forma de maquinaria, como de plantas completas de producción, licencias o patentes— impulsaron en buena medida la modernización de la economía, e incluso de ramas enteras de la producción, como por ejemplo la industria química, aunque por supuesto procurando que no surgiera ningún tipo de dependencia en el sector de los bienes estratégico-militares (por ejemplo con los suministros de piezas de recambio). La decisión de los dirigentes soviéticos de llevar a cabo estas medidas económicas de reforma se vio cuando menos favorecida por el éxito de los cambios que previamente había introducido la RDA en su política económica. La rápida caída de las tasas de crecimiento económico de un 12% en 1959 a un 6% en 1961 hizo que los dirigentes de la RDA,

tan conservadores en otras ocasiones, hicieran suya la discusión soviética sobre las reformas. Ya en el año 1962 se intensificó la influencia de los especialistas en el sector económico, influencia que más tarde, en 1963, hallaría también expresión numérica en la composición del nuevo Politburó del SED. La RDA, al igual que Checoslovaquia, contaba con una gran tradición industrial, una tecnología relativamente alta, una buena infraestructura y también una estructura económica compleja, de modo que la eficiencia del sistema económico era aquí más visible que en los países menos desarrollados del Comecon. A la vez, las escasas dimensiones geográficas del país facilitaban considerablemente la dirección y el control de la economía, frente a la Unión Soviética por ejemplo. A ello se añadía las especiales ambiciones de los dirigentes de la RDA tanto frente a los demás países del Comecon, en cuyo seno había tenido que luchar mucho tiempo este Estado de la Alemania dividida para conseguir el debido reconocimiento, como frente a la República Federal, que había alcanzado más éxitos económicos e internacionales. Así pues, móviles económicos y políticos impulsaron a aumentar la eficacia económica. Los planes económicos de la RDA —que presumiblemente no fueron puestos en práctica sin el consentimiento de Moscú— se beneficiaron tanto del debate interno soviético, mantenido abiertamente desde 1962, como del mayor peso específico y del más amplio margen de decisión que proporcionó a los países del Comecon la debilidad de los dirigentes soviéticos resultante de su conflicto con China, con las consecuencias y problemas económicos que de él se derivaron.

Ya en el VI Congreso del SED (15-21 de enero de 1963), Ulbricht, en su declaración de principios, anunció una nueva política económica cuyas directrices fueron establecidas en el mes de junio por los organismos competentes del Partido y el Estado. El «nuevo sistema económico de planificación y dirección» rompió con toda una serie de tabúes de la política económica estalinista y con algunos tópicos socialistas, utilizando sin vacilaciones préstamos del sistema «capitalista». Los estímulos a la producción del sistema de primas, hasta entonces tímidamente encubiertos, fueron abiertamente introducidos como «principio de incentivos materiales», puesto que los llamamientos a la conciencia ideológica y a la moral socialista habían demostrado no ser suficientes. En las empresas, la «ganancia», hasta entonces proscrita, fue erigida en principio rector. Pero la desestalinización de la política económica fue aún más lejos. Al organismo estatal de planificación sólo le correspondió una función de dirección y coordinación, y las «agrupaciones de empresas naciona-

lizadas», convertidas en una especie de trusts socialistas *(«Kombinate»),* consiguieron dentro del plan económico a largo plazo una considerable autonomía que desde 1971 abarcó incluso el comercio exterior. Las competencias de las empresas en cuestiones como la obtención de créditos o la adquisición de material se ampliaron. Esta descentralización se completó con la implantación de una «cogestión obrera» que debía servir de estímulo para las iniciativas de todos los miembros de las empresas, a través de la «palanca económica» de las primas, pero mayores repercusiones aún tuvo la supresión del sistema de precios fijos que se había dado hasta entonces, basado en el nivel de precios de 1936. Este sistema había forzado a una práctica de subvenciones que apenas podía mantenerse y amenazaba con hacer totalmente insoluble el caos de precios y costes. A partir de entonces se exigió a las empresas que llevaran una contabilidad. Pero la implantación del principio de rentabilidad y la determinación de los precios de modo que cubrieran los costes condujo inevitablemente a una reforma de los precios cuya implantación en el sector industrial se inició en 1964 y que más tarde se iría extendiendo. Solamente los alimentos básicos y la mayoría de las prestaciones sociales continuaron estando subvencionadas. (En una época posterior, el ajuste de los precios, que se intensificó aún más con la orientación hacia el mercado mundial, provocó una inflación solapada que obligó a efectuar una adaptación de los salarios y más tarde también de las pensiones.) Esta reforma, a pesar de los recortes centralistas, dio a finales de la década de 1960 un nuevo impulso a la economía de la RDA suscitó nuevas iniciativas y aumentó la identificación de los trabajadores con su actividad y su empresa. De ese modo se pudo superar la recesión de los años siguientes y se logró la incorporación al desarrollo económico de los países industriales modernos. A ello contribuyó en gran medida la importación de nuevas tecnologías y conocimientos de los países occidentales, aunque los planes para una mayor orientación hacia el mercado mundial que albergaba el especialista en economía de la RDA, Erich Apel, se vinieron abajo ante el veto de la Unión Soviética en 1965.

Los demás países del Comecon —excepción hecha de Polonia, que al siguiente año puso en práctica las reformas anunciadas en julio de 1964— no tomaron medidas para modificar sus economías hasta después de la reforma soviética; en Bulgaria, los acuerdos correspondientes entraron en vigor en 1966, en Checoslovaquia y Rumania en 1967 y en Hungría en 1968. Se puede establecer como rasgo básico el abandono del crecimiento extensivo propio del estalinismo y su tendencia unilateral hacia una

maximización de la producción; se intentó elevar fuertemente la eficiencia económica mediante un uso más racional de los medios de producción, llevando a cabo análisis de costes y beneficios; el incremento de la producción no se habría de conseguir ya primordialmente mediante un mayor empleo de trabajo y capital, sino mediante el aumento de la productividad. El comercio exterior, que hasta entonces sólo había servido para obtener divisas con que pagar las importaciones necesarias, se constituyó en factor de crecimiento. Las inversiones dejaron de ser financiadas con el presupuesto del Estado para serlo con los beneficios de las empresas y con ayuda de los bancos y se redujeron las subvenciones de forma radical. Se intentó afrontar las contradicciones entre los órganos de planificación y las unidades inferiores, es decir las empresas, mediante el traspaso del poder de decisión al plano medio o inferior. Aunque el instrumental de la «palanca económica» y los índices cualitativos se manejaron en épocas posteriores de diversas maneras, en lo fundamental no hubo cambios.

Los acontecimientos de 1968 en Checoslovaquia provocaron en los demás países —con excepción de Hungría— una cierta recentralización (como en la RDA con la creación de los *«Kombinats»),* pues se tenía el temor de que una descentralización económica de gran amplitud llevara también a una pluralización de la sociedad. En concreto, las reformas presentaron considerables diferencias en cada uno de los países, condicionadas en parte por las posiciones ideológicas de las cúspides de los partidos, pero debidas también, por otra parte, al diferente estado de desarrollo de cada una de las naciones. Hungría fue el país que llevó más lejos su reforma; aquí se dotó a las empresas (igual que en su vecina Yugoslavia desde 1965) de competencias que permitieron poner en práctica una especie de «economía de mercado socialista», mientras que en Rumania y Bulgaria, los dos países de menor desarrollo, la descentralización continuó siendo cuidadosamente dosificada. En el marco de estas modificaciones económicas se intentó también afrontar la desproporcionalidad estructural provada por el fomento unilateral del crecimiento. Para ello, siguiendo el modelo yugoslavo, se recurrió a la iniciativa privada en el sector de la artesanía y en las industrias de servicios, tal vez considerando que ello sería más efectivo. Hungría había empezado ya en 1963 a fomentar el desarrollo de empresas artesanales; Polonia siguió pronto su ejemplo, y finalmente el descubrimiento del turismo como fuente de divisas y su desarrollo hicieron surgir una industria privada de dimensiones limitadas dedicada a la artesanía y a la prestación de ser-

vicios (sobre todo en el ramo de la hostelería) también en Bulgaria y Rumania. Incluso la RDA, tan estrictamente socialista, a finales de la década de 1970 se vio en la necesidad de hacer concesiones ante la desaparición de determinados oficios necesarios para el abastecimiento de la población. Aun cuando en este caso se tratara de una cantidad despreciable tanto por el número de oficios como por el de empresas, ese paso dado es en principio digno de tenerse en cuenta.

Unas reformas económicas de tal alcance no podían darse sin repercutir en el propio Consejo de Asistencia Económica Mutua. Tras el frustrado intento de integración de Jruschov, se carecía aquí de una concepción nueva y de iniciativas importantes, e incluso existían ciertos peligros derivados de la tendencia a la modernización y a la racionalización, pues estas medidas, encaminadas a elevar la productividad, sólo podían llevarse a cabo mediante un aumento de las importaciones de los países industriales occidentales, visible por otra parte desde mediados de la década de 1960. Del lado soviético también se vio el peligro que causaría para su posición hegemónica una mayor orientación económica hacia Occidente —el veto a los planes de la RDA en 1965, por considerar que iban demasiado lejos, así lo demuestra— pero hubo que ceder ante la presión de los imperativos económicos en la propia Unión Soviética. No se podía hacer caso omiso de los signos de la crisis: productividad laboral decreciente, disminución en el rendimiento de las inversiones y escasez de mano de obra. Especialmente problemática era la financiación de las importaciones. Dado que los productos de los países del Comecon sólo en escasa medida eran competitivos en el mercado mundial y que las repercusiones de las reformas habían producido un cambio todavía limitado, las exportaciones de materias primas y alimentos siguieron siendo las fuentes más importantes de divisas (excepto en la RDA y Checoslovaquia, con mayor capacidad de producción). Ciertamente, los beneficios no eran suficientes para cubrir los costes de las importaciones, por lo que era necesario utilizar créditos considerables. El aumento total de las importaciones occidentales por parte del Comecon, cuyo valor llegó a representar en 1973 casi un 32% del total de las importaciones de los países del Comecon, provocó un endeudamiento creciente que en el caso de Polonia llevó a la economía nacional hasta el límite de su capacidad; Rumania, Hungría y la RDA también presentaron una tasa alta de endeudamiento, mientras que Checoslovaquia y Bulgaria, al igual que la Unión Soviética, pudieron claramente contenerla.

Este cambio de orientación de la política de exportación tenía que repercutir en el mercado interior del Comecon mientras las medidas de modernización no produjeran el correspondiente aumento de la producción. No obstante, la Unión Soviética no pudo realizar hasta principios de la década de 1970 sus planes de llevar adelante la integración del Comecon mediante la creación de instrumentos de dirección supranacionales, pero los egoísmos nacionales, con su tendencia creciente a dar preferencia a las exportaciones occidentales, pusieron en peligro la evolución conjunta; las presiones económicas en contra de Rumania tampoco tuvieron consecuencias favorables. Por el contrario, Hungría y Polonia impulsaron la reforma del Comecon. Hungría, cuyo «nuevo mecanismo económico», elaborado ya en 1965-66 y en vigor desde 1968, introducía una orientación de mercado en la economía, exigía una revisión a fondo de la práctica del Comecon. Las propuestas húngaras iban encaminadas de hecho a una regulación del comercio entre los países del Comecon mediante mecanismos de mercado; aquí había que solucionar cuestiones como el tipo de cambio, las concesiones de créditos, la convertibilidad y la multilateralidad, y fijar unos precios que cubriera los costes. Economistas políticas polacos y checoslovacos hicieron propuestas similares en el debate sobre la reforma que dominó la sesión del Consejo de diciembre de 1967. «Los puntos de vista de la URSS en 1957 eran un tanto enigmáticos, lo que reflejaba en parte el hecho de que, desde que Jruschov había planteado en 1962 la cuestión supranacional y había sido derrotado, la URSS sabía lo que no quería para el Comecon mucho mejor que lo que quería para éste»[35]. Entre los motivos que indujeron a los dirigentes soviéticos a dudar a la hora de tomar una decisión, además de su mentalidad siempre conservadora, atenta a preservar los instrumentos de dominio ya conocidos, y de una cierta inseguridad de los nuevos dirigentes, figuraba la incertidumbre acerca del efecto que podían producir en la economía soviética las medidas reformadoras introducidas en septiembre de 1965. Por tanto, se intentó aplazar la decisión, que oscilaba entre una mayor orientación hacia el mercado y el dirigismo tradicional.

Pero los sucesos de Checoslovaquia del año siguiente evidenciaron el peligro de una cooperación económica más estrecha con las naciones occidentales industrializadas. Para conjurarlo se optó por un nuevo impulso integrador. En la conferencia de jefes de Partido y de gobierno de los países del Comecon, celebrada del 23 al 26 de abril de 1969 en Moscú, se utilizó oficialmente por primera vez el concepto de «integración socialista»

y se decidió crear un banco de inversiones del Comecon. Sin embargo, no se efectuaron las reformas fundamentales. Ante la oposición de la que Rumania se constituyó en portavoz, los representantes soviéticos declararon con resignación durante el debate de 1968 que consideraban suficiente la estructura existente del Comecon si se empleaba de forma pragmática el instrumental disponible. En tales circunstancias, la integración del Comecon no prosperó en lo esencial, limitándose a la coordinación del comercio exterior de los países del Comecon y la planificación de su economía que se hicieron con ello aún más complejos, burocráticos e inflexibles. Con todo, las comisiones permanentes, cuyo número aumentó a veinte hasta el año 1971, contribuyeron con sus recomendaciones a una cierta especialización y cooperación en determinados ámbitos, y la actividad del Banco Internacional de Cooperación Económica, fundado en 1964 como cámara de compensación multilateral del Comecon, y finalmente la implantación del rublo transferible trajeron un cierto avance. Los aspectos centrales de la actividad del Comecon, formulados en el «programa conjunto» en la XXV Asamblea del Consejo (julio de 1971), siguieron siendo los problemas de la división del trabajo entre los países del Comecon, la coordinación de los planes económicos (también a largo plazo), la cooperación científico-técnica, la concesión de créditos y la realización de grandes proyectos conjuntos. A pesar de la intensa discusión sobre las relaciones financieras y monetarias no se progresó en la necesaria reforma de la fijación de precios. Sólo los drásticos aumentos a nivel mundial del precio del petróleo, que reforzaron la influencia del gigante económico que era la Unión Soviética sobre los demás países del Comecon, llevaron a una revisión del mecanismo de fijación de precios que, sin embargo, no sirvió para solucionar el problema.

b. *La Primavera de Praga y la doctrina Breznev*

La herencia que había recibido de Jruschov la nueva dirección soviética resultaba muy pesada. Con todo, la tarea de modernizar la economía del país tanto en el ámbito de la producción como en el de la dirección era relativamente fácil. Teniendo en cuenta la capacidad de inversión y las disponibilidades de personal, no era solucionable en un abrir y cerrar de ojos, pero sí paso a paso. Más difícil era, en cambio, conjugar las tendencias divergentes en el seno del Comecon, puesto que éstas se hallaban estrechamente relacionadas con la escalada del conflicto

chino-soviético. La escisión en el comunismo internacional, que alcanzó su punto culminante en 1964 con las reivindicaciones territoriales chinas frente a la Unión Soviética (regiones de Amur y Usuri, así como de las situadas junto a la frontera con Kazakistán), resultó irreversible, agudizándose incluso las divergencias con la China de Mao Zedong hasta finales de la década de 1960. Es difícil determinar qué parte de culpa tuvo en ello la intransigencia de Mao, pero la brusquedad de sus decisiones políticas, aun cuando pudiera ser entendida por la impaciencia de su voluntad de modernización revolucionaria, malograda en su dimensión temporal, por fuerza había de asustar a los nuevos hombres fuertes del Kremlin, que actuaban con ponderada serenidad y más bien con vacilaciones tras las experiencias vividas con el gusto de Jruschov por la experimentación. Su irritación ante el «carácter aventurero» de la política maoísta se intensificó con el caos de la «Revolución cultural» china; los ataques contra la representación diplomática soviética en Pekín, que hicieron que la Unión Soviética retirase a su embajador y que este puesto quedara varios años vacante, no hicieron sino documentar el grado de distanciamiento por ambas partes. En el transcurso de los años 1968 y 1969, precisamente cuando la política soviética respecto al Comecon y a Occidente se hallaba en una situación difícil, este distanciamiento aumentó hasta convertirse en abierta enemistad. En marzo de 1969, en el curso de la controversia sobre la propiedad de una isla, tuvieron lugar enfrentamientos armados muy virulentos en el Usuri y en agosto de ese mismo año se produjeron incursiones chinas en la frontera de Kazakistán. Pero dado que a ambas partes les convenía evitar un conflicto militar de graves consecuencias —Pekín por la inferioridad técnico-armamentística de China y su situación interna y Moscú por las consecuencias de su intervención en Checoslovaquia en agosto de 1968—, en septiembre de 1969 se entablaron negociaciones por primera vez para resolver el litigio. No desembocaron en acuerdo alguno, pues ambas partes persistieron en sus criterios, que siguieron inamovibles también en las negociaciones del año siguiente, igualmente infructuosas. Su incompatibilidad y el mantenimiento de las tensiones a causa de ello no eran en último término sino la expresión de las aspiraciones de poder contrapuestas de las dos grandes potencias comunistas. Aun cuando China no constituía una seria amenaza para la Unión Soviética, las acciones de Pekín habían demostrado sin embargo que existía una inseguridad en el largo y sensible flanco oriental del imperio soviético. Precisamente a causa de la imposibilidad de prever el rumbo de la política

maoísta, este hecho tuvo que ser tenido en cuenta en todas las deliberaciones políticas de la dirección soviética.

Esto limitó la política de la Unión Soviética, tanto frente a los demás países del Comecon, como frente a Occidente. En cuanto a la política interior, el cambio de dirigentes en octubre de 1964 se había efectuado casi sin fricciones por cuanto los «nuevos» hombres fuertes pertenecían a la «vieja» cúspide dirigente. Algunas concesiones habían facilitado el traspaso de poder; así, se había sabido disipar los temores de la población de que con Jruschov también hubiera desaparecido su política más favorable al consumo mediante un «regalo de entrada» [36] consistente en un aumento de las inversiones en la industria de bienes de consumo y en la construcción de viviendas, método para asegurarse la adhesión y el apoyo de la población que ya se había llevado a la práctica con éxito tras la muerte de Stalin. Mucho más difícil era reorganizar las relaciones dentro del Comecon. La «desestalinización» había destruido el dogma de la infalibilidad ideológica del PCUS, y la deserción de China y la crisis de Cuba habían quebrantado la posición hegemónica de la Unión Soviética. La «colaboración socialista» iniciada por Jruschov, si bien había llevado a una mayor flexibilidad política y económica de la política de la comunidad de Estados comunistas, también había conducido forzosamente a ampliar el margen de toma de decisiones de los gobiernos nacionales, que éstos intentaban aprovechar para fortalecer sus propias posiciones en el campo de los países del Comecon. Moscú pretendía en este sentido poner límite a los intereses nacionales rivales, de tal modo que no perjudicaran a los intereses conjuntos, sobre todo en lo referente a la política de seguridad.

La Unión Soviética había perdido sus avanzadas en el Adriático. En la controversia entre el revisionismo y el dogmatismo, Albania se había puesto del lado de China, y al igual que ésta no se dejaba doblegar por las presiones económicas de la Unión Soviética. Cierto es que la ayuda técnica y económica que Pekín se esforzó en ofrecer a Tirana no compensaba la pérdida de la ayuda del Comecon, pero gracias al escaso nivel de desarrollo del país y a las humildes expectativas de consumo de la población, el régimen logró superar la situación. Los intentos de Moscú de restablecer bilateralmente o en el marco del Comecon las antiguas relaciones con los obstinados albaneses fueron bruscamente rechazados. El líder del partido albano persistió en su repudio de la «coexistencia pacífica» y se mantuvo firme en la aplicación del sistema de gobierno estalinista como fiel seguidor de Mao Zedong. Sin embargo, esto no constituyó un obstáculo

para que se esforzara en mejorar las relaciones con otros países del Comecon. También en esto seguía a Mao Zedong, como cuando aplicó su «Revolución cultural» a Albania en 1967. Dada la hostilidad hacia la prepotente Unión Soviética, sus intentos de aliviar a su país de otras cargas en política exterior dieron lugar finalmente a una distensión de las relaciones con Yugoslavia, que había sido precisamente la precursora en aquella «conjura revisionista» de la que Hoxha hacía responsable a la Unión Soviética.

Más alarmante que la ruptura con un país tan pequeño como Albania fue para los dirigentes de Moscú la evolución de Rumania y su influencia sobre otros países del Comecon. Rumania bloqueaba de manera tenaz la especialización de las economías nacionales mediante la división del trabajo planeada por Moscú, la «nueva división internacional del trabajo de tipo socialista», al igual que la creación de instituciones supranacionales en el marco del Comecon; y entre tanto sus dirigentes estimulaban la industrialización del país con un enorme gasto de energías para superar el retraso existente en el desarrollo frente a los países más avanzados del Comecon. Puesto que los demás estados del Comecon, y sobre todo la Unión Soviética, les negaban el apoyo solicitado para ello y puesto que las relaciones económicas con los países industrializados de Occidente, intensificadas a partir de 1959, tampoco podían cubrir la demanda (a consecuencia de la falta de capital rumano), Gheorgiu-Dej apeló al orgullo nacional de la población. Las presiones soviéticas, entre ellas el burdo intento de Jruschov de derrocar al dirigente del Partido, no hicieron sino fortalecer el resurgimiento del nacionalismo rumano que, a pesar de la rigurosa renuncia al consumo impuesta a la población, creó unos lazos muy estrechos entre la nación y sus dirigentes. Dada la incompatibilidad de los puntos de vista soviéticos y rumanos, era inevitable que este nacionalismo fuera en aumento y se dirigiera contra la Unión Soviética; la historiografía fue puesta a su servicio, al igual que el arte y la literatura. Incluso se reactivaron las pretensiones rumanas sobre Besarabia, anexionada de nuevo por la Unión Soviética en 1944, que ni siquiera pudieron silenciarse tampoco con la advertencia amenazadora acerca de la minoría húngara de Transilvania. La muerte de Gheorgiu-Dej el 19 de marzo de 1965 puede que despertara esperanzas en Moscú, pero ya el 22 de marzo le sucedió como primer secretario del PC rumano su más estrecho colaborador, Nicolae Ceaucescu, que en 1963 había formulado públicamente la insubordinación de Rumania con el lema de «lo primero, Rumania».

Con la misma rapidez con la que los dirigentes rumanos se pusieron de acuerdo acerca del joven y dinámico sucesor, éste se afianzó en su posición. Era bien consciente del peligro que entrañaba la difícil aventura de Rumania entre la soberanía nacional y la intervención soviética y tenía la suficiente experiencia como para saber qué puntos de partida podían ofrecer los conflictos internos del Partido de la Unión Soviética para justificar la intervención. Por tanto la lealtad absoluta a quien pronto se aludiría con el nombre de *«conducator»* (caudillo), lealtad que iba más allá del compromiso nacional exigido y de la capacitación profesional, fue el precepto supremo de todo funcionario. Ante la amenaza exterior a esta nacionalización del PC rumano, no puede sorprender que Ceaucescu perseverara en una práctica de gobierno estalinista escasamente modificada, puesto que había probado su eficacia en épocas difíciles. Pero su alternativa —la apertura de la sociedad rumana— significaba un experimento cuyo resultado, no obstante un probable efecto de solidaridad y movilización, podía ofrecer a los soviéticos una excusa para la intervención. Se produjo un clima social semejante al de la Unión Soviética bajo Stalin; las manifestaciones de lealtad exigidas degeneraron en demostraciones serviles y la función integradora del *«conducator»* se convirtió en un «culto personal» con todos sus puntos negativos harto conocidos. A ello contribuyó con todas sus fuerzas este hombre elegido para ocupar la cima del Partido con 47 años, hecho insólito entre las jerarquías de Europa oriental. Para no enturbiar su imagen, los errores en la dirección y los fallos políticos fueron atribuidos a sus colaboradores; para asegurar su dominio fue poniendo al frente de los puestos clave del Partido y el Estado a miembros de su familia. A finales de la década de 1970, Rumania parecía una especie de propiedad privada del clan Ceaucescu.

Para contrarrestar esta política nacional y sus posibles consecuencias, el gobierno Breznev recurrió a las dos instancias supranacionales, el Comecon y la Organización del Pacto de Varsovia. Pero al igual que en las negociaciones para una mayor integración de los países del Comecon en el área económica, los rumanos supieron sustraerse también a las pretensiones soviéticas de constituir órganos de coordinación política y militar de los países miembros (que habrían funcionado de hecho como instrumentos de dirección), apelando para ello al principio de «colaboración» que se remontaba a Jruschov. A pesar de las múltiples consultas y conferencias bilaterales y multilaterales de 1965-66, los esfuerzos de la Unión Soviética para lograr la integración no avanzaron ni en el terreno económico ni en el político-militar. Las exhor-

taciones soviéticas para intensificar la unidad y la capacidad de acción del «campo socialista» mediante la creación de órganos centrales frente a la «amenaza» de la OTAN fueron inútiles. Los rumanos adujeron por contra que lo necesario para asegurar la paz mundial no era el aumento del potencial militar, sino el desarme mundial, la disolución de los bloques militares y la retirada de tropas de territorios ajenos, argumentación ésta que no sólo respondía a sus propios intereses sino que coincidía también con las exigencias de los dirigentes del Tercer Mundo.

Una obstrucción tan obstinada de los objetivos políticos de la potencia hegemónica entrañaba grandes riesgos, pero Bucarest los tenía bien calculados. Los representantes rumanos estaban seguros de contar dentro de los organismos multinacionales del Comecon y de la organización del Pacto de Varsovia con la simpatía y el apoyo parcial de otros países miembros cuyos intereses no residían precisamente en institucionalizar las aspiraciones rectoras soviéticas. También favorecía a Rumania el hecho de haber logrado establecer estrechos contactos con los países del Tercer Mundo en cuestiones tan fundamentales como la soberanía nacional y el aseguramiento de la paz internacional. Por otra parte, el gobierno rumano había entablado buenas relaciones con Yugoslavia y gozaba de un prestigio considerable en Pekín, debido a su postura mediadora en el conflicto chino-soviético. Así pues, mientras Rumania cumpliera con las obligaciones contraídas en el marco de los acuerdos y la influencia del PC rumano continuara inalterada, quedaba automáticamente excluida la posibilidad de disciplinar por la fuerza al comunismo nacional rumano, ya que las repercusiones internacionales superarían con mucho los beneficios de tal acción. El prestigio laboriosamente conseguido por Moscú habría sufrido —especialmente en el Tercer Mundo, tan codiciado— daños cuya envergadura no era de despreciar y los éxitos resultantes de los esfuerzos realizados en política exterior durante el último decenio habrían sido puestos en entredicho.

El gobierno soviético se contentó con impulsar la integración de aquellos miembros del Comecon dispuestos a cooperar. Esto se dejó sentir en la «separatista» Rumania, aun cuando el volumen del comercio exterior rumano con los países del Comecon, que pasó de un 72% en 1960 a un 47% en 1967, no pueda atribuirse únicamente a las medidas restrictivas de los miembros del Comecon (por ejemplo, la Unión Soviética no cumplió los acuerdos de suministro y compra a largo plazo. Rumania realizó intensos esfuerzos para abrir nuevos mercados, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pero cubrir con ello la necesidad

de capital para el programa de industrialización era tan difícil como subsanar el déficit tecnológico del país. Para ello el país necesitaba la ayuda de las naciones industriales de Occidente, entre las que la República Federal Alemana ocupaba un puesto clave. Después que la gran coalición de Bonn del año 1966 marcase un cambio de sentido en la *Ostpolitik*, Bucarest inició contactos con este país y a pesar de las enérgicas advertencias de Moscú, Berlín Este y Varsovia, el 31 de enero de 1967 se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Frente a las críticas virulentas de la Unión Soviética, Bucarest adujo que Moscú se había adelantado a Rumania estableciendo relaciones diplomáticas con Bonn ya en el año 1955, refiriéndose también a la sesión de julio de 1966 del Comité Consultivo Político de la Organización del Pacto de Varsovia en la que la Unión Soviética había otorgado a los Estados miembros el derecho a entablar relaciones bilaterales con todos los Estados europeos. Dado que también Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia mostraban inclinación a seguir el ejemplo rumano, en la primavera de 1968 aumentó de modo alarmante la presión de la Unión Soviética, apoyada por la RDA y Polonia, pero los acontecimientos de Checoslovaquia proporcionaron un respiro al gobierno rumano.

La obtensible conciencia nacional de los rumanos no dejó de ejercer influencias en otros países del Comecon tales como Bulgaria, que en todo momento había sido tenida por fiel seguidora de la Unión Soviética. En este país, a principios de 1965, se reunieron generales y funcionarios nacionalcomunistas para derrocar a Jivkov, demasiado complaciente con los deseos de Moscú. Si bien los soviéticos lograron anticiparse al levantamiento y encarcelar a los conspiradores, los observadores tuvieron la impresión de que era imprescindible hacer concesiones al sentimiento nacional de la población. De ahí que los dirigentes del Partido búlgaro tuvieran interés en abrir paso a un «patriotismo socialista» entre cuyos adeptos surgieron también tendencias «granbúlgaras». Al mismo tiempo, Jivkov logró mejorar su deteriorada imagen gracias a sus actividades en política exterior, pues se le adjudicó el papel de mediador en la controversia rumano-soviética. Las frecuentes consultas a alto nivel entre Sofía y Bucarest contribuyeron a mejorar las relaciones entre los Estados balcánicos, pero no solucionaron el desacuerdo en cuestiones fundamentales de la política respecto a China, la integración en el marco del Comecon y de la Organización del Pacto de Varsovia y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Federal de Alemania. Las relaciones con Yugoslavia mejoraron; en septiembre de 1965, Tito fue invitado a Sofía e incluso en el

litigio sobre Macedonia parecieron vislumbrarse nuevas perspectivas. Tal vez fueran los contactos con Yugoslavia los que movieron a Breznev a intervenir. Pocos días antes de la visita de Tito, él mismo había viajado a Sofía para evitar el peligro de una cooperación entre Rumania, Bulgaria y Yugoslavia; Jivkov volvió a adoptar la línea soviética y se esforzó en demostrar su adhesión y lealtad a Moscú.

En Hungría, pronto lograría Kádár disipar el temor de Moscú de que el país pudiera haberse contagiado del nacionalismo rumano. Es cierto que Kádar, siguiendo el modelo soviético, tuvo que limitarse a la dirección del Partido —dejó su cargo de primer ministro en junio de 1965— pero mediante su apoyo decidido a la política soviética en todas las cuestiones de importancia —en la ONU, en el conflicto con China, etc.— pudo conseguir una cierta libertad política interna para su país, que supo aprovechar para introducir una liberalización prudente, no sólo en el ámbito económico, con la implantación del «nuevo mecanismo económico». Este proceso no transcurrió sin interferencias, tanto por parte de los dogmáticos como de aquellos que demasiado precipitadamente instaban a que se llevase a cabo una democratización, pero Kádár aportó al país y al conjunto de la población una dosis relativamente alta de libertad. Con ello contribuyó a una reducción de los conflictos sociales y en última instancia a la estabilidad de régimen.

La RDA no planteaba a los dirigentes soviéticos ningún género de problemas. Dependía del apoyo soviético y su buen comportamiento estaba justificado por razones de subsistencia. Es cierto que al hilo del sentimiento nacional renacido en los países del Comecon, también aquí surgió un «patriotismo socialista» que llevó en la década de 1970 a una notable identificación con las «tradiciones progresistas» del antiguo Estado prusiano, pero que no se dirigió contra la hegemonía soviética. Los dirigentes de la RDA, consecuentes con su orientación moscovita, demostraron siempre ser, dentro de los países del Comecon, el apoyo más firme de la Unión Soviética; su influencia creciente como socio menor de la Unión Soviética fue también en definitiva (por muy importante que fuera la fuerza económica del país) una recompensa de los dirigentes soviéticos a esta política.

En Polonia, el ejemplo de Bucarest había animado al grupo de los llamados «partisanos», en torno al ministro del Interior Moczar, a emprender una política nacional para la cual podían contar con el amplio apoyo de un país tradicionalmente nacionalista. Para evitar una evolución análoga a la rumana en este país tan importante para el mantenimiento de su base centro-

europea, Moscú intentó fortalecer la posición de Gomulka, fuertemente acosado. El dirigente del Partido, cuya vuelta al poder en 1956 había sido celebrada con entusiasmo, había ido perdiendo el respaldo de la población; las tensiones con la Iglesia católica, al igual que las restricciones de su política cultural, que habían enfriado sus relaciones con la intelectualidad, aumentaron la oposición. Su autoridad también había disminuido en amplios círculos del Partido y, junto a los «partisanos», los «tecnócratas» en torno a Edward Gierek le hacían responsable de los desaciertos de la política económica. A sus críticas se respondió con una ampliación masiva del comercio polaco-soviético (el convenio de noviembre de 1966 contemplaba un aumento del 63% para el período de 1966 a 1970, lo cual representaba un aumento anual de más del 15%). Para elevar por lo menos su prestigio dentro del Partido, los dirigentes soviéticos le consultaron cuestiones importantes de forma ostensible. Cuando Moczar, tomando como pretexto la guerra de los Seis Días, promovió una campaña antisionista durante la primavera y el verano de 1968 para tener en sus manos algunos puestos desempeñados por funcionarios judíos, Gomulka pudo por fin desembarazarse de este rival. Moczar fue desposeído de su cargo en el V Congreso del POUP en noviembre de 1968 y en diciembre de 1971 tuvo que abandonar definitivamente la escena política. Pero el fortalecimiento de Gomulka, que se sentía obligado hacia la Unión Soviética en la cuestión todavía pendiente de los «territorios occidentales recuperados», proporcionó a los dirigentes soviéticos la garantía de la lealtad de Polonia.

En Checoslovaquia, el antiguo estalinista Novotny, que había visto con disgusto los intentos de Jruschov de seguir un nuevo rumbo en el terreno político, económico y social, fue sin duda el garante de la hegemonía soviética. Pero los dirigentes de Praga, aferrados a los principios, se habían de mostrar incapaces de hacerse cargo del cambio de situación. Hasta 1963, cediendo a la intensa presión soviética y a la presión interior, no se habían mostrado dispuestos a realizar una leve «desestalinización» y a hacer también algunas concesiones a los intelectuales del país que habrían de tener consecuencias muy negativas para el régimen, puesto que entre el sector intelectual crítico, la clase obrera insatisfecha y los funcionarios del Partido favorables a la reforma se desarrolló una fuerza antagónica que llevó finalmente al colapso de todo el sistema. La oposición dentro del Partido se había formado sobre todo en Eslovaquia. No sólo exigía la rehabilitación de las víctimas del estalinismo —tanto Clementis como Slánsky eran eslovacos— sino también la reducción del centra-

lismo de Praga, que había descuidado de modo imperdonable los intereses de Eslovaquia. Este resurgimiento del nacionalismo eslovaco, que acabaría conduciendo a reivindicaciones federativas, se unió a la crítica unánime a la política económica de Praga. No se realizaban las inversiones indispensables, las plantas de producción habían quedado obsoletas y la modernización del aparato dirigente era también una necesidad urgente. Pero mientras que Ulbricht, a quien indudablemente no se puede achacar ningún afán innovador, sacó prontas consecuencias de la caída de las tasas de crecimiento económico a principios de la década de 1960, el gobierno de Praga retrasó las reformas necesarias: si bien se acordaron en 1964 siguiendo el programa desarrollado ya en 1963 por economistas políticos checoslovacos, Novotny aplazaría su entrada en vigor, no sin introducir recortes, hasta comienzos del año 1967. Sin embargo ya a mediados de 1965 la crisis económica alcanzó límites incalculables; la mala cosecha de ese año agudizó aún más la difícil situación del país. A Novotny no le quedó sino el amargo camino de las súplicas a Moscú. Bien es verdad que allí encontró ayuda, pero no sólo tuvo que pagar por ello un precio muy alto en el terreno económico, sino que también hubo de probar su buena conducta política. Al igual que Bulgaria, a la que Breznev en esa misma época obligó a capitular, Checoslovaquia tuvo que definirse frente a la «occidentalización», el nacionalismo y el maoísmo. Dado que esta sumisión a Moscú tropezó con muchas críticas en el país —no sin razón se consideraba que el motivo más profundo de la crisis estaba en la condescendencia con los objetivos soviéticos, que había postergado los intereses del propio país— se intentó contrarrestarlas mediante una política interior de restauración, que acarreó al régimen la oposición abierta de los intelectuales. Pero esta crisis del sistema ya no podía controlarse con las prácticas de dominio del estalinismo. Su autoridad decayó hasta límites insospechados a lo largo de 1967. El congreso de escritores que tuvo lugar en Praga a finales de junio acabó siendo un despiadado ajuste de cuentas con los numerosos errores del gobierno de Novotny y el cuadro sombrío que trazó de la situación del país reflejaba demasiado bien la realidad como para que la represión de la dirección del Partido contra sus críticos más feroces hubiese podido dar frutos. El malestar existente dentro del Partido y de la población creció hasta el punto de que el propio Breznev, alarmado por los observadores, viajó a Praga en diciembre. Pero en vista del desolado estado en que se encontraba el aparato del Partido y de la incapacidad de su dirección, negó a Novotny el esperado apoyo, con lo que sus días como primer secretario

del CC del Partido Comunista de Checoslovaquia estaban contados: el 5 de enero de 1968, Alexander Dubcek se convirtió en su sucesor, y a finales de marzo perdió asimismo el cargo de jefe del Estado. Las esperanzas del país se dirigieron ahora al dirigente eslovaco. Su elección también sería celebrada por Breznev, que había conversado con él en Bratislava a su regreso de Praga en diciembre. En Moscú se esperaba que el eslovaco consolidase el Partido y el Estado, y llevase a cabo las reformas necesarias. Dubcek, hombre entregado a la causa comunista, halló un amplio consenso para su programa al declarar: «El Partido ha de estar al servicio del pueblo trabajador; no tiene que situarse ni por encima ni al margen de la sociedad... Democracia significa no sólo el derecho y la posibilidad de expresar la propia opinión, sino también que esta opinión sea tenida en cuenta por los gobernantes...» [37]. La importancia que para él tenía la cuestión de la libertad de expresión se puso de manifiesto en su abolición de la censura previa. Ahora bien, este esfuerzo por democratizar la vida social, por salvar el abismo existente entre gobernantes y gobernados exigía previamente una discusión detallada tanto dentro del Partido como con la propia sociedad. Pero la politización de la sociedad desarrolló una dinámica propia que no se detuvo siquiera ante los principios fundamentales del gobierno comunista. En el vértigo de la innovación, los intelectuales de Praga, sobre todo, corrieron cada vez más el peligro de olvidar cuáles eran los límites marcados a su país por los intereses hegemónicos de la Unión Soviética. Dubcek, hombre de centro, se vio paulatinamente empujado por el entusiasmo de los reformadores a asumir el papel de mero figurón del movimiento de renovación nacional, en el cual cada vez habrían de incrementar su influencia sobre la opinión pública las tradiciones nacionales y democráticas de Checoslovaquia. Sus esfuerzos por integrar a las diferentes fuerzas políticas fracasaron. En su lugar, aumentó la polarización dentro de los cuadros de dirección del Partido, mientras que la radicalización de los reformadores impulsó también hacia el campo conservador a fuerzas más bien moderadas.

Los Estados vecinos de Checoslovaquia contemplaron ya desde muy pronto con recelo esta evolución. Ulbricht y Gomulka no ahorraron advertencias críticas destinadas a los compañeros checoslovacos, a lo cual les impulsó también, sin duda, el temor de que el movimiento democratizador se extendiese a su propia capa intelectual (con la que, por otra parte, ya tenían dificultades los dirigentes polacos). Los dirigentes soviéticos se abstuvieron, en un principio, de tomar postura. Hasta marzo o abril no empezaría

Moscú a preocuparse por la idea de que el movimiento reformista pudiese tomar un rumbo no deseado. A principios de mayo, Breznev, Ulbricht, Gomulka, Kádár y Jivkov —los «cinco de Varsovia»— celebraron consultas en la capital polaca; el hecho de que no se invitase a Dubcek fue una prueba evidente de la desconfianza y del aislamiento con que tropezaba en aquellos momentos la dirección checoslovaca. Al fracasar en mayo los intentos soviéticos de reconducir a Praga amigablemente a la línea de Moscú, los dirigentes soviéticos tomaron sus precauciones para el caso de una solución violenta, pues no estaban dispuestos a aceptar que en Checoslovaquia se produjera una evolución análoga a la rumana, ni, por supuesto, a la yugoslava; con ello no sólo se habrían puesto en peligro los lazos estratégicos entre la base balcánica y la base europea central y oriental de la Unión Soviética y los objetivos económicos de los países del Comecon, sino también la hegemonía soviética en toda el área de influencia europea adquirida después de 1945. De esta manera, Moscú —con el consentimiento de Praga— adelantó las maniobras previstas entre las tropas soviéticas y las checoslovacas al mes de junio; el 30 de mayo, los primeros contingentes soviéticos avanzaron hacia Checoslovaquia. Ya durante la maniobra, que dejó claramente sentados el poderío soviético y sus intereses, aparecería en Praga el *Manifiesto de las 2 000 palabras,* dura acusación a la práctica del dominio comunista. A pesar de su prohibición inmediata por Dubcek, atendiendo a las protestas de Moscú, las fuerzas antisoviéticas y anticomunistas del país se movilizaron en tales proporciones que los «cinco de Varsovia» se afianzaron en su convicción de que el Partido Comunista de Checoslovaquia había perdido el control de la situación. Sus advertencias de que se tuvieran en cuenta los «intereses comunes» del «campo socialista» fueron en aumento; sólo Yugoslavia y Rumania se expresaron a favor de la autodeterminación de Checoslovaquia. A finales de julio, los dirigentes checoslovacos y soviéticos volvieron a reunirse para celebrar detalladas conversaciones en Cierna nad Tisou, celebrándose a continuación una consulta en Bratislava con los «cinco de Varsovia». Parecía como si la dirección del PC checoslovaco hubiese logrado en estas negociaciones calmar la preocupacióón de los aliados. Pero Dubcek había sobrevalorado sus posibilidades. No logró imponer la disciplina a los medios de comunicación; las visitas de Tito y Ceaucescu a Praga no hicieron sino reforzar las emociones patrióticas. Con la amplia mayoría lograda por los reformadores en las elecciones para la asamblea del Partido se puso claramente de manifiesto que no se habían respetado los acuerdos tomados

en Cierna nad Tisou. Y, así, los dirigentes soviéticos optaron por la intervención como *ultima ratio*.

Esta había sido bien preparada, legitimada por una «llamada de ayuda» de funcionarios fieles a Moscú, y transcurrió de forma precisa, conforme al plan trazado. Por otra parte, gracias a la participación polaca, húngara, búlgara y alemana oriental, no fue una acción exclusivamente soviética, como lo fuera en 1956 en el caso de Hungría; la ocupación del país, iniciada en la noche del 20 al 21 de agosto, sólo se vio turbada por la resistencia pasiva, pudiéndose evitar un enfrentamiento sangriento gracias a la cordura de la población, que tenía muy fresco aún el recuerdo de la inutilidad de la resistencia húngara. No obstante, los daños de índole política fueron elevados. El hecho de que la opinión pública de las naciones occidentales habría de condenar la intervención se había contemplado, sin duda, a la hora de considerar los riesgos, al igual que la reprimenda de Pekín y Tirana y las críticas de Belgrado y de Bucarest. La condena internacional del empleo de la fuerza como violación flagrante de los principios de la ONU provocó sin embargo consternación, al igual que las virulentas reacciones de los comunistas de Europa occidental, que al parecer ejercieron un influjo en las posteriores discusiones dentro de la cúspide soviética del Partido.

También en el país ocupado tropezaron los ocupantes con algunas dificultades. Durante la intervención misma, en una empresa industrial de Praga se había reunido el XIV Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia, que desenmascaró el engaño de la «llamada de ayuda» y reforzó la resistencia no violenta; los sindicatos convocaron una huelga general, y la prensa y la radio siguieron trabajando en la clandestinidad. A pesar de la presión soviética, los colaboracionistas no lograron formar un gobierno fiel a Moscú; la ocupación se encontró con el rechazo en bloque de la población. No quedaba, pues, otra solución que entablar discusiones con sus legítimos representantes. Entre el 23 y el 26 de agosto se celebraron en Moscú las negociaciones, a las que, gracias a la firmeza del presidente de Checoslovaquia, Ludvík Svoboda, también se invitó finalmente a los reformadores, hasta entonces encarcelados. A éstos, si querían ahorrar a su país el destino de los húngaros, no les quedaba más remedio que aceptar las exigencias soviéticas, es decir, dar marcha atrás en las reformas y admitir el estacionamiento de tropas soviéticas en territorio checoslovaco, así como comprometerse a estrechar los vínculos con el Pacto de Varsovia y el PCUS. Pero el «proceso de normalización» exigido de Checoslovaquia resultó difícil. Las manifestaciones antisoviéticas que tuvieron lugar en octubre

y noviembre hicieron temer a una parte de los dirigentes checos nuevas intervenciones soviéticas, y así un grupo de funcionarios encabezados por Gustáv Husák trataron de acometer ellos mismos la aplicación de las medidas exigidas en política interior. Para ello era inevitable separar de sus cargos y desautorizar a los reformistas que, por así decirlo, personificaban los deseos y las esperanzas nacionales. Cuando a finales de marzo de 1969, con motivo del triunfo en hockey sobre hielo frente a la URSS, se produjeron disturbios —aunque no de importancia— en su celebración, los soviéticos se sirvieron de ellos para despojar definitivamente de sus funciones a Dubcek y a los seguidores que aún le quedaban, siendo nombrado primer secretario del Partido Husák en la sesión del CC celebrada el 17 de abril. Este supo proporcionar en la época inmediatamente posterior a su país un cierto espacio nacional renunciando a las reformas y salvaguardando los intereses soviéticos. En este sentido, las purgas en el Partido, en el aparato del Estado y en el ejército fueron ineludibles para mantener la disciplina; el hecho de que éstas no fuesen demasiado drásticas, medidas por el rasero de los viejos estalinistas, podría muy bien haber respondido a las intenciones de los dirigentes soviéticos, interesados en una consolidación del dominio comunista en el país, exenta en lo posible de fricciones y preocupados por no llamar la atención.

El curso de los acontecimientos en Checoslovaquia durante 1968 pesó gravemente sobre las relaciones de la Unión Soviética con Rumania y Yugoslavia. Esto se puso especialmente de manifiesto en las relaciones con Yugoslavia; las relaciones rumano-soviéticas eran ya de todos modos tensas debido a la política nacionalista de Ceaucescu, y se vieron afectadas aún más por la condena de éste a la intervención en Checoslovaquia (en la que Rumanía fue el único país miembro del Pacto de Varsovia que no participó) y por los posteriores gestos soviéticos de amenaza de una inequívoca concentración de tropas soviético-búlgaras en la frontera rumana. Sin embargo, el gobierno Breznev se había esforzado justamente en lo que a Tito se refiere, por estrechar los vínculos y recuperar para el «campo socialista» al veterano de los dirigentes comunistas, cuya voz tenía también un gran peso en el Tercer Mundo debido a su prestigio. Belgrado respondió a Moscú en este sentido: la ampliación del comercio bilateral por el tratado de noviembre de 1964 y el acuerdo a largo plazo firmado en 1965 ayudaron a Yugoslavia a superar sus graves problemas económicos. En los intensos contactos establecidos se hizo patente un amplio consenso en cuanto a la valoración de las cuestiones internacionales. Pero la destitución a

principios de julio de 1966 del jefe del servicio secreto yugoslavo, Alexander Rankovic, de orientación moscovita, acusado de haber lesionado subrepticiamente los intereses de Yugoslavia por encargo de la Unión Soviética, provocó un notable enfriamiento en las relaciones. La reforma del Partido yugoslavo, cuyo objetivo era la «despersonalización» del ejercicio del poder mediante un sistema rotativo de desempeño de las funciones, fue vista con desconfianza por Moscú, si bien en 1967 se perfilaría un nuevo acercamiento. Tito tomó parte en dos cumbres comunistas y en el conflicto del Oriente Próximo de aquel año compartió los puntos de vista de Moscú. El buen entendimiento pareció restablecerse con su ataque a la revista *Praxis*, demasiado liberal y cuya crítica ideológica había sido desde siempre para Moscú una espina clavada, y con su demostración de dureza en el conflicto interno yugoslavo de las nacionalidades, hallando incluso la aprobación de Moscú la represión de los graves disturbios estudiantiles de junio de 1968.

Las relaciones entre ambos Estados se habían visto sin embargo seriamente afectadas ya desde marzo por la evolución nacionalista de Checoslovaquia, de la que la Unión Soviética hacía corresponsable a Yugoslavia. Tito, auténtico precurso del comunismo nacional, no se dejó arredrar por los ataques, que iban en aumento; él había tomado una clara postura en favor de los reformadores checoslovacos, manifestando incluso su apoyo en los días críticos del mes de agosto con una visita a Praga. Su dura condena de la intervención fue respondida por la Unión Soviética con una feroz campaña de prensa contra Yugoslavia como baluarte del «revisionismo» y del nacionalismo a la que también se sumaron los aliados de Moscú. En el momento de apogeo de la crisis, a finales de agosto y principios de septiembre, pareció incluso que Yugoslavia estaba amenazada por una intervención de las tropas soviéticas.

Fue sobre todo la tesis soviética de la «soberanía limitada de los Estados socialistas», para justificar la intervención en Checoslovaquia, la llamada doctrina Breznev, la que intranquilizó a Tito. El «deber internacional de los comunistas» exige, según ésta, una intervención —en caso necesario, también militar— siempre que en un país comunista el «socialismo» se vea amenazado, pues con ello se debilita todo el «campo socialista»: «...Cuando fuerzas internas y externas hostiles al socialismo tratan de invertir el desarrollo de un país socialista y estimular el restablecimiento de las relaciones capitalistas, cuando surge pues un peligro para el socialismo en ese país, un peligro para la seguridad de toda la comunidad socialista, esto se convierte no

sólo en un problema para el pueblo de ese país, sino también en un problema común, en una causa de preocupación para todos los países socialistas», enunciaba el órgano del Partido soviético[38]. Es evidente que la decisión sobre el momento en que una intervención es necesaria corresponde a los dirigentes soviéticos. Dado que la apreciación de cuándo y por qué factores sociales y políticos se halla «amenazada» esta comunidad solidaria decretada por Moscú es una cuestión discrecional, los dirigentes soviéticos poseen prácticamente un cheque en blanco para proceder en todo momento contra toda aquella evolución dentro de su área de influencia que no sea de su agrado. La irreversibilidad así establecida de la revolución «socialista» se concibió sin duda primordialmente en la crisis de 1968 como una legitimación de la intervención. Con el recurso al «internacionalismo proletario» se creó también, sin embargo, un instrumento para la conservación del poder frente al movimiento nacionalcomunista. A largo plazo y en conexión con el «deber internacional de los comunistas» de fomentar en lo posible en todo el mundo las «fuerzas socialistas», en tanto que ante el resto del mundo se hablaba de la «distensión», no sólo se reforzaba el viejo objetivo de la revolución mundial —puesto que toda emancipación de un país socialista era reprimida—, sino que también se trabajaba al mismo tiempo para incluir a un número de Estados cada vez mayor dentro del «campo socialista».

Aunque Breznev limitó en noviembre de 1968 el ámbito de aplicación de la «doctrina» a los países del Pacto de Varsovia, Belgrado siguió mostrándose preocupado, a lo cual contribuyeron las maniobras realizadas en Hungría y en Bulgaria, que en una situación tan tensa tenían que ser consideradas necesariamente como demostraciones de poderío militar, y las actividades permanentes dirigidas contra Tito por parte de los comunistas yugoslavos fieles a Moscú desde su exilio soviético. Dado que la situación económica de Yugoslavia también volvió a ponerse difícil debido a las altas tasas de inflación, Belgrado trató de mejorar sus contactos con los Estados Unidos y con China. La visita del presidente Nixon a Belgrado en octubre de 1970 puso de manifiesto el mayor interés americano por los Balcanes, mientras que China se esforzó en apoyar la autonomía de Yugoslavia. El comunista Tito supo contrarrestar con éxito mediante estos movimientos tácticos las presiones soviéticas; la irritación por la existencia de una Yugoslavia independiente en búsqueda de su propia vía como Estado socialista persistió. No obstante, los dirigentes yugoslavos se habían mostrado dispuestos a cooperar con los países del Comecon como Estado soberano y en conso-

nancia con sus propios intereses nacionales, y así, especialmente en el marco del Comecon y a pesar de las diferencias políticas existentes, se mantuvieron las relaciones económicas; los países del Comecon eran para Yugoslavia un mercado muy apetecible. Moscú, por su parte, estaba interesado en que Tito no se pasase al campo contrario. Y de este modo, durante la grave crisis interna del país provocada a finales de 1971 por la actuación de Tito contra la organización del Partido croata, se mostró condescendiente, instando también a Bulgaria a no reavivar aún más el conflicto yugoslavo de las nacionalidades con la cuestión de Macedonia.

c. *Bajo el signo de la «distensión»*

Los acontecimientos de Checoslovaquia en 1968 y el conflicto con China, que se agudizó al mismo tiempo, movieron a los dirigentes soviéticos a intensificar sus esfuerzos en favor de una relajación en Europa, empeño que se vería impulsado aún más por el acercamiento chino-americano, que ya empezaba a perfilarse. Esta política de distensión había encontrado cada vez mayor eco entre las naciones industrializadas de Occidente, ya que parecía también adecuada para reducir los gastos de armamento en rápido crecimiento. La condición indispensable para ello era —por ambas partes— que estuviese asegurado el problema central de la cuestión alemana. Mientras la República Federal de Alemania persistiese en su reivindicación de ser la única representante («doctrina Hallstein»), estando aún pendientes los tratados de paz con los antiguos Estados enemigos, no era posible llegar a un acuerdo contractual acerca de las medidas de distensión y desarme; razones de índole militar, económica y político-ideológica hacían del mantenimiento y del reconocimiento internacional de la RDA como Estado socialista soberano una condición *sine qua non* para la Unión Soviética. La implicación cada vez más fuerte de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam indujo sin embargo a Washington a buscar una distensión en Europa, al tiempo que, ante la estabilización del régimen del SED y la evolución internacional, en Bonn aumentaba la convicción de que la reunificación de Alemania en un futuro previsible se quedaría en mera utopía. La ascensión de la República Federal a socio comercial favorito de los países del Comecon influyó indudablemente en el cambio de postura de Bonn. La «gran coalición» había señalado ya un cambio de actitud mediante el tratado con Rumania, aun cuando la brecha no se

produjera hasta la entrada en el gobierno de la coalición social-liberal en octubre de 1969. El 1 de diciembre del mismo año tuvo lugar en Moscú una cumbre de los países del Comecon que tal vez sirviera para informar y coordinar la futura forma de proceder, pues el 2 de diciembre la Unión Soviética ofreció al gobierno de Bonn el inicio de negociaciones sobre la normalización de las relaciones entre ambas partes. Ya a principios de 1970 dieron comienzo las conversaciones preparatorias en Moscú, y el 12 de agosto de aquel mismo año fue firmado el tratado entre ambos gobiernos. Con ello se ponía también claramente de manifiesto el papel rector de la Unión Soviética de cara al exterior dentro del ámbito del Comecon. Por fin los otros países del Comecon tenían libre el camino para la firma de acuerdos análogos, los cuales se realizaron con breves intervalos. Sin embargo, con los tratados con el Este, la República Federal renunciaba a todas aquellas reivindicaciones legales que todavía hubiese sido posible alegar contra la posición soviética en Europa central y oriental. La ampliación de la esfera hegemónica de la Unión Soviética después de la segunda guerra mundial quedaba así ajustada al Derecho internacional; el ingreso de los dos Estados alemanes en la ONU sólo sirvió para reforzar esta regulación.

La resolución de la cuestión alemana abrió el camino a las negociaciones de toda Europa. Breznev había instado ya por vez primera en marzo de 1969 a la celebración de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) a fin de anunciar a los estadistas y a la opinión pública de Occidente, soliviantada tras la intervención en Checoslovaquia, la predisposición de la Unión Soviética a la distensión. Los preparativos de la conferencia fueron difíciles, toda vez que los Estados Unidos y Canadá también aspiraban a participar en ella como miembros extraeuropeos de la OTAN que eran. Moscú consintió en ello, si bien con vacilaciones, pudiendo así impulsar la deseada normalización de las relaciones americano-soviéticas. Hasta qué punto estaba Breznev interesado en ella lo probaría la visita a Moscú en mayo de 1972 del presidente Nixon, duramente atacado por su política respecto a China y a Vietnam, que indudablemente fue de gran utilidad por la firma del tratado comercial soviético-americano. La conferencia, que reunió finalmente en Helsinki del 3 al 8 de julio de 1973 a los estadistas europeos (con excepción de Hoxha) y norteamericanos, tuvo su prolongación en las negociaciones de expertos de Ginebra, así como en múltiples conversaciones bilaterales entre políticos destacados. Los intereses eran difíciles de armonizar por su diversidad, pues en tanto que la Unión Soviética deseaba conseguir una garantía irrefutable de

su posición, Occidente insistía en un compromiso vinculante en cuanto a la garantía de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como condición previa para lograr una verdadera distensión. La libertad de información y de opinión exigidas chocaron especialmente con una fuerte oposición por parte soviética, ya que en ella veían un peligro de infiltración ideológica. Relativamente sencillo fue, en cambio, llegar a un consenso fundamental en cuestiones económicas, pues la búsqueda de ayuda occidental por parte de todos los países del Comecon para la realización de sus programas de industrialización fue bien acogida por las naciones industrializadas de Occidente, para las que ello suponía una ampliación de su mercado. No obstante, los representantes soviéticos no lograron que éstas aplicasen a la Unión Soviética en los tratados comerciales la cláusula de nación más favorecida.

Independientemente de las dificultades surgidas a la hora de poner en práctica este tratado programático en sus aspectos concretos, el compromiso —producto de duras negociaciones— entre ambos grupos de Estados, sellado con la firma del acta final de la CSCE por 35 Estados el 1 de agosto de 1975 en Helsinki, distendió la situación, sobre todo en Europa central, impulsando también hasta cierto punto las negociaciones de desarme exigidas desde 1968 por los países de la OTAN: en 1972, las SALT (Strategic Arms Limitation Talks) dieron lugar a un primer acuerdo provisional; un segundo acuerdo patrocinado por el gobierno Carter fracasó tras la intervención soviética en Afganistán. Las conversaciones mantenidas en Viena desde 1974 sobre la reducción de tropas y armamento (MBFR) no dieron, sin embargo, ningún resultado. La desconfianza existente por ambas partes y la preocupación ante la posibilidad de salir perjudicados eran tan grandes como las contradicciones existentes a la hora de enjuiciar los diferentes factores, y fue imposible encontrar criterios comunes.

La CSCE fue un éxito para su iniciador Breznev, que con la conferencia vio reforzada su posición tanto en su propio país como frente a los demás partidos comunistas, pues la Unión Soviética actuó de forma evidente e inequívoca como potencia suprema y portavoz de los Estados comunistas. Cierto es que ya en abril de 1966 —apenas dos años después de asumir el cargo—, Breznev había sido nombrado en el XXIII Congreso del PCUS secretario general, pero ello se debió sobre todo a razones internas de partido. El hecho de que no existía unanimidad acerca de la línea política «correcta» a seguir dentro de la dirección del PCUS se puso de manifiesto a la hora de valorar el movimiento reformista checoslovavco de 1968. Las diferentes posiciones pro-

venían del dilema social fundamental que, bajo el dominio comunista y su consigna de la dictadura del proletariado, había vuelto a agudizarse: ¿dónde estaban los límites entre libertad y reglamentación? El grupo «duro», cuya dirección era atribuida al ideólogo jefe del Partido, Suslov, hacía responsable a la política de colaboración propugnada por Jruschov de las dificultades que para la supremacía del PCUS habían derivado del derecho de intervención de los demás partidos comunistas y —en lo relativo a la política interna soviética— de la progresiva eliminación del conformismo estricto. Aferrado a las reivindicaciones escatológicas de la Unión Soviética dentro de la historia mundial, insistía con una cierta militancia en la restauración de la unidad del movimiento comunista internacional bajo la dirección soviética, así como en la disciplina dentro de la URSS. Frente a él se hallaba un grupo que, ante la multiplicidad y complejidad de los problemas con que se encontraba la Unión Soviética por su ascensión a segunda potencia mundial y ante la problemática socioeconómica de ésta, igualmente compleja, adoptaba una actitud «tecnocrática» más flexible, considerando los asomos de pluralismo aquí y allí como una posibilidad de movilizar nuevas fuerzas para conseguir con más eficacia y menos fricciones los objetivos comunistas. Entre ambos grupos (que representaban posturas extremas), en modo alguno cerrados en sí mismos ni tampoco institucionalizados, Breznev adoptó claramente una posición mediadora de la cual surgió una función integradora que le permitió constituirse en punto de referencia y autoridad indiscutible necesaria tanto para el país como para el Partido.

La diversificación ideológica del comunismo como consecuencia de la «desestalinización» y la lucha por la coexistencia también había dejado sus huellas en la Unión Soviética. Cierto es que el monopolio informativo del Partido le aseguraba su influencia sobre las masas, pero los intelectuales —gracias también a los crecientes contactos con Occidente— tenían acceso a informaciones no conformistas, generalmente occidentales. Otra fuente de información habitualmente accesible la constituían los propios medios oficiales; la generalizada capacidad de leer «entre líneas» permitía extraer del material publicado, al menos a grandes rasgos, los argumentos de la otra parte. Si en tiempos de Jruschov, a pesar de sus ocasionales diatribas y de las represalias adoptadas contra los críticos demasiado impertinentes, aún existía un consenso con una élite intelectual que esperaba que la liberalización siguiese adelante, ese consenso desapareció con la rehabilitación parcial de Stalin decretada por el Partido en 1965-66. Pero la intervención en Checoslovaquia dio lugar a una grave disidencia.

Así nació el periodismo ilegal de los *samizdat,* en los cuales aparecían las más diversas posturas críticas y que a pesar del riesgo que representaban para los implicados, perduraron hasta comienzos de la década de 1980. La crítica al régimen abarcaba un amplio espectro, tanto de temas como de opiniones, que iba desde los puntos de vista marxistas, próximos al eurocomunismo o a la socialdemocracia, hasta los cristianos. También se expresaron reivindicaciones nacionales. Es difícil estimar las proporciones de este movimiento alternativo que, por otra parte, debió de estar formado por pequeños círculos. Más difícil es aún estimar sus efectos, pues los impulsos e ideas que de él partieron son casi imposibles de determinar. Fueron, no obstante, el síntoma de una conciencia de responsabilidad social que, a sabiendas del riesgo implícito —incluso para la propia vida—, no vacilaba en llamar por su nombre a los fallos del sistema con la esperanza, poco menos que absurda, de lograr una humanización de la sociedad soviética y una democratización del sistema de gobierno. El movimiento disidente sacó nuevas fuerzas de los acuerdos de Helsinki, sobre todo del llamado «Cesto 3», y de las conferencias posteriores de Belgrado (1977) y Madrid (1980), en las que los países occidentales hicieron mención de las represalias contra los disidentes. Hasta principios de la década de 1980 no se logró poner fin a las actividades públicas mediante un sistema de represiones graduales que iban desde la censura oficial a través de la reglamentación y la expulsión hasta el internamiento en campos de trabajo y el «tratamiento» en «clínicas» psiquiátricas. Los otros países del Comecon también se vieron afectados por este movimiento. Mientras que en la Hungría «liberal» de Kádár no encontró suelo abonado en donde desarrollarse y Ceaucescu logró reprimirlo ya en sus comienzos por medio de la omnipresente policía secreta —el régimen polaco ya se había acostumbrado desde hacía tiempo a una coexistencia más o menos pacífica con la intelectualidad crítica—, los dirigentes de la RDA, así como la cúspide del Partido checo, reaccionaron con nerviosismo. Sobre todo en Praga, donde en la fase preparatoria del encuentro de Belgrado de la CSCE se había constituido Carta 77, los disidentes fueron perseguidos sin contemplaciones. El régimen de Husák creyó que no debía mostrar ninguna indulgencia, teniendo en cuenta los acontecimientos de 1968. El enmudecimiento forzado del movimiento no resolvió ciertamente el problema: la disidencia podía sin duda ser eliminada, pero suprimiendo las causas que la habían originado.

La disidencia no es, sin embargo, sino el fenómeno más llamativo de una evolución que, a partir de su inicio en la época

de Jruschov, produjo en los años setenta una transformación del clima intelectual en los países del Comecon. Esta evolución varió de un país a otro, tanto en duración como en intensidad. En Rumania fue sacrificada al conformismo impuesto por la política nacional de Ceaucescu; en Polonia llevó hasta la emancipación del Partido y el Estado. Principalmente en los medios de comunicación de mayor difusión, la literatura y el cine, se produjo un debate cada vez más libre de los problemas sociales que procuró también prestigio internacional a sus autores. La progresiva eliminación del tabú aquí visible no se limitó, sin embargo, al ámbito cultural, sino que también afectó a la vida cotidiana: la «occidentalización» constantemente lamentada por los funcionarios del Partido fue sólo un síntoma de la creciente pluralización de las normas de conducta. Esta tendencia al aprovechamiento de los márgenes de libertad como conducta no conforme con el sistema se vio sin duda reforzada por la autorresponsabilidad impuesta a cada persona por el principio del «interés material»; fue, en definitiva, una expresión de esa movilidad que constituye la condición previa a una sociedad industrial moderna, y a pesar de los aspectos específicamente socialistas presentó rasgos anólogos al desarrollo social de los países industrializados de Occidente. El proceso iniciado por Jruschov, consistente en practicar una «colaboración socialista» entre los partidos y Estados comunistas, halló su correspondencia en la relación Estado-ciudadano y su fijación en la nueva Constitución de la URSS de 1977: el súbdito del régimen de Stalin se convirtió paulatinamente en ciudadano. Naturalmente, esto fue un proceso difícil, retardado e incluso amenazado con frecuencia por la inercia de los aparatos. La separación entre Partido y Estado facilitó notablemente ese proceso, ya que así se podía mantener el tabú central: la aspiración a la dirección absoluta del Partido Comunista y su ideología legitimadora del dominio como única fuerza política. Esta evolución iniciada por Jruschov, que en lo esencial se basaba en la vuelta al Estado de Derecho («legalidad socialista»), fue tolerada bajo Breznev: la nueva conciencia adquirida por los ciudadanos se hallaba en correspondencia con una gran confianza en sí mismos de unos partidos en plena posesión de un poder libre de sobresaltos. Esto pudo hacerlo el PCUS, a pesar del fracaso de sus esfuerzos por restablecer el movimiento comunista internacional monolítico bajo su dirección, no sólo gracias a su creciente fuerza militar, sino también a la pérdida de poder de su adversario, resultante de la crisis de conciencia americana por la disensión social en torno a la guerra de Vietnam. De esta

seguridad en sí mismos participarían también los demás partidos en conformidad con los soviéticos.

A diferencia de las agitadas décadas de 1950 y 1960, el transcurso de la siguiente estuvo caracterizado por una cierta constancia de las directrices políticas. Desde el punto de vista de la política exterior, éstas se hallaban totalmente en consonancia con los puntos de vista soviéticos: se insistía en la acreditada política de distensión, reforzando la actividad ideológica en los países «capitalistas» e intensificando el afán expansionista en el Tercer Mundo, así como consolidando de forma consecuente el potencial militar. El aumento de poder resultante para el campo «socialista» confirmó la corrección de esta concepción que evitaba los riesgos. No obstante, la supresión progresiva del enfrentamiento con las potencias occidentales también eliminó aquel imperativo de la solidaridad dentro del Comecon derivado de la amenaza que para todos sus países miembros constituía el «capitalismo», ya fuese instrumental o funcional, dejando así libre el camino para la persecución y la consecución de los intereses nacionales.

Por este particularismo fracasaron también los esfuerzos integradores soviéticos en la medida en que tendían a lograr una reforma institucional fundamental del Comecon. Y así, en vez de llegar a una solución global, se mantuvieron en una política de pequeños avances. Cierto es que, durante las deliberaciones del Consejo en 1968, los representantes soviéticos habían declarado que consideraban suficiente la estructura del Comecon si se aplicaba de forma pragmática el instrumental existente, pero esto sólo tenía el fin de tranquilizar a los países aliados, desasosegados por la intervención en Checoslovaquia. Ya en la conferencia de Moscú de los jefes de Partido y de gobierno de los países del Comecon (23-26 de abril de 1969) se introdujo el concepto programático de la «integración socialista», prueba de que Moscú persistía en sus objetivos.

Ahora bien, con la intensificación del comercio del Comecon con Occidente acordada en 1969 (las decisiones «nacionales» correspondientes se tomaron en 1970) se presentó un obstáculo inesperado. Esta intensificación serviría para incrementar la importación de alta tecnología de los países industrializados de Occidente en forma de máquinas y equipamiento, pero también de licencias, con las cuales se aceleraría la modernización de la industria. Esto se había convertido en algo de urgente necesidad, ya que las reservas de mano de obra de los países del Comecon

se habían agotado; sólo mediante la racionalización era posible conseguir un mayor crecimiento económico y sólo las importaciones podían impulsar las ramas de la producción débilmente desarrolladas. Este impulso modernizador hizo crecer sin embargo la oposición nacional a la integración, expresada sobre todo por Rumania: los diferentes países tendían a abandonar el comercio dentro del Comecon en favor de un comercio más intenso con Occidente. Esta tendencia no se vivo modificada en absoluto por la fundación, acordada en 1969, del Banco Internacional de Inversiones, que inició sus actividades en 1971. «Llamado a fomentar el desarrollo de la integración socialista»[39], debía conceder créditos, principalmente a las empresas de interés supranacional, aunque al mismo tiempo tenía la misión de proporcionar a los países miembros la moneda convertible que necesitaran para realizar importaciones de tecnología, es decir era también una cierta instancia de control que, sin embargo, no era competente en materia de comercio bilateral con Occidente.

Así pues, los esfuerzos integradores de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 se vieron limitados en gran medida a la coordinación del comercio dentro del Comecon y a la planificación económica. La sesión del Consejo de Bucarest en julio de 1971 decretó un «programa conjunto» a largo plazo para la coordinación, durante un período de veinte años, del desarrollo de las economías nacionales, reforzándose también el tratado de las Comisiones Permanentes —cuyo número había aumentado a veinte en 1971—, que en la época posterior contribuirían con sus recomendaciones a lograr una cierta especialización y a la cooperación dentro de determinados campos. Sin embargo, el aparato de planificación, de por sí ya lento y pesado, se hizo con ello aún más complejo, burocrático e inflexible, y la producción, en consecuencia, más susceptible de sufrir alteraciones.

Los efectos del drástico aumento de los precios del petróleo en 1973 sobre las naciones industrializadas de Occidente repercutieron favorablemente en la Unión Soviética, ya que los demás países del Comecon, debido a la carencia de moneda libremente convertible y a su creciente endeudamiento con Occidente, pasaron a depender aún más de los suministros de crudo soviéticos. Así, los dirigentes moscovitas pudieron imponer una revisión del mecanismo de fijación de precios del Comecon invocando los aumentos que habían tenido lugar en el mercado mundial y la máxima húngara de la «verdad de los precios»; desde entonces, los precios se fijan anualmente de acuerdo con el mercado internacional; su base es la media de los precios del mercado mundial en los últimos cinco años. Para los países pobres en reservas

de combustible, como Hungría, la RDA y Bulgaria, esto trajo consigo un aumento de sus cargas (en el espacio de un año, sus importaciones de petróleo se encarecieron en un 130%). El aumento del peso del gigante de la economía que era la URSS obligó también a hacer otras concesiones, como por ejemplo la aceptación de las propuestas relativas a una mayor coordinación de los planes económicos para el quinquenio de 1976-1980. El cambio en las condiciones económicas exteriores del Comecon provocó finalmente una modificación significativa: el llamado «rublo transferible», que hasta entonces sólo había funcionado de hecho como unidad de cuenta bilaterál, se convirtió en moneda efectivamente transferible dentro del Comecon. No obstante, el interés por el comercio occidental y los diferentes sistemas de fijación de precios siguieron obstaculizando la formación de un verdadero mercado interior dentro del Comecon.

Desde 1973, los organismos competentes del Comecon se dedicaron intensamente a la cuestión del abastecimiento energético de sus países miembros, recurriendo para su resolución a un procedimiento que muy pronto se aplicaría también a otros proyectos de interés común. A fin de no tener que regular los altos costes de apertura de nuevos yacimientos por encima del precio, se acordó la participación de los Estados consumidores en estos trabajos, así como en la construcción y el mantenimiento de las conducciones, a lo cual habían de contribuir con aportaciones de capital, maquinaria y material, así como de mano de obra. Las ventajas de esta «cooperación socialista internacional» para la Unión Soviética —disminución del capítulo de capital y mano de obra— indujeron a este país a tratar de imponer también posteriormente esta cooperación a otros proyectos, como en el caso de las medidas urgentes para mejorar la infraestructura más allá de sus fronteras, notorio punto débil del sistema económico del Comecon. Así, esta cooperación con otros miembros del Comecon se practicaría también en la construcción del gran sistema de carreteras para tráfico a larga distancia. Los argumentos esgrimidos por la Unión Soviética para justificar esta práctica son el interés común, la «integración socialista» y la escasez de mano de obra de la URSS, aunque por parte de los países miembros se han escuchado ya quejas contra su «situación de desventaja». Sin embargo, estas quejas tienen pocas probabilidades de ser escuchadas o atendidas siquiera por Moscú, ya que los cambios fundamentales experimentados por los términos de intercambio durante la década de 1970 han reforzado aún más la hegemonía económica de la Unión Soviética que ésta ya poseía gracias a su

potencial en industria y materias primas, aunque con ello también el inmovilismo y la hostilidad a las reformas del Comecon.

En las empresas creadas gracias a esta cooperación ha surgido una nueva categoría de «propiedad socialista internacional» de la que parte una corriente integradora más fuerte. Salvaguardando el principio de la soberanía nacional han nacido vínculos económicos —así como vínculos políticos derivados de éstos— que, debido a la fuerza normativa de los hechos, contienen una limitación de la soberanía. La política soviética de fomentar la integración respetando el derecho a la autodeterminación de los países miembros ha hecho que entre tanto el Comecon pase de ser una organización regional de Estados soberanos a ser una institución multinacional en la que, por su poder económico, la Unión Soviética ocupa un puesto decisivo.

En el campo de la ayuda al desarrollo, la aplicación selectiva de la ayuda económica de los países del Comecon no ha experimentado ningún cambio. El Fondo Internacional de Ayuda Económica, acordado en 1974 y puesto en marcha en 1977, que fue creado para llevar a cabo proyectos de ayuda al desarrollo y domiciliado en el Banco Internacional de Inversiones, permaneció asimismo dentro del marco tradicional de la política «socialista»: el 95% de su capital está constituido por moneda no convertible, es decir los países en desarrollo beneficiarios de créditos están obligados a adquirir a cambio productos de los países del Comecon.

La fuerte y creciente competencia dentro del mercado internacional ha aumentado el atractivo del Comecon como «mercado interior socialista» y ha llevado a su ampliación territorial; después de Cuba (1972) se produjo en 1978 el ingreso de Vietnam en calidad de miembro de pleno derecho; además de Finlandia (1973), también se asociaron Irak y México, obteniendo el *status* de observadores Afganistán, Etiopía, Angola, Yemen del Sur, Laos y Corea del Norte. En momentos precisamente de restricciones económicas a nivel mundial, este mercado ejerció también una cierta fuerza de atracción sobre los países en desarrollo. Por el contrario, Rumania, que —al igual que Yugoslavia— sintió con toda su dureza los efectos de la crisis económica de 1973-74, trató de orientarse con más fuerza hacia el Tercer Mundo. Tuvo éxito sobre todo en Irán, si bien con el nuevo aumento del precio del petróleo en 1978 y la caída del sha, por el cual había apostado Ceaucescu, Rumania, que después de Polonia registra el endeudamiento más elevado con Occidente de los países del Comecon, se precipitó en una profunda crisis económica que, debido al desarrollo desproporcionado de la industria petroquímica y

metalúrgica, fue tanto más funesta cuanto que la única posibilidad de lograr un apoyo económico de la Unión Soviética era hacer a cambio mayores concesiones políticas.

También Yugoslavia, asociada al Comecon desde 1964, se orientó con más fuerza hacia el comercio con los países del Comecon durante la crisis económica de 1973-75, cuando la tasa de inflación del país llegó a más del 20% y su tasa de desempleo al 13%. Pero Tito no estaba en modo alguno dispuesto a renunciar a su autonomía. Por parte de la Unión Soviética es evidente que en este caso hubo una planificación a largo plazo, contando con que, a la muerte del anciano mariscal, en Yugoslavia se habría de producir un cambio de rumbo. A pesar de los problemas surgidos por ejemplo en 1977 en relación con la campaña contra el eurocomunismo, la Unión Soviética ha concedido múltiples créditos a este país sin lograr por ello su sumisión, o al menos su transigencia.

Los éxitos de la política de distensión, cuya finalidad política y económica fue puesta de manifiesto tanto por la solución de la cuestión alemana y los acuerdos de la CSCE como por la intensificación del comercio Este-Oeste, con su elevada tasa de importación de tecnología, aseguraron a la dirección de Breznev una indiscutible posición de fuerza tanto en la Unión Soviética, donde en torno a la persona del secretario general del Partido pronto habría de surgir un «culto a la personalidad» análogo al de la época de Stalin, como en el ámbito del Comecon.

En tanto que la opinión pública occidental se mostraba claramente inclinada —incluso en el aspecto de la deseada reducción de los gastos militares— a aceptar el término «distensión» como una reducción progresiva de los enfrentamientos y una eliminación de los temas conflictivos, la Unión Soviética nunca dejó lugar a dudas, a pesar del acta de la CSCE, de que al menos en el terreno ideológico no haría ningún tipo de concesiones, y de que proseguiría su «lucha contra el capitalismo», incluso con mayor intensidad bajo el signo de la política de distensión. Los dirigentes moscovitas no renunciaron ni un ápice a su misión mesiánica de lograr la victoria mundial para el «socialismo real». Se vieron obligados a mantenerla también para justificar el masivo rearme que tuvo lugar de forma simultánea a la «política de distensión»: la Unión Soviética, como potencia dominante del «campo socialista» que era, debía ser capaz de proteger a nivel mundial a los «países socialistas amenazados por el capitalismo». Si la modernización de la técnica armamentista y el desarrollo

de la Flota Roja durante la década de 1950 aún habían podido responder a una necesidad de recuperación para lograr un equilibrio con los Estados Unidos, esto cambiaría en el decenio siguiente.

La decisión de cambiar de rumbo, pasando de una política internacional claramente defensiva a una ofensiva, podría situarse cronológicamente hacia finales de 1973. En el encuentro de secretarios de CC sobre cuestiones internacionales e ideológicas celebrado en Moscú (19-20 de diciembre de 1973) se discutió el cambio de la situación internacional. Con la garantía legal del ámbito de supremacía europeo de la Unión Soviética gracia a los llamados «Tratados del Este» de la República Federal de Alemania (y los posteriores acuerdos de la CSCE), la Unión Soviética se quitaba un cierto peso de encima en Europa y podía desplazar y ampliar sus actividades políticas en la dirección en que lo exigían la crisis de identidad provocada por la política de Vietnam y la debilidad como líder de la superpotencia occidental, si bien esto parecía indicar el fin del sistema imperante hasta el momento de una paz asegurada bipolarmente por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esta reducción del ejercicio del poder por parte americana cobró un carácter sintomático en el análisis de los participantes en el ecuentro, que lo interpretaron como un indicio de una decadencia específica del sistema cuyas causas económicas se ponían de manifiesto en la recesión provocada por la «crisis del petróleo» de 1973 en los países industrializados de Occidente. Con un flagrante desconocimiento de los mecanismos del mercado, de ello se deducía una «crisis general del capitalismo», al que, además de los países socialistas, le habían nacido también unos decididos adversarios en los países en desarrollo, que habían tomado conciencia y luchaban por sus intereses nacionales. Ello abría la perspectiva de una pronta «victoria del socialismo». Así, al tiempo que se mantenía la ventajosa cooperación con Occidente —dada su utilidad—, se impuso la idea de que había que armarse para el decisivo enfrentamiento que se avecinaba. Esto se vio corroborado por el discurso de Ponomariov, representante soviético en la nueva conferencia de ideólogos del Comecon celebrada en Praga en enero de 1974, así como en la de Bruselas (26-28 de enero de 1974), en la cual participaron representantes de veinte partidos comunistas occidentales. La sucesión cronológica de estas consultas prueba la extraordinaria importancia dada por Moscú a estas cuestiones.

La revisión de la política soviética se puso ya de manifiesto en el terreno militar en 1974, pues, en tanto que los Estados Unidos reducían sus tropas a 2 170 000 hombres, la Unión So-

viética elevó las suyas a 3 520 000. La modernización de las armas y equipos (introducción de sistemas electrónicos) fue decididamente impulsada en el período inmediatamente posterior, y los cohetes y las fuerzas navales se desarrollaron enormemente. El resultado de estos esfuerzos armamentistas, invariablemente elevados a pesar de la «política de distensión» oficial, fue un preocupante potencial militar. Ante todo, empezó a compensar el enorme equipamiento de la flota: la Marina soviética apoyó el renovado expansionismo en el Tercer Mundo y se convirtió en un instrumento ofensivo de la política de dominio soviética, que comenzó a penetrar en los espacios dejados vacíos por la retirada de las antiguas potencias coloniales y supo conquistar (aunque no siempre conservar) importantes posiciones estratégicas en Africa y en el Oriente Próximo. Los Estados miembros del Pacto de Varsovia no se quedaron al margen de este desarrollo; también ellos tuvieron que aplicarse intensamente a la modernización de sus fuerzas armadas y al aumento de su capacidad de ataque. Este reajuste fue unido a un aumento de la estandarización de las armas y el equipamiento de las tropas de todos los países miembros. También hubo que concertar la formación de unos y otros en interés de una mayor eficacia de las unidades nacionales; las maniobras multinacionales, los ejercicios del Estado Mayor, etc., sirvieron igualmente para lograr una homogeneización. Para la coordinación en el sector militar hubo que crear, finalmente, instituciones comunes, por ejemplo en el ámbito de la defensa aérea. Con la constitución de un Estado Mayor general de la Organización del Pacto de Varsovia, que finalmente hubo de ser aceptado también por Rumania, largo tiempo hostil a él, la integración militar alcanzó en 1976 su momento culminante, así como su punto final —de momento— en el aspecto organizativo. La Unión Soviética obtuvo con ello un equivalente a los márgenes de libertad nacional concedidos desde principios de la década de 1960; la vinculación de las fuerzas armadas se convirtió en un eficaz instrumento para contrarrestar las tendencias centrífugas, tal como se pondría de manifiesto en diciembre de 1981.

Este cambio de la estrategia política global había ido precedido del desencanto con respecto a la predisposición de Occidente a la ayuda al desarrollo. La decisión de cooperar tomada en 1969 había estado ligada a la esperanza de que las naciones industrializadas de Occidente —incluido Japón— participasen en la modernización general de la Unión Soviética y en la explotación de sus recursos mediante una aportación masiva de capital y tecnología. En las propuestas frecuentemente formuladas se

habló de un proceso a largo plazo, a 30 ó 50 años vista. Pero estos proyectos gigantes sobrevaloraban las posibilidades de Occidente, de la misma manera que ignoraban los mecanismos del sistema económico occidental. Para responder a las excesivas expectativas de los dirigentes soviéticos habría sido necesaria una reorientación económica de graves consecuencias. Pero tal modificación de las directrices de política económica habría hecho temer una fuerte dependencia con respecto al mercado del Este, sin contar con otros efectos. Teniendo muy presente la importancia de los factores económicos en el sistema marxista-leninista, uno se pregunta si los dirigentes soviéticos, a la hora de realizar estos ofrecimientos de cooperación, olvidaron los principios de una ideología que —según sus propias declaraciones— habían determinado durante 50 años la historia de la Unión Soviética, o si por el contrario se trató de una trampa. La promesa de observar una buena conducta política frente a Occidente —«distensión y cooperación»— contaba poco en caso de que Moscú siguiese empeñado en ampliar su dominio en el Tercer Mundo. En tales condiciones, la cooperación se mantendría dentro de unos límites esencialmente más reducidos, aun cuando en el transcurso de un año hiciese realidad un número importante de grandes empresas conjuntas, tales como la acería de Kursk, la fábrica de automóviles «Togliatti» o el gran oleoducto. Los gigantescos proyectos de Siberia no progresaron, sin embargo, a pesar del acuerdo soviético-americano-japonés del 25 de noviembre de 1974 para la explotación de los yacimientos siberianos de gas natural, malográndose también las ya avanzadas negociaciones sobre una posible participación japonesa en la explotación de los importantes yacimientos de cobre de Siberia oriental. Tampoco la visita de Nixon a Moscú (28 de junio de 1974) habría de servir ya para restablecer el prestigio del maltratado presidente de los Estados Unidos más de lo conseguido por las negociaciones soviético-americanas.

Al margen de esto, Moscú persistió, de cara al escenario europeo, en su «política de distensión», tanto más cuanto que el acercamiento chino-americano desde 1972 despertaba un tenso interés en el Lejano Oriente. Al igual que a los demás países del Comecon, a la Unión Soviética le importaba la tranquilidad de Europa, tanto más cuanto que ésta era la garantía para la prosecución del ventajoso comercio Este-Oeste. Tras el fracaso del programa máximo, este comercio había posibilitado, como solución menor, las necesarias importaciones de tecnología. Los países de Europa occidental, ofuscados por el potencial militar soviético, mostraron comprensión en este sentido, así como una

actitud en general favorable. Gracias a esa útil política de distensión, la Unión Soviética pudo dejar en manos de los países del Comecon el ordenamiento de sus propios asuntos internos y limitarse a ejercer una función de asesoramiento y de control. Con la doctrina Breznev habían quedado inequívocamente trazados los límites de la libertad de decisión nacional, y en agosto de 1968 se había puesto de manifiesto la voluntad de los dirigentes soviéticos de no aceptar que nadie los traspasara, sin olvidar que el Comecon y el Pacto de Varsovia eran unos instrumentos de dirección muy eficaces a su disposición. En el ámbito de la política exterior, el Comité Consultivo Político se convirtió cada vez más en el órgano rector, complementado por los encuentros regulares de los secretarios de los Comités Centrales para debatir las cuestiones internacionales e ideológicas de los «países hermanos». Prueba de que la «igualdad de derechos» de los países del Comecon, tan frecuentemente invocada, seguía siendo una simple fórmula fue el hecho de que Moscú excluyese a Hungría de las negociaciones de las MBFR; los Estados aliados desempeñaron una función meramente consultiva, no siendo tampoco informados previamente de los cambios de rumbo político —por ejemplo, en las negociaciones Este-Oeste— por los dirigentes soviéticos, los cuales se reservaban la decisión en todas las cuestiones importantes. Habida cuenta de la relación de fuerzas, los países pequeños del Comecon habían aprendido a respetar esto. Por lo demás, los dirigentes de la RDA y Checoslovaquia, al igual que los de Bulgaria, coincidían en lo esencial con la línea de Moscú; Polonia, en donde Edward Gierek relevó a Gomulka en la dirección del Partido tras los disturbios provocados en diciembre de 1970 por los aumentos de precios, y Hungría también se mostraron sumisas. El tecnócrata Gierek concentró sus esfuerzos en la realización de un ambicioso programa de industrialización para el cual obtuvo múltiples ayudas de Occidente. Con ello aceptó el riesgo de la seria rivalidad que para las aspiraciones rectoras del POUP, mermadas ya bajo Gomulka, representaban la Iglesia y los intelectuales críticos, si bien podía contar al menos con que el episcopado polaco era consciente de su responsabilidad y tenía en cuenta el entramado de fuerzas del país. En Hungría, Kádár siguió construyendo su socialismo liberal de cuño húngaro; en enero de 1978 se promulgó una ley de cogestión obrera («democracia de empresa»), y a principios de 1979 desapareció la obligación de solicitar un visado para viajar a Austria, en virtud de un tratado del 5 de mayo de 1978.

En la RDA, el relevo del veterano Ulbricht el 3 de mayo de

1971 por Erich Honecker, político más flexible, no trajo consigo cambio alguno. Desde mediados de la década de 1960, Ulbricht había ido perdiendo poder, mientras que los tecnócratas en torno a Honecker lograban una influencia cada vez mayor en la cúspide oligárquica. Desde el punto de vista de la nueva situación alemana, también era ventajosa la sustitución de Ulbricht, marcado por el estalinismo y la construcción del muro, por una persona más joven que, por otra parte, no podía invocar antiguos méritos frente a los dirigentes moscovitas. Bajo la dirección de Honecker se mantuvo la estricta orientación hacia la Unión Soviética, la RDA actuó en la década de 1970 con gran habilidad como mano derecha de Moscú, también en el plano internacional, lo que supuso un considerable alivio para la Unión Soviética, por ejemplo en Africa. Al cambio de la situación alemana, producido por los tratados con Bonn, respondió el cambio de Constitución del 7 de octubre de 1974, 25.° aniversario de la RDA, por el cual se suprimía el pasaje en donde se hablaba de «nación alemana», con lo que la RDA se convertía simplemente en un «Estado socialista de obreros y campesinos» cuya soberanía quedaba demostrada, entre otras cosas, por la inclusión de Berlín Este de manera formal a partir de entonces y a despecho de las protestas verbales de los tres aliados occidentales. El creciente prestigio internacional y el peso de la RDA dentro del Comecon reforzaron la confianza en sí mismos tanto de sus dirigentes como de su población, contribuyendo también con ello a una cierta relajación de las relaciones interalemanas.

Durante la década de 1970, los países balcánicos siguieron siendo una zona difícil y problemática para la Unión Soviética, ya que aquí sólo contaba con Jivkov como fiel partidario. Este mantuvo de forma consecuente su política de orientación estricta hacia la Unión Soviética para beneficio económico y político de su país, cuyo buen comportamiento —sólo comparable al de la RDA— fue recompensado por Breznev. Cierto es que tampoco en Bulgaria había desaparecido el nacionalismo y que en 1978 llegó incluso a surgir un movimiento disidente (Declaración 78), pero la dirección del Partido logró canalizarlo e instrumentarlo en el conflicto con Yugoslavia a propósito de Macedonia. Yugoslavia, por el contrario, siguió constituyendo un factor de inseguridad para la Unión Soviética, incluso tras la muerte de Tito (4 de mayo de 1980). El tratamiento alterno al que se había visto sometida por los dirigentes soviéticos tras la caída de Jruschov también prosiguió. De esta manera, durante su visita a Belgrado en noviembre de 1976, Breznev aseguró que existían diversas vías hacia el socialismo, pero después de que Tito com-

binase su devolución de la visita en agosto de 1977 con una visita a Pyongyang y Pekín justo en el momento en que Moscú volvía a incluir en el programa la unidad del movimiento comunista las relaciones se enturbiaron de nuevo y la concesión de créditos soviéticos adicionales en 1978 fue políticamente compensada con las conversaciones de Hua Guofeng en Belgrado. Tito —como era previsible— nunca ocultó que era comunista, aunque, por supuesto, yugoslavo. Sus medidas disciplinarias y las represalias contra las corrientes de oposición también encontraron siempre la aprobación soviética (con tal de que no se dirigieran contra los fieles a Moscú). Supo utilizar hábilmente su prestigio internacional, así como la rivalidad de las grandes potencias, para sustraerse a la integración de su país en una esfera hegemónica. Es imposible predecir hasta qué punto lo lograrán sus sucesores. Las dificultades planteadas a éstos por el conflicto de las nacionalidades que estalló en la región de Kosovo no fueron utilizadas por la Unión Soviética; era prioritario asegurar el control de Polonia (y Afganistán).

La aseveración albanesa de que Tirana no provocó el descontento y el nacionalismo que éste originó entre los albaneses de Kosovo es digna de crédito teniendo en cuenta la política de este país tras el acercamiento chino-americano de comienzos de la década de 1970. Hoxha, ciertamente, continuó su polémica contra el «revisionismo soviético», pero intensificó también los esfuerzos en favor de un entendimiento con los Estados vecinos, siendo el resultado de ello unas relaciones más estrechas con Yugoslavia y con Pristina en el campo científico. (El conflicto de Kosovo puede atribuirse a causas yugoslavas internas: los intelectuales, cuyo número era desproporcionado para este pequeño territorio como consecuencia del desmedido fomento del sistema educativo albanés por parte de Belgrado, manifestaron su descontento social mediante reivindicaciones nacionalistas.) Tras la muerte de Mao Zedong (9 de septiembre de 1976), Hoxha dio una clara muestra de su alejamiento del maoísmo: el 29 de diciembre de 1976, Albania se convirtió oficialmente en una «República Socialista Popular», poniéndose así al mismo nivel de evolución general. Con el inicio de las reformas chinas en 1977, tras la caída de la «Banda de los Cuatro», la ruptura con el antiguo protector se hizo inevitable. Con ello aún fue mayor el atractivo de Yugoslavia como país amigo; Hoxha también cultivó los contactos con Rumania. Pero entre tanto hubo contradicciones dentro de la dirección del Partido albanés —sin duda muy importantes— como lo puso de manifiesto la misteriosa muerte del que fuera durante mucho tiempo jefe de

gobierno, Mehmed Shehu (dada a conocer el 18 de diciembre de 1981).

Rumania se mantuvo en su principio de soberanía nacional a pesar de la presión ejercida sobre el país por los dirigentes soviéticos, y, con gran disgusto por parte de Moscú, no aceptó la integración supranacional ni participó tampoco en los trabajos comunitarios multinacionales; cierto es que se mostró fundamentalmente dispuesta a cooperar dentro del Comecon, pero sólo en la medida en que ello no estuviera en contradicción con el principio nacional. No obstante, a pesar del acuerdo económico a largo plazo con Francia de julio de 1975, y del acuerdo con los Estados Unidos de agosto del mismo año, que le concedían incluso el *status* de nación más favorecida, en 1976 tuvo que aceptar la creación de un Estado Mayor supranacional de la Organización del Pacto de Varsovia después de que se hubiesen realizado ejercicios conjuntos de oficiales soviéticos y rumanos. (La realización de maniobras conjuntas en suelo rumano pudo sin embargo evitarse.) Breznev recompensó su demostración de buena voluntad con su visita a Bucarest (del 22 al 24 de noviembre de 1976) —era la primera vez que el jefe del Partido soviético pisaba suelo rumano—, firmándose entre ambos Estados un acuerdo de cooperación científico-técnica, así como ideológica, dando ello también una muestra de la buena voluntad de Rumanía y de la suavización de la Unión Soviética, intranquila a causa de los tratados comerciales con Occidente de 1975.

Al vislumbrarse a lo largo de 1975 que los países industrializados de Occidente podían superar la recesión de forma inesperadamente rápida, los comunistas de Europa occidental, sobre todo, vieron cuestionada la tesis de la «crisis del capitalismo» elaborada por el encuentro de ideólogos de Moscú y reforzada en las conferencias de Praga y Bruselas. Era evidente que la capacidad de regeneración del «capitalismo» y la flexibilidad de este sistema económico eran mayores de lo que se había pensado. Había pues que encontrar una nueva estrategia política acorde con esta constatación, pues con la desaparición de la crisis también desaparecían las perspectivas de agravamiento de los conflictos sociales, y con ello las de maduración de una situación revolucionaria y de toma del poder por los comunistas. Volviendo a antiguas consideraciones relativas a una posible coalición con partidos socialistas y burgueses, según lo expuesto también por Berlinguer en la conferencia de Bruselas, principalmente los partidos comunistas con mayor número de afiliados,

los de Italia y Francia, se pronunciaron a favor de la vía parlamentaria hacia el poder y de la renuncia al postulado de la «dictadura del proletariado». Con ello tenían en cuenta la mentalidad política y la cultura de sus países, si bien tampoco hay que pasar por alto el hecho de que en eso se reflejaba también la frustración de una lucha política sostenida durante muchos decenios que, a pesar de las experiencias positivas, no había llegado a la meta propuesta: la toma del poder. El dirigente del Partido español, Carrillo, también se pronunció en favor de este «eurocomunismo» que, si bien pretendía remodelar en sentido socialista las relaciones de propiedad y de producción, prometía mantener las formas de organización parlamentarias y democráticas de una sociedad pluralista, incluyendo la oposición política y la posibilidad de un cambio de poder. Este recurso a posiciones del socialismo democrático era sin embargo inconciliable con el leninismo y ponía en peligro la legitimación del poder de los partidos comunistas gobernantes, así como la aspiración hegemónica del PCUS y con ella de la Unión Soviética. Cuando el dirigente del PC francés, Marchais, hombre por lo demás fiel a Moscú, declaró en el Congreso del PCF de febrero de 1976 que la «dictadura del proletariado» no era ineludible, la dirección soviética pareció moverse con la mayor rapidez. Logró convocar la ya largamente debatida gran conferencia de partidos fieles a Moscú destinada a restaurar la unidad y la cohesión de la ideología y el movimiento comunista, que se reunió en Berlín Este el 29 de junio de 1976. Su importancia para la determinación de la línea a seguir se desprende del hecho de que fue el propio Tito, ya entrado en años, quien estuvo a la cabeza de la delegación yugoslava. En ella los eurocomunistas, apoyados por Rumania y Yugoslavia, se opusieron con éxito a la vuelta al principio monolítico que se escondía tras la fórmula del «internacionalismo proletario» e implicaba la hegemonía política del PCUS. Berlinguer defendió con una brillante alocución los principios del eurocomunismo, secundado por Carrillo y Marchais, así como por el portugués Cunhal. Los moscovitas —los representantes del PCUS y sus seguidores— no pudieron imponer la aceptación de un documento de principios con carácter vinculante general, ni la condena del PC chino; en el comunicado final, publicado dos meses más tarde, sólo se hablaba de la «solidaridad mutua de los trabajadores de todos los países», reforzándose nuevamente los principios de igualdad de derechos, no injerencia e independencia de todos los partidos y garantizándose el «respeto a la libre elección de diferentes vías». El movimiento comunista internacional, tal como se había puesto

ya de manifiesto en las diversas conferencias anteriormente celebradas, estaba de acuerdo en su objetivo —la sociedad sin clases—, pero no en el camino a seguir.

La discusión ideológica en torno al eurocomunismo continuó en la época inmediatamente posterior, produciéndose un nuevo acercamiento de Marchais al PCUS. Dentro del PCE, Moscú logró muy pronto poner en marcha una oposición fiel a Moscú dentro del Partido frente a Carrillo, en tanto que a Berlinguer no le habrían de surgir dificultades con los miembros sovietófilos de su partido hasta después de que éste tomase posiciones decididas en favor del movimiento reformista polaco y condenase la injerencia soviética. Los leninistas de observancia estricta tomaron la amenaza eurocomunista tanto más en serio cuanto que coincidió cronológicamente con el movimiento de derechos humanos que apelaba al acta final de la CSCE de Helsinki. En la Unión Soviética, la RDA, Checoslovaquia y Bulgaria se intensificó el adoctrinamiento político a partir de 1976; el «año de aprendizaje del Partido» del SED, que comenzó en septiembre de 1977, y la introducción de «activistas del Partido», que habían de ejercer una labor propagandística en las comunidades de vecinos, se concibieron como medidas preventivas contra las influencias ideológicas extrañas. Finalmente, en noviembre de 1977, se reunió en Moscú una Conferencia Internacional Científico-Teórica en la que Ponomariov, secretario del CC del PCUS para cuestiones ideológicas, pronunciaría un veredicto, casi *ex cathedra,* sobre los eurocomunistas.

d. *Crisis de la política de distensión*

La «política de disensión» de Breznev, que tantos éxitos había tenido, sufrió hacia finales de 1979 una grave derrota que no fue posible pasar por alto debido a sus consecuencias. En tanto que las actividades de los Estados Unidos y el interés de la opinión pública mundial se centraba completamente en el asunto de los rehenes del personal de la Embajada americana en Teherán, la Unión Soviética aprovechó la ocasión para dar un golpe de Estado en Afganistán con el fin de librarse del gobernante comunista Amin, que ya no era grato a Moscú, y, con ayuda de tropas soviéticas, instalar en Kabul a Babrak Kamal, que gozaba de su favor. La indignación internacional ante esta intervención militar, extendida también a los países del Tercer Mundo —sobre todo a los islámicos—, no había sido prevista por Moscú, ya que la Unión Soviética venía ejerciendo desde hacía tiempo una

influencia decisiva sobre este país de Asia Central y había participado tanto en el derrocamiento de la monarquía (1973) como en el golpe comunista del 27 de abril de 1978 por el que los comunistas habían accedido al poder en Kabul con su apoyo. Desde el punto de vista de Moscú, la liquidación del régimen de Amin era un asunto interno comunista, por lo que la condena de la intervención era tanto más incomprensible cuanto que el golpe de Estado comunista de abril de 1978 apenas había tenido eco internacional. Pero la dura reacción de Washington, con sus medidas de embargo y el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, no estuvo determinada sino en una mínima parte por la situación política interna de los Estados Unidos, en donde la humillación a que Teherán había sometido a la potencia occidental había hecho culminar el descontento hacia la desafortunada política del presidente Carter. Las virulentas controversias en torno a los derechos humanos —el «Cesto 3» de los acuerdos de la CSCE de Helsinki— que habían tenido lugar en la posterior conferencia de Belgrado (1977) ya habían producido una impresión negativa en los Estados Unidos. El empleo de la fuerza militar por parte de los dirigentes del Kremlin provocó sin embargo en la opinión pública americana, sensibilizada por las acciones violentas de Teherán, una duda fundamental, muy extendida, sobre la veracidad de la política soviética de distensión e introdujo un cambio político que, con la elección de Ronald Reagan (4 de noviembre de 1980), inició una nueva fase en las relaciones entre ambas superpotencias. Ante tal cambio de opinión y las consecuencias de éste, la Unión Soviética ha subrayado sin embargo, con razón, que no se han modificado sus objetivos políticos y que persiste asimismo en su concepción de distensión entre los dos bloques de poder. El cambio de rumbo de los Estados Unidos no se debe sin embargo sólo al reconocimiento de que la distensión afectaba únicamente, por parte soviética, a las relaciones entre las dos superpotencias (incluyendo a su clientela europea), sino también al reconocimiento de que, en definitiva, las declaraciones programáticas del PCUS y de los dirigentes soviéticos determinaban efectivamente la política soviética, de que la lucha por el poder entre ambos sistemas sociales seguía invariable, habiendo cambiado únicamente su escenario, cosa que los países occidentales no habían querido admitir, dadas las consecuencias económicas y sus efectos sobre una sociedad orientada hacia el bienestar.

Agobiados por la cuestión afgana, que se ha mantenido vigente por la resistencia inesperadamente tenaz de los muyahidines contra las tropas de intervención, muy superiores desde el punto

de vista militar, los dirigentes soviéticos, ante la crisis internacional de confianza política y el elevado potencial conflictivo existente, trataron de evitar un agravamiento de las tensiones internacionales. En este sentido no apremiaban sólo las inminentes elecciones presidenciales americanas, sino también la situación económica de los países del Comecon, en donde ya desde mediados de la década de 1970 se venía perfilando una nueva tendencia: las tasas de crecimiento, aún elevadas en el plan quinquenal de 1971-1975, iniciaron un descenso, percibiéndose aquí el efecto de la cuestión de la energía y las materias primas, la escasez de mano de obra y la baja productividad laboral, así como los problemas estructurales de transporte y de índole general de las economías nacionales. El rápido empeoramiento de la balanza del comercio exterior con Occidente provocó un endeudamiento masivo —estimado en 1980 en 80 000 millones de dólares—, que hizo que los países del Comecon dependieran de la coyuntura occidental. La recesión provocada aquí en 1978 por la «segunda crisis del petróleo» también se reflejó, como ya ocurriese en 1973-74, en los países del Comecon: los mercados occidentales se mostraron menos dispuestos a absorber los productos del Comecon. Así, las economías nacionales de los países del Comecon se vieron en serias dificultades. La propia Unión Soviética se vivo afectada a pesar de sus ventas de crudo y gas natural, teniendo que reducir, de la misma manera que los demás países del Comecon, los objetivos del plan, señal externa de que la crisis también tenía efecto sobre las economías planificadas de forma centralista. Ello obligó a traspasar la carga a la población. En Hungría esto se hizo según el principio de la «verdad de los precios» propio de la economía de mercado, aunque también los países del Comecon que mantenían el principio de la subvención se vieron obligados a aumentar los precios, lo cual se llevó a cabo en parte abiertamente (como en el caso de los artículos de lujo) y en parte de forma subrepticia. Sobre todo Bulgaria y Hungría, países con una agricultura muy desarrollada y con una alta solvencia, pudieron mantener los efectos de la recesión dentro de ciertos límites, en tanto que la RDA, con unas deudas, tan sólo en Occidente, de unos 10 000 millones de dólares, se vio en grandes dificultades a pesar de las ventajas que para ella suponía el comercio interalemán. En cambio, los dos países que habían utilizado excesivamente la buena disposición occidental al crédito —Polonia y Rumania— se vieron al borde del hundimiento. Ambos países habían impulsado, con ayuda occidental, una ambiciosa industrialización; ahora bien, el desarrollo desproporcionado y unilateral de ciertas ramas de la industria —en

Rumania, la industria petroquímica y la metalúrgica; en Polonia, la construcción naval y la de maquinaria—, unido a la falta de atención prestada a la agricultura, tuvieron por consecuencia una desproporcionalidad estructural que resultó especialmente propicia a la crisis. Esta estrategia de desarrollo equivocada provocó en ambos países graves conmociones sociales. En Rumania, donde en 1978 ya se habían producido disturbios entre los mineros, Ceaucescu sólo logró estabilizar la situación a duras penas y gracias al considerable apoyo occidental. En Polonia, sin embargo, la crisis de la economía provocó una crisis abierta del sistema.

Ésta fue desatada por el fracaso de la política económica de Edward Gierek que, como enérgico *voivoda* de la Alta Silesia, se había ganado en los años sesenta no sólo la confianza de la población sino también la del Partido, que le nombró sucesor de Gomulka al resultar éste insostenible tras la sangrienta represión de los disurbios obreros de 1970-71. La ambiciosa política de industrialización de Gierek, para la cual había podido conseguir enormes créditos occidentales, agravó sin embargo aún más los problemas estructurales a causa de la preferencia dada a algunas ramas de la industria. Para la agricultura, de por sí ya poco apreciada por el Partido debido al gran porcentaje de ésta en manos privadas (un 80-85%), apenas quedó capital que invertir: su mecanización (y con ella su racionalización), así como su abastecimiento de fertilizantes —beneficioso para el aumento del rendimiento— fueron sacrificados al desarrollo industrial. Esta clara desventaja de la población campesina no tuvo, lógicamente, un efecto potenciador de la productividad. Pero Gierek también perdería pronto entre los obreros y la clase intelectual el anticipo de confianza del que había disfrutado al acceder al cargo. En la sociedad socialista «abierta» de cuño polaco, los dirigentes del Partido creían poder negar la crítica y renunciar a la participación de la élite intelectual del país en la toma de decisiones. Pero, entre los trabajadores, la limitación del consumo impuesta por la industrialización a marchas forzadas provocó la ira general. De ahí que Gierek tampoco lograra imponer la urgente reducción de las subvenciones de precios (que en 1980 absorbieron alrededor de un 15% del presupuesto total del Estado). Al igual que en 1970-71, también en junio de 1976 se produjeron huelgas con el anuncio del aumento de los precios de los productos alimenticios.

Así, con la recesión de 1978, el país se precipitó en una situación sin salida que, con las malas cosechas de 1978-1980, sufrió una sobrecarga adicional. Cierto es que en 1978-79 se pudo

todavía hacer frente a las obligaciones —tan sólo el endeudamiento del país con Occidente se estimaba en 20 000-23 000 millones de dólares— mediante un drástico aumento de las exportaciones y una limitación de las importaciones, pero las ulteriores —y necesarias— reducciones impuestas al consumo provocaron disturbios. Los aumentos de precios del 1 de julio de 1980 dieron motivo a una ola de huelgas que conmocionó a todo el país. La huelga de los astilleros Lenin de Gdansk, iniciada el 14 de agosto, no sólo provocó la caída de Gierek sino también el nacimiento del sindicato independiente Solidaridad, que en un breve espacio de tiempo logró una afiliación millonaria, convirtiéndose en el aglutinador de las fuerzas reformistas y reuniendo en su seno a intelectuales y trabajadores. Ante tal movimiento de masas, en el cual se ponía de manifiesto el descontento de la población por los numerosos errores económicos, políticos y sociales del Partido y de la dirección del Estado, a Stanislav Kania, sucesor del líder del Partido, relevado el 5 de septiembre, sólo le quedó la posibilidad de lograr un acuerdo amistoso con Solidaridad. Este acuerdo se hizo tanto más difícil cuanto que las quejas presentadas en el transcurso del incipiente e inevitable proceso de depuración social contra Gierek y sus seguidores afectaban también al propio Partido. Y este desfase entre el Partido, que ya había perdido hacía tiempo su credibilidad, y una sociedad que ya no estaba dispuesta a soportar calladamente las consecuencias de las decisiones, sino que exigía la participación en su gestación, puso finalmente en entredicho el régimen comunista en Polonia.

Pues lo que aquí ocurría afectaba a la autoconcepción comunista. Había que admitir que miembros de la dirección del POUP habían cometido graves errores. Pero no se podía admitir que estos errores fueran inherentes al propio sistema, pues de ello se derivaba la necesidad de un cambio de sistema. De acuerdo con la doctrina, tampoco se podía tolerar que un sindicato que no estaba supeditado al Partido y no actuaba en su nombre se constituyese en fuerza autónoma, aun cuando limitase efectivamente sus reivindicaciones de autogestión a cuestiones sociales y económicas y no pusiera en duda ni el derecho del Partido a dirigir el país ni la pertenencia de Polonia al «campo socialista». Pero era precisamente la exigencia de independencia lo que resultaba inconciliable con los principios del poder comunista. Había pues que rechazarla, ya que la mera limitación parcial del poder absoluto del Partido creaba un precedente peligroso de consecuencias imprevisibles.

Para los dirigentes comunistas de los países de Europa oriental, el curso de los acontecimientos en Polonia era tanto más alarmante cuanto que, en los demás países del Comecón —incluida la Unión Soviética— en 1978 se había hecho también perceptible una oposición obrera y existían intelectuales opuestos, principalmente en Checoslovaquia y en la RDA. En Moscú, al igual que en Praga y en Berlín Este, también se temía que Polonia hiciera causa común con los dos «Estados del frente occidental», ya que no se sabía si Solidaridad haría suyas otras reivindicaciones políticas que ya empezaban a oírse. La situación económica y exterior de los países del Comecon limitaba sin embargo la libertad de acción de Moscú, pues una intervención militar de los países del Pacto de Varsovia, dado el apoyo que el movimiento reformista polaco había encontrado en Occidente, entrañaba un riesgo imposible de calcular; las declaraciones de los países occidentales no dejaban lugar a dudas. Así, la única posibilidad era apoyar a los dirigentes polacos, tal como hizo la cumbre del bloque oriental celebrada el 6 de diciembre de 1980 en Moscú, pero el conflicto debía ser resuelto por la propia Polonia.

Kania trató en vano de encontrar una salida a la crisis. Las exigencias de Moscú, prioritarias, eran inconciliables con las de Solidaridad: el monopolio político total del Partido no permitía la existencia de ninguna instancia de control externa al Partido. Pero los constantes titubeos frente a Solidaridad, que pronto contaría también (17 de abril de 1981) con un sindicato campesino propio, provocaron nuevas huelgas. La predisposición en este sentido se vio aún más reforzada por la situación, en rápido deterioro, del abastecimiento, que no pudo sostenerse ni siquiera con el racionamiento de importantes productos alimenticios (1 de abril de 1981). A pesar de los suplicantes llamamientos de Kania y del nombramiento como jefe de gobierno del general Wojciech Jaruzelski el 9 de febrero de 1981, el movimiento huelguístico se prolongaría durante 1981, alcanzando su apogeo con las grandes huelgas de los mineros y los tipógrafos en agosto. La situación económica había empeorado entre tanto a causa de las pérdidas de la producción, hasta el punto de que la práctica de las subvenciones existente hasta entonces se hizo imposible. A finales de agosto se produjeron aumentos masivos de precios (de hasta un 400%) que afectaron también al pan y a otros productores cerealísticos. Los toscos gestos de amenaza de las maniobras conjuntas de las tropas del Pacto de Varsovia que tuvieron lugar en Polonia a principios de septiembre erraron por completo su objetivo, ya que sirvieron más bien para

aumentar la influencia en el movimiento reformista de los grupos más radicales, que instaban a la realización de cambios fundamentales del sistema. Y así declinó también la autoridad de la dirección central, presidida por el moderado Lech Walesa, pues a pesar de sus llamamientos, a finales de octubre tuvieron lugar huelgas «salvajes» en todo el país. Ante la anarquía política y económica general, el 4 de noviembre tuvo lugar un encuentro entre Jaruzelski, que el 18 de octubre había relevado a Kania, Walesa y el primado de la Iglesia católica, que exhortaba a la prudencia, el arzobispo Glemp (sucesor del cardenal Wyszynski, fallecido el 18 de mayo), en el que Jaruzelski propuso la formación de un «frente de reconciliación nacional». El antagonismo de principio de las posiciones hizo sin embargo imposible el acuerdo. Cuando a finales de noviembre el CC del Partido exigió poderes especiales para el gobierno, la dirección sindical amenazó con una convocatoria de huelga general.

Entre tanto se había hundido de hecho la economía del país, afectada por una inflación galopante. El país ya no se hallaba en condiciones de cumplir sus compromisos internacionales tanto en materia de pagos como de suministro de productos. Esto supuso para los países socios del Comecon enormes perjuicios en sus propias economías, sobre todo por la pérdida de las exportaciones de carbón. Ante la amenaza de la huelga general (12 de diciembre), el gobierno Jaruzelski recurrió a la *ultima ratio,* decretando el estado de excepción el 13 de diciembre de 1981. Un consejo militar asumió el poder supremo y se limitaron las libertades civiles, siendo encarcelados diversos dirigentes de Solidaridad, entre ellos Lech Walesa, y de la clase intelectual en la oposición.

El establecimiento del régimen militar fue el reconocimiento abierto de la bancarrota política, social y económica del régimen comunista en Polonia. El golpe de Estado de los militares (comunistas) pudo ciertamente eliminar mediante la militarización de la vida pública el «doble régimen» claramente existente en el país e imponer una tranquilidad aparente, pero con ello desapareció el consenso social, ya que el uso de la fuerza puso abruptamente fin al difícil y penoso diálogo entre la sociedad y los gobernantes. La tarea asumida por el consejo militar era extremadamente difícil. El Partido, que antes había sido la base del ejercicio del poder, se había derrumbado; muchos de sus miembros habían ingresado en Solidaridad o simpatizaban con el sindicato. Las «depuraciones» conforme al modelo acreditado restaurarían la disciplina y la estabilidad. Más problemática era la superación de la miseria económica en tanto durase el desacuerdo

social. Los créditos concedidos por los países del Comecon —principalmente por la Unión Soviética— eran como mucho una gota en el mar; la estabilización requería una larga renuncia al consumo. Pero ésta, a su vez, perpetuaba el descontento de la población, a la que se trataba de motivar para conseguir un mayor rendimiento. La tarea más difícil era sin embargo lograr la aceptación de la actuación del gobierno por parte de esta población. Su confianza estaba antes bien depositada en el movimiento de reforma, cuyas exigencias expresaban sus deseos y necesidades, y que extraía su fuerza tanto de esta identificación como del apoyo que le prestaba Occidente, y también de la conciencia de que el gobierno se hallaba limitado en cierta medida en el uso de la fuerza por la situación económica, ya que la necesaria moratoria le obligaba a tener relativamente en cuenta la opinión pública de los países occidentales. La Iglesia católica, tercera fuerza de Polonia, exhortaba constantemente a ambas partes en este conflicto a la prudencia y a la moderación en interés de la nación. Sus propuestas de mediación tenían como fin la búsqueda del diálogo entre las partes; sólo así se podría superar realmente la crisis y lograr el necesario —porque, a la larga, era lo único saludable— consenso social. Esto suponía, sin embargo, la supresión de la ley marcial y la puesta en libertad de los «internados». Sólo con dificultad y de forma parcial pudo decidirse a ello el gobierno, debido entre otras cosas a las exigencias de la Unión Soviética, secundada por la RDA y por Checoslovaquia. Jaruzelski contaba con que el tiempo trabajaría a su favor y con que, imponiendo de forma bien dosificada una consolidación del orden público y de la economía y mejorando (relativamente) a largo plazo —según se esperaba— la situación de abastecimiento, la oposición perdería su fuerza. La aparición en la primavera de 1982 de los primeros indicios de una mejoría en el sector agrario —consecuencia del intenso fomento estatal de éste, principalmente mediante el alza de los precios de compra de los productos agrícolas— no supuso la resolución del problema económico fundamental, sino antes bien su agudización, pues sólo sirvió para acrecentar la carga económica del Estado, cuando lo necesario era su reducción. Esto suponía, al menos, un desplazamiento parcial de los costes a la población mediante un aumento de los precios y/o una reducción de las subvenciones. Pero en principio no parece que existan muchas posibilidades de imponerlo en una medida considerable, así como tampoco que existan muchas posibilidades de poner en práctica las reformas fundamentales del sector industrial. No se

sabe pues si los tibios intentos de reforma emprendidos conducirán o no a la necesaria regeneración.

La paralización de la fuerza creadora política, visible en la crisis polaca, no sólo se limita al partido comunista de Polonia. La falta de innovación en la potencia hegemónica soviética, que desde la muerte de Kosiguin sólo se ha podido ocultar a duras penas y ha sido perpetuada por el problema de sucesión de Breznev en una dirección demasiado vieja, también se hizo notar en los demás países del Comecon, habiéndose planteado desde finales de la década de 1970 la exigencia de nuevas concepciones en respuesta a los retos lanzados por una situación mundial en permanente cambio.

En el ámbito de la política económica no se pudo lograr la gran ruptura que se intentaba realizar con el impulso de modernización programado en 1969-70. La estrategia desarrollista de impulsar el crecimiento mediante importaciones de tecnología fracasó principalmente por la incapacidad del inflexible aparato de planificación y dirección, que no supo reaccionar adecuadamente a la cambiante situación del mercado occidental, lo cual contribuyó al elevado endeudamiento con Occidente. Las dificultades inherentes al sistema de los países de economía planificada de forma centralista aún se pusieron más de relieve en la confrontación con la libre economía de mercado, en donde son necesarias nuevas concepciones si se quiere seguir vinculado al desarrollo de la economía mundial. La actitud más bien restrictiva (con la excepción de Hungría) frente a las tendencias reformistas, a pesar de los prometedores primeros pasos dados en los años sesenta, redujeron éstos durante el siguiente decenio a simples mejoras técnicas de la planificación, y ello a pesar de conocer los efectos inhibidores del crecimiento y de la innovación del sistema de planificación centralizada de la economía. (Sólo en la economía armamentista se han introducido mecanismos propios de la economía de mercado cuya eficacia ha sido probada por el elevado rendimiento de esta rama de la economía.) No pudieron decidirse a reforzar de forma esencial las competencias de las empresas en materia de inversión, como en Hungría. Ello indica una fijación ortodoxa en el monopolio económico estatal como instrumento de poder del Partido. La apertura económica del Comecon al exterior impidió también la deseada integración en la forma en que debía lograrse dentro del «programa conjunto», ya que concedía un margen a las preferencias nacionales. Finalmente, el aumento de los precios del petróleo tuvo también como consecuencia una transformación de los términos de intercambio que hizo que los objetivos políticos

estructurales quedaran obsoletos, toda vez que la producción agraria se estancó en general a finales de la década de 1970. Esto, junto con el aumento de la demanda, provocó problemas de abastecimiento bastante importantes. Una vuelta rigurosa al mercado «cerrado» del Comecon para no depender de las oscilaciones de la economía mundial es imposible, por otra parte, si se ha de perseverar en la idea de un crecimiento económico suficiente para asegurar el abastecimiento de la población, y la desviación a los mercados de los países en desarrollo con objeto de obtener divisas se halla limitada debido al atraso tecnológico de muchos productos del Comecon.

Desde el punto de vista de la política interior, a los dirigentes soviéticos les preocupa menos el movimiento disidente, mantenido cuidadosamente bajo control y silenciado a mediados de 1982, o la clase intelectual crítica y en continua fricción con unos márgenes ideológicos cada vez más estrechos, cuyos privilegios van unidos a una buena conducta moderada, que la indiferencia general hacia la ideología legitimadora del poder. Sus objetivos en materia de política social han perdido credibilidad en su confrontación con la desencantada realidad de la cotidianeidad soviética; el imperativo y permanente llamamiento a una «forma de vida socialista» se ha desgastado. Pero con el cansancio ideológico, que llega hasta la desilusión, el Partido corre el peligro de perder un instrumento de movilización muy importante. Principalmente el desinterés ideológico de la juventud, que en otro tiempo constituía uno de los pilares más fiables del Partido, ha alarmado a la dirección de éste. La pérdida de autoridad de la dirección, en contraposición a la época de Jruschov, pletórica y esperanzadamente dinámica en su conjunto, se caracteriza muy especialmente por el hecho de que también algunos grupos nacionalistas y religiosos se sustraigan a la aspiración de poder del Partido. Es muy dudoso que la deseada intensificación de la labor propagandística surta aquí la transformación esperada en tanto se mueva dentro de las trilladas vías de la doctrina ortodoxa. Los problemas de autoridad y legitimidad aquí surgidos sólo pueden resolverse mediante concepciones sociales nuevas y convincentes, esto es, realistas.

Tampoco los demás países del Comecon se han librado de estos problemas de identificación y de los síntomas de desgaste del ejercicio del poder, si bien se han visto afectados en diferente grado. Factores tales como el nivel socioeconómico de partida, la eficacia del régimen comunista, la tradición nacional, la actitud expectante de la población, el potencial crítico de la clase intelectual, etc., ejercen un efecto tan diferenciador como

la forma de desempeñar el poder, muy distinta durante la era de la «colaboración socialista», aunque observando siempre los principios fundamentales, pues mientras que en Rumania los dirigentes comunistas sólo supieron prevenir la irrupción abierta de un conflicto social mediante el empleo de prácticas estalinistas, Kádár, en Hungría, se aseguró el consenso de la población con la concesión de importantes márgenes de libertad, es decir con la renuncia a la aspiración de dominio. Los factores desestabilizadores no deben sin embargo ir más allá, en su conjunto, de una reducción de la intensidad del dominio; allí donde se convierten en una amenaza para el poder se acaba imponiendo por la fuerza una conducta conforme al sistema. El instrumento de poder que se ha revelado como más fiable en el conflicto político polaco es el ejército. De aquí, la meticulosidad y la intensidad con que se preocupan los dirigentes comunistas desde hace tiempo de sus ejércitos y que, por ejemplo en la RDA, han conducido a una militarización de la política juvenil, no sólo han contribuido a mantener el sistema, sino también —en el sentido de la «unidad del campo socialista»— a reducir los conflictos, ya que ha podido evitarse la intervención de los demás países del Pacto de Varsovia. Sin embargo, dentro del ámbito económico se está aún muy lejos de la eficacia militar. Un nuevo impulso integrador como respuesta al apoyo soviético a las economías apuradas de los pequeños países les plantea a éstos, sin embargo, la cuestión de las nuevas importaciones de tecnología cuya incorporación podría tener consecuencias negativas que, a su vez, repercutirían también en la Unión Soviética. En la medida en que la Unión Soviética, debido a las tensiones internacionales, se limite a poner condiciones básicas, seguirá siendo difícil la conciliación de los intereses nacionales y persistirán los problemas de coordinación.

Esto se puede aplicar también, y en medida aún mayor, al movimiento comunista internacional. Cierto es que Moscú puede contar con la fidelidad de aquellos partidos comunistas de los países del Tercer Mundo cuya existencia política depende en gran medida de la ayuda económica del PCUS. Pero con el establecimiento de regímenes comunistas en los países en vías de desarrollo ha crecido el potencial conflictivo intracomunista. El movimiento comunista mundial ha de dirimir dentro de sus propias filas el conflicto Norte-Sur, habiendo ya fracasado en una ocasión, en el caso de la República Popular China. Con la exportación del sistema político comunista, la central de Moscú ha de tener en cuenta los intereses de países de un nivel socioeconómico muy distinto; junto a los países industrializados del

Comecon se encuentran Estados como Vietnam y Angola, Yemen del Sur y Etiopía. El hecho de que, a pesar de la coincidencia ideológica, pueden surgir en la práctica política graves contradicciones de intereses que pongan en peligro la «unidad del campo socialista» se ha vuelto a poner recientemente de manifiesto en el caso de Afganistán. La carga que para la economía nacional soviética (aunque mucho menor que la ocasionada por la populosa China) representa su ampliación de poder y que sólo puede ser transferida en escasa medida a los otros países del Comecon es pesada, aun cuando Moscú no conceda a las jóvenes «repúblicas populares» la prioridad concedida a Cuba, caro objeto de prestigio en el doble sentido de la palabra. Es necesario hacer realidad la «solidaridad proletaria internacional» no sólo en el aspecto político, sino también en el económico y social, pues de lo contrario el político se vería perjudicado. A comienzos de la década de 1980, los dirigentes soviéticos se encontraron ante una difícil problemática: las serias dificultades económicas de los países del Comecon exigían una ayuda soviética masiva para asegurar la esfera hegemónica europea —que era prioritaria—, pero tampoco era posible reducir seriamente la subvención de las «repúblicas populares» de Asia y Africa sin una merma del prestigio de la Unión Soviética. (En la cuenta de gastos y beneficios de este papel de Moscú hay que añadir además que su desempeño exige también el correspondiente potencial militar.)

Moscú puede, en cambio, mostrarse impasible frente a los «desviacionistas» comunistas. La fuerza de los «eurocomunistas» se ha quebrantado y los dirigentes soviéticos apenas deben ya temer que esta manifestación de «revisionismo» afecte seriamente a su esfera hegemónica en Europa oriental. Por otra parte, los acontecimientos de Polonia han demostrado la funcionalidad de los instrumentos de seguridad soviéticos, y la evolución internacional, con su crisis económica y de confianza política, ha provocado una tendencia centrípeta que ha reforzado el papel rector de la Unión Soviética. Yugoslavia, tan obstinada en otros tiempos, ha perdido con la muerte de Tito su figura integradora, su poder de irradiación y su peso político, toda vez que se encuentra ante una grave crisis económica y política, y Albania, tras la ruptura con su antiguo protector, China, se ha convertido en todo caso, en una *quantité négligeable,* tanto más cuanto que se ha visto obligada a abandonar su firmeza de principios ultraortodoxa. La relación entre Moscú y Pekín sigue siendo difícil, a pesar de que el año 1982 trajo consigo una clara mejora y distensión. Tanto la larga preparación —desde el sondeo rea-

lizado por expertos soviéticos en temas del Lejano Oriente en marzo hasta las negociaciones del viceministro de Asuntos Exteriores Leónidas Ilischev en octubre en Pekín— como la duración de las negociaciones mismas (4-29 de octubre) evidencian su dificultad, siendo al parecer el problema fundamental la delimitación de las esferas de influencia en Asia central y oriental.

Ahora bien, en tanto que la cuestión de los partidos y países «desviacionistas» (exceptuando a China) puede ser tratada de forma dilatoria si se mantiene la misma actitud decidida en cuanto al punto de vista político, la política soviética respecto a Afganistán y Polonia no sólo ha provocado la crisis de las relaciones americano-soviéticas, sino que además ha puesto en tela de juicio la idea misma de la «coexistencia pacífica». Los dirigentes de Moscú se mostraron irritados por las reacciones occidentales, caracterizadas por el embargo impuesto por los Estados Unidos, la no ratificación de los SALT II y la «doble decisión» de la OTAN. La política del Gobierno Carter era ahora, sin duda, difícil de prever, pero también sin duda era previsible un cambio de tendencia en la política interior americana. La interpretación divergente del «Cesto 3» del acuerdo de la CSCE, así como el armamento masivo y la expansión de la esfera de poder comunista obligaron a la opinión pública de los países occidentales a aceptar como algo dado los principios fundamentales de la política comunista. Con ello se rompió, sin embargo, la ilusión de la teoría de la convergencia («cambio mediante acercamiento»), reforzándose aquellas fuerzas políticas de Occidente que se habían mostrado dispuestas a reafirmarse decididamente frente al reto soviético. Razones tanto de índole política como económica impulsaron a ambas partes a superar la crisis de confianza política internacional. Ahora bien, la cuestión de una auténtica «coexistencia pacífica» que se ajuste a los intereses de ambas partes exige de los dirigentes soviéticos —suponiendo que los Estados occidentales persistan en su posición— una reorientación de principio, pues en tanto Moscú se aferre a la unidad del «campo socialista» conforme a la «doctrina Breznev», es decir a la irreversibilidad de la toma del poder por parte de los comunistas aunque ello suceda en contra de la voluntad expresa de la mayoría, difícilmente se podrá lograr la distensión, sea ésta de la índole que fuere. Dada la acostumbrada práctica soviética del inmovilismo una vez aseguradas las ganancias obtenidas, teniendo en cuenta la importancia de este problema, que afecta a los fundamentos mismos de la autoconcepción comunista, las élites políticas e intelectuales de Occidente

se hallan en principio ante un reto. En tanto Moscú pueda suponer que es capaz de mover a las sociedades abiertas de Occidente a una vuelta a la «política de distensión» de las décadas de 1960 y 1970, también aquí confiará en el tiempo. Su plazo está sin duda fijado por la insuficiente eficacia económica del sistema y por los riesgos que ello conlleva.

6. Europa en la política mundial

I. EL DIFICIL CAMINO DE LA DISTENSION

Las relaciones entre los dos bloques en los que, debido al enfrentamiento entre las potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se integraron después de la segunda guerra mundial la mayor parte de los países europeos han oscilado entre los polos de la tensión y de la distensión. Los costes del enfrentamiento y la imposibilidad evidente de poder imponer a la parte contraria la propia voluntad en puntos esenciales, por una parte, han sugerido de forma reiterada un arreglo entre Este y Oeste; el riesgo creciente de una destrucción general de Europa ha impulsado además a la Unión Soviética, y finalmente también a los Estados Unidos, a reducir adicionalmente el potencial conflictivo en caso de guerra atómica. Por otra parte, a esta eliminación de la guerra fría se oponían también importantes obstáculos: el equilibrio entre Este y Oeste debía parecer garantizado, o al menos debía desaparecer el claro desequilibrio existente; las ideas de amenaza por ambas partes debían ser desmitificadas, es decir quedar reducidas a su núcleo real; tanto en el Este como en el Oeste las fuerzas interesadas en la distensión debían prevalecer sobre las que lo estaban (consciente o inconscientemente) en el mantenimiento de la tensión. Al no darse automáticamente estas condiciones necesarias y, en caso afirmativo, sólo rara vez en esta combinación, la eliminación de la guerra fría, después de que hubiese concluido finalmente la formación de bloques en Europa, se convirtió en un difícil proceso, constantemente amenazado por recaídas.

Tras el fracaso de las tentativas de impedir la integración de la República Federal de Alemania en la OTAN, para los sucesores de Stalin había también toda una serie de buenas razones para proseguir su ofensiva en favor de la distensión: los Estados Unidos seguían aventajando a la Unión Soviética dentro del campo del armamento nuclear, a pesar del inicio de la producción soviética de bombas de hidrógeno en agosto de 1953, (con 1 350 bombas atómicas americanas frente a 350 soviéticas dispuestas en el punto de mira recíproco en 1955); el indispensable

reordenamiento de la estructura del poder soviético («desestalinización») no había tocado en modo alguno a su fin, y en el horizonte ya se perfilaban las diferencias chino-soviéticas, cada vez más profundas. El esfuerzo por asegurar contractualmente el *statu quo* existente en Europa, es decir sobre todo por lograr el reconocimiento de la RDA y de la frontera Oder-Neisse, ocupaba ahora el primer plano de las iniciativas soviéticas en favor de la distensión, que por otra parte tendían hacia una limitación del armamento nuclear y a la creación de mecanismos para prevenir la guerra. Los dirigentes soviéticos proclamaban además como objetivo máximo la contención de la presencia americana en el continente europeo, aunque después de todo lo sucedido no podían esperar seriamente tener éxito también en este punto dentro de una solución negociada global. En la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias en Berlín de principios de 1954, los dirigentes soviéticos presentaron por primera vez un proyecto de «tratado de seguridad colectiva en Europa», en el que Estados Unidos sólo estaría presente con el *status* de observador, y al que, en la cumbre de Ginebra de julio de 1955, le sucedería la primera propuesta para llevar a cabo un desarme controlado por la ONU, así como la exigencia de reconocimiento de la RDA; en marzo de 1956, los dirigentes soviéticos presentaron planes para la reducción de los ejércitos convencionales y para la creación de una zona de vigilancia y limitación del armamento en Europa. La doctrina de la «coexistencia pacífica», proclamada simultáneamente, que reducía la rivalidad de los sistemas en el terreno económico e ideológico y excluía expresamente el conflicto armado en la era de la amenaza nuclear, debía asegurar en política interior el rumbo soviético hacia la distensión y, al mismo tiempo, fomentar las tendencias suavizadoras en Occidente [1].

Dentro de la alianza occidental había toda una serie de fuerzas interesadas en aceptar las ofertas soviéticas relativas a la distensión: la desdramatización de la situación internacional prometía a la izquierda europea un fortalecimiento de su posición en política interior y a las élites tradicionales un mayor grado de autonomía de sus países frente a los Estados Unidos. En general, parecía algo necesario debido a que la inclinación de los Estados Unidos hacia la estrategia de la «represalia (atómica) masiva» y el aumento del armamento nuclear soviético habían acrecentado el peligro de que un posible conflicto entre el Este y el Oeste se dirimiese en la forma de guerra atómica en suelo europeo. En los Estados Unidos, el Partido Republicano en el gobierno se veía, por razones de política interior, ante la necesi-

dad de reducir los gastos de armamento; los diputados demócratas más importantes abogaban por una desmilitarización de la política de contención occidental y el presidente Eisenhower se sentía por lo demás inclinado a pasar a la Historia como el presidente de la paz que había puesto fin a la guerra fría tras la feliz contención del expansionismo soviético. Un sinnúmero de planes de *«disengagement»* fueron la expresión de esta creciente disposición occidental, por diversos motivos, a la distensión. Así, el primer ministro británico, Anthony Eden, propuso en la cumbre de Ginebra la creación de una zona de militarización limitada, así como la inspección militar recíproca de ambos lados de la línea de demarcación Este-Oeste de Alemania como parte de un proceso de reunificación; George Kennan exigió en un memorándum, en la primavera de 1956, la creación de un «cinturón neutral» de Estados centroeuropeos, incluida una Alemania reunificada; el líder de la oposición británica, Hugh Gaitskell, abogó públicamente a principios de 1957 por la retirada de todas las tropas extranjeras de la RFA, la RDA, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, así como por la creación de un sistema de control internacional para la región centroeuropea [2].

Entre tanto, el canciller federal Adenauer, y con él la mayor parte de la opinión pública de Alemania occidental, no estaban dispuestos a correr el riesgo de romper los vínculos occidentales de la República Federal, y por supuesto no tenían la intención de pagar el precio exigido por los dirigentes soviéticos de reconocer el régimen del SED como interlocutor con igualdad de derechos; en vez de ello, y con la pretensión de convertirse en los únicos portavoces legítimos de todos los alemanes, trataron de mantener abierto el camino hacia una reunificación «en paz y libertad», es decir dentro del marco de la alianza occidental, con la vaga esperanza de que los dirigentes soviéticos se viesen obligados por la fuerza y cohesión de Occidente a aceptar un día tal concesión unilateral. De forma similar, el secretario de Estado norteamericano, Dulles, confiaba en que el dominio soviético sobre los países de Europa oriental se debilitase en un futuro próximo sólo con que Occidente mostrase suficiente «dureza». Dado que tales reflexiones podían seguir apoyándose en un amplio espectro de temores anticomunistas por parte de la opinión pública occidental y que la República Federal, ante las tendencias emancipatorias de Gran Bretaña y Francia, se había convertido además en el aliado más importante de los Estados Unidos, Adenauer y Dulles lograron comprometer a los aliados occidentales con sus posiciones máximas y evitar con ello, en

principo, una distensión del conflicto Este-Oeste sobre la base del *statu quo*.

De este modo, Adenauer pudo desde muy pronto (en el tratado provisional sobre Alemania de 1952) inculcar a los aliados occidentales su idea de reunificación dentro de una autodeterminación absoluta y el postulado de que los avances hacia el desarme y hacia la distensión general dependían de las concesiones soviéticas en la cuestión alemana; el plan oficial de desmilitarización de Eden fue modificado en el sentido de que la reducción de tropas en Centroeuropa sólo podía producirse después de la reunificación de Alemania y teniendo como punto central la línea Oder-Neisse en lugar de la línea Elba-Werra. Dado que los dirigentes soviéticos no veían la necesidad de renunciar a su influencia en Alemania y en la Europa centro-oriental sin contraprestaciones occidentales y que Occidente no disponía realmente de ningún medio de presión para obligar a realizar tal renuncia, el diálogo de distensión entre el Este y el Oeste se estancó ya en sus primeros comienzos.. En la primavera de 1955, los dirigentes soviéticos aprobaron la firma de un tratado internacional con Austria, exigido por las potencias occidentales como requisito para el inicio de conversaciones en torno a la distensión, que conducía a la neutralidad permanente del país, ocupado hasta entonces por tropas aliadas, e invitaron a Adenauer a Moscú para establecer relaciones diplomáticas; éste aceptó, a fin de disponer de un hilo directo con los dirigentes soviéticos, pero por lo demás amenazó con la ruptura de las relaciones diplomáticas a todo país que reconociese diplomáticamente a la RDA cuestionando así la reivindicación alemana federal de representación única («Doctrina Hallstein» de diciembre de 1955). La cumbre de Ginebra de julio de 1955 no logró resultados concretos y la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores aliados, celebrada a continuación, en octubre-noviembre de 1955, también en Ginebra, concluyó con acusaciones recíprocas.

Sin duda el gobierno federal no disponía del peso suficiente para contener por mucho tiempo el proceso de distensión, y Dulles, por su parte, también perdería pronto influencia dentro de la Administración estadounidense. Ya en la primavera de 1956 los gobiernos británico y francés mostraron tendencia a no considerar por más tiempo la reunificación alemana como una condición previa de las negociaciones de desarme, sino, en todo caso, como una consecuencia de éstas. El diputado republicano Harold Stassen fue a Moscú, con la autorización del presidente Eisenhower, para sondear la cuestión del desarme sin tener en

cuenta el grupo de proyectos de ley de Adenauer. Durante el levantamiento popular húngaro de octubre-noviembre de 1956, las potencias occidentales se abstuvieron de cualquier tipo de intervención en el sentido de una «política de fuerza», mostrando antes bien justo en aquel momento un grado de desunión hasta entonces inexistente: Francia y Gran Bretaña aprovecharon que el interés de la opinión pública internacional estaba centrado en la crisis húngara para realizar una expedición militar contra Egipto, que anteriormente había nacionalizado el Canal de Suez, pero posteriormente se vieron obligadas a interrumpir la empresa sin éxito ante la intensa presión ejercida contra este intento tardío de política europea de gran potencia no sólo por parte del gobierno soviético, sino también del norteamericano. En el mismo otoño de 1956, los Estados Unidos tomaron la decisión de reducir las fuerzas convencionales en Europa en favor del estacionamiento de armas nucleares (si bien no de forma tan masiva como preveía originalmente el Plan Radford de junio de 1956); con ello quedaron definitivamente quebrantados los requisitos militares para una «política de fuerza» realmente agresiva, si es que alguna vez habían existido; el instrumental militar occidental se limitó en lo sucesivo a la disuasión de posibles ataques soviéticos mediante la represalia atómica. El gobierno federal alemán, que en un principio se había opuesto en gran medida a esta reorientación defensiva, comenzó a adaptarse a la nueva situación a finales de 1956 y, bajo la influencia de su ministro de Defensa, Franz Josef Strauss, exigió al menos equipar ahora también al ejército federal *(Bundeswehr)* con armamento atómico táctico para evitar una mayor pérdida de peso de la República Federal dentro de la alianza occidental, así como una relajación de ésta[3].

Los dirigentes soviéticos y numerosos partidarios de la distensión en Europa oriental y en Occidente consideraron no obstante ambas cosas, el aumento del armamento atómico americano y la exigencia germanooccidental de dotarse de armas atómicas —no rechazada básicamente por el gobierno Eisenhower— como una señal para una arriesgada escalada de la «política de fuerza», concentrando por ello en adelante sus planes de distensión en la idea de una «zona desnuclearizada» dentro de Europa. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Adam Rapacki, expuso ya en la primavera de 1957 el plan de inclusión de la RFA, la RDA, Polonia y Checoslovaquia dentro de una zona desnuclearizada de esta índole, sin renunciar a la pertenencia a sus alianzas respectivas, claramente interesado en facilitar también con ello un mayor grado de maniobrabilidad a su país frente

a la Unión Soviética. Los partidarios occidentales del *«disengagement»*, como Kennan, también defendían ahora ideas similares. Los dirigentes soviéticos recurrieron a la fórmula de Rapacki, es decir asumieron el riesgo de una cierta emancipación de los países de Europa oriental para aislar aún más a los detractores del reconocimiento del *statu quo* político de Alemania en Occidente e impedir el estacionamiento de armas nucleares en territorio de Alemania occidental. A comienzos de 1958 les pareció que el curso de los acontecimientos en Occidente había madurado lo suficiente como para forzar el reconocimiento de la realidad de la política alemana e impulsaron con gran despliegue propagandístico la convocatoria de una nueva cumbre que evidentemente debía fijar el *statu quo* de la cuestión alemana y levantar una barrera permanente contra la dotación de armas atómicas a la República Federal.

Las esperanzas soviéticas no se cumplieron: la inclinación de las potencias occidentales a entenderse con la Unión Soviética sin haber conseguido antes la renuncia del dominio del SED en la RDA se había hecho entre tanto tan fuerte que Adenauer se vio obligado a estudiar él mismo el terreno en Moscú y dar marcha atrás en sus proyectos de ley sobre reunificación y desarme, si bien, justamente con la exigencia de negociaciones sobre un desarme *global*, logró frenar el plan de desarme *regional* de Rapacki. La concentración del interés en la cuestión del desarme hizo que quedase relegado a un segundo plano el posible desacuerdo occidental en cuanto a la importancia de una reunificación «en libertad». En diciembre de 1957, una cumbre de la OTAN acordó el estacionamiento de cabezas nucleares en todo el territorio europeo de la alianza; en febrero de 1958, el comandante en jefe de la OTAN, el general Norstad, afirmó públicamente que el armamento atómico del ejército federal era una necesidad política y militar; a finales de mayo de 1958, el Parlamento federal alemán aceptó la adopción de armas nucleares y los aliados occidentales declararon una vez más que la formación de un gobierno para toda Alemania surgido de elecciones libres era la condición necesaria para la firma de un tratado de paz con Alemania. Como máximo, Adenauer estaba dispuesto a aceptar la oferta confidencial de una «solución austríaca» para la RDA, es decir, la renuncia temporal a la exigencia de una reunificación en caso de que los dirigentes soviéticos estuviesen dispuestos a su vez a transformar a la RDA en un Estado pluralista y democrático y a permitir que se convirtiese en un país neutral [4]. Esto, incluso, era mucho más de lo que la mayor parte de la opinión pública de Alemania Occidental se hallaba dis-

puesta a admitir; cuando el filósofo Karl Jaspers presentó públicamente a debate dos años más tarde una propuesta similar, ésta chocaría con el rechazo general. Pero, para los dirigentes soviéticos, como es natural, era demasiado poco; sus esfuerzos por asegurar el *statu quo* se encontraban en un callejón sin salida.

Para lograr no obstante el éxito deseado (y asegurarse también con éste un triunfo en política interior), Nikita Jruschov, que entre tanto se había convertido en el hombre más importante dentro de la jerarquía moscovita, amenazó ahora a las potencias occidentales con cerrar el acceso a Berlín Oeste. En una nota del 27 de noviembre de 1958 los exhortó a ponerse de acuerdo en el plazo de seis meses con el gobierno soviético sobre un tratado de paz que liberase a los dos Estados alemanes de los sistemas aliancísticos existentes y diese a Berlín Oeste, hasta el momento de una posible reunificación, el *status* de ciudad libre desmilitarizada; en caso de que tal acuerdo no se produjera ,anunciaba que pondría en manos de la RDA el control de las vías de acceso aliadas a Berlín Oeste y que apoyaría a la RDA en la salvaguardia de sus derechos de control. De este modo, de acuerdo con el cálculo de Jruschov, las potencias occidentales se verían prácticamente obligadas a presentar ofertas negociados más sustanciales en relación con el reconocimiento del *statu quo* y con la prohibición de armamento atómico a la República Federal, ya que no se podían permitir una retirada de Berlín Oeste si no querían arriesgarse a una crisis de la alianza de la OTAN tan importante que provocase incluso su disolución; por otra parte, tampoco podían arriesgarse a un conflicto armado por el mantenimiento de sus derechos en Berlín y por la pretensión de Bonn de ser los únicos representantes, ya que la concentración del interés occidental en el armamento estratégico amenazaba con provocar muy pronto una escalada que llevara al enfrentamiento atómico; por consiguiente, el simple mantenimiento del *statu quo* debía parecerles ahora un éxito. Para Jruschov, el hecho de que los dirigentes americanos ya no estuviesen dispuestos a comprometerse más allá del mantenimiento del *statu quo* era tanto más plausible cuanto que también el territorio americano se hallaba ahora expuesto a un enfrentamiento atómico con el comienzo de la construcción por parte soviética de cohetes intercontinentales [5].

En realidad, el propio Dulles era ahora partidario del reconocimiento de la RDA para salvar la posición aliada de Berlín, y el primer ministro británico, Harold Macmillan, viajó en febrero de 1959 a Moscú para discutir la posibilidad de un *«disengage-*

ment» de ambas partes en Europa central. Adenauer trataba por el contrario de impedir las negociaciones, no sólo porque veía acertadamente que, de no ser así, se avecinaba el fracaso definitivo de su política de reunificación, sino también porque sospechaba equivocadamente que la iniciativa de Jruschov era un nuevo intento de expansionismo soviético en Europa central[6] que sólo podría rechazarse mediante la «firmeza» de Occidente. De forma sorprendente encontró apoyo a su postura en el nuevo presidente francés, Charles de Gaulle, que si bien no estaba interesado como Adenauer en la revisión del *statu quo* de la cuestión alemana, según habría debido poner de manifiesto su reconocimiento de la frontera Oder-Neisse en marzo de 1959, quería no obstante impedir el aumento, o incluso la consolidación del condominio americano-soviético sobre Europa y esperaba por lo demás poder lograr que la República Federal se comprometiese a ser su aliada en la lucha por la emancipación del predominio americano. La tesis del expansionismo soviético ayudó a ambos a contener de nuevo en cierta medida la disposición americana a negociar; no obstante tuvieron que admitir que la posición de la República Federal empeoraba poco a poco, pues tras muchos titubeos —Jruschov había tenido que suavizar entretanto su ultimátum en marzo de 1959— las potencias occidentales se mostraron finalmente dispuestas a celebrar negociaciones a nivel de ministros de Asuntos Exteriores; en estas negociaciones, que tuvieron lugar en Ginebra de mayo a agosto de 1959, no sólo participaron representantes de la República Federal, sino también, y equiparados formalmente, de la RDA en calidad de «asesores» de las delegaciones occidental y soviética respectivamente; la delegación soviética consiguió que en la segunda mitad de la conferencia ya sólo se tratase el tema de Berlín, dejando ya de lado las propuestas occidentales de una reunificación «en libertad»; por último, las potencias occidentales dejaron traslucir incluso su predisposición a limitar su presencia en Berlín.

Las potencias occidentales no se avinieron sin embargo a aceptar las reivindicaciones soviéticas decisivas: el reconocimiento de la RDA y la desnuclearización de Europa central; de esta manera, la conferencia no tuvo resultados concretos, por lo que Jruschov siguió tratando de llevar a Occidente al acuerdo deseado con una mezcla de gestos demostrativos de buena voluntad hacia los Estados Unidos, virulentos ataques contra el «revanchismo» de Alemania Federal y misteriosas amenazas. Ahora bien, tras un preludio que prometía grandes éxitos —el viaje de Jruschov a los Estados Unidos en septiembre de 1959—, no se dieron otros progresos por parte soviética. A fin de evitar una nueva derrota,

Jruschov retiró en el último momento su participación en la cumbre convocada para mayo de 1960; después, en el otoño de 1960, trató de acercarse directamente al gobierno federal alemán y, finalmente, en el primer encuentro con el nuevo presidente estadounidense, John F. Kennedy, los días 3 y 4 de junio de 1961, renovó en toda regla el ultimátum de Berlín. La respuesta de Kennedy —el anuncio público de su intención de defender «tres cuestiones esenciales» en relación a Berlín: el derecho de los aliados occidentales a una presencia ilimitada en Berlín Oeste, el libre acceso a Berlín Oeste y el derecho de la población de Berlín Oeste a la libre elección de su forma de vida— confirmó a los dirigentes soviéticos en su suposición de que las potencias occidentales no estaban dispuestas a comprometerse más allá de la salvaguardia del *statu quo* en lo relativo a la política alemana; con ello quedaba libre el camino para obstruir la corriente de fugitivos de la RDA mediante la construcción del muro de Berlín de 13 de agosto de 1961. En realidad Kennedy se conformó, tras la construcción del muro (que iba en contra de la responsabilidad de las cuatro potencias respecto a toda la ciudad de Berlín), con protestas verbales; no se emprendieron acciones contrarias, como había esperado el gobierno federal alemán, tales como un avance de tanques occidentales hacia las fronteras de los sectores o un bloqueo económico contra la Unión Soviética [7].

La construcción del muro de Berlín provocó las más diversas reacciones dentro de la alianza occidental. Los tres aliados occidentales constataron aliviados que los dirigentes soviéticos no pretendían en realidad otra cosa que asegurar su esfera de dominio y no ampliar ésta más allá de las fronteras centroeuropeas ya existentes, por lo que ahora trataron, tal como lo deseaban los dirigentes soviéticos, de asegurar su presencia en Berlín a cambio de su reconocimiento de la RDA; pero en la República Federal se propagó como un rayo la idea de que los aliados occidentales no estaban dispuestos (o, al menos, no por mucho tiempo ya) a oponerse a la consolidación del *statu quo* en interés de una revisión (independientemente de cómo se alcanzase) de la realidad de la política alemana. A la larga, esta idea induciría también a los políticos de Alemania occidental a no considerar ya la reunificación como una condición previa para la distensión, sino en todo caso como una consecuencia de ésta; Adenauer trató sin embargo en un principio de oponerse de nuevo a este rumbo de los acontecimientos confiando en la alianza con De Gaulle. De esta manera, la ulterior oferta occidental de negociaciones siguió estando también por debajo de los límites de lo

que los dirigentes soviéticos consideraban necesario: en abril de 1962, el gobierno norteamericano propuso la creación de un organismo internacional de control del acceso a Berlín en el cual participarían, con igualdad de derechos, la RFA y la RDA. Ambas partes hicieron declaraciones sobre la «inviolabilidad de las líneas de demarcación» de Europa central, reconocimiento de hecho del *statu quo,* si bien por consideración hacia Adenauer no se produjo aún un reconocimiento formal de la RDA desde un punto de vista legal.

En tanto, pues, que en la cuestión del *status* de la RDA se empezaba a perfilar paulatinamente un éxito soviético, en otras cuestiones las perspectivas de los dirigentes soviéticos empezaron nuevamente a ensombrecerse, ya que en Occidente no se volvió a tratar el asunto de la creación de una zona desnuclearizada en Europa central; antes bien, los aliados occidentales discutirían ahora la integración de la República Federal en una fuerza nuclear multilateral de la OTAN. Sea como fuere, el equipamiento con armas estratégicas por parte de la alianza occidental había aumentado considerablemente desde el otoño de 1958 como consecuencia de la guerra de nervios de Jruschov y del pánico por la —supuesta— «laguna» ocidental en materia de misiles, y la Administración Kennedy se esforzaba por hacer posible reacciones más flexibles de la alianza en situaciones de crisis, aunque también por ampliar el armamento convencional. En 1962, los Estados Unidos disponían de cerca de 300 misiles intercontinentales para el transporte de cabezas nucleares, en tanto que la Unión Soviética sólo disponía de 70 misiles más o menos comparables [8], y el Ministerio de Defensa norteamericano se reconoció públicamente capaz de destruir a la Unión Soviética aun después de un ataque nuclear soviético contra los Estados Unidos («capacidad de segundo ataque»). Aunque los dirigentes soviéticos habían podido aprender entre tanto de la conducta occidental en la crisis de Berlín que las potencias occidentales no pensaban cuestionar la esfera de dominio soviética en Europa, la perspectiva de una supremacía constante de los Estados Unidos en la política mundial siguió siendo para ellos muy preocupante, tanto más cuanto que los dirigentes chinos estaban resueltos a iniciar el camino que les llevaría a convertirse en una potencia nuclear, incluso contra la oposición soviética. Cuando en el verano de 1962 se vio que las demostraciones militares en las vías de acceso a Berlín ya no causaban ninguna impresión entre las potencias occidentales, Jruschov optó por el intento de forzar a los Estados Unidos a un acuerdo mediante una amenaza masiva. Para ello mandó instalar secretamente desde septiembre de 1962 misiles de medio alcance

en la isla de Cuba que amenazaban directamente las ciudades más importantes de la costa oriental estadounidense con la clara finalidad de enfrentar a la opinión pública occidental con la nueva amenaza tras la finalización de los trabajos de instalación y, de esta forma, no sólo acelerar el reconocimiento de la RDA, sino también obligar a la firma de un tratado de paz con Alemania que convirtiese a Europa central en zona desnuclearizada. Así se crearían las bases de una regulación que limitase la posesión de armamento nuclear a las cuatro potencias vencedoras en la segunda guerra mundial y llevase por vías controlables la carrera armamentista entre el Este y el Oeste [9].

El descubrimiento de las instalaciones soviéticas por aviones americanos de reconocimiento los días 14 y 15 de octubre de 1962 desbarató estos cálculos: Jruschov se vio obligado a retirar los misiles (28 de octubre) después de que el gobierno Kennedy hubiese bloqueado el acceso a la isla y amenazado con una intervención militar (convencional) a la que no podían responder los dirigentes soviéticos si no querían arriesgar una guerra nuclear. Con ello fracasó la ofensiva soviético de presión; Jruschov se vio en la necesidad de aceptar, en principio, la supremacía americana, teniendo que contentarse con el respeto de hecho del *statu quo* existente en Europa. Ya no se habló por mucho tiempo del ultimátum referente al acceso occidental a Berlín; en la primavera de 1963, el gobierno soviético se mostró dispuesto a aceptar la idea de una «tregua» de Adenauer, que prometía no tocar para nada durante diez años la cuestión alemana, y en junio de 1964 la Unión Soviética y la RDA firmaron un «tratado de amistad» que se refería expresamente a la responsabilidad frente a Alemania de las cuatro potencias, antes discutidas. Por lo demás, la crisis de Cuba trajo consigo como consecuencia una cierta disminución de las tensiones Este-Oeste: Europa occidental había demostrado ser capaz de resistir la supuesta amenaza expansionista soviética; la reclamación occidental de una revisión de las relaciones dentro de la esfera de dominio soviética había quedado supeditada a la necesidad de prevenir un posible conflicto nuclear; la conducta de los grupos dirigentes orientales y occidentales había demostrado que ambas partes se consideraban satisfechas en lo esencial. Con ello, la interpretación ideológica del conflicto Este-Oeste como un enfrentamiento global hasta la victoria o la derrota quedaba desprovista de una de sus bases esenciales. De acuerdo con los dirigentes soviéticos, también los aliados occidentales contemplaban ahora la normalización de las relaciones Este-Oeste sobre la base del *statu quo* como su tarea principal. A ello se añadió el hecho de que la experiencia

de la crisis de Cuba reforzó en ambas partes la conciencia de la necesidad de prevenir una guerra nuclear suicida no deseada; así, se reanudaron las conversaciones Este-Oeste sobre control y limitación de armamento; en junio de 1963 se creó una línea directa por teletipo entre los centros de decisión de Moscú y Washington; un mes más tarde, las potencias nucleares de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo sobre la prohibición de seguir realizando pruebas con armamento nuclear en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua.

II. ENTRE EL CONDOMINIO Y LA EMANCIPACION

Con el cambio de rumbo hacia la eliminación de las tensiones entre el Este y el Oeste, las tensiones dentro de ambos campos volvieron, como es natural, a aumentar. En tanto que los dirigentes soviéticos habían trabajado en favor de un acuerdo con los Estados Unidos para estabilizar su esfera de dominio, habiéndose mostrado los Estados Unidos cada vez más dispuestos a avenirse a tal acuerdo aun a costa de ciertos intereses de sus aliados europeos occidentales, la distensión ofrecía a éstos la posibilidad de emanciparse en cierta medida de la gran potencia americana, al igual que, para los europeos orientales, significaba la posibilidad de ampliar su propio ámbito de acción frente al poder hegemónico soviético. En la medida en que ello afectaba a la otra parte, las dos potencias rectoras de sus respectivos bloques apoyaron, como es lógico, la tendencia a relajar los vínculos del bloque; ahora bien, dentro de su propio hemisferio buscaron vías para asegurar la lealtad de los aliados a pesar de la reducción de la oposición Este-Oeste. Así, la política de distensión en Europa posterior a la crisis de Berlín osciló entre la tendencia a una nueva autonomía europea en el Este y el Oeste y el inicio de un condominio americano-soviético sobre el viejo continente; habría que esperar hasta finales de la década de 1960 para que se pudiese encontrar un equilibrio entre estas alternativas mínimamente aceptable para todos los interesados. El mismo proceso de distensión en su conjunto no avanzó sino lentamente, interrumpido por retrocesos y estancamientos en la medida en que discurría de forma desigual en los diferentes planos.

El presidente Kennedy confiaba en poder atajar las tendencias emancipatorias de los aliados europeos occidentales ofreciendo la «colaboración» de los Estados Unidos a una Europa sustancialmente unida: los Estados europeos debían hacer de la Comunidad Europea una comunidad política con la integración de Gran

Bretaña y, fortalecidos de esta manera, asumir una mayor responsabilidad dentro de la política internacional; entre los Estados Unidos y una Europa unida debían —para provecho mutuo— eliminarse por completo las barreras aduaneras; por otra parte, los Estados europeos debían poseer el derecho de intervención en asuntos nucleares dentro del marco de una fuerza nuclear multilateral de la OTAN. No se dijo, sin embargo, cuál sería el verdadero alcance de la cogestión y la colaboración. Lo único que estaba claro era que la fuerza nuclear multilateral no reemplazaría en modo alguno al ejército americano existente hasta ese momento, sino que más bien debería complementarlo y aliviar su carga sólo en el ámbito europeo, con lo cual se descartaba la plena igualdad de derechos entre los europeos y la potencia americana que encabezaba la alianza. Lo que, por el contrario, estaba claro era que el *«gran design»* de Kennedy (título del libro en el que exponía su concepción) serviría para manener de forma duradera la vinculación de los europeos a los Estados Unidos y prevenir el desarrollo de una potencia europea económica y atómica independiente de los Estados Unidos; la formulación de la política de distensión frente al bloque oriental correspondía claramente, tanto en su forma de concepción como en su puesta en práctica, a la potencia rectora norteamericana.

Frente a ello, el presidente francés De Gaulle ya había exigido en septiembre de 1958 la plena igualdad de derechos de Francia con los Estados Unidos (dentro del marco de un directorio tripartito de la OTAN con Gran Bretaña y los Estados Unidos) y al rechazar el presidente Eisenhower esta exigencia con la advertencia de que ello perjudicaría a los restantes aliados de la OTAN, forzó el desarrollo de un armamento nuclear francés, pues por mucho que considerase la Alianza Atlántica como algo necesario para el mantenimiento del equilibrio Este-Oeste no por ello estaba dispuesto a confiar por completo la protección de los europeos a la decisión de la potencia rectora americana ni a avenirse a un proceso de asociación atlántica que excediese los objetivos de la alianza en aquel momento. Durante el tiempo en que los dirigentes soviéticos habían amenazado con el ultimátum de Berlín, De Gaulle había pospuesto sus exigencias de igualdad de derechos por mor de la necesaria solidaridad con la alianza occidental (asumiendo frente a las amenazas soviéticas una posición especialmente «firme»), pero ahora, una vez que el fin de la crisis de Cuba había puesto de manifiesto a sus ojos la supremacía americana, insistía con una fuerza tanto mayor en la autonomía de Francia frente a los Estados Unidos. Después de que Macmillan aceptara la integración del armamento nuclear británico

en la proyectada fuerza nuclear multilateral de la OTAN durante un encuentro con Kennedy en diciembre de 1962 en Nassau (el desarrollo de un misil nuclear británico se había revelado demasiado costoso), De Gaulle, en una conferencia de prensa espectacular, puso su veto el 14 de enero de 1963 al ingreso de Gran Bretaña en la CEE, haciendo fracasar así la pieza clave del *«gran design»* de Kennedy. La fuerza nuclear multilateral fue condenada por él de la misma manera que el tratado de paralización de las pruebas nucleares, y, tras una serie de ataques públicos a la política de los Estados Unidos, el 7 de marzo de 1966 anunció finalmente la salida de Francia de la organización militar del Pacto Atlántico (que no del Pacto mismo); las tropas estadounidenses tuvieron que abandonar el territorio francés y el cuartel general de la OTAN se trasladó de París a Bruselas. Por temor a un acuerdo americano-soviético a costa de los europeos, intensificó al mismo tiempo los contactos con la Unión Soviética y acentuó la comunidad de intereses de los europeos «desde el Atlántico hasta los Urales» [10].

El problema de la política gaullista radicaba en que el general necesitaba el apoyo de los aliados europeos para imponer sus aspiraciones de autonomía frente a los Estados Unidos, pero en tanto no pudiese estar seguro de que una Europa unida le seguiría en su idea de independencia no estaba dispuesto a unirse de forma irrevocable con estos aliados, mientras que los aliados mostraban a su vez esta predisposición en cierto grado, si bien rechazaban por su parte la idea de subordinarse a la dirección francesa. Ya esta contradicción hizo fracasar el proyecto de un órgano consultivo político para los Estados de la CEE, esbozado por De Gaulle en el verano de 1960 y concretado luego en el Plan Fouchet de octubre de 1961, pues en la medida en que, sobre todo los representantes de Bélgica y de los Países Bajos, insistían en la vinculación con los Estados Unidos y en la supranacionalidad, De Gaulle persistía cada vez más en la libertad de decisión de Francia, hasta que por último ambas partes hubieron de acabar por reconocer en abril de 1962 la completa contradicción de sus puntos de vista. Durante un año escaso, De Gaulle siguió conservando la esperanza de lograr una Europa independiente a través de una unión más estrecha entre Francia y Alemania, ya que Adenauer, decepcionado por la política americana de distensión, buscaba ahora de forma consciente un contacto más estrecho con Francia. Sin embargo, este acercamiento de Adenauer a De Gaulle se basaba, al menos en parte, en un malentendido en cuanto a los objetivos del general, y una mayoría creciente de la opinión pública de Alemania Federal no

estaba dispuesta a seguir a Adenauer en su distanciamiento del liderazgo americano y de su política de distensión, de modo que el 8 de mayo de 1963 el Parlamento alemán endosó al tratado franco-alemán sobre consultas del 15 de enero del mismo año un preámbulo que reforzaba todo lo que De Gaulle deseaba obstaculizar: los vínculos atlánticos, el afán de supranacionalidad y los esfuerzos por lograr el ingreso de Gran Bretaña en la CEE. Tras este segundo intento fallido, De Gaulle se contentó, en cuanto a su política europea, con el bloqueo de todos los primeros pasos hacia la ampliación de la integración iniciada con la CEE[11], y su lucha en favor de la independencia respecto de los Estados Unidos fue llevada a cabo por él como una campaña estrictamente nacional y, en ocasiones, nacionalista. Abandonada a sus propias fuerzas, Francia no tenía ciertamente el peso suficiente como para quebrantar eficazmente la supremacía americana; aunque con su crítica a los Estados Unidos, De Gaulle no hacía sino expresar abiertamente y de múltiples maneras lo que, junto con una mayoría de franceses, también pensaban secretamente muchos otros europeos, sus intentos de emancipación se quedaron en consecuencia en simple retórica.

El creciente aislamiento de los «gaullistas» alemanes en torno a Adenauer se puso también de manifiesto en el respaldo dado al gobierno federal respecto al tratado de paralización de las pruebas nucleares, así como en los primeros esfuerzos en favor de una distensión de las relaciones con los países de Europa oriental. Sectores de la CDU en torno al ministro de Exteriores, Gerhard Schröder, el FDP, que participaba en la coalición gubernamental, y el SPD, en la oposición, convinieron en no buscar ya la solución a la cuestión alemana en una «política de fuerza», sino, apoyándose en la política americana de distensión, en un cambio de los regímenes existentes dentro de la esfera de poder soviética encaminado hacia una mayor liberalidad y autonomía que hiciesen posible la superación final en un proceso a largo plazo de la división de Europa y con ello de Alemania. Por consideración a los partidarios de la política tradicional de Adenauer dentro de la CDU y a la opinión pública, la coalición gobernante siguió insistiendo en el no reconocimiento de la frontera Oder-Neisse y de la RDA, pero el interés de los gobiernos de Europa oriental por una relajación de los vínculos del bloque era lo bastante grande como para que, sobre esta base, Schröder lograse firmar entre marzo de 1963 y marzo de 1964 tratados comerciales con Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria en los que tácitamente se incluía también a Berlín Oeste, y crear en todos estos países delegaciones comerciales[12]. Las esperanzas

puestas en esta política en cuanto al aislamiento y renuncia final a la RDA (por ejemplo, de algunos sectores de la CDU y especialmente del experto americano en cuestiones de Europa oriental Zbigniew Brzezinski) no se cumplieron sin embargo, pues los dirigentes soviéticos vieron en la insistencia alemana en defender la representación única un medio de frenar el movimiento autonomista de Europa oriental y aislar a la República Federal frente a la «competencia» de los esfuerzos en favor de la distensión de americanos y franceses. Debido a la presión de Moscú, el gobierno de Checoslovaquia negó su aprobación a un tratado comercial que incluía a Berlín Oeste; todos los países del Pacto de Versovia suscribieron la fórmula de que toda mejora de las relaciones con la República Federal dependería del reconocimiento de la frontera Oder-Neisse, de la RDA y de la «unidad política autónoma» de Berlín Oeste.

El hecho de que la política de distensión no diese en un principio los frutos esperados por alemanes y europeos estuvo esencialmente relacionado con la implicación de los Estados Unidos en Vietnam. El conflicto, que había comenzado con el envío de tropas estadounidenses en apoyo del débil régimen survietnamita por la Administración Kennedy, experimentó una escalada mayor de año en año bajo el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, pues, a fin de contener al «comunismo», Johnson amplió el contingente americano en Vietnam del Sur, tan sólo en 1965, de 23 000 a 184 000 hombres; en febrero de 1965 inició el bombardeo de Vietnam del Norte; finalmente, en el verano de 1969, el número de soldados estadounidenses que combatían en territorio vietnamita era de 543 000 [13]. El conflicto armado de los Estados Unidos con un movimiento de liberación y un país de orientación comunista impidió que los dirigentes soviéticos, que desde la caída de Jruschov en octubre de 1964 se mostraban ya inseguros y cautelosos, impulsaran el entendimiento con las potencias occidentales hasta el punto que les había parecido en un principio necesario para el Estado soviético tras el desastre de Cuba; a fin de no perder su crédito entre los partidos comunistas, se vieron antes bien obligados a sumarse a la crítica mundial al «imperialismo» americano y a dosificar cuidadosamente la cooperación de las dos superpotencias. De esta actuación sobre la cuerda floja les vino a sacar la circunstancia de que, con la creciente intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, desapareció la necesidad de hacer concesiones al bando occidental, pues las pérdidas materiales, morales y de prestigio sufridas por los Estados Unidos a consecuencia de la «guerra sucia» equilibraron paulatinamente la inferioridad sovié-

tica frente a la potencia occidental. Por tanto, la Unión Soviética apoyó a los norvietnamitas con suministros materiales que alargaron la guerra, y divulgó nuevamente en el ámbito europeo la idea de un sistema de seguridad para toda Europa sin participación americana que, al ser inaceptable para los europeos occidentales y para los Estados Unidos, era en realidad un medio de impedir avances desestabilizadores dentro de la política de distensión. El presidente Johnson, por el contrario, respaldado sólo de mala gana por sus aliados en su política en el Vietnam, con excepción de la República Federal, y atacado incluso abiertamente por De Gaulle, trató de conseguir ayuda diplomática de los dirigentes soviéticos en Vietnam; la mejora de las condiciones de vida en Europa oriental, o simplemente la superación de la división de Europa, pasaron a ocupar el último puesto de la lista americana de prioridades.

El avance más importante logrado por los esfuerzos en favor de la distensión en tiempos de Johnson se produjo por ello en un campo por el que los europeos no mostraban especiales preferencias; antes por el contrario, era el más adecuado para consolidar de nuevo la posición de las dos potencias que encabezaban sus respectivos bloques: ya en 1964, los dirigentes soviéticos se mostraron dispuestos a aceptar la propuesta americana de un tratado para la no cesión de armamento nuclear que trataba de reforzar la supremacía de las superpotencias nucleares y de facilitar las negociaciones sobre desarme mediante la limitación del círculo de participantes. A finales de 1964, Johnson renunció al proyecto —tan controvertido por otra parte en Occidente— de crear una fuerza nuclear multilateral de la OTAN, allanando con ello el camino para un sistema de seguridad en el que los acuerdos americano-soviéticos complementasen los dos sistemas aliancísticos en el campo nuclear. Dos años después, las negociaciones estaban tan avanzadas que ya se habían fijado los rasgos esenciales de un acuerdo soviético-americano, y el 1 de junio de 1968, en Washington, Moscú y Londres, tras sucesivas conversaciones dentro del comité de desarme de Naciones Unidas en las que los «don nadie» en el campo nuclear y las «potencias umbral» apenas lograron reducir la discriminación que con ellas se cometía, se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Al mismo tiempo, los gobiernos americano y soviético anunciaron la preparación de conversaciones bilaterales sobre limitación de armas estratégicas («Strategic Arms Limitation Talks»=SALT): la Unión Soviética había casi compensado su inferioridad en armamento estratégico (con 800 misiles intercontinentales en 1968 y 1 050 en 1969 frente a los 70 de 1962) y los Estados Unidos, que

habían congelado el número de sus misiles intercontinentales lanzables desde tierra en 1967 en 1 054, tras largas reflexiones y debido a las crecientes críticas interiores y exteriores al excesivo armamentismo americano, se decidió a reconocer el principio de paridad atómica con la Unión Soviética; con ello se alcanzaba un equilibrio estratégico aproximado (capacidad de segundo ataque suficiente por *ambas* partes) a partir del cual se podía abordar con ciertas perspectivas de éxito el problema de la limitación de armamento [14].

Los países que pudieron sustraerse al condominio americano-soviético quedaron fuera del Tratado de No Proliferación. Esto es aplicable especialmente a Francia, que había convertido su armamento nuclear nacional, tras el rechazo de los intentos integradores americanos, en una *«force de frappe»* que amenazaba a todo posible atacante del territorio francés con represalias nucleares, ofreciendo con ello a Francia una protección frente a una posible confrontación de las superpotencias en suelo francés, si bien dejaba sin resolver el problema de la protección del campo de seguridad francés (y con ello hacía posible un cierto derecho de intervención frente a Estados Unidos; aunque, por supuesto, no le otorgaba igualdad de derechos con este país). Igualmente se opuso China, que a pesar de la retirada del apoyo soviético había logrado en junio de 1967 la puesta a punto de su primera bomba de hidrógeno y cuyo conflicto con la Unión Soviética había sufrido entre tanto una escalada hasta dar lugar al enfrentamiento militar en el río fronterizo Usuri en marzo de 1969. La República Federal de Alemania, por el contrario, se veía prácticamente obligada a firmar el tratado si no quería chocar aún más con el entendimiento americano-soviético. Los «gaullistas» alemanes en torno a Adenauer y Strauss se volvieron a apoyar, sin duda, en una campaña extremadamente emocional contra la tiranía de las superpotencias, si bien no podían tampoco decir cómo había que enfrentarse a ella, por lo que en noviembre de 1969 la República Federal se sumó al Tratado de No Proliferación. Con ello se lograba, a pesar de todo, uno de los objetivos esenciales de la política soviética de distensión, que a finales de 1962 parecía encontrarse a una distancia inalcanzable: la República Federal tenía que contentarse en el futuro con el *status* de potencia media no nuclear y renunciar a las aspiraciones de lograr medios de poder para la revisión del *statu quo* en Europa central.

A medida que se consolidaba el *status* internacional de Alemania Federal y ésta perdía progresivamente su carácter provisional, entre la opinión pública del país aumentaba la predispo-

sición a aceptar una convivencia duradera con los regímenes de la esfera de poder soviética. En diciembre de 1966, la CDU formó con el SPD un gobierno de «gran coalición» (con Kurt Georg Kiesinger como canciller Federal y el presidente del SPD, Willy Brandt, como ministro de Asuntos Exteriores) dentro de cuyo programa de actuación se encontraba la idea de ampliar también a la RDA la política de «cambio mediante acercamiento» reivindicada ya en 1963 por el político del SPD Egon Bahr, así como la de no dejarse ya coartar por la Doctrina Hallstein a la hora de mejorar las relaciones con los países de Europa oriental. Aunque (por razones de política interior y con la esperanza de que se produjese un rápido proceso de transformación en la esfera de dominio soviética) el nuevo gobierno siguió evitando pronunciarse de forma vinculante sobre el *status* de la frontera Oder-Neisse y de la RDA, pronto logró sacar a la República Federal del aislamiento en que se encontraba como consecuencia de las exigencias máximas del gobierno soviético y —en relación con ello— acelerar el proceso de relajamiento dentro del bloque soviético. Rumania reafirmaba cada vez con mayor claridad el rumbo iniciado en 1963 de independencia en política exterior respecto de la Unión Soviética; en Checoslovaquia, con la sustitución de Novotny por Dubcek a finales de 1967 se inició un proceso profundo de liberalización; en Polonia, en la RDA e incluso en la Ucrania soviética se multiplicaron las muestras de oposición al régimen tradicional controlado por Moscú. A fin de frenar el proceso de relajamiento, los dirigentes soviéticos, al igual que los gobernantes de la RDA, tras unos primeros gestos de cooperación volvieron a distanciarse de la República Federal; los otros países del Pacto de Varsovia exigieron una vez más, en la conferencia de partidos comunistas de Karlovy Vary de abril de 1967, el reconocimiento legal de la RDA como condición previa a posteriores conversaciones en torno a la distensión, y cuando el curso de los acontecimientos de Checoslovaquia en la primavera de 1968 amenazó con escapar al control soviético, los dirigentes de la Unión Soviética volvieron a acusar una vez más, con ataques cada vez más virulentos, de revanchismo a Alemania Federal.

Ahora bien, esta nueva campaña de aislamiento no cuajó, dada la notoria disposición a negociar por parte de Alemania occidental. La emancipación de Checoslovaquia no pudo ser frenada con la simple intervención armada de los restantes países del Pacto de Varsovia (con excepción de Rumania) el 21 de agosto de 1968; el intento de justificar esta intervención con supuestos planes de subversión de la República Federal fracasó. Con la

intervención se podía ciertamente rechazar el peligro inmediato de disolución del bloque soviético; ahora bien, para la nueva estabilización de la esfera de dominio soviética a los dirigentes de Moscú les resultaba ahora imprescindible aceptar en mayor medida que lo habían hecho hasta aquel momento las ofertas de distensión de Alemania occidental. Tal acercamiento se perfilaba tanto más cuanto que con el comienzo de las negociaciones de paz entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte había quedado libre el camino hacia un entendimiento de los Estados Unidos con el rival chino y la cooperación con las naciones industrializadas occidentales se hacía cada vez más necesaria para la economía soviética, bloqueada en múltiples sentidos. Para los alemanes occidentales no era de esperar ya, ciertamente, un rápido «cambio» mediante este proceso de acercamiento; en lugar de planes de reordenación más amplios, surgió la perspectiva de un entendimiento sobre la base del *statu quo,* que dejaba inmutable en principio el orden político existente en el bloque oriental, o en todo caso lo liberalizaba en sus formas exteriores, pero en cambio ofrecía a la República Federal una mayor consideración de sus intereses específicos dentro del marco de la política occidental de distensión y, con ello, un mayor grado de seguridad (especialmente en la cuestión de Berlín Oeste) [15].

En el congreso de Budapest del Pacto de Varsovia de principios de marzo de 1969, los dirigentes soviéticos pusieron por primera vez de manifiesto su disposición a iniciar conversaciones: las negociaciones ya no se hicieron depender del *previo* reconocimiento legal de la RDA (si bien, ello siguió siendo proclamado como meta); la exigencia de un *sistema* de seguridad europeo fue reemplazada por la propuesta de una *conferencia* de seguridad europea que no afectaba a los sistemas de pactos existentes. La iniciativa dividió a la «gran coalición» en Alemania Federal, pues en tanto que la CDU volvía a las posiciones maximalistas de tiempos de Adenauer, decepcionada por los exiguos resultados obtenidos hasta entonces por la política de acercamiento y preocupada instintivamente por el mantenimiento de sus posiciones de poder, el SPD y el FDP, en la oposición, anunciaban cada vez con mayor claridad su disposición a reconocer *de facto* la frontera Oder-Neisse y a la RDA, con la sola condición de que se mantuviese abierta la posibilidad legal de la reunificación de Alemania, se asegurasen los vínculos existentes entre Berlín Oeste y la República Federal de forma duradera y se facilitasen los contactos entre los alemanes orientales y occidentales. Por ello no pudieron iniciarse negociaciones de carácter más sustancial hasta que el gobierno Kiesinger fue relevado en septiem-

bre de 1969 por una coalición formada por el SPD y el FDP. En el Tratado de Moscú del 12 de agosto de 1970, los dirigentes soviéticos aceptaron las fórmulas de Alemania occidental acerca del «carácter vinculante conforme al Derecho internacional» de un tratado entre la RFA y la RDA, así como de la «inviolabilidad» de las fronteras existentes en Europa; ya no se habló más del reconocimiento legal de la RDA y, sobre todo, de la validez definitiva de la frontera Oder-Neisse, así como tampoco del derecho reivindicado hasta entonces por la Unión Soviética de intervención frente a la República Federal en base a la cláusula de los Estados enemigos de la ONU. En el tratado de las cuatro potencias sobre Berlín del 3 de septiembre de 1971, de cuya elaboración había hecho depender el gobierno Brandt-Scheel la ratificación del Tratado de Moscú, los dirigentes soviéticos reconocían a la República Federal, además de las «tres cuestiones esenciales» de Kennedy, la facultad de ostentar la representación de Berlín Oeste, así como el mantenimiento y el desarrollo de «lazos» especiales entre Berlín Oeste y la República Federal; a cambio, la parte occidental ratificaba que Berlín Oeste no era una parte integrante de la República Federal. Al Tratado de Moscú se añadieron los tratados de la República Federal con Polonia del 7 de diciembre de 1970 sobre tránsito, visitas y circulación en la RDA y, finalmente, el tratado fundamental entre la RFA y la RDA del 21 de diciembre de 1972; con ello, los dirigentes de la RDA, por fuertes presiones de Moscú —el secretario del Partido, Ulbricht, tuvo que dejar el puesto finalmente, en mayo de 1971, a Erich Honecker—, aceptaban la negativa a cimentar la división de Alemania conforme al Derecho internacional, si bien siguieron esforzándose en conseguir el grado máximo de separación, de manera que en lo esencial sólo se registraron declaraciones de intenciones en cuanto a una cooperación pragmática. Así, los tratados con el Este sentaron ciertamente las bases para el desarrollo de un entramado de relaciones entre el Este y el Oeste, pero los gobernantes orientales se reservaron el control de este desarrollo.

La liberación de la República Federal de su conflicto especial con el Este dio lugar a que los alemanes occidentales asumiesen un papel más activo en la alianza occidental. Desde que la República Federal dejase a Francia muy a la zaga en el terreno económico no se había vuelto a hablar de la aspiración francesa al liderazgo de una Europa independiente, y ahora que Alemania Federal había recuperado también su libertad de acción en el terreno político se planteaba incluso la amenaza de una supremacía política de los alemanes en Europa. Para evitarlo, De Gaulle se vio obligado en los últimos meses de ejercicio del

cargo, a principios de 1969, a preparar él mismo el ingreso de Gran Bretaña en las comunidades europeas que hasta ese momento había obstaculizado y que tuvo lugar bajo su sucesor, Pompidou, el 1 de enero de 1973 [16]. El fortalecimiento de la CEE hecho posible por este cambio parcial de rumbo de la política francesa permitió a los europeos reafirmar con más fuerza que antes sus intereses frente a los Estados Unidos; cierto es que, ante la vinculación británica a la fuerza nuclear americana y, sobre todo, la dependencia de la República Federal de la protección nuclear y convencional de los Estados Unidos, la independencia de Europa no fue tan lejos como hubiese deseado en su momento De Gaulle. Francia permaneció fuera de la organización militar de la OTAN y conservó su *«force de frappe»* nuclear exclusivamente destinada a la defensa del territorio nacional, si bien se vio obligada, para no caer en el aislamiento, a realizar consultas permanentes con sus aliados europeos y también con los Estados Unidos. Igualmente creció el potencial económico europeo frente a los Estados Unidos —así, el porcentaje americano de las reservas monetarias mundiales cayó del 49,8% en 1950 al 15,7% en 1970, en tanto que el de los países de la CEE aumentó del 6,1% al 32,5% [17]—; ahora bien, los europeos tuvieron que aceptar que los Estados Unidos, con el abandono del sistema de tipos de cambio fijos (limitación de la convertibilidad del dólar en oro en marzo de 1968 y completa supresión de la garantía de oro en agosto de 1971) les forzasen a la revaluación y la inflación, y con ello a cargar con al menos una parte de los gastos de la implicación excesiva de los Estados Unidos en Vietnam y el consumo americano, que excedía los propios recursos. Al igual que en el bloque oriental (aunque, debido a la diferencia de sistemas, estructurado de una forma muy distinta), también en la alianza occidental se produjo de esta manera un equilibrio entre los intereses hegemónicos de la potencia que encabezaba el bloque y las tendencias autonomistas de los miembros de la alianza que, a pesar de las tensiones latentes en su interior, hizo posible un avance sustancial del diálogo de distensión entre el Este y el Oeste.

El 26 de mayo de 1972, el presidente americano, Richard Nixon, y el secretario general del PCUS, Leónidas Breznev, firmaron en Moscú los primeros acuerdos dentro del marco de las SALT: la mutua renuncia al desarrollo del sistema de misiles antimisiles más amplios que amenazasen con cuestionar la capacidad de segundo ataque de ambas partes (y, desde el punto de vista técnico, en todo caso difíciles de conseguir), así como la fijación durante un plazo de cinco años de los límites máximos

para el equipamiento con misiles intercontinentales, que concedía a la Unión Soviética una cierta superioridad desde el punto de vista cuantitativo, si bien limitaba al mismo tiempo los esfuerzos soviéticos por eliminar paulatinamente su inferioridad cualitativa (especialmente la introducción de misiles intercontinentales «pesados» del tpo SS-9), obteniendo ambas partes la opción de dotar a sus misiles de cabezas nucleares múltiples (MIRV).

Seis meses después comenzaron en Helsinki las conversaciones previas a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Después de que los dirigentes soviéticos hubiesen consentido en negociar en esta conferencia no sólo la garantía del *statu quo* existente en Europa y el desarrollo de las relaciones económicas entre el Este y el Oeste, tal como deseaba la parte soviética, sino también —en lo cual insistían especialmente los europeos occidentales— un intercambio mucho mayor de «personas, informaciones y opiniones», y después de que los países del Pacto de Varsovia se hubiesen avenido además a la apertura, solicitada hasta entonces en vano por los países de la OTAN, de conversaciones sobre una reducción equilibrada por ambas partes de las tropas estacionadas en Europa central (conversaciones MBFR de Viena), en junio de 1973 se pudo dar a conocer un orden del día detallado para el proyecto de la CSCE. En el mismo mes, Nixon y Breznev firmaron en Washington un acuerdo sobre la prevención de guerras nucleares por el que ambas partes se comprometían a iniciar consultas en situaciones de crisis que amenazasen con una escalada hasta el enfrentamiento nuclear. Las negociaciones entre las potencias rectoras de ambos bloques y los contactos entre los bloques en Europa se llevaron a cabo en adelante de forma generalmente coordinada (aunque no por completo), y el entramado de relaciones entre el Este y el Oeste se hizo paulatinamente más tupido. El conflicto Este-Oeste no había terminado en modo alguno, pero en el ámbito europeo se había encontrado al menos un *modus vivendi* expresamente reconocido por ambas partes más allá de la ratificación fáctica del *statu quo*. En todos los países interesados, la necesidad de reducir las tensiones Este-Oeste fue reconocida por la mayoría de las fuerzas políticas y se crearon marcos institucionales para la regulación de los conflictos y la reducción de los potenciales conflictivos [18].

III. CRISIS EN OCCIDENTE Y CRISIS DE LA DISTENSION

Las esperanzas puestas en un orden pacífico en toda Europa, asociadas por muchos europeos en el Este y en el Oeste a los

claros avances de la política de distensión de la década de 1970 (y que atestiguaban la supervivencia de una identidad europea por encima de la división Este-Oeste, prolongada durante decenios), no pudieron hacerse realidad rápidamente; la reducción del enfrentamiento Este-Oeste y el desarrollo de intereses paralelos entre ambos campos resultaron también procesos tremendamente difíciles que precisamente por ello provocaban retrocesos. Los gobernantes del Este deseaban sin duda desarrollar la cooperación a nivel del Estado y de los aparatos del poder, pero tenían que limitar el acercamiento de los pueblos para no arriesgarse a que —de forma paulatina o incluso rápida— se produjese una erosión de su estructura de dominio, en tanto que los gobiernos occidentales dependían del acercamiento demostrable del Este a los principios occidentales para poder imponer y asegurar la cooperación en política interior. Por otra parte, el desarrollo de la tecnología armamentista conforme a sus propias leyes dificultaba el entendimiento en cuanto a la limitación de la carrera de armamentos y el proceso de reestructuración económica mundial iniciado a comienzos de los años setenta añadía dificultades adicionales al desarrollo de las relaciones económicas Este-Oeste. Pero, al no producirse avances en la cooperación y el acercamiento, los mecanismos de escalada del conflicto, vigorosamente impulsados por aquellas fuerzas orientales y occidentales que se habían visto perjudicadas por el cambio hacia la distensión, pronto se volvieron a poner en marcha: los mutuos temores a la amenaza de la otra parte volvieron a aumentar, así como la tendencia a adquirir ventajas preventivas a costa de la parte contraria, y al margen para la toma de medidas que generaran confianza se hizo cada vez más reducido.

Para el ulterior papel de Europa occidental en el proceso de distensión sería significativo el hecho de que a los americanos les resultaba mucho más difícil que a los europeos mantener y desarrollar el *modus vivendi* con el bloque del Este. Ello se debía, por una parte, a que en el mismo momento de la distensión Este-Oeste los Estados Unidos tenían que resolver el difícil problema de reducir su excesiva implicación en la política internacional, así como aprender a aceptar también en la práctica a la Unión Soviética como interlocutor en principio de igual rango, en tanto que Europa occidental, en la medida en que estaba implicada en el proceso de distensión, sólo podía ganar autonomía y libertad de movimientos. Por otra parte, los éxitos obtenidos en la reducción de barreras entre Europa oriental y occidental, en la que los europeos se hallaban especialmente interesados, eran mucho más tangibles que los avances en el control

de armamento, en principio primordial para los Estados Unidos. La dinámica del desarrollo de la tecnología armamentista representaba, en tercer lugar, un peligro mucho mayor para los vecinos inmediatos de la superpotencia soviética, los europeos, que para los Estados Unidos, prácticamente invulnerables en su capacidad de segundo ataque. Y, en cuarto lugar, los europeos podían recurrir a una larga tradición de coexistencia diplomática de sistemas sociales opuestos, mientras que a los americanos, determinados por una cultura política más idealista, les resultaba difícil tener la paciencia necesaria para el desarrollo de relaciones sólidas entre el Este y el Oeste. A la tradicional contraposición de intereses entre América y Europa occidental, que desde el cambio hacia la política de distensión se había puesto aún más de manifiesto, se añadieron pues, a lo largo de la década de 1970, divergencias crecientes en cuanto a la política occidental frente a la Unión Soviética y sus aliados de Europa oriental, y a los europeos occidentales cada vez les resultó más difícil mantener el equilibrio entre una solidaridad aliancística irrenunciable y una política de distensión necesaria en igual medida.

Henry Kissinger, iniciador de la política exterior de Nixon, trató de evitar este proceso esforzándose por reducir la tensión entre las superpotencias mediante acuerdos sustanciales contra posibles crisis y al mismo tiempo por vincular de nuevo y con más fuerza a los europeos con Estados Unidos, si bien no logró éxitos reales en ninguno de los casos. En la primavera de 1973 exigió de los europeos compromisos precisos en una «nueva Carta Atlántica»: una mejor coordinación en todos los ámbitos, un aumento de la participación europea en los gastos de defensa y una reducción de las barreras comerciales; esencialmente, pues, una nueva versión del *«gran design»* de Kennedy, aunque sin insistir ya tan claramente en la integración de los europeos entre sí y adjudicando evidentemente a Europa un papel secundario en la alianza. La respuesta de los europeos no fue de completo rechazo, ya que ellos también estaban interesados en una mejor coordinación para no verse relegados a un segundo plano en el diálogo americano-soviético y les parecía necesaria una definición más precisa del papel de Europa en la alianza. No obstante, apenas veían posibilidad alguna de imponer mayores cargas en política interior y exigían sobre todo la vuelta a un sistema monetario mundial ordenado (es decir, la supresión de la presión permanente de los Estados Unidos en materia de revaluación) como requisito para otros pasos hacia la liberalización. A ello se añadía el hecho de que la recesión mundial iniciada justamente aquel año y la multiplicación del precio del petróleo en el

invierno de 1973-74 reforzaron decisivamente la situación de competencia económica entre Europa y los Estados Unidos. Durante la guerra del Yon Kipur en Israel, en octubre-noviembre de 1973, los Estados Unidos actuaron sin consultar a sus aliados europeos, y a continuación los europeos denegaron toda posible ayuda militar, con el resultado de un aumento de la frustración por ambas partes. La declaración de principios hecha por el Consejo de la OTAN, reunido en Ottawa el 19 de junio de 1974, quedó en consecuencia muy por debajo de las expectativas de Kissinger, ya que los americanos, a cambio de la garantía de la presencia permanente de fuerzas armadas estadounidenses «sustanciales» en el continente europeo, sólo obtuvieron vagas promesas por parte de los europeos de aportar «la contribución necesaria» para la defensa y «trabajar» en pro de unas «relaciones armoniosas» en el campo político y económico; la situación de competencia persistió, quedando confusas las estructuras de la comunicación [19].

En cambio, los europeos comenzaron a coordinar entre sí su papel dentro de la política internacional. Aunque la recesión reforzó las diferencias estructurales entre los miembros de la Comunidad Europea, dificultando así extraordinariamente los avances en la integración económica y exponiendo incluso a los sectores comunitarios ya exitsentes a nuevas y constantes pruebas [20], el interés en la reafirmación frente a los Estados Unidos, la seguridad ante la Unión Soviética, la consolidación de la distensión y la mejora de las relaciones con el Tercer Mundo era lo suficientemente idéntico como para cimentar posiciones comunes en amplios aspectos de la política exterior. Lo revitalización de la unión franco-alemana se convirtió en el motor de la cooperación: debido a su debilidad interna y a su apoyo permanente en los Estados Unidos, Gran Bretaña quedó excluida en gran medida como colaboradora de Francia; el sucesor de Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, apenas compartía ya la preocupación de aquél por una política oportunista Este-Oeste de la República Federal de Alemania a costa de Francia, y Helmut Schmidt aprovechó la fortaleza económica de la República Federal para hablar cada vez más en nombre de los intereses europeos, sabiendo quitar a su aliado francés, al mismo tiempo y de forma paulatina, el temor de una posible prepotencia alemana. En diciembre de 1974, los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad acordaron en París que en el futuro ya no se reunirían solamente en cumbres esporádicas, sino que institucionalizarían su consulta en un Consejo Europeo que se habría de reunir al menos tres veces al año. En la Conferencia sobre Segu-

ridad y Cooperación de Ginebra, los europeos occidentales coordinaron muy pronto su política entre sí tan bien que los Estados Unidos se quejarían de falta de consultas, y también en la ONU aparecería Europa occidental cada vez más como un bloque autónomo[21].

En la política de distensión, Kissinger se esforzó por conseguir el protocolo adicional al acuerdo provisional SALT de 1972 como muy tarde antes del otoño de 1975 a fin de librar a la discusión sobre control de armamento de posibles cargas y demoras por causa de la campaña de las elecciones presidencias americanas, previstas para 1976 y de prevenir una escalada de los programas de modernización de ambas partes que hiciese cada vez más difícil un entendimiento sobre el equilibrio en el armamento estratégico desde el punto de vista técnico. En noviembre de 1974, las SALT II habían avanzado tanto que Breznev y el presidente Gerald Ford (que en el ínterin había sustituido a Nixon, derribado por el caso Watergate) pudieron ponerse de acuerdo en Vladivostok sobre aspectos fundamentales para continuar fijando y precisando la paridad estratégica: ambas partes podrían mantener hasta 1985 un máximo de 2 400 sistemas ofensivos de armas portadoras (misiles de base terrestre y marítima y bombarderos intercontinentales), de ellos 1 320 con cabezas nucleares múltiples (MIRV). Con ello no se había logrado aún sin embargo abrir una «brecha» en el camino hacia la estabilidad estratégica, tal como presentaba Kissinger el acuerdo ante la opinión pública de su país, ya que el elevado número de cabezas múltiples permitidas colocaba a ambas partes en condiciones de poner fuera de combate a gran parte de los misiles contrarios de base terrestre en un ataque por sorpresa; ahora bien, en todo caso se había podido reducir la carrera en lo relativo a la superioridad cualitativa, y la Unión Soviética debía reducir su superioridad cuantitativa en el ámbito estratégico (250 dispositivos de lanzamiento). Las negociaciones sobre los misiles americanos de corto y medio alcance estacionados en Europa y en el ámbito del Atlántico europeo (Forward Based Systems) quedaron pospuestas como concesión al bando occidental hasta una ronda posterior de conversaciones (SALT III)[22].

En ese momento aparecieron —en Europa, pero más aún en los Estados Unidos— las primeras dudas con respecto a la corrección del rumbo occidental hacia la distensión[23]. En la Europa meridional, el clima de distensión de comienzos de la década de 1970 había propiciado toda una serie de cambios sociales que ya no era posible armonizar con la idea de orden tradicional, provocando por ello confusión e inseguridad; en Portugal, el

Movimiento de las Fuerzas Armadas, de orientación marxista, reemplazó en abril de 1974 al régimen autoritario existente hasta ese momento y, teniendo en cuenta el papel que el Partido Comunista de Portugal, de orientación moscovita, trataba de desempeñar en esta revolución, no existía seguridad sobre si el país seguiría el camino de las democracias de cuño occidental; en Francia, una coalición formada por socialistas y comunistas había perdido por tan sólo un escaso margen las elecciones presidenciales de mayo de 1974; en Italia, los democratacristianos en el gobierno dependían cada vez más del apoyo de los comunistas; Grecia, tras la caída en agosto de 1974 del régimen de los coroneles, apoyado hasta entonces por los Estados Unidos, salió de la organización militar de la OTAN, y Turquía, cuya victoria militar en la isla de Chipre se había visto obstaculizada por el embargo de armas por parte de los Estados Unidos, cerró las bases militares americanas en su territorio. La idea de que todos estos acontecimientos habrían de provocar un debilitamiento de Occidente frente al bloque oriental no era irrefutable, pero sí lógica después de que los ideólogos soviéticos hubiesen presentado públicamente las crecientes dificultades de las sociedades industriales occidentales como una posibilidad para el movimiento revolucionario comunista, por lo que de nuevo se empezó a dudar cada vez más de la buena disposición a la coexistencia por parte de los dirigentes soviéticos. A ello se añadieron la decepción por la persistencia de medidas represivas en el sistema soviético y la preocupación por la marcha, no aminorada, del armamentismo soviético, así como por la escasa predisposición de los dirigentes soviéticos a negociar la reducción de su superioridad convencional en Europa dentro del marco de las conversaciones MBFR de Viena. Todas estas impresiones juntas llevaron a la convicción de haber hecho ya suficientes o incluso demasiadas concesiones al bando oriental y de poder exigirle ahora, con todo derecho, una correspondencia. Los acuerdos de Vladivostok, que habían exigido igual disposición de riesgo por ambas partes, suscitaron pues la crítica inmediata, y a finales de 1974 el Senado americano añadió al acuerdo comercial soviético-americano una cláusula adicional que hacía depender de las garantías soviéticas respecto a la libre emigración de judíos soviéticos (enmienda Jackson-Vanik) la concesión de la cláusula de nación más favorecida y de créditos ventajosos.

Los soviéticos modernizaron efectivamente su potencial estratégico más rápidamente de lo esperado en el momento de los acuerdos SALT I, si bien no pudieron mantener en modo alguno el ritmo americano en cuanto al equipamiento con cabezas múl-

tiples y a la mejora de la precisión de tiro. Por ello trataron de compensar su constante inferioridad en el terreno de los misiles intercontinentales con su superioridad frente a los «rehenes» de Europa occidental; con ello no quedaba en modo alguno asegurada su superioridad convencional en Europa, si se incluía en el cálculo la ventaja que le llevaba la técnica convencional occidental, el problema del «frente interno» de las llamadas «fuerzas contrarrevolucionarias» y la posibilidad de trasladar a corto plazo a Europa contingentes masivos de tropas americanas. También debían preocuparse por el desarrollo de su arsenal convencional si querían reafirmarse como potencia rectora internacional equiparable a los Estados Unidos fuera de su esfera hegemónica. En el terreno de los misiles de medio alcance dirigidos hacia Europa occidental optaron por llevar a cabo una modernización radical, una vez que los aliados occidentales mostraron no estar dispuestos a reducir los Forward Based Systems americanos en Europa. Los dirigentes soviéticos no pudieron sustraerse del todo a la tentación de aprovecharse de las debilidades de Occidente para fortalecer su propia posición, pero en general procedieron con grandes precauciones para no poner en peligro el clima de distensión. La ascensión de los partidos «eurocomunistas» autónomos en los países de Europa meridional también les ocasionó considerables preocupaciones, mucho más fundadas que los temores occidentales, pues la realización de los proyectos «eurocomunistas» en Europa occidental amenazaban con poner en entredicho una vez más el modelo socialista soviético de Europa oriental[24].

La enmienda Jackson-Vanik puso a los dirigentes soviéticos ante la disyuntiva de conceder públicamente a los Estados Unidos el derecho de intervención en su esfera de dominio, y con ello correr el riesgo de sufrir nuevos trastornos en su sistema de dominio, o renunciar al desarrollo de relaciones económicas amplias con los Estados Unidos. Ante la fragilidad y la escasa capacidad de reforma del sistema soviético, la decisión recayó muy pronto en la segunda opción: en enero de 1975, los dirigentes soviéticos rescindieron el tratado comercial americano-soviético. Una vez desplazado así a una distancia inalcanzable uno de los objetivos esenciales de la política de distensión soviética, ya no se tuvieron tantas consideraciones a la hora de aprovechar los puntos débiles occidentales (o bien, dentro del aparato dirigente soviético se impusieron fuerzas a las que les parecía que las concesiones por parte soviética habían ido ya demasiado lejos): se apoyó con mayor intensidad al PC portugués a lo largo de 1975; tropas cubanas ayudaron, con apoyo soviético, al ala

marxista del movimiento de liberación de Angola, en 1975-76, a conseguir la victoria; por lo demás, los dirigentes soviéticos se esforzaron también —con diferentes resultados— en sacar provecho de los conflictos poscoloniales de Africa del Sur con tropas de intervención cubanas, armas y dinero. No vieron que con ello acrecentaban los temores occidentales, o bien asumieron el riesgo por creer que sólo así podían afirmar su igualdad de rango como superpotencia.

El hecho de que la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa pudiese llegar a feliz término en tales circunstancias fue bastante asombroso. Sea como fuere, la delegación soviética demostró ahora esforzarse claramente por poner fin a la Conferencia antes de que se endureciese aún más la posición occidental; su predisposición a hacer concesiones en las negociaciones aumentó por ello y, de esta manera, los 35 jefes de Estado y de gobierno de Europa, Canadá y los Estados Unidos pudieron firmar el 1 de agosto de 1975 en Helsinki un acta final que respondía en lo esencial a los puntos de vista occidentales, pues a fin de obtener una garantía colectiva del *statu quo* europeo y de una mayor cooperación a nivel estatal la parte soviética tuvo que admitir la posibilidad de un cambio pacífico en el futuro en conformidad con la situación fronteriza existente, la propagación tanto en el Este como en el Oeste de los derechos humanos como principios fundamentales de orden interno y el reconocimiento de la comunicación y el contacto a todos los niveles y sin limitaciones como dignos de fomento; las esperanzas soviéticas en una sanción de la política defensiva, en la posibilidad de un control duradero en Europa occidental y en condiciones favorables para la cooperación económica (cláusula de nación más favorecida) no se vieron cumplidas. El camino hacia un «cambio mediante acercamiento» en el sentido occidental seguía abierto, pero la nueva aplicación de la doctrina Breznev para el mantenimiento por la fuerza del sistema soviético en Europa oriental se veía al menos dificultado [25].

El éxito occidental de la CSCE no bastó, sin embargo, para frenar a los críticos del rumbo hacia la distensión, sobre todo en los Estados Unidos, en donde, en todo caso, era muy poca la importancia dada al acercamiento entre los Estados de Europa occidental y oriental. En su lugar, allí se formó un amplio movimiento de oposición, encabezado esencialmente por expertos del *establishment* político y académico, contra el tratado SALT II, tal como se perfilaba desde el acuerdo de Vladivostok. Cada vez eran más los norteamericanos que creían haber encontrado pruebas de una estrategia agresiva global de la Unión Soviética y que,

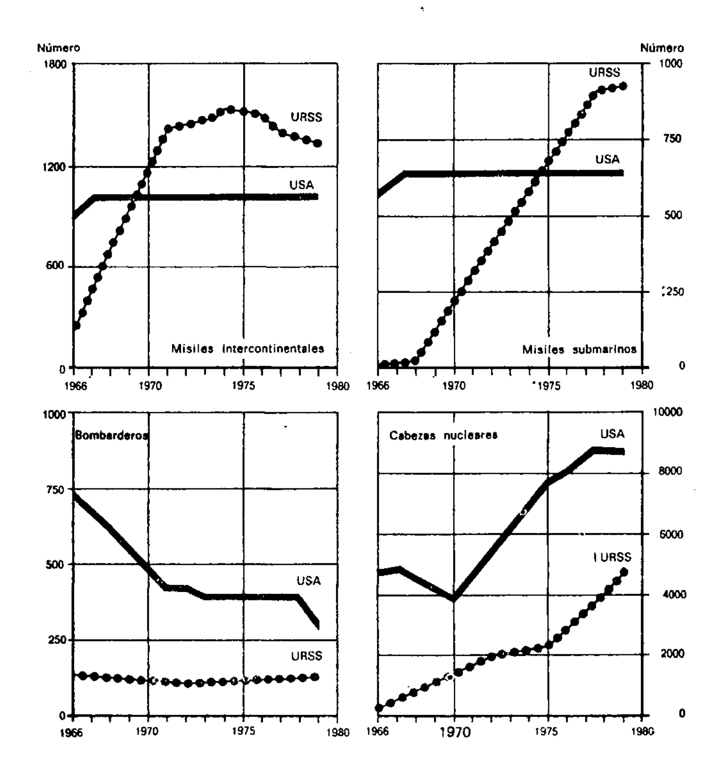


Fig. 7.—El desarrollo de la correlación de fuerzas desde el punto de vista de la estrategia nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de 1966 a 1980.

En lo relativo al número de armas portadoras, la Unión Soviética pudo recuperar en el umbral de los años setenta su retraso anterior, superando luego claramente a los Estados Unidos; desde el punto de vista cualitativo, los Estados Unidos mantuvieron, sin embargo, una superioridad considerable. Especialmente la distancia existente entre el potencial soviético y el americano en cabezas nucleares no se reduciría hasta llegar casi a la década de 1980.

bajo el pretexto de unos acuerdos de control de armamento «más equilibrados», exigían nada menos que el abandono del principio de la paridad estratégica que desde el comienzo de la era Nixon-Kissinger había constituido la base del diálogo soviético-

americano. A principios de 1976, el movimiento era ya tan fuerte que el presidente Ford rechazó un compromiso logrado por Kissinger y por su colega soviético Gromyko sobre la inclusión de nuevos portadores de armas de medio alcance (bombarderos Backfire soviéticos y misiles de crucero americanos) en el techo para armas estratégicas pendiente de acuerdo, a fin de no estropear sus posibilidades para una nueva nominación como candidato a la presidencia; con ello, las SALT II, dificultadas ya en todo caso por la creciente desconfianza y las innovaciones tecnológicas de ambas partes, quedaron prácticamente paralizadas. En marzo de 1976, Ford declaró tajantemente que no deseaba volver a emplear nunca el término «distensión». La campaña electoral fue ganada, no obstante, por Jimmy Carter, adversario demócrata de Ford, con un programa de renovación moral elaborado por el futuro asesor de seguridad de Carter, Brzezinski, que incluía el anuncio de una actuación más intensa en pro de la liberalización del imperio soviético [26].

El punto de partida de tal política, que prometía volver a afianzar el quebrantado concepto de sí mismos de los americanos, lo encontró Carter en los movimientos en favor de los derechos humanos surgidos entre tanto en los países de Europa oriental y en la Unión Soviética con la publicación del acta final de la CSCE. Estos movimientos, que tomaron unas proporciones inesperadas para todos los observadores, así como para el gobierno soviético, provocaron nuevas y espectaculares medidas represivas por parte de los dirigentes orientales [27], le parecieron el medio ideal para demostrar a su propio país y al mundo la fuerza moral de los Estados Unidos, y para obligar a la Unión Soviética a ponerse nuevamente a la defensiva tras una serie de supuestos éxitos. Así pues, comenzó su mandato en 1977 con una intensa campaña contra la violación de los derechos humanos y con su apoyo manifiesto a los disidentes soviéticos. En las negociaciones SALT planteó a los dirigentes soviéticos la propuesta de, o bien excluir temporalmente las armas de medio alcance (cuyo desarrollo era motivo de especial preocupación para los dirigentes soviéticos), o bien negociar inmediatamente un nuevo acuerdo más amplio que redujese a una cuarta parte las cifras máximas acordadas en Vladivostok (dando preferencia así al poder disuasorio de los Estados Unidos, principalmente de base marítima). Al presentar el secretario de Estado de Carter, Cyrus Vance, las nuevas propuestas en Moscú a finales de marzo de 1977, Gromyko no sólo las rechazó, sino que además expresó públicamente su consternación por el nuevo rumbo de la política

americana; la crisis de la distensión americano-soviética era ya notoria.

En Europa occidental se mostró preocupación por el endurecimiento de la postura americana. Cierto es que los partidarios de la política de distensión también se veían sometidos aquí al imperativo de la justificación y que una gran mayoría de la izquierda europea, entre otros los «eurocomunistas», apoyaba la crítica a las violaciones de los derechos humanos en el bloque oriental. Ahora bien, las facilidades dadas al contacto humano entre Europa oriental y occidental (sobre todo entre las dos Alemanias) habían dado tantos frutos y el interés por el desarrollo de las relaciones económicas con el bloque del Este había progresado hasta tal punto (a pesar de los momentos difíciles, consecuencia del escaso grado de desarrollo de las economías socialistas)[28] que de una perturbación de las relaciones Este-Oeste habían de esperarse serios inconvenientes inmediatos para los europeos. En buena medida por esta razón conservaron el poder en la mayor parte de los países europeos occidentales, a diferencia de América, constelaciones de fuerzas que habían logrado o consolidado su posición con la política de distensión y que por ello estaban interesadas en su prosecución, aunque sólo fuese por motivos de política interior. Los gobiernos de Bonn, París y Londres ejercieron en consecuencia una fuerte presión sobre Carter para que volviese a la línea seguida hasta entonces por la política americana de distensión. El presidente francés Giscard d'Estaing criticó públicamente la campaña de derechos humanos de Carter por considerar que ponía en peligro la distensión.

La crítica procedente de Europa contribuyó a que las fuerzas pragmáticas dentro de la Administración Carter (y, en especial, del Departamento de Estado, con Cyrus Vance a la cabeza y Marshall Shulman como experto en el Este) se impusieran con más fuerza; así el gobierno americano volvió a su antigua línea negociadora en las SALT II de mayo de 1977, y en el otoño del mismo año se redujo también la campaña de derechos humanos, esforzándose Carter en adelante de forma ostensible por lograr una mejora de las relaciones con los europeos. La crítica interna americana a las SALT II persistió sin embargo, viéndose incluso reforzada por el hecho de que representantes de la anterior Administración republicana —entre ellos Henry Kissinger— recurrieron a la tesis de la estrategia soviética global de agresión con la esperanza de que se produjese una vuelta atrás en política. De esta manera, las fuerzas en torno a Brzezinski pudieron en este clima imponer de vez en cuando partes al menos de su pro-

grama, razón por la que sugieron constantemente tensiones entre Europa y los Estados Unidos, como en el encuentro de la CSCE en Belgrado entre octubre de 1977 y marzo de 1978, en donde la delegación americana planteó como punto central de la conferencia, contra la voluntad de los europeos, la crítica a las violaciones de los derechos humanos, con el resultado de que la delegación soviética se vio obligada a pasar a la defensiva y los avances que por lo demás parecían posibles en el terreno de las medidas tendentes a crear confianza quedaron bloqueados. La conferencia acabó por consiguiente con un documento final vacío de contenido, en el que sólo se constataba la voluntad de proseguir el diálogo en favor de la distensión. Los europeos también se mostraron preocupados por la evidente mejora de las relaciones chino-americanas (que comenzó con el inicio de relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1979 y con el viaje a los Estados Unidos del viceprimer ministro chino, Deng Xiaoping, a finales de enero-principios de febrero de 1979), que si bien no habían llegado a la tan deseada firma de una alianza militar alcanzaban no obstante un grado que dejaba muy por detrás el principio practicado desde la época de Nixon de mantener unas relaciones igualmente buenas con la Unión Soviética y con China.

En todo caso, la coalición de los «moderados» era lo bastante fuerte como para llevar a término las negociaciones SALT II sin exigir de los dirigentes soviéticos contraprestaciones políticas por la limitación de la carrera armamentista. El 18 de junio de 1979, Carter y Breznev firmaron en Viena los acuerdos SALT II; conforme a las directrices de 1974, se fijaron las mismas cifras máximas para ambas partes en lo relativo a los dispositivos de lanzamiento; se determinaron los límites máximos de equipamiento con cabezas explosivas por cohete, distintos según el tipo de arma; se congeló al nivel de 1977 el peso de lanzamiento de los misiles; y se limitó el desarrollo de nuevos sistemas de misiles intercontinentales de base terrestre a un sistema respectivamente para cada parte. Con ello se volvía a conceder a la Unión Soviética una mayor tasa de crecimiento, pero los Estados Unidos seguían manteniendo de hecho la superioridad en armas para los portadores ofensivos intercontinentales (aproximadamente 11 500 frente a 9 500, consiguiendo de ello, hasta 1981, 9 500 frente a 5 000). A pesar del aumento y de la precisión de las limitaciones al crecimiento en comparación con las SALT I, algunos aspectos centrales de la carrera armamentista no se vieron afectados por los acuerdos: los Estados Unidos conservaron la posibilidad de introducir un sistema móvil de misiles intercontinentales (MX) que excluía prácticamente el peligro de un ataque

soviético por sorpresa con resultados positivos en territorio americano, pero que seguía amenazando al territorio soviético con un primer golpe por sorpresa, a pesar de la desaparición de la superioridad americana, lo que provocaría nuevas contramedidas soviéticas; los soviéticos no renunciaron a la posibilidad de responder a la ventaja americana, nuevamente amenazadora, en cuanto al armamento estratégico (es decir, intercontinental) con un reforzamiento del «papel de rehén» de Europa occidental, aumentando considerablemente la eficacia de su potencial de medio alcance dirigido contra Europa occidental con la transformación de los SS-4 y los SS-5, técnicamente obsoletos, en misiles con mayor precisión de tiro, equipados con cabezas múltiples y, sobre todo, móviles (y, por lo mismo, prácticamente invulnerables) del tipo SS-20; los aliados europeos de la OTAN conser-

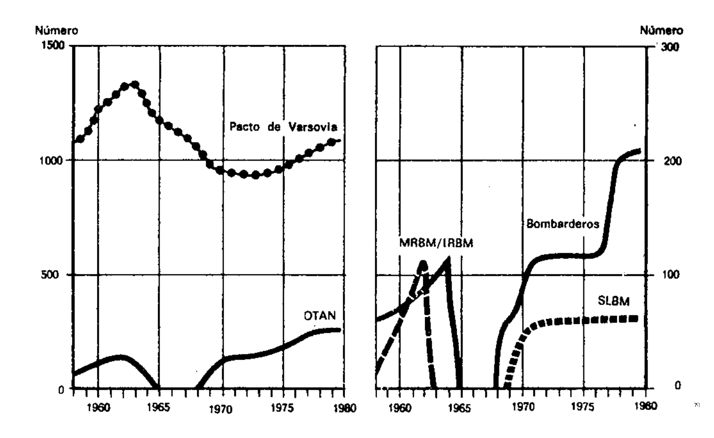


FIG. 8.—*Desarrollo del potencial nuclear de medio alcance en y (potencialmente) para Europa de 1958 a 1979.*

En el terreno de las armas de medio alcance, el Pacto de Varsovia tenía desde la década de 1950 una clara superioridad, al menos desde el punto de vista cuantitativo. A mediados de la década de 1960, los Estados Unidos sustituyeron sus bombarderos de alcance medio de base terrestre y los misiles de alcance medio en Europa (MRBM=*Medium-range ballistic missiles* e IRBM=*Intermediate-range ballistic missiles*) por misiles de base marítima, es decir, misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM=*Submarine-launched ballistic missiles*), los cuales ya no podían ser destruidos por ataques de la URSS y por lo mismo no incitaban ya a la URSS a realizar un ataque preventivo.

varon la posibilidad de estacionar misiles de crucero americanos que pudiesen alcanzar objetivos en la Unión Soviética [29].

Con tal resultado no se lograba ciertamente una mayor seguridad para Europa; al contrario, las disposiciones tomadas dejaban a la dinámica propia de la tecnología armamentista y al egoísmo de los aparatos militares un margen suficiente para desestabilizar en grado decisivo la situación de seguridad en Europa, pues el perfeccionamiento de las defensas antimisiles soviéticas, la mayor precisión de tiro de las armas soviéticas de medio alcance y sobre todo la vulnerabilidad, a todas luces cada vez mayor, del territorio americano, que hacían aparecer progresivamente menos aconsejable la «ramificación» de las armas estratégicas de los Estados Unidos como represalia a los ataques soviéticos a Europa, siguieron reduciendo en principio la ya dudosa credibilidad (debido al riesgo de suicidio, imposible de eliminar por completo) de la garantía disuasoria americana respecto a Europa occidental, en tanto que todos los intentos de ocultar esta falta de credibilidad mediante la amenaza de contragolpes limitados y limitables hacía que el territorio europeo, justamente por su credibilidad, pareciera tanto más propicio para un ataque preventivo soviético. Tras algún tira y afloja, en las discusiones provocadas por esta situación, objetivamente cada vez más precaria, dentro de la alianza occidental acabaron por imponerse con más fuerza los defensores de una mayor escalada de la espiral armamentista; en parte porque lograron presentar, de una forma demasiado simplista, la desestabilización de la situación euroestratégica como una «superioridad» soviética [30], y en parte también porque el interés europeo por una protección frente a la amenaza soviética, el rechazo americano a una multilateralización del diálogo de desarme (que amenazaba con seguir debilitando el papel rector de los Estados Unidos dentro de la OTAN) y el creciente interés americano en representar frente a la URSS una amenaza verosímil —por estar limitada a Europa— de primer ataque hallaron su pequeño denominador común en el estacionamiento de nuevo armamento americano de medio alcance en suelo europeo.

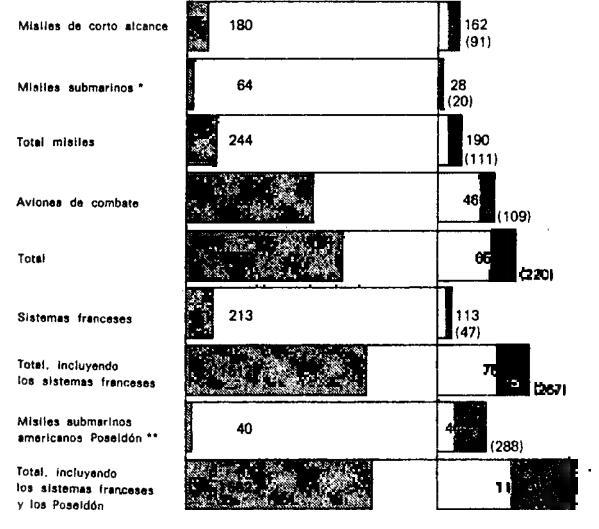
El estacionamiento de 464 misiles de crucero en Gran Bretaña, la República Federal de Alemania, Italia y posiblemente también los Países Bajos y Bélgica acordado por los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la OTAN el 12 de diciembre de 1979 en Bruselas ofrecía ciertamente la posibilidad de sustraerse a la defensa soviética antimisiles, así como a las dudas americanas ante cualquier empleo efectivo de los misiles, pero en el caso de que la disuasión no diese los resultados ape-

tecidos atraía a los cohetes soviéticos más que nunca hacia territorio europeo e invitaba lógicamente a la Unión Soviética a esforzarse igualmente por poseer tales armas invulnerables de segundo ataque. La instalación, acordada simultáneamente, de 108 misiles Pershing II en territorio de Alemania occidental permitió por lo demás a los Estados Unidos amenazar a la Unión Soviética con un ataque nuclear desde suelo europeo sin que por ello hubiese de temer un contraataque sobre territorio americano, y les ofreció la posibilidad de extorsionar políticamente a la Unión Soviética, aunque al mismo tiempo (debido a la reducción a cuatro minutos del tiempo de alarma preventiva) elevaba el peligro de un ataque preventivo soviético contra el arsenal americano en Europa y hacía vulnerable a Europa occidental (que tendría que evitar tal ataque en cualquier circunstancia) a los intentos soviéticos de extorsión, con lo cual no se había logrado otra cosa que seguir empeorando decisivamente la seguridad del continente europeo pese al incremento de los esfuerzos armamentistas. El hecho de que los miembros de la OTAN acordasen, al mismo tiempo, hacer esfuerzos «de rearme» considerablemente menores en el caso de que la Unión Soviética aceptase una reducción «satisfactoria» del potencial de SS-20 en las negociaciones que se habrían de mantener hasta el estacionamiento real de las nuevas armas (lo más pronto a finales de 1983, aunque probablemente no antes de 1985) no introdujo ningún cambio esencial —a diferencia de lo sostenido de forma insistente por los partidarios europeos de la distensión— en este resultado; un posible cambio en la proporción relativa de los misiles de medio alcance de base terrestre no era negociable en tanto las potencias occidentales no estuviesen también dispuestas a hacer concesiones en el campo de los Forward Based Systems, de los que sin embargo no se había hablado en la llamada «doble decisión» [31].

El efecto secundario de los acuerdos de Bruselas más positivo para la seguridad europea, la cobertura prioritaria de las profundas contraposiciones de intereses y de las contradicciones en las relaciones europeo-americanas, sólo tuvo un alcance limitado. Cuando a finales de diciembre de 1979 las tropas soviéticas invadieron Afganistán —dado que, tras malograrse sus esfuerzos en favor de la distensión, la mayoría de los dirigentes soviéticos no estaban ya dispuestos a seguir contemplando de brazos cruzados, sólo por mantener el clima general de distensión, cómo los revolucionarios musulmanes desbancaban en el vecino Estado afgano al Partido Comunista— [32], se produjeron nuevos momentos críticos provocados no sólo por la crisis de la distensión, sino

	Sistemas armamentísticos	Cabezas nucleares disponibles (de ellas, las que llegan)
Pacto de Varsovia		
Misiles de alcance medio	[illegible]	[illegible]
Misiles de alcance corto	[illegible]	[illegible]
Misiles submarinos	[illegible]	31 (15)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aviones de combate	[illegible]	[illegible] (279)
[illegible]	[illegible]	[illegible]





* Polaris A-3 británicos con cabezas múltiples MRV.

** Misiles submarinos americanos Poseidón sometidos a la planificación de objetivos del Alto Mando de la OTAN en Europa (SACEUR).

también por la tensión europeo-americana: en los Estados Unidos, la noticia de la invasión soviética provocó la irrupción definitiva de la nueva «política de fuerza». El presidente Carter, que ya había anunciado la construcción de los primeros 200 misiles MX antes de la firma de los acuerdos SALT II y que entre la «doble decisión» de la OTAN y la crisis de Afganistán había dado a conocer un amplio programa armamentista para los años ochenta —sin poder evitar con ello que cada vez fueran peores las perspectivas respecto a la ratificación de las SALT II por el Senado americano—, hizo ahora suyo, en buena parte por consideración a las posibilidades de ser reelegido, el mito del expansionismo soviético mundial y la exigencia correspondiente de una «contención» militar mundial. Así pues, pidió sanciones contra el agresor soviético, pospuso el debate parlamentario sobre el paquete de las SALT II y creó, con la proclamación de la estrategia de una guerra nuclear limitada (amenaza a los objetivos militares y a los centros de decisión soviéticos), el marco político para la realización completa del programa MX, así como del Pershing II; todo aquel que se mostrara dispuesto a seguir negociando con la Unión Soviética se vería pronto desprovisto de cualquier posibilidad de influencia política[33]. Las elecciones presidenciales de noviembre de 1980 fueron ganadas, sin embargo, por el adversario republicano de Carter, Ronald Reagan, que en la campaña electoral había anunciado la interrupción total de los esfuerzos negociadores SALT hasta que los Estados Unidos hubiesen recuperado el poder perdido. Reagan llevó luego al poder a los críticos conservadores de Carter, que —aun teniendo diferentes puntos de vista en cuestiones concretas—

FIG. 9.—*Sistemas nucleares de cohetes de medio y largo alcance en y para Europa a comienzos de los ochenta.*

La valoración del grado de efectividad de las armas euroestratégicas emprendida por el International Institute for Strategic Studies in London para evitar los errores a que conducen las simples mediciones numéricas de la relación de fuerzas pone de manifiesto que la alianza occidental, sin llevar a cabo un «rearme», es sin duda numéricamente inferior, pero sigue disponiendo de una capacidad de escalada nuclear en Europa y de una capacidad de segundo ataque euroestratégica en caso de que se empleen efectivamente las armas. La seguridad de Europa se encuentra realmente amenazada por el hecho de que la credibilidad de su intervención se halla quebrantada, pero la desviación hacia la posibilidad de una guerra nuclear limitada amenaza con provocar ataques preventivos de la otra parte.

hacían depender los ulteriores esfuerzos en el control de armamento del «buen comportamiento» previo de la Unión Soviética (idea del *«linkage»)*, dando más importancia, en caso de duda, a la seguridad mediante el rearme que a la seguridad mediante el entendimiento en torno a los intereses comunes y complementarios, y atribuyendo a los europeos occidentales en general una peligrosa inclinación a un confiado pacifismo [34].

Frente a ello, la gran mayoría de los europeos occidentales, apoyados por los orientales, insistió en que no se interrumpiesen las conversaciones Este-Oeste, o en que se volviesen a poner en marcha en los casos en que ya se hubiesen interrumpido. Cierto es que la actuación soviética en Afganistán también provocó aquí, de forma general, una nueva inseguridad respecto a los objetivos de la potencia soviética, pero no obstante fue superior la preocupación por las consecuencias negativas de una nueva situación de tensión en Europa. Los gobiernos de Europa occidental frenaron por ello el afán sancionador de los Estados Unidos en la medida de lo posible, no dejando de insistir en la ratificación de las SALT II y esforzándose con gran energía por encontrar puntos afines para la prosecución del diálogo en favor de la distensión. La contradicción entre la reacción americana y la europea frente a la invasión de Afganistán difícilmente se podía resolver ya en el marco de los mecanismos normales de consulta de la alianza; en los Estados Unidos creció la irritación por la supuesta insolidaridad de los europeos, en tanto que en Europa occidental paulatinamente comenzaba a ponerse de manifiesto una conciencia europea autónoma que se diferenciaba claramente del consenso occidental de años atrás, poniendo sobre todo de relieve la identidad de intereses en múltiples aspectos de los europeos orientales y occidentales [35].

Los dirigentes soviéticos no aceptaron en principio las iniciativas europeas. En relación con la problemática euroestratégica, habían exigido, en el marco de la decisión de Bruselas, la revocación de la resolución occidental sobre el estacionamiento de misiles como requisito para el inicio de negociaciones y rechazada la moratoria solicitada por el canciller federal alemán, Schmidt, en la instalación de los SS-20, bien porque esperaban aumentar la oposición al estacionamiento dentro del campo occidental con la amenaza de negarse a cooperar, para acabar con el «rearme» occidental incluso sin contraprestación soviética, bien porque la seguridad estratégica global de la Unión Soviética no se consideraba todavía suficientemente lograda. Sea como fuere, se perdió la oportunidad de detener la escalada de la carrera armamentista euroestratégica, estando en cambio cada vez

más próxima la perspectiva de una carrera armamentista no frenada ya por ningún tipo de negociación sobre control de armamento, perspectiva que no podía ser del agrado de Moscú, aunque sólo fuese por razones económicas. Del callejón sin salida en que se había metido con ello, y que aún se estrechó más con la aventura de Afganistán, no era tan fácil volver a salir, pues los procesos internos soviéticos eran demasiado complejos y la necesidad interna de legitimación de la cúspide dirigente demasiado grande. Los dirigentes soviéticos no manifestarían nuevamente predisposición al diálogo hasta junio de 1980, cuando anunciaron, con la retirada de algunas unidades y de artillería pesada de Afganistán, su voluntad de negociar la posible «finlandización» del país, tal como había propuesto Giscard d'Estaing anteriormente en un encuentro por sorpresa con Breznev en Varsovia, es decir una solución que dejase a Afganistán dentro de la esfera de influencia soviética, pero que privase a la Unión Soviética de las ventajas estratégico-militares derivadas, voluntaria o involuntariamente, de la presencia de sus tropas en esta región clave del Próximo Oriente.

Poco después, con motivo de una visita de Helmut Schmidt a Moscú, los dirigentes soviéticos abandonaron su negativa a negociar la limitación de los misiles de medio alcance en territorio europeo si no se revocaba previamente la resolución de Bruselas acerca del estacionamiento de misiles, aunque por supuesto —como era de esperar tras el desarrollo experimentado hasta ese momento por la discusión sobre el control de armamento—, sólo con la condición de que se incluyesen en las negociaciones los Forward Based Systems americanos en Europa y de que los posibles resultados de las negociaciones no entrasen en vigor hasta que hubiese tenido lugar la ratificación de las SALT II. A fin de obtener siquiera un resultado positivo antes de la fecha fijada en Bruselas para el estacionamiento, renunciaron no obstante (¡por vez primera!) a la exigencia de incluir también en las negociaciones las armas nucleares francesas y británicas (exigencia que, dada la rotunda negativa de Francia y las vacilaciones de Gran Bretaña en cuanto a la inclusión de sus sistemas nucleares en las conversaciones SALT III, amenazaba con destruir toda perspectiva de un posible éxito de la índole que fuera) y manifestaron también su disposición a comenzar al menos las negociaciones sobre el complejo euroestratégico antes incluso de que se hubiese producido la ratificación de las SALT II [36].

Con ello, los europeos lograban superar el bloqueo más grave del diálogo Este-Oeste que había ensombrecido la política mun-

dial en la primera mitad de 1980. Había que esperar, no obstante, el nuevo comienzo del proceso de distensión que interesaba a los europeos por tres motivos:

Primero: La debilidad interna del sistema soviético no permitía a los gobernantes de Europa oriental responder a la exigencia de cooperación de los occidentales en la medida necesaria para su autoafirmación frente a los Estados Unidos. Así, los esfuerzos por conseguir la «finlandización» de Afganistán fracasaron, sobre todo debido a que la resistencia afgana hacía que las posibilidades de estabilización de la influencia soviética sin la presencia de tropas soviéticas fuesen aún menores que antes de la invasión. El fuerte quebrantamiento del sistema comunista en Polonia, que comenzó con un gran movimiento huelguístico en julio-agosto de 1980 y alcanzó pronto, con la creación del Sindicato independiente Solidaridad, un grado tal que evidentemente sólo podía ser detenido por la fuerza [37], llevó a los dirigentes soviéticos a recurrir repetidamente a la amenaza de una intervención, amenaza que —a la vista de los claros inconvenientes con que se habrían de enfrentar en el caso de llevar a cabo realmente una intervención militar— no logró ciertamente nada en cuanto al desarrollo de los acontecimientos en Polonia, en tanto que volvió a desacreditar, como es lógico, a los partidarios de la distensión en Europa occidental. Por otra parte, el temor a que el movimiento polaco de liberación se extendiese a sus propios países indujo a los demás gobernantes de Europa oriental a acentuar de nuevo con más fuerza sus diferencias con Europa occidental; sobre todo, los dirigentes de la RDA cortaron el desarrollo de las relaciones interalemanas, que en su opinión tenía un efecto desestabilizador, elevando drásticamente a comienzos de octubre de 1980 el cambio de moneda obligatorio para los visitantes occidentales de la RDA y situando nuevamente en primer plano, poco después, la exigencia de «reconocer» la ciudadanía de la RDA (inaceptable para la concepción de Estado de Alemania Federal); la visita realizada por Schmidt a Honecker fracasaría ya antes de iniciarse por el nerviosismo de ambas partes a causa de los sucesos de Polonia.

Segundo: Las fuerzas de Europa occidental interesadas en la seguridad mediante la distensión —que seguían siendo claramente mayoritarias— no lograron llegar a un acuerdo sobre los medios para hacer posible tal política de seguridad, y, en vez de aprovechar la creciente inseguridad derivada de la problemática euroestratégica para dirimir la problemática interna de la doctrina de

la OTAN y crear un consenso en torno a una concepción realista de la seguridad, los partidarios y detractores de la resolución de «rearme» de la OTAN se adentraron en discusiones cada vez más virulentas que llevaron a los unos a un pacifismo completamente desvalido y precipitaron a los otros en una invocación igualmente irracional de las fórmulas tradicionales de seguridad, privando a ambos del efecto deseado. En Francia, la preocupación por la independencia de su propio armamento nuclear (que se deseaba mantener como fuese al margen de los acuerdos euroestratégicos sobre control de armamento) y una crítica que históricamente llegaba con retraso —y por lo mismo estaba basada en argumentos globales y predominantemente morales— a la Unión Soviética dentro de las filas de la izquierda provocaron un alejamiento parcial del camino hacia la distensión seguido hasta ese momento. Esta tendencia se reforzó aún más tras la victoria electoral del candidato socialista a la presidencia François Mitterrand en mayo de 1981, ya que el nuevo gobierno se esforzó por hacer gestos de lealtad a los Estados Unidos para asegurar en política exterior su programa de reformas socialistas. Así pues, Schmidt se vio abandonado ya por Giscard d'Estaing en sus esfuerzos en pro de un tratamiento diferenciado de la problemática polaca, que no destruyese las posibilidades de distensión con amenazas de sanciones globales; los críticos de la política armamentista occidental que iban más lejos que Schmidt obtuvieron de Mitterrand una clara negativa. El equipo francoalemán dejaría prácticamente de funcionar como portavoz de los intereses europeos comunes.

Tercero: Obstaculizados pues en doble forma, los europeos, en cualquier caso más débiles por razones estructurales, eran aún menos capaces de forzar la vuelta de los Estados Unidos al diálogo en favor de la distensión. La Administración Carter ya no veía ninguna posibilidad de conseguir la aprobación por el Senado del paquete SALT II sin la retirada previa de la Unión Soviética de Afganistán, pero a pesar de todo volvió a intentar en el otoño de 1980 un tibio acercamiento para la iniciación de negociaciones sobre la problemática de los misiles de medio alcance. En los primeros meses de la Administración Reagan pareció, en cambio, como si los Estados Unidos no pensasen siquiera atenerse ya a la parte de negociación de la «doble decisión» de Bruselas. En tal situación, para los europeos fue ya un éxito que el gobierno Reagan prometiese a sus aliados, en la conferencia de ministros de la OTAN celebrada en Roma a principios de mayo de 1981, la iniciación de negociaciones bilaterales

sobre limitación de armamento euroestratégico antes de finales de 1981. Ciertamente no sólo no se mostró dispuesto a hacer una valoración realista de la problemática negociadora —por ejemplo con la inclusión de los Forward Based Systems—, sino que, por el contrario, afirmó que el objetivo de las negociaciones era «eliminar el creciente desequilibrio estratégico y restablecer una zona de seguridad frente a los soviéticos» [38], para lo que se debían renegociar las SALT II. Era pues de temer que las negociaciones sobre desarme euroestratégico iniciadas en Ginebra a finales de noviembre de 1981 apenas pudieran frenar la carrera armamentista y solamente sirvieran para consolidar la política interior de Europa occidental [39]. Tal efecto se podía ya deducir de la respuesta al anuncio por los soviéticos de su predisposición a negociar: la aceptación por parte de Breznev de la propuesta de moratoria hecha por Schmidt en octubre de 1979 (expuesta por vez primera en el Congreso del PCUS de febrero de 1981 y precisada a Willy Brandt en su visita a Moscú a principios de julio de 1981) tampoco fue celebrada ya por la mayoría de los europeos, a pesar de que Breznev prometió compensar, en caso de que se llevasen a cabo las negociaciones, la desventaja occidental surgida entre tanto a consecuencia de la instalación de más misiles SS-20 con la oferta de otras posibilidades de producción para el potencial de «rearme» previsto.

El futuro inmediato de la Europa de los ochenta no es pues, en la medida en que es posible determinarlo en base al curso de los acontecimientos al iniciarse el nuevo decenio, ni una vuelta a la confrontación bipolar de la guerra fría ni la inminente consecuencia de aquella «tercera fuerza» europea con la que soñaron durante más de tres decenios los adversarios de la guerra fría, sino más bien una mayor acentuación de la identidad europea dentro del marco del sistema político mundial dominado por la antinomia Este-Oeste. Europa occidental, a pesar del aumento experimentado por su potencial económico y de su margen de acción política frente a los Estados Unidos, sigue dependiendo de la garantía de seguridad americana. Pero debido a la creciente inestabilidad de su sistema de seguridad militar depende al mismo tiempo, cada vez en mayor medida, de las negociaciones sobre control de armamento y de la creación de una «estructura de paz». Europa oriental, con la prosecución de la distensión en Europa (que no puede ser impedida por completo por los dirigentes soviéticos, al estar ellos mismos interesados en la cooperación con las potencias occidentales) y las posibilidades

cada vez menores de asegurarse la lealtad con compensaciones materiales, tratará de emanciparse más aún que hasta ahora del aparato dirigente del sistema soviético. La capacidad de la Unión Soviética de impedir a la larga esta evolución mediante la fuerza militar podría ser cada vez más escasa. Que los europeos aprovechen las oportunidades que les quedan (o que surjan de nuevo) para actuar con autonomía, o se dejen arrastrar hacia nuevas tensiones —probablemente incluso con la consecuencia de un conflicto fatal, no deseado por nadie—, dependerá

— de que los europeos occidentales logren, y en qué medida, establecer un consenso sobre sus intereses en materia de seguridad,

— de que sean capaces, y hasta qué punto, de hacer frente a los temores y aspiraciones americanos con aclaraciones racionales y con una solidaridad crítica, y no con el conformismo o la agresión, y

— de que los movimientos de liberación de Europa oriental y el aparato dirigente del bloque soviético sean capaces de entenderse, y en qué medida, en torno a un proceso de «cambio pacífico» que permita mayores libertades sin privar al mismo tiempo al sistema soviético de sus bases legitimadoras.

Ahora más que nunca son pues necesarios el compromiso, la lucidez y la perseverancia de los europeos si se quiere que aún haya un futuro para la historia europea. Ahora más que nunca se necesita también por ello una desideologización del pasado reciente de Europa.

Notas

CAP. 4: LA EVOLUCIÓN DE EUROPA OCCIDENTAL HASTA LA ELECCIÓN DIRECTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

[1] François Georges Dreyfus, «L'Europe occidentale depuis 1945», en F. G. Dreyfus, R. Marx y R. Poidevin, *L'Europe de 1789 à nos jours*, París, 1980, pp. 435-59; Andreas Hillgruber, *Europa in der Weltpolitik der Nachkriegsgeschichte (1945-1963)*, Munich y Viena, 2.ª ed. 1981, pp. 56-82; Karl Dietrich Bracher, *Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917*, Francfort, Berlín y Viena, 1979; Theodor Schieder, «Europäische Bewegung und europäische Institutionen», en Th. Schieder, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte*, vol. 7/1, Stuttgart, 1974, pp. 319-33.

[2] Sobre el «*spill over*», cf. Ernest B. Haas, *The uniting of Europe. Political, social and economic forces 1950-1957*, Londres, 2.ª ed. 1968; Walter Hallstein, *Die europäische Gemeinschaft*, Düsseldorf y Viena, 1973; Claus Offe y Dieter Senghaas, comps., *Texte zur Technikratiediskussion*, Francfort, 1970.

[3] Heinz Kuby y Erich Kitzmüller, *Transnationale Wirtschaftspolitik. Zur politischen Ökonomie Europas*, Hannóver, 1968, pp. 12-20; Ferdinand Karl Liebich, *Grundriss des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT)*, Baden-Baden, 1967; Paul Erdmann y Peter Rogge, *Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Drittländer*, Basilea y Tubinga, 1960; Kalevi Sorsa, «Finland zwischen EWG und RGW», en *Europa-Archiv*, 29 (1974), pp. 461-72.

[4] Dreyfus (nota 1), p. 489.

[5] Alfred Mozer, «Wider die Bauernromantik», *Die Zeit*, 7 de febrero de 1969; *Agrarberichte der Bundesregierung*, pp. 1968 y ss.; *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 25 de abril de 1980.

[6] Jean-Jacques Servan-Schreiber, *Die amerikanische Herausforderung*, Hamburgo, 1968 [*El desafío americano*, Barcelona, Plaza y Janés, 1970]; Ernest Mandel, *Die EWG und die Konkurrenz Europa-Amerika*, Francfort, 1968, especialmente pp. 31 ss.; Rainer Hellmann, *Weltunternehmen nur amerikanisch. Das Ungleichgewicht der Investitionen zwischen Amerika und Europa*, Baden-Baden, 1970, pp. 113-65; Felix Oboussier, «Euratom und der Kernwaffen-Sperrrvertrag», *Europa-Archiv*, 23 (1968), pp. 571-80; K. Blauhorn, *Erdteil zweiter Klasse? Europas technologische Lücke*, Gütersloh, 1969; Lutz Niethammer, «Das Scheitern der einheitsgewerkschaftlichen Bewegung nach 1945 in Westeuropa», *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 25 (1975), 16, pp. 34-63; Ernst Piel, *Multinationale Konzerne und internationale Gewerkschaftsbewegung*, Francfort, 1974.

[7] Dennis Meadows *et al.*, *Die Grenzen des Wachstums*, Stuttgart, 1972; Mihailo Mesarović y Eduard Pestel, *Menschheit am Wendepunkt*, Stuttgart, 1974; Aurelio Peccei, *Die Zukunft in unserer Hand*, Munich, 1981.

[8] Heinz Kramer y Reinhardt Rummel, «Hindernisse und Voraussetzungen für die Europäische Union», *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 26 (1976), 3, pp. 3-30; Rainer Hellmann, *Dollar, Gold und Schlange. Die letzten Jahre von Bretton Woods*, Baden-Baden, 1978; del mismo autor, *Das Europäische Währungssystem. Kritische Einführung mit Dokumentation*, Baden-Baden, 1979.

[9] Hans-Horst Misch, «Die Energiepolitik der Europäischen Gemeinschaft», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 26 (1976), 3, pp. 31-46; *Fischer-Weltalmanach 1980,* p. 666.

[10] Hans-Broder Krohn, «Das Abkommen von Lomé zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten», *Europa-Archiv,* 30 (1975), pp. 177-89; Ingo von Münch, «Müssen wir ihnen unter die Arme greifen?», *Die Zeit,* 11 de febrero de 1977; Rudolf von Albertini, «Probleme der Entwicklungsländer, Entwicklungshilfe und Nord-Süd Konflikt», en *Fischer Weltgeschichte,* vol. 36, Francfort, 1981, pp. 444, 460-63 [«Problemas de los países en vías de desarrollo, ayuda al desarrollo y conflicto Norte-Sur», en *Historia Universal Siglo XXI,* vol. 36, Madrid, 1982]; *Bericht der «Nord-Süd-Kommission», Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer,* Colonia, 1980.

[11] A este respecto es básico Stephen Castles y Godula Kosack, *Immigrant workers and class structure in Western Europa,* Londres, Nueva York y Toronto, 1973.

[12] Véanse los resultados electorales en *Fischer-Weltalmanach 1981,* pp. 607-10; Georges Livet, «Les institutions de l'Europe», en Dreyfus, Marx y Poidevin (nota 1), pp. 496 ss.

[13] Manfred Funke, comp., *Terrorismus. Untersuchungen zur Struktur und Strategie revolutionärer Gewaltpolitik,* Düsseldorf, 1977; *Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Dokumentation zu den Ereignissen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entführung von Hanns Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine «Landshut»,* Bonn, 2.ª ed. 1977.

[14] Waldemar Besson, *Die Aussenpolitik der Bundesrepublik,* Munich, 1970, pp. 171-285; Andreas Hillgruber, *Deutsche Geschichte 1945-1972. Die «deutsche Frage» in der Weltpolitik,* Francfort, Berlín y Viena, 1974, pp. 73-87; Hans-Peter Schwarz, *Die Ära Adenauer, Gründerjahre der Republik 1949-1957,* Stuttgart y Wiesbaden, 1981.

[15] Alfred Grosser, *Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz,* Munich, 7.ª ed. 1979, pp. 321-28; Konrad Adenauer, *Enrinnerungen,* vol. 3, Stuttgart, 1967, p. 296; Hillgruber, *Europa* (nota 1), pp. 102 ss.; «Atomsperrvertrag. Ein neues Versailles?», *Der Spiegel,* 27 de febrero de 1967; acerca del ejército federal, véanse las versiones contrarias, Siegfried Schulz, *Das neue Heer,* Coblenza y Bonn, 1979; Wilfreid v. Bredow, *Der Primat militärischen Denkens. Die Bundeswehr und das Problem der okkupierten Öffentlichkeit,* Colonia, 1969.

[16] Sobre las elecciones parlamentarias de 1957 y la cláusula del 5 %, cf. Heino Kaack, *Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems,* Opladen, 1971, pp. 236-40, 395; Grosser (nota 15), pp. 209 ss.

[17] Sobre Godesberg y el SPD, cf. sobre todo Hartmut Soell, *Fritz Erler. Eine politische Biographie,* 2 vols., Berlín, Bonn y Bad Godesberg, 1976, pp. 289-473, 701-98; Susanne Miller, *Die SPD vor und nach Godesberg,* Bonn y Bad Godesberg, 3.ª ed. 1975; Theo Pirker, *Die SPD nach Hitler. Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1945-1964,* Munich, 1965.

[18] Heino Kaack y Reinhold Roth, «Die Parteien und die Aussenpolitik», en H.-P. Schwartz, comp., *Handbuch der deutschen Aussenpolitik,* Munich y Zurich, 2.ª ed. 1976, pp. 190-92; de los mismos autores, «Die Freie Demokratische Partei», en R. Löwenthal y H.-P. Schwarz, *Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz,* Stuttgart, 1974, pp. 408-32.

[19] Grosser (nota 15), pp. 225-27; cf., sobre las elecciones del presidente federal, Adenauer (nota 15).

[20] Sobre la recesión de 1965-66, cf. Walter Wannenmacher, *Die Krise. Das Ende eines deutschen Mythos,* Düsseldorf y Colonia, 1967; sobre el NPD, R. Kühnl, R. Rilling y C. Sager, *Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neofaschistischen Partei,* Francfort, 1969; Hans Josef Horchem, «Zum

Entwicklungsstand des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland», en M. Funke, comp., *Extremismus im demokratischen Rechtsstaat,* Düsseldorf, 1978, pp. 202-24.

[21] Hans Karl Rupp, *Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,* Stuttgart, 1978, pp. 150 ss.; Kaack, *Parteiensystem* (nota 16), pp. 315-39; Besson (nota 14), pp. 365-442.

[22] Dieter Sterzel, comp., *Kritik der Notstandsgesetze,* Francfort, 1968; Clara Diabolis *et al., Situationistische Internationale 1958-1969,* 2 vols., Hamburgo, 1976-77; Gerd Langguth, «Protest von liks. Die Studentenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland», en Funke, *Extremismus* (nota 20), pp. 164-201.

[23] Grupo de trabajo del Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, *Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland,* Reinbek, 1979; «Die Forschungslücke», *Der Spiegel,* 24 de febrero de 1969; «Der Wirrwarr ist kaum durchschaubar», *Der Spiegel,* 16 de enero de 1978.

[24] Arnulf Baring, *Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel,* Stuttgart, 1982; Heino Kaack, *Der unbewältige Machtwechsel,* Meisenheim am Glan, 1975; Grosser (nota 15), p. 234; sobre la *Ostpolitik* hoy dos opiniones contradictorias: Peter Christian Ludz, *Deutschlands doppelte Zukunft. Bundesrepublik und DDR in der Welt von morgen,* Munich, 5.ª ed. 1974, pp. 15-53, 95-146, y Hillgruber, *Deutsche Geschichte* (nota 14), pp. 115-51.

[25] Horst Heimann, *Theoriediskussion in der SPD,* Francfort, 1975; Funke, *Extremismus* (nota 14), caps. 3, 4 y 5.

[26] Wolfgang Wagner, «Kanzlerwechsel in Bonn. Der Rücktritt Willy Brandts und das neue Kabinett Schmidt-Genscher», *Europa-Archiv,* 29 (1974), pp. 345-52; Günther Nollau, *Das Amt,* Munich, 1978, pp. 245-85; Baring (nota 24), pp. 722-62.

[27] Los textos más importantes, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional de 1976, son fácilmente accesibles en *Mitbestimmung,* comp. por el Ministerio Federal de Trabajo y Bienestar Social, Bonn, 1979; sobre la evolución más reciente y sobre lo que viene a continuación, cf. Alf Mintzel, *Geschichte der CSU. Ein Überblick,* Opladen, 1977; Heino Kaack y Reinhold Roth, comps., *Parteien-Jahrbuch 1976,* Meisenheim am Glan, 1979; de los mismo autores, *Handbuch des Parteiensystems der Bundesrepublik. Struktur und Politik zu Beginn der 80er Jahre,* 2 vols., Opladen, 1980.

[28] Harmut von Hentig, «Im Sachverstand erstick die Demokratie», *Die Zeit,* 28 de febrero de 1969; Löwenthal y Schwarz, *Zweite Republik* (nota 18), con las colaboraciones de T. Eschenburg, pp. 27 ss., W. Hennis, pp. 203 ss. y T. Ellwein, pp. 470 ss.; Horst Zillessen, «Bürgerinitiativen im repräsentativen Regierungssystem», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 24 (1974), 12, pp. 3-22; Bernd Guggenberger, *Bürgerinitiativen in der Parteiendemokratie. Von der Ökologiebewegung zur Umweltpartei,* Stuttgart, 1980.

[29] La Constitución de la v República francesa del 4 de octubre de 1958 está recogida en R. H. Tenbrock, *Ausserdeutsche Verfassungen,* vol. 2, Paderborn, 1962, pp. 135-63; Rudolf von Albertini, «Frankreich 1919-1958», en Schieder, *Handbuch* (nota 1), 7/1, pp. 476 ss.; sobre la descolonización en Argelia y Guinea, cf. Franz Ansprenger, «Afrika. Befreiungsbewegungen und Behauptungsversuche weisser Herrschaft», en *Fischer-Weltgeschichte,* vol. 36, Francfort, 1981, pp. 334-93 [«Movimientos de liberación e intentos de imposición del dominio blanco», en *Historia Universal Siglo XXI,* vol. 36, Madrid, 1982, pp. 300-58]; Hartmut Elgenhans, *Frankreichs Algerienkrieg 1954-1962,* Munich, 1974.

[30] J. C. Maout y R. Muzellec, *Le parlement sous la Ve République,* París, 1971; B. Diethelm, *Les partis politiques sous la Cinquième République,* París, 1973; U. Kempf, «Vom Vielparteiensystem zur Blockbildung. Das französische Parteiensystem», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 23 (1973), 9, pp. 3-26.

[31] George W. Ball, «Die sechs Kampagnen des Generals de Gaulle», *Die Zeit,* 7 de junio de 1968; Alfred Grosser, *La politique extérieure de la Ve République,* París, 1965; E. Jouve, *De Gaulle et la construction de l'Europe,* París, 1967; Wilfrid L. Kohl, *French nuclear diplomacy,* Princeton, 1971 (con amplia bibliografía); Robert Gilpin, *France in the age of the scientific state,* Princeton, 1968.

[32] Dreyfus (nota 1), p. 445; *La CFDT,* 2 vols., París, 1971; Gérard Vincent, *Les Français 1945-1975. Chronologie et structure d'une société,* París, 1977.

[33] Alfred Grosser, «Wettbewerb. Das ganze Leben», *Die Zeit,* 10 de noviembre de 1967; Dreyfus (nota 1), p. 451.

[34] Alain Touraine, *Le communisme utopique. Le mouvement de mai,* París, 2.ª ed. 1972; Jean-Raymond Tournoux, *Le mois de mai du Général. Livre blanc des évènements,* París, 1969, pp. 292-301; Georges Pompidou, *Pour rétablir une vérité,* París, 1982, pp. 179-208.

[35] Sobre el referéndum y la retirada de De Gaulle, cf. Alfred Grosser, «Schöpfer und Zerstörer», *Die Zeit,* 2 de mayo de 1969; A. Claisse, *Le premier ministre de la Ve République,* París, 1972; Pompidou (nota 34), pp. 255-72.

[36] *Le Monde: dossiers et documents. L'élection présidentielle,* 1981, p. 17; *Le Monde,* 21 de mayo de 1974; Walter Schütze, «Der Führungswechsel in Frankreich», *Europa-Archiv,* 29 (1974), pp. 429-38; G. Vincent, *Les Français 1976-1979. Chronologie et structure d'une société,* París, 1980.

[37] Sobre la evolución más reciente, cf. sobre todo la amplia documentación de *Le Monde* (nota 36); Heinz Timmermann, «Frankreichs Kommunisten: Wandel durch Mitarbeit. Politische Prämissen und Konsequenzen der 'Volksunion'», *Europa-Archiv,* 28 (1973), pp. 300-10; Wilfried Loth, «Sozialisten und Kommunisten in Frankreich. Zwischenbilanz einer Strategie», *Europa-Archiv,* 30 (1975), pp. 39-50; Klaus Burkhardt, «Wandlungen im französischen Kommunismus? Der 22. Pareitag der Kommunistischen Partei Frankreichs», *Aus politik und Zeitgeschichte,* 26 (1976), 17, pp. 3-12.

[38] Chris Cook y John Ramsden, comps., *Trends in British politics,* Londres, 1978; Kurt Sontheimer, *Das politische System Grossbritanniens,* Munich, 1972; David Butler y Anne Sloman, *British political facts,* Londres, 5.ª ed. 1980; Chris Cook y John Paxton, *Commonwealth political facts,* Londres, 1979.

[39] Sir Ivone Kirkpatrick, *The inner circle,* Londres, 1959; T. F. Lindsay y M. Harrington, *The Conservative Party, 1918-1970,* Londres, 1974; Anthony Sampson, *A new anatomy of Britain,* Londres, 1971.

[40] Christopher John Bartlett, *A history of post war Britain, 1945-1974,* Londres, 1977, pp. 154-205.

[41] Mandel, *EWG* (nota 6), p. 51; M. Hodges, *Multinational corporations in national development,* Farnborough, 1974; Miriam Camps, *Britain and the European Community, 1955-1963,* Princeton, 1964; Robert L. Lieber, *British politics and European unity,* Londres, 1970.

[42] M. Harrison, *The trade unions and the Labour Party since 1945,* Londres, 1960; H. Pelling, *A short history of the Labour Party,* Londres, 1976; del mismo autor, *A history of British trade unionism,* Londres, 1976; Bartlett (nota 40), pp. 206-26; sobre las elecciones de 1964, cf. David E. Butler y A. King, *The British general election of 1964,* Londres, 1965.

[43] Bernd-Jürgen Wendt, «Industrial democracy. Zur Struktur der englischen Sozialbeziehungen», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 25 (1975), 46, pp. 3-47; Barlett (nota 40), pp. 246-68.

[44] Wendt (nota 43), pp. 29 ss.; sobre las elecciones de 1966, cf. Butler y A. King, *The British general election of 1966,* Lindres, 1966.

[45] Bartlett (nota 40), pp. 227-45, 267-94; C. D. Cohen, *British economic policy 1960-1969,* Londres, 1971; Brian Lapping, *The Labour Government,* Hardmondsworth, 1971; W. Beckermann, *The Labour Government's economic record, 1964-1970,* Londres, 1972; A. O. K. Acheson *et al.,* comps., *Bretton*

Woods revisited, Toronto, 1972; Clifford Hill, *Immigration and integration. A study of the settlement of coloured minorities in Britain,* Oxford, 1970.

[46] Sobre las elecciones de 1970, febrero de 1974 y octubre de 1974, cf. Butler y M. Pinto-Duschinsky, Londres, 1971; Butler y D. Kavanagh, Londres, 1974 y 1975 (cf. nota 42); Bartlett (nota 40), pp. 295-328; Chris Cook, *A short history of the Liberal Party, 1900-1976,* Londres, 1976; H. M. Begg *et al., Expenditure in Scotland, 1961-1971,* Edimburgo, 1975; Alan Butt Phillips, *The Welsh question. Nationalism in Welsh politics, 1964-1970,* Cardiff, 1975.

[47] Wendt (nota 43), pp. 37-42; David Butler y Danis Kavanagh, *The 1975 referendum,* Londres, 1976.

[48] Según la leyenda histórica, Derry fue defendido de las tropas del rey Jacobo II por jóvenes aprendices; sobre el conflicto de Irlanda del Norte, cf. R. Hermle, *Der Konflikt in Nordirland,* Munich, 1979, pp. 165 ss.; T. P. Coogan, *IRA. Histoire et actualité de l'Armée Républicaine Irlandaise,* París, 1972, pp. 427-40; breve resumen histórico en I. Geiss, «Historische Voraussetzungen zeitgenössischer Konflikte», en *Fischer-Weltgeschichte,* vol. 36, pp. 86-88 [«Condiciones históricas previas de los conflictos contemporáneos», en *Historia Universal Siglo XXI,* vol. 36, Madrid, 1982].

[49] Klaus von Beyme, *Das politische System Italiens,* Stuttgart, 1970; S. B. Clough, *The economic history of modern Italy,* Nueva York, 1970; Paul Guichonnet, *Histoire de l'Italie,* París, 2.ª ed. 1975.

[50] M. Carlyle, *The awakening of Southern Italy,* Londres, 1962; Beyme (nota 49), p. 64; M. Pantaleno, *Mafia et politique,* París, 1965; F. Alberoni y G. Baglioni, *L'integrazione dell'imigrato nella società industriale,* Bolonia, 1965.

[51] Claus Gatterer, *Erbfeindschaft. Italien-Österreich,* Viena, 1982; Dietrich Mende y Hermann Volle, «Die Verhandlungen über Südtirol 1965-1968», *Europa-Archiv,* 23 (1968), pp. 709-16.

[52] Ernst Nolte, «Italien 1918-1960», en Schieder, *Handbuch* (nota 1), p. 649.

[53] G. Sartori, Bipartismo imperfetto o pluralismo polarizzato», en *Tempi Moderni,* 10/31 (1967), pp. 1-34; G. Galli, *Il difficile governo,* Bolonia, 1972; Percy A. Allum, «Italien - unregierbare Republik», *Europa-Archiv,* 29 (1974), pp. 717-28.

[54] Dreyfus y Livet (nota 1), pp. 450, 521-26.

[55] Sobre esto, cf. los estudios del Instituto Cattaneo sobre la DC y el PCI: G. Galli, comp., *Il comportamento elettorale in Italia,* Bolonia, 1968; G. Poggi, comp., *L'organizazione partitica del PCI e della DC,* Bolonia, 1968; F. Alberoni, comp., *L'attivista di partito,* Bolonia, 1967; A. Mandukian, comp., *La presenza sociale del PCI e della DC,* Bolonia, 1968; J. La Palombara, *Clientela et parentela. Studio sui gruppi d'interesse in Italia,* Milán, 1967.

[56] Geneviève Bibes, *Le système politique italien,* París, 1974, pp. 67-76; las cifras de las huelgas están tomadas del *Frankfurter Allgemeine Zeitung,* 15 de noviembre de 1975; las cifras más recientes, de *Fischer-Weltalmanach 1977-1981.*

[57] Beyne (nota 49), pp. 115 ss.; A. Pizzorno, «I sindicati nel sistema politico italiano», *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico,* 21/4 (1971), pp. 1510-59; «Il sindacato in Italia 1960-1970», número especial de *Quaderni di Rassegna Sindicale,* 31-32 (1971), pp. 3-220.

[58] Nolte, «Italien 1918-1960», en Schieder, *Handbuch* (nota 1), p. 648.

[59] Heinz Timmermann, «Die aussenpolitische Dimension des historischen Kompromisses», *Osteuropa,* 25 (1975), pp. 445-62; del mismo autor, «'Historischer Kompromiss' oder Volksfront, Die Kommunistische Partei Italiens auf dem Wege zur Regierungsbeteiligung», *Aus Politik und Zietgeschichte,* 26 (1976), 17, pp. 13-22.

[60] Colección de documentos: Heinrich Siegler, *Österreichs Souveränität, Neutralität, Prosperität,* Viena, 1967; obra de consulta más reciente: Wolfgang

E. Oberleitner, *Politisches Handbuch Österreichs 1945-1980,* Viena, 1981; Erika Weinzierl y Kurt Skalnik, comps., *Österreich. Die zweite Republik,* 2 vols., Graz, Viena y Colonia, 1972; Michel Cullin y Felix Kreissler, *L'Autriche contemporaine,* París, 1972; Elisabeth Barker, *Austria 1918-1972,* Londres, 1973, pp. 203-77; Ernst Joseph Görlich y Felix Romanik, *Geschichte Österreichs,* Innsbruck, Viena y Munich, 2.ª ed. 1977, pp. 575-634.

[61] Sobre la idea de sí mismo como «país modelo», cf. André Siegfried, *La Suisse. Démocratie témoin,* Neuenburg y París, 1948; Erich Gruner, comp., *Die Schweiz seit 1945,* Berna, 1971; Wilhelm Bickel, *Die Volkswirtschaft der Schweiz,* Aarau y Francfort, 1973; Jean Ziegler, *Une Suisse au-dessus de tout soupçon,* París, 1976.

[62] Stanley v. Anderson, *The Nordic Council. A study of Scandinavian regionalism,* Seattle, Londres y Nueva York, 1967; T. K. Derry, *A history of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark, Finnland and Iceland,* Londres, 1979; Hans Mayrzedt y Hans Christoph Binswanger, comps., *Die Neutralen in der europäischen Integration,* Viena y Stuttgart, 1970, pp. 288-318; Nils Orvik, *Sicherheit auf finnisch. Finnland und die Sowjetunion,* Stuttgart, 1972.

[63] Francis G. Castles, *The Social Democratic image of society. A study of achievements and origins of Scandinavian Social Democracy in comparative perspective,* Londres, 1978.

[64] Johannes Gaitanides, «Griechenland - Heimkehr in die Demokratie», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 25 (1975), 20, pp. 3-29; Gunnar Hering, «Griechenland vom Lausanner Frieden bis zum Ende der Obersten-Diktatur», en Schieder, *Handbuch* (nota 1), 7/2, pp. 1334-37.

[65] El asesinato del diputado Grigorios Lambrakis sirvió de base para la película de Costa Gravas *Z* (guión de Vassili Vassilikos, música de Mikis Theodorakis).

[66] Gaitanides (nota 64).

[67] Sobre la descolonización, cf. *Fischer-Weltgeschichte,* vol. 36, Francfort, 1981, pp. 97, 334-94 [*Historia Universal Siglo XXI,* vol, 36, Madrid, 1982] (cf. nota 29).

[68] Sobre el proceso político, cf. H. v. Livermore, *A new history of Portugal,* Cambridge, 2.ª ed. 1976, pp. 346 ss.; Albert-Alain Bourdon, *Histoire du Portugal,* París, 2.ª ed. 1977; Arno Münster, *Révolution et contrerévolution au Portugal,* París, 1977.

[69] E. Temine, A. Broder y G. Chastagnaret, *Histoire de l'Espagne contemporaine,* París, 1979, pp. 265-81.

[70] E. Ramón Arango, *The Spanish political system. Franco's legacy,* Boulder, 1978, pp. 142-278; R. A. Dahl, comp., *Regimes and oppositions,* New Haven y Londres, 1973, pp. 171 ss.

CAP. 5: DE LA MUERTE DE STALIN A LA ERA BREZNEV. LOS PAÍSES DEL COMECON DESDE 1953

[1] Jruschov en *Pravda,* 15 de enero de 1960.

[2] Se produjo tras la caída de Beria y está relacionada con un reajuste general encaminado a eliminar a los partidarios de Beria.

[3] Cf. el cuadro en Alec Nove, *An economic history of the USSR,* Londres, 2.ª ed. 1976, pp. 325 [*Historia económica de la Unión Soviética,* Madrid, Alianza, 1973].

[4] *Ibid.,* p. 334.

[5] Peter Gosztony, *Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkräfte seit 1917,* Viena, 1980, p. 326.

[6] Carola Stern, *Ulbricht. Eine politische Biographie,* Berlín, 1966, p. 150.

[7] Sobre la situación y las tareas inmediatas del partido, cf. *Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,* vol. 4, Berlín Este, 1955, p. 438.

[8] Telegrama del Consejo de Ministros de la RDA al Consejo de Ministros de la URSS con motivo del aniversario de la liberación del pueblo alemán del fascismo, en *Beziehungen DDR-UdSSR. 1949-1955. Dokumentensammlung,* vol. 2, Berlín Este, 1975, p. 668.

[9] Jörg K. Hoensch, *Sowjetische Osteuropa-Politik 1945-1975,* Kronberg/Ts., 1977, p. 91.

[10] Hans Roos, *Geschichte der polnischen Nation 1918-1978. Von der Staatsgründung im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart,* Stuttgart, 3.ª ed. 1979, p. 244.

[11] Gosztony (nota 5), p. 330.

[12] François Fejtö, *Die Geschichte der Volksdemokratien,* vol. 2: *Nach Stalin 1953-1972,* Graz, Viena y Colonia, 1972, p. 67.

[13] *Dokumente zur Deutschlandpolitik. Hrsg. v. Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen,* vol. 3, 1, Bonn, 1955, pp. 76-80.

[14] *Ibid.,* p. 234.

[15] Cf. sobre esto Carlota Stern, *Porträt einer bolschewistischen Partei. Entwicklung, Funktion und Situation der SED,* Colonia, 1957, pp. 182 ss., con el instructivo paradigma de los efectos sobre los cuadros medios y bajos del SED.

[16] Hoensch (nota 9), p. 119.

[17] *Neues Deutschland,* 22 de junio de 1956.

[18] W. Gomulka, *Rede auf dem VIII. Plenum des Zentralcomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei,* 20 de octubre de 1956, Varsovia, 1956.

[19] *Neues Deutschland,* 4 de marzo de 1956.

[20] Gosztony (nota 5), p. 335, dice «hacia el 20 de octubre».

[21] Cf. sobre esto los documentos en Paul E. Zinner, comp., *National communism and popular revolt in Eastern Europe. A selection of documents on events in Poland and Hungary, February-November 9536,* Nueva York, 1956, pp. 318 ss.

[22] *Ibid.,* p. 514.

[23] Citado de acuerdo con la traducción de *Neues Deutschland,* 1 de noviembre de 1956.

[24] La suma total de los créditos concedidos por la URSS a las demás democracias populares en 1956-57 no puede ser determinada con seguridad. Hoensch (nota 9), p. 216, nota 99, y p. 255, nota 54, aporta datos bibliográficos discrepantes.

[25] Roos (nota 10), p. 254.

[26] Hansjakob Stehle, «Polish communism», en William E. Griffith, comp., *Communism in Easter Europe. Continuity, change and the Sino-Soviet dispute,* vol. 1, Cambridge (Mass.), 1964, p. 104.

[27] Nove *et al.,* p. 340. Cf. también allí los datos correspondientes.

[28] Georg von Rauch, *Geschichte der Sowjetunion,* Stuttgart, 6.ª ed. 1977, p. 513.

[29] *Ibid.,* p. 515.

[30] Cf. los diferentes objetivos de las políticas económicas de China y la Unión Soviética en Nicolas Spulber, «Contrasting economic patterns: Chinese and Soviet development strategies», *Soviet Studies,* 15 (1963-64), pp. 1-16.

[31] El desarrollo y la función de las fuerzas navales soviéticas han sido expuestos por el comandante en jefe (desde 1956); cf. Sergei G. Gorschov, *Seemacht Sowjetunion (Morskaja mosc' gosudarstva, dt.),* Hamburgo, 1978.

[32] *Krasnaja Zvezda,* 26 de diciembre de 1962.

[33] *Der Ostmarkt im Comecon. Eine Dokumentation ousammengestellt und mit einer Einführung versehen von Alexander Uschakow,* Baden-Baden, 1972, pp. 46.

[34] Nove (nota 3), p. 361. No hay datos precisos sobre los gastos reales de defensa de la URSS; sólo es posible una estimación, ya que algunos gastos de armamento, como por ejemplo el desarrollo de nuevos sistemas armamentísticos, no aparecen en los presupuestos del Ministerio de Defensa, sino que están registrados en otros Ministerios.

[35] Henry Willcox Schaeffer, *Comecon and the politics of integration*, Nueva York, Washington y Londres, 1972, p. 7.

[36] Según Wolfram Schrettl a este respecto, he de agradecer las valiosas observaciones de mis colegas del Osteuropa-Institut de Munich, Franz-Lothar Altmann y Wolfram Schrettl, especialmente en cuestiones de economía. Los posibles errores deben ser achacados exclusivamente al autor.

[37] Alocución por radio del 1 de febrero de 1968, citada por Fejtö (nota 12), vol.. 2, p. 262.

[38] *Pravda*, 13 de noviembre de 1968.

[39] *Informationen für den Aussenhandel der Mitgliedsländer des RGW und der SFRJ. Allgemeiner Teil: RGW*, Leipzig, 1977, p. 71.

CAP. 6: EUROPA EN LA POLÍTICA MUNDIAL

[1] Cf. Tans Wassmund, *Kontinuität im Wandel. Bestimmungsfaktoren sowjetischer Deutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit*, Colonia y Viena, 1974; Richard Löwenthal, *Chruschtschow und der Weltkommunismus*, Stuttgart, 1963; Adam B. Ulam, *Expansion and coexistence. The history of Soviet foreign policy, 1917-1967*, Nueva York, 1968, pp. 539 ss.

[2] Sobre esto y lo que viene a continuación, Charles R. Planck, *Sicherheit in Europa. Die Vorschläge für Rüstungsbeschränkung und Abrüstung 1955-1965*, Munich, 1968; Klaus Gotto, «Adenauers Deutschland- und Ostpolitik, 1954-1963», en *Adenauer Studien III*, Maguncia, 1974, pp. 3-91; Richard Löwenthal, «Vom Kalten Krieg zur Ostpolitik», en Richard Löwenthal y Hans-Peter Schwarz, comps., *Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - Eine Bilanz*, Stuttgart, 1974, pp. 604-99; Hans-Gert Pöttering, *Adenauers Sicherheitspolitik 1955-1963. Ein Beitrag zum deutsch-amerikanischen Verhältnis*, Düsseldorf, 1975; Hans-Peter Schwarz, comp., *Entspannung und Wiedervereinigung. Deutschlandpolitische Vorstellungen Konrad Adenauers 1955-1958*, Stuttgart y Zurich, 1979.

[3] Sobre el último punto, cf. especialmente Dieter Mahnke, *Nukleare Mitwirkung. Die Bundesrepublik Deutschland in der atlantischen Allianz 1954-1970*, Berlín y Nueva York, 1972, pp. 20-31 y 209 ss.

[4] Publicado por primera vez en Konrad Adenauer, *Erinnerungen 1955-1959*, Stuttgart, 1967, pp. 347-95.

[5] Texto de la nota soviética en *Dokumente zur Deutschlandpolitik der Sowjetunion*, vol. 2, Berlín Este, 1963, pp. 672-94.

[6] Tesis aceptada generalmente y sin reparos por la bibliografía; cf., por ejemplo, Löwenthal (nota 2), pp. 643 ss., y Waldemar Besonn, *Die Aussenpolitik der Bundesrepublik. Erfahrungen und Massstäbe*, Munich, 1970, pp. 210 ss.

[7] Cf. Walther Stützle, *Kennedy und Adenauer in der Berlin-Krise 1961-1962*, Bonn, 1973; Robert M. Slusser, *The Berlin crisis of 1961. Soviet-American relations and the struggle for power in the Kremlin, June-November 1961*, Baltimore, 1973; Honoré M. Catudal, *Kennedy in der Mauer-Krise. Eine Fallstudie zur Entscheidungsfindung in den USA*, Berlín, 1981.

[8] Citado en la recopilación de Manfred Görtemaker, *Die unheilige Allianz. Die Geschichte der Entspannungspolitik 1943-1979*, Munich, 1979, pp. 46 ss.

[9] La tesis occidental más frecuente —la de que Jruschov buscaba con esta maniobra un predominio unilateral soviético a nivel mundial— parte del

supuesto erróneo de que, a comienzos de la década de 1960, reinaba ya realmente un «equilibrio de disuasión» entre el Este y el Oeste. Cf. sobre la interpretación aquí ofrecida Ulam (nota 1), pp. 661-77; sobre el curso de los acontecimientos, Elie Abel, *13 Tage vor dem 3. Weltkrieg,* Viena y Munich, 1966, y Robert F. Kennedy, *Dreizehn Tage oder die Verhinderung des Drietten Weltkrieges,* Reinbek, 1970 [*Trece días,* Barcelona, Plaza Janés, 1968].

[10] Sobre los enfrentamientos dentro de la alianza occidental en la década de 1960, cf. la excelente visión general de Alfred Grosser, *Das Bündnis. Die Westeuropäischen Länder und die USA seit dem Krieg,* Munich, 1978, pp. 259-338; sobre la política de De Gaulle y sus sucesores, Edwards A. Kolodziej, *French international policy under de Gaulle and Pompidou. The politics of grandeur,* Ithaca, 1974, y Lothar Ruehl, *La politique militaire de la Vème République,* París, 1976.

[11] Cf. *supra,* capítulo 2.

[12] Sobre la *Ostpolitik* de la era de Schröder y Kiesinger, cf. especialmente Besson (nota 6), pp. 329-437, y William E. Griffith, *Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland,* Stuttgart, 1981, pp. 151-231.

[13] Cf., como mejor exposición actual de conjunto, George C. Herring, *America's longest war: The United States and Vietnam 1950-1975,* Nueva York, 1979; sobre los efectos de la guerra de Vietnam en la política de distensión, cf. sobre todo Adam B. Ulam, *The rivals. America and Russia since World War II,* Londres, 2.ª ed. 1973, pp. 341-82.

[14] Las cifras están tomadas del International Institute for Strategic Studies, *The military balance 1974-1975,* Londres, 1974, p. 75; sobre el conjunto del proceso, Harland B. Moulton, *From superiority to parity. The United States and the strategic arms race 1961-1971,* Westport y Londres, 1973; así como Stanley Hoffmann, *Primacy or world order. American foreign policy since the Cold War,* Nueva York, 1978.

[15] A este respecto y sobre lo siguiente, cf. Löwenthal (nota 2), pp. 681 ss.; Egbert Jahn y Volker Rittberger, comps., *Die Ostpolitik der BRD. Triebkräfte, Widerstände, Konsequenzen,* Opladen, 1974; Helga Haftendorn, *Abrüstungs- und Entspannungspolitik zwischen Sicherheitsbefriedigung und Friedenssicherung. Zur Aussenpolitik der BRD 1955-1973,* Düsseldorf, 1974; Griffith (nota 12), pp. 233-96; Benno Zündorf, *Die Ostverträge,* Munich, 1979; Günter Schmid, *Entscheidung in Bonn. Die Entstehung der Ost- und Deutschlandpolitik 1969/70,* Colonia, 2.ª ed.. 1980. Ahora también Arnulf Baring, *Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel,* Stuttgart, 1982.

[16] Uwe Kitzinger, *Diplomatie et persuasion. Comment la Grande-Bretagne est entrée dans le Marché Commun,* París, 1974.

[17] Calculado por Benjamin J. Cohen, «The revolution in Atlantic economic relations: a bargain comes unstuck», en Wolfram F. Hanrieder, comp., *The United States and Western Europe. Political, economic and strategic perspectives,* Cambridge (Mass.), 1974, pp. 106-33, aquí p. 127. Cf. Andrew Shonfield, comp., *International economic relations of the Western world 1959-1971,* 2 vols., Londres, 1976, y Rainer Hellmann, *Dollar, Gold und Schlange, Die letzen Jahre von Bretton Woods,* Baden-Baden, 1976.

[18] Cf., además de Hoffmann (nota 14), Bernhard Willms, *Entspannung und friedliche Koexistenz,* Munich, 1974; Mason Willrich y John B. Rhinelander, comps., *SALT: The Moscow Agreements and beyond,* Nueva York, 1974; Coral Bell, *The diplomacy of détente. The Kissinger era,* Londres, 1977; Tad Szulc, *The illusion of peace. Foreign polity in the Nixon years,* Nueva York, 1978; Henry Kissinger, *Memoiren 1968-1973,* Munich, 1979; del mismo autor, *Memoiren 1973-1974,* Munich, 1981.

[19] Cf. Wilfried L. Kohl, «The Nixon-Kissinger foreign policy system and U.S.—European relations: patterns of policy making», *World Politics,* 28

(1975-76), pp. 1-43; sobre la interrelación global, cf. también las recopilaciones de Hanrieder (nota 17); Karl Kaiser y Hans-Peter Schwarz, comps., *Amerika und Westeuropa. Gegenwarts- und Zukunftsprobleme,* Stuttgart y Zurich, 1977; David S. Landes, comp., *Western Europe: the trials of partnership,* Lexington (Mass.), 1977, y Walter F. Hahn y Robert L. Pfaltzgraff, comps., *Atlantic community in crisis: a redefinition of the transatlantic relationship,* Nueva York, 1979.

[20] Walter Schütze, «Rivalität im westeuropäischen Bereich», en Josef Füllenbach y Eberhard Schulz, comps., *Entspannung am Ende? Chancen und Risiken einer Politik des Modus vivendi,* Munich y Viena, 1980, pp. 107-31.

[21] Jan Höhn, *Aussenpolitik der EG-Staaten: im Fall der KSZE. Geschichte, Struktur, Entscheidungsprozess,* Munich, 1978; Alfred Grosser, comp., *Les politiques extérieures européennes dans la crise,* París, 1976.

[22] Sobre las SALT II, cf. Richard Burt, «The scope and limits of SALT», *Foreign Affairs,* 56 (1977-78), pp. 751 ss.; así como, especialmente, Strobe Talbott, *Endgame: the inside story of SALT II,* Nueva York, 1979.

[23] Sobre lo que viene a continuación, cf. en general William E. Griffith, comp., *The Soviet empire: expansion and détente,* Lexington (Mass.), 1976; Christoph Royen, *Die sowjetische Koexistenzpolitik gegenüber Westeuropa. Voraussetzungen, Ziele, Dilemmata,* Baden-Baden, 1978; Egbert Jahn, comp., *Soviet foreign policy: its social and economic conditions,* Londres, 1978; Kenneth A. Oye, Donald Rothchild y Robert J. Lieber, comps., *Eagle entangled. U.S. foreign policy in a complex world,* Nueva York y Londres, 1979; Hans-Peter Schwarz y Boris Meissner, comps., *Entspannungspolitik in Ost und West,* Colonia, 1979; Füllenbach y Schulz (nota 20).

[24] Sobre el desarrollo de la correlación de fuerzas militares en la década de 1970, cf. la documentación ininterrumpida en los anuarios del International Institute for Strategic Studies in London *(The military balance)* y del Stockholm International Pease Research Institute *(World armaments and disarmament, SIPRI yearbook)*; de ahí están también tomados los datos de las figuras. Sobre la valoración del problema del «eurocomunismo», cf. Wilfried Loth, «Sozialisten und Kommunisten in Frankreich: Zwischenbilanz einer Strategie», *Europa-Archiv,* 30 (1975), pp. 39-50, y Robert Levgold, «The Soviet Union and West European communism», en Rudolf L. Tökés, comp., *Eurocommunism and détente,* Nueva York, 1978, pp. 318-84. Sobre el punto de vista soviético acerca de la problemática armamentista, cf. Stephan Tiedtke, *Rüstungskontrolle aus sowjetischer Sicht. Die Rahmenbedingungen der sowjetischen MBFR-Politik,* Francfort, 1980; así como Gerhard Wettig, *Die sowjetischen Sicherheitsvortellungen und die Möglichkeiten eines Ost-West-Einvernehmens,* Baden-Baden, 1981.

[25] Hans-Adolf Jacobsen, Wolfgang Mallmann y Christian Meier, comps., *Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Analyse und Dokumentation,* 2 vols., Colonia, 1973-78; Gerhard Wettig, *Frieden und Sicherheit in Europa,* Stuttgart, 1975; Hans-Peter Schwarz, *Zwischenbilanz der KSZE,* Stuttgart, 1977.

[26] Gebhard Schweigler, «Die amerikanische Entspannungspolitik. Wander oder Kontinuität?», *Europa-Archiv,* 32 (1977), pp. 791-99; Wolfgang Pordzik, «SALT II im Kreuzfeuer der Kritik», *Europa Archiv,* 33 (1978), pp. 517-26; Stanley Hoffmann, «De Kissinger à Brzezinski et Carter», *Politique Internationale,* 1, otoño de 1978, pp. 5-22; Gert Krell, *Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um SALT II in den USA,* Francfort, 1978.

[27] A este respecto, cf. los estudios de Schwarz y Meissner (nota 23), pp. 1-92.

[28] Jost Delbrück, Norbert Ropers y Gelda Zellentin, comps., *Grünbuch zu den Folgewirkungen der KSZE,* Colonia, 1977.

[29] Más exactamente: esto sólo les fue prohibido hasta finales de 1981, lo que por parte soviética fue considerado como el anticipo de una prohibición definitiva, y por parte occidental como un salvoconducto para la introducción de un nuevo sistema de misiles de medio alcance en Europa. Texto de los acuerdos SALT II en *Europa-Archiv,* 34 (1979), pp. 367-400; sobre la interpretación, cf. Gregory F. Treverton, «Das SALT-II-Abkommen: Inhalt, Bedeutung und einige Probleme», *ibid.,* pp. 451-60; Lothar Ruehl, «Das SALT-II-Abkommen und die europäischen Interessen», *ibid.,* pp. 461-72; Gert Krell y Dieter S. Lutz, «Rüstungskontrolle: von SALT II zu SALT *III*», *Osteuropa,* 29 (1979), pp. 1008-20.

[30] Al mismo tiempo se atribuía por ejemplo al arsenal de SS-20 una capacidad de desarme realmente inexistente, sin prestar atención a la existencia de armas americanas de medio alcance de base marítima en territorio europeo de la OTAN y silenciando simplemente las medidas occidentales de modernización del arsenal de medio alcance.

[31] En tanto que los críticos del «rearme» subestiman con frecuencia el efecto desestabilizador del desarrollo tecnológico —incluido el que se produce en el campo soviético (cf. por ejemplo la serie de trabajos recogidos en Studiengruppe, *Militärpolitik, Aufrüsten, um Abzurüsten?,* Reinbek, 1980; así como en Wilhelm Bittorf, comp., *Nachrüstung. Der Atomkrieg rückt näher,* Hamburgo, 1981—, sus defensores se caracterizan en general por su simplificación del peligro real en detrimento de la Unión Soviética y por su omisión de todos los aspectos negativos del acuerdo (cf. por ejemplo el trabajo publicado por el ministerio federal de Defensa, *Die nuklear Mittelsrekkenwaffen. Modernisierung und Rüstungskontrolle. Texte, Materialen und Argumente zum Beschluss der NATO vom 12. Dezember 1979,* Bonn, 1980; asimismo Lothar Ruehl, «Der Beschluss der NATO zur Einführung der nuklearen Mittelsreckenraketen», *Europa-Archiv,* 35 (1980), pp. 99-110, y Gerhard Wettig, «Der Wandel der Rahmenbedingungen für Sicherheitsvereinbarungen in Europa», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 26, 27 de junio de 1981, pp. 3-28). Sobre la problemática euroestratégica real —aquí sólo esbozada—, cf., además de la lectura indispensable de los trabajos de *ambas* «escuelas», la compilación de datos de Gert Krell y Dieter S. Lutz, *Nuklearrüstung im Ost-West-Konflikt. Potentiale, Doktrinen, Rüstungssteuerung,* Baden-Baden, 1980; así como las consideraciones de Erwin Müller, *«Nach»-Rüstung und Rüstungswettlauf. Zum NATO-Beschluss über neue erostrategische Mittelsreckensysteme,* Tubinga, 1980; Klaus-Peter Stratmann, *NATO-Strategie in der Krise?,* Baden-Baden, 1981; Hans Rattinger, «Strategie-interpretationen und Rüstungskontrollkonzepte. Anmerkungen zum NATO-Doppelbeschluss», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 28, 13 de julio de 1981, y Pierre Lellouche, comp., *La sécurité de l'Europe dans les années 80,* París, 1981.

[32] Cf. George F. Kennan, «Die russische Gefahr ist viel Einbildung», *Die Zeit,* 4 de enero de 1980; Wolfgang Wagner, «Das Ost-West-Verhältnis nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan», *Europa-Archiv,* 35 (1980), pp. 135-46; Heinrich Vogel, comp., *Die sowjetische Invasion in Afghanistan. Entstehung und Hintergründe einer weltpolitischen Krise,* Baden-Baden, 1980.

[33] Cf. (con una retrospectiva crítica de las fases anteriores de la política de Carter), Stanley Hoffmann, «Requiem», *Foreign Policy,* 42, primavera de 1981, pp. 3 ss.; así como Robert G. Kaiser, «U.S.-Soviet relations: goodbye to détente», *Foreign Affairs,* 59 (1980-81), pp. 500 ss.

[34] Manfred Görtemaker, «Reagan-Amerika und Westeuropa. Plädoyer für eine konstruktive Zusammenarbeit», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 32, 8 de agosto de 1981, pp. 3-19; Hans Rühle, «Die Aussenpolitik der Regierung Reagan», *ibid.,* pp. 48-62 (ambos con una aceptación acrítica de las tesis centrales del equipo Reagan); sobre el fondo social del cambio de rumbo de la política exterior de los Estados Unidos, cf. también Wilfred von Bredow y Rudolf

Horst Brocke, «Das aussenpolitische Konzept der Reagan-Administration. Darstellung, Hintergründe und Bewertung der neuen Aussenpolitik der USA», *ibid.*, pp. 20-34.

[35] André Fontaine, «Transatlantic doubts and dreams», *Foreing Affairs,* 59 (1980-81), pp. 578 ss.; Josef Joffe, «European-American relations: the enduring crisis», *ibid.*, pp. 835 ss.

[36] Cf. las notas protocolarias oficiosas sobre las conversaciones Schmidt-Breznev en *Die Welt,* 7 de julio de 1980, así como la declaración de Schmidt ante el Parlamento alemán del 3 de julio de 1980, informe mecanografiado, pp. 18586 ss.

[37] A este respecto, cf. Helmut Wagner, *Die Doppelgesellschaft: Systemwandel in Polen,* Berlín, 1981; Peter Raina, *Independent social movements in Poland,* Londres, 1982.

[38] Según el representante de Reagan en las negociaciones SALT, el general Edward Rowny, en *Die Zeit,* 17de julio de 1981.

[39] Cf. a este respecto la convincente argumentación de Alfred Mechtersheimer en «Hat SALT III noch eine Chance?», *Aus Politik und Zeitgeschichte,* 30 (1980), pp. 3-25.

Bibliografía

La bibliografía que se incluye a continuación está pensada para servir de mera orientación. Los títulos relativos a temas específicos que se han citado en los distintos capítulos no se han incluido por lo general en la bibliografía.

CAP. 1: EUROPA DESPUÉS DE 1945, Y CAP. 6: EUROPA EN LA POLÍTICA MUNDIAL

Albrecht, Ulrich, *Kündigt den Nachrüstungsbeschluss!*, con prólogo de Oskar Lafontaine, Francfort (Fischer Informationen zur Zeit, vol. 4239), 1982.

Backer, John H., *Die Entscheidung zur Teilung Deutschlands. Die amerikanische Deutschlandpolitik 1943-1948,* Munich, 1981.

Becker, Josef; Stammen, Theo y Waldmann, Peter, comps., *Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Zwischen Kapitulation und Grundgesetz,* Munich, 1979.

Birke, Ernst y Neumann, Rudolf, comps., *Die Sowjetisierung Ost-Mitteleuropas. Untersuchungen zu ihrem Ablauf in den einzelnen Ländern,* vol. 1, Francfort y Berlín, 1959.

Bracher, Karl Dietrich, *Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917,* Francfort, Berlín y Viena, 1979.

DePorte, Allen W., *Europe between the superpowers. The enduring balance,* Nueva Haven y Londres, 1979.

Duroselle, Jean-Baptiste, *Le monde déchiré 1945-1970,* 2 vols., París, 1970.

Edmonds, Robin, *Soviet foreign policy 1962-1973. The paradox of super-power,* Londres, 1975 [*Política exterior soviética 1962-1973,* Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977].

End, Heinrich, *Zweimal deutsche Aussenpolitik. Internationale Dimensionen des innerdeutschen Konfliks 1949-1972,* Colonia, 1973.

Erdmenger, Klaus, *Das folgenschwere Missverständnis. Bonn und die sowjetische Deutschlandpolitik 1949-1955,* Friburgo, 1967.

Feis, Herbert, *From trust to terror. The onset of the Cold War 1945-1950,* Nueva York, 1970.

Fontaine, André, *Histoire de la guerre froide,* 2 vols., París, 1965-1967 [*Historia de la guerra fría,* Barcelona, Luis de Caralt, 1970].

Fonvielle-Alquiler, François, *La grande peur de l'après-guerre, 1946-1953,* París, 1973.

Frankel, Joseph, *British foreign policy 1945-1973,* Londres, 1974.

Füllenbach, Josef y Schulz, Eberhard comps., *Entspannung am Ende? Chancen und Risiken einer Politik des Modus vivendi,* Munich y Viena, 1980.

Gatzke, Hans W., *Germany and the United States: «A special relationship?»,* Cambridge (Mass.), 1980.

Geyer, Dietrich, comp., *Osteuropa-Handbuch Sowjetunion. Aussenpolitik I: 1917-1955,* Colonia y Viena, 1972.

— comp., *Osteuropa-Handbuch Sowjetunion. Aussenpolitik II: 1955-1973,* Colonia y Viena, 1976.

Gimbel, John, *The origins of the Marshall Plan,* Stanford, 1976.

Görtemaker, Manfred, *Die unheilige Allianz. Die Geschichte der Entspannungspolitik 1943-1979,* Munich, 1979.

Griffith, William E., *Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland*, Stuttgart, 1981.
— comp., *The Soviet Empire: expansion and détente*, Lexington (Mass.), 1976.
Grosser, Alfred, *La IVe République et sa politique extérieure*, París, 1961, 3.ª ed. 1970.
— *Das Bündnis. Die westeuropäischen Länder und die USA seit dem Krieg*, Munich, 1978.
Hillgruber, Andreas, *Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit 1945-1963*, Munich y Viena, 1979, 2.ª ed. 1981.
Hoffmann, Stanley, *Primacy or world order. American foreign policy since the Cold War*, Nueva York, 1978.
Die Internationale Politik. Jahrbuch des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, 1955 ss. (último volumen publicado Die Internationale Politik 1977/78, Munich y Viena, 1982).
Knapp, Manfred comp., *Die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach 1945*, Francfort y Nueva York, 1975.
Kolko, Joyce y Gabriel, *The limits of power. The world and United States policy 1945-1954*, Nueva York, 1972.
Kolodzieji, Edward A., *French international policy under de Gaulle and Pompidou. The politics of grandeur*, Ithaca, N. Y., 1974.
Landes, David, S., comp., *Western Europe: The trials of partnership*, Lexington (Mass.), 1977.
Loth, Wilfried, *Sozialismus und Internationalismus. Die französischen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 1940-1950*, Stuttgart, 1977.
— *Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955*, Munich, 1980.
Mayne, Richard, J., *The recovery of Europe 1945-1973*, Garden City, 3.ª ed. 1973.
Morgan, Roger, *West European politics since 1945. The shaping of the European Community*, Londres, 1972.
— *Washington und Bonn. Deutsch-amerikanische Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg*, Munich, 1975.
Nolte, Ernst, *Deutschland und der Kalte Krieg*, Munich, 1974.
Rideau, Joël y Gerber, Pierre, comps., *La France et les communautés européennes*, París, 1975.
Scharf, Claus y Schröder, Hans-Jürgen, comps., *Politische und ökonomische Stabilisierung Westdeutschland 1945-1949. Fünf Beiträge zur Deutschlandpolitik der westlichen Alliierten*, Wiesbaden, 1977.
Schieder, Theodor, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte*, vol. 7: *Europe im Zeitalter der Weltmächte*, Stuttgart, 1979.
Schwarz, Hans-Peter, *Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der aussenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949*, Neuwied y Berlín, 1966, Stuttgart, 2.ª ed. 1980.
— y Löwenthal, Richard, comps., *Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - Eine Bilanz*, Stuttgart, 1974.
Staritz, Dietrich, *Sozialismus in einem halben Land. Zur Problematik und Politik der KPD/SED in der Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in der DDR*, Berlín, 1976.
Stratmann, Klaus-Peter, *NATO-Strategie in der Krise?*, Baden-Baden, 1981.
Ulam, Adam B., *Expansion and coexistence. The history of Soviet foreign policy 1917-1967*, Londres, 1968, 2.ª ed. 1974.
— *The rivals. America and Russia since World War II*, Nueva York, 1971, Londres, 2.ª ed. 1973.
Urwin, Derek W., *Western Europe since 1945. A short political history*, Londres, 1968, 3.ª ed. 1981.

Wassmund, Hans, *Kontinuität im Wandel. Bestimmungsfaktoren sowjetischer Deutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit,* Colonia y Viena, 1974.
Westdeutschland Weg zur Bundesrepublik 1945-1949. Beiträge von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, Munich, 1976.
— *Grundzüge der Weltpolitik. Daten und Tendenzen von 1945 bis zur Gegenwart,* Munich, 1982.
Wettig, Gerhard, *Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland 1943-1955,* Munich, 1967.
Willis, F. Roy, *France, Germany and the new Europe (1945-1967),* Stanford y Londres, 1968.
Winkler, Heinrich August, comp., *Politische Weichenstellungen im Nachkriegsdeutschland 1945-1953,* Gotinga, 1979.
Ziebura, Gilbert, *Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und Realitäten,* Pfullingen, 1970.
Zorgbibe, Charles, *La construction politique de l'Europe 1946-1976,* París, 1978.

CAP. 2: EUROPA OCCIDENTAL HASTA EL TRATADO DE ROMA. RECONSTRUCCIÓN E INTEGRACIÓN

I. Comienzos de la unión europea

Bergstraesser, Arnold y Cornides, Wilhelm, comps., *Die internationale Politik 1955. Eine Einführung in das Geschehen der Gegenwart,* Munich, 1958.
Europa, *Dokumente zur Frage der europäischen Einigung,* editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, vols. 1-3, Bonn, 1962.
Groeben, Hans von der, *Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft. Das Ringen um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958-1966),* Baden-Baden, 1982.
Hillgruber, Andreas, *Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit 1945-1963,* Munich y Viena, 1979.
Küsters, Hanns Jürgen, *Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,* Baden-Baden, 1982.
Lipgens, Walter, *Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940 bis 1945,* Munich, 1968.
Lipgens, Walter, *Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 1945-1950,* vol. I, Stuttgart, 1977.
Siegler, Heinrich v., *Dokumentation der Europäischen Integration,* vol. 1, Bonn, 1961.
Siegler, Heinrich v., comps., *Europäische Politische Einigung 1949-1968. Dokumentation von Vorschlägen und Stellungnahmen,* Bonn, 1968.
Wartmann, Urs, *Wege und Institutionen zur Integration Europas 1945-1961,* Colonia, 1961.
Wehe, Walter, *Das Werden Europas. Zeittafel der europäischen Einigungsbestrebungen 1945-1955,* Francfort, 1955.
Weilemann, Peter, *Die Anfänge der Europäischen Atomgemeinschaft. Zur Gründungsgeschichte von Euratom (1955-1957),* Baden-Baden, 1983.

II. Gran Bretaña

Bartlett, Christopher John, *A history of postwar Britain, 1945-1974,* Nueva York, 1977.
Calvocoressi, Peter, *The British experience 1945-1975,* Londres, 1978.
Mansergh, Nicholas, *The Commonwealth experience,* Londres, 1969.
Marwick, Arthur, *Britain in the century of total war,* Londres, 1968.
Medlicott, W. N., *Contemporary England 1914-1964,* Londres, 1967.

Northedge, F. S., *Descent from power: British foreign policy, 1945-1972*, Londres, 1974.
Pollard, Sidney, *The development of the British economy, 1914-1967*, Londres 1969.
Scharf, Claus y Schröder, Hans-Jürgen, comps., *Die Deutschlandpolitik Grossbritanniens und die britische Zone 1945-1949*, Wiesbaden, 1979.
Sked, Alan y Cook, Chris, *Post-war Britain*, Londres, 1980.

III. Francia

Droz, Bernard y Lever, Evelyne, *Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962)*, París, 1982.
Fauvet, Jacques, *Von de Gaulle bis de Gaulle. Frankreichs Vierte Republik*, Tubinga, 1961.
Grosser, Alfred, *La IVe République et sa politique extérieure*, París, 3.ª ed. 1972.
Julliard, Jacques, *La Quatrième République (1947-1958)*, París, 1980.
Parodi, Maurice, *L'économie et la société française de 1945 à 1970*, París, 1971.
Rioux, Jean-Pierre, *La France de la Quatrième République*, vol. 1: *L'ardeur et la nécessité, 1944-1952*, París, 1980; vol. 2 de próxima aparición.
Scharé, Claus y Schröder, Hans-Jürgen, comps., *Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die Französische Zone 1945-1949*, Wiesbaden, 1983.
Williams, Philip, *La vie politique sous la 4e République*, París, 1971 (versión inglesa, 1964).

IV. República Federal de Alemania

Benz, Wolfgang, comp., *Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussion 1941-1949*, Munich, 1979.
Grosser, Alfred, *Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz*, Munich, 1979.
Lehmann, Hans Georg, *Chronik der Bundesrepublik Deutschland 1945/49-1981*, Munich, 1981.
Löwenthal, Richard y Schwarz, Hans-Peter, comps., *Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz*, Stuttgart, 1974.
Narr, Wolf-Dieter y Thränhardt, Dietrich, comps., *Die Bundesrepublik Deutschland Entstehung. Entwicklung. Struktur*, Königstein/Ts., 1979.
Politische Zeittafel 1949-1979. *Drei Jahrzehnte Bundesrepublik Deutschland*, editado por el Gabinete de Prensa e Información del Gobierno Federal, Bonn, 1981.
Schwarz, Hans-Peter, *Die Ära Adenauer 1949-1957*, Stuttgart y Wiesbaden, 1981.
— *Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der aussenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949*, Sttutgart, 2.ª ed. 1980.
Sörgel, Werner, *Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland*, Stuttgart, 1969.
Vogelsang, Thilo, *Das geteilte Deutschland*, Munich, 10.ª ed. 1980.
Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945-1949. Beiträge von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, Munich, 1976.

V. Noruega, Dinamarca, Islandia

Anderson, Stanley V., *The Nordic Council. A study of Scandinavian regionalism*, Seattle, Londres, 1967.

Berglund, Sten y Lindström, Ulf, *The Scandinavian party system(s). A comparative study,* Lund, 1978.
Derry, Thomas Kingston, *A history of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland,* Minneapolis, 1979.
Einhorn, Eric S., *National security and domestic politics in post-war Denmark. Some principal issues, 1945-1961,* Odense, 1975.
Jörberg, Lennart y Krantz, Olle, «Skandinavien 1914-1970», en *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert,* Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 277-329.
Kellenbenz, Hermann, «Die skandinavischen Staaten seit dem Ende des I. Weltkriegs», en *Handbuch der europäischen Geschichte,* comp. por Theodor Schieder, vol. 7/2, Stuttgart, 1979, pp. 772-822.
Scott, Franklin D., *Scandinavia,* Cambridge, Mass., 1975.
Wendt, Frantz, *The Nordic Council and co-operation in Scandinavia,* Copenhague, 1959.

VI. Los Estados del Benelux

De Vries, Johan, «Die Benelux-Länder 1920-1970», en *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften in zwanzigsten Jahrhundert,* comp. por Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 1-46.
Eyck, Gunther, «Benelux in the Balance», en *Political Science Quarterly,* 69 (1954), pp. 65-91.
Petri, Franz, «Belgien, Niederlande, Luxemburg vom Ende des 1. Weltkriegs bis zur Politik der europäischen Integration 1918-1970», en *Handbuch der europäischen Geschichte,* comp. por Theodor Schieder, vol. 7/2, Stuttgart, 1979, pp. 699-728.
Bartier, John *et al., Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970,* Bruselas, 1975.
Geismann, Georg, *Politische Struktur und Regierungssystem in den Niederlanden,* Francfort y Bonn, 1964.
Lepszy, Norbert, *Parteien und Gewerkschaften in den Niederlanden. Entwicklung und Strukturen,* Düsseldorf, 1979.

VII. Italia

Vaccarino, Giorgio, «Die Wiederherstellung der Demokratie in Italien (1943-1948)», en *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 21 (1973), pp. 285-324.
Nolte, Ernst, «Italien vom Ende des I. Weltkriegs bis zum ersten Jahrzehnt der Republik 1918-1960», en *Handbuch der europäischen Geschichte,* comp. por Theodor Schieder, vol. 7/1, Stuttgart, 1979, pp. 619-650.
Chabod, Federico, *Die Entstehung des neuen Italien. Von der Diktatur zur Republik,* Reinbek bei Hamburg, 1965.
The rebirth of Italy 1943-1950, comp. por S. J. Woolf, Londres, 1972.
Grindrod, Muriel, *The rebuilding of Italy. Politics and economics 1945-1955,* Londres y Nueva York, 1955.
Von der Diktatur zur Demokratie. Deutschland und Italien in der Epoche nach 1943. Referate der 9. deutsch-italienischen Historikertagung in Salerno 15.-17. Juni 1971, Braunschweig, 1973.
Kogan, Norman, *Italy and the Allies,* Cambridge/Mass., 1956.
Mammarella, Giuseppe, *Italy after fascism. A political history 1943-1963,* Montreal, 1964.
Hildebrand, George H., *Growth and structure in the economy of modern Italy,* Cambridge/Mass., 1965.

Haubrich, Walter y Moser, Carsten R., *Francos Erben. Spanien auf dem Weg in die Gegenwat,* Colonia, 1976.
Madariaga, Salvador de, *Spanien,* Stuttgart, 1979.
Konetzke, Richard, «Die iberischen Staaten vom Ende des 1. Weltkriegs bis zur Ära der autoritären Regime 1917-1960», en *Handbuch der europäischen Geschichte,* comp. por Theodor Schieder, vol. 7/1, Stuttgart, 1979, pp. 651-698.
Beyme, Klaus von, *Vom Faschismus zur Entwicklungsdiktatur - Machtelite und Opposition in Spanien,* Munich, 1971.
Fontana, Josep y Nadal, Jordi, «Spanien 1914-1970», en *Europäische Wirtschaftsgeschichte,* vol. 5: *Die europäischen Volkswirtschaften im zwanzigsten Jahrhundert,* comp. por Carlo M. Cipolla y Knut Borchardt, Stuttgart y Nueva York, 1980, pp. 331-375.
Reventlow, Rolf, *Spanien in diesem Jahrhundert. Bürgerkrieg, Vorgeschichte und Auswirkungen,* Viena, Francfort y Zurich, 1968.
Walter Clauss, Max, «Salazars autoritäres Regime in Portugal», en *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte,* 5 (1957), pp. 379-385.

IX. *Grecia y el Mediterráneo oriental*

Grothusen, Klaus-Detlev, comp., *Griechenland, Südosteuropa-Handbuch,* vol. III, Gotinga, 1980.
Katiforis, Georgios, «Die Rolle der Monarchie in Griechenland», en *Die verhinderte Demokratie: Modell Griechenland,* comp. por Marius Nikolinakos y Kostas Nikolaou, Fracfort, 1969.
Kousoulas, George, *Revolution and defeat. The story of the Greek Communist Party,* Londres, 1965.
Manoussakis, Gregor, *Hellas - wohin? Das Verhältnis von Militär und Politik in Griechenland seit 1900,* Godesberg, 1967.
Macneill, William Hardy, *Greece: American aid in action 1947-1956,* Nueva York, 1957.
Richter, Heinz, *Griechenland zwischen Revolution und Konterrevolution,* Francfort, 1973.
Schramm v. Thadden, Ehrengard, *Griechenland und die Grossmächte im Zweiten Weltkrieg,* Wiesbaden, 1955.
Spencer, Floyd A., *War and postwar Greece. An analysis based on Greek writings,* Washington, 1952.
Woodhouse, Christopher Montague, *The story of modern Greece,* Londres, 1968.
— *The struggle for Greece 1941-1949,* Londres, 1976.
Xydis, Stephen, *Greece and the Great Powers,* Salónica, 1963.
— *Cyprus: conflict and conciliation 1954-1958,* Columbus, Ohio, 1967.

X. *Estados neutrales*

Bonjour, Edgar, *Geschichte der Schweizerischen Neutralität. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik,* vol. 6: *1939-1945,* Basilea y Stuttgart, 1970.
Chubb, Basil, *The Bovernment and politics of Ireland,* Oxford, 1970.
Ehni, Reinhart, *Die Schweiz und die Vereinten Nationen von 1944-1947,* Tubinga, 1967.
Keatinge, Patrick, *A place among the nations. Issues of Irish foreign policy,* Dublín, 1978.
Kirby, D. G., *Finland in the twentieth century,* Londres, 1979.

Murphy, John A., *Ireland in the twentieth century,* Dublín, 1975.
Petersen, Herbert, *Schweden. Bewährte Demokratie und neue Zeit,* Colonia, 1981.
Puntila, L. A., *Politische Geschichte Finnlands 1809-1977,* Helsinki, 1980.
Samuelsson, Kurt, *From Great Power to Welfare State. 300 years of Swedish social development,* Londres, 2.ª ed. 1972.
Schilcher, Alfons, *Österreich und die Grossmächte. Dokumente zur österreichischen Aussenpolitik 1945-1955,* Viena, 1980.
Schlesinger, Thomas O., *Austrian neutrality in postwar Europe. The domestic roots of a foreign policy,* Viena, 1972.
Siegler, Heinrich, *Österreich. Chronik 1945-1972,* Viena, 1973.
Stourzh, Gerald, *Kleine Geschichte des österreichischen Staatsvertrages,* Graz, 1975.
Wagner, Ulrich H. E., *Finnlands Neutralität. Eine Neutralitätspolitik mit Defensivallianz,* Hamburgo, 1974.

CAP. 3: EUROPA ORIENTAL BAJO EL DOMINIO DE STALIN

Alton, Thad Paul, *Pol[illegible] postwar economy,* Nueva York, 1955.
Bass, Robert y Marbury, Elizabeth, *The Soviet-Yugoslav controversery. A documentary record,* Nueva York, 1959.
Birke, Ernst y Neumann, R., *Die Sowjetisierung Ostmitteleuropas. Untersuchungen zu ihrem Ablauf in den einzelnen Ländern,* Francfort y Berlín, 1957.
Black, Cyril E., comp., *Challenge in Eastern Europe,* New Brunswick (N. J.), 1954.
Bombelles, J. T., *Economic development of Communist Yugoslavia,* Standford, 1968.
Brown, F. J., *Bulgaria under Communist rule,* Nueva York, 1970.
Brzezinski, Zbigniew K., *Ideology and power in Soviet politics,* ed. revisada, Nueva York, Washington y Londres, 1967.
Cretzianu, Alexandre, comp., *Captive Rumania: a decade of Soviet rule,* Nueva York, 1956.
Dellin, Lubomir A. D., comp., *Bulgaria (East-Central Europe under the Communists),* Nueva York, 1957.
Diepenthal, Wolfgang, *Drei Volksdemokratien. Ein Konzept kommunistischer Machtstabilisierung und seine Verwirklichung in Polen, der Tschechoslowakei und der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1944-1948,* Colonia, 1974.
Djilas, Milovan, *Die neue Klasse. Eine Analyse des kommunistischen Systems,* Munich, 1957.
Dziewanowski, M. K., *The Communist Party of Poland,* Cambridge (Mass.), 1959.
Fainsod, Merle, *Wie Russland regiert wird. Bearbeitet von Georg Brunner,* Colonia, 1965.
Fejtö, François, *Die Geschichte der Volksdemokratien,* vol. 1: *Die Ära Stalin 1945-1953,* Graz, Viena y Colonia, 1972 [*Historia de las democracias populares,* vol. 1, Barcelona, Martínez Roca, 1971].
Fischer-Galati, Stephen A., *Twentieth century Rumania,* Nueva York y Londres, 1970.
Geyer, Dietrich, comp., *Osteuropa-Handbuch. Sowjetunion Aussenpolitik,* vol. 1-3, Colonia, 1973-1976.
Gsovski, Vladimir, comp., *Church and state behind the Iron Curtain. Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania With an introduction on the Soviet Union,* Nueva York, 1955.

Hoensch, Jörg K., *Geschichte der Tschechoslowakischen Republik. 1918-1978,* Stuttgart, 2.ª ed. 1978.
— *Sowjetische Osteuropa-Politik 1945-1957,* Kronberg, 1977.
Hofmann, Werner, *Die Arbeitsverfassung der Sowjetunion,* Berlín, 1956.
Ionescu, George G., *Communism in Rumania, 1944-1962,* Londres, 1964.
Jahn, Egbert, *Sozioökonomische Bedingungen der sowjetischen Aussenpolitik,* Francfort, 1975.
Lentz, Manfred, *Die Wirtschaftsbeziehungen DDR-Sowjetunion 1945-1961. Eine politologische Analyse,* Opladen, 1979.
Lewytzkyj, Boris, *Die rote Inquisition. Die Geschichte des sowjetischen Sicherheitsdienstes,* Francfort, 1967.
Ludz, Peter Christian, *Parteielite im Wandel. Funktionsaufbau, Sozialstruktur und Ideologie der SED-Führung. Eine empirisch-systematische Untersuchung,* Colonia y Opladen, 2.ª ed. 1968.
Markert, Werner, comp., *Osteuropa-Handbuch. Jugoslawien,* Colonia, 1959.
— comp., *Osteuropa-Handbuch Polen,* Colonia, 1959.
— y Geyer, Dietrich, comps., *Osteuropa-Handbuch. Sowjetunion. Verträge und Abkommen,* Colonia, 1967.
Meissner, Boris, comp., *Die kommunistische Partei der Sowjetunion vor und nach dem Tode Stalins. Parteiführung, Parteiorganisation, Parteiideologie,* Francfort, 1954.
— *Russland, die Westmächte und Deutschland. Die sowjetische Deutschlandpolitik 1943-1953,* Hamburgo, 1953.
Mickiewicz, Ellen Propper, *Political schools. The Communist party adult instruction system,* Nueva York y Londres, 1967.
Montias, John Michael, *Economic development in Communist Rumania,* Cambridge (Mass.), 1967.
Nolte, Ernst, *Deutschland und der Kalte Krieg,* Munich, 1974.
Nove, Alec, *Stalinism and after,* Londres, 1975.
— *An economic history of the Soviet Union,* Londres, 1969 [*Historia económica de la Unión Soviética,* Madrid, Alianza, 1973].
Pano, Nicholas C., *The People's Republic of Albania,* Baltimore, 1968.
Rauch, Georg von, *Geschichte der Sowjetunion,* Stuttgart, 6.ª ed. 1977.
Raupach, Hans, *System der Sowjetwirtschaft,* Reinbek, 1968.
Roos, Hans, *Geschichte der polnischen Nation 1918-1978. Von der Staatsgründung im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart,* Stuttgart, 3.ª ed. 1979 [*Historia de la nación polaca,* Bilbao, Moreton, 1968].
Rühle, Jürgen, *Literatur und Revolution,* Colonia y Berlín, 1962.
Schapiro, Leonard, *Die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion,* Francfort, 1962.
Seton-Watson, Hugh, *Die osteuropäische Revolution,* Munich, 1956.
Skendi, Stavro, *Albania (East Central Europe under the Communists),* Nueva York, 1956.
Staar, Richard F., *The Communist regimes in Eastern Europe,* Stanford, 1971.
Stern, Carola, *Porträt einer bolschewistischen Partei: Entwicklung, Funktion und Situation der SED,* Colonia, 1957.
Stupperich, Robert, *Kirche und Staat in der Sowjetunion. Gesetze und Verordnungen,* Witten, 1962.
Sworakowski, W. S., *World Communism. A handbook, 1917-1965,* Stanford, 1973.
Tito contra Stalin. *Der Streit der Diktatoren in ihrem Briefwechsel,* Hamburgo, 1949.
Ulam, Adam B., *Titoism and the Cominform,* Cambridge (Mass.), 1952.
— *Expansion and coexistence. The history of Soviet foreign policy, 1917-1967,* Nueva York, 1968.

Uschakow, Alexander, *Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe*, Colonia, 1962.
Weber, Hermann, *Von der SBZ zur «DDR»*. vol. 1: *1945-1955*, Hannover, 1966.
Wolff, Robert Lee, *The Balkans in our time*, Cambridge (Mass.), 1956.
Zinner, Paul E., *Communist strategy and tactics in Czechoslovakia*, Nueva York, 1957.

CAP. 4: LA EVOLUCIÓN DE EUROPA OCCIDENTAL HASTA LA ELECCIÓN DIRECTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Arango, E. Ramón, *The Spanish political system. Franco's legacy*, Boulder Colorado, 1978.
Baring, Arnulf, *Machtwechsel. Die Ära Brand-Scheel*, Stuttgart, 1982.
Barker, Elisabeth, *Austria 1918-1972*, Londres, 1973.
Bartlett, Christopher John, *A history of post war Britain, 1945-1947*, Londres, 1977.
Beyme, Klaus von, *Das politische System Italiens*, Stuttgart, 1970.
Bickel, Wilhelm, *Die Volkswirtschaft der Schweiz. Entwicklung und Struktur*, Aarau y Francfort, 1973.
Bracher, Karl Dietrich, *Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917*, Francfort, Berlín y Viena, 1979.
Politische Zeittafel 1949-1979, editado por el Gabinete de Prensa e Información del gobierno federal, Bonn, 1981.
Castles, Francis G., *The social democratic image of society. A study of achievements and origins of Scandinavian social democracy in comparative perspective*, Londres, 1978.
Coogan, Tim Pat, *IRA. Histoire et actualité del l'Armée Républicaine Irlandaise*, trad. del inglés, completado y continuado por J. Picollec, París, 1972.
Dahl, Robert A., comp., *Political opposition in Western democracies*, Nueva Haven y Londres, 1967.
Derry, T. K., *A history of modern Norway 1814-1972*, Oxford, 1973.
— *A history of Scandinavia. Norway, Sweden, Denmark, Finnland and Iceland*; Londres, 1979.
Dreyfus, François Georges; Marx, Roland y Poidevin, Raymond, *L'Europe de 1789 à nos jours*, París, 1980.
Görlich, Ernst Joseph y Romanik, Felix, *Geschichte Österreichs*, Innsbruck, Viena y Munich, 1977.
Grosser, Alfred, *Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz*, Munich, 7.ª ed. 1979.
Hallstein, Walter, *Die Europäische Gemeinschaft*, Düsseldorf y Viena, 1973.
Hermens, Ferdinand A. y Köppinger, Peter-Hugo, *Von der Diktatur zur Demokratie. Das Beispiel Spaniens und Portugals*, Berlín, 1976.
Hermle, Reinhard, *Der Konflikt in Nordirland. Ursachen, Ausbruch und Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Zeitraums 1963-1972*, Munich, 1979.
Hillgruber, Andreas, *Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit (1945-1963)*, Munich y Viena, 2.ª ed. 1981.
Kaack, Heino, *Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems*, Opladen, 1971.
Krämer, Hans R., *EWG und EFTA*, Stuttgart, 2.ª ed. 1969.
Lehmann, Hans Georg, *Chronik der Bundesrepublik Deutschland 1945/49-1981*, Munich, 1981.
Livermore, H. V., *A new history of Portugal*, Cambridge, 2.ª ed. 1976.
Löwenthal, Richard, y Schwarz, Hans-Peter, comps., *Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz*, Stuttgart, 1974.

Luykx, Theo, *Politieke Geschiedenis van Belgie van 1789 tot heden,* Amsterdam y Bruselas, 1973.
Mayrzedt, Hans y Binswanger, Hans Christoph, comps., *Die Neutralen in der europäischen Integration. Kontroversen, Konfrontationen, Alternativen,* Viena y Stuttgart, 1970.
Münster, Arno, *Révolution et contre-révolution au Portugal,* París, 1977.
Oberleitner, Wolfgang E., *Politisches Handbuch Österreichs 1945-1980,* Viena, 1981.
Ørvik, Nils, *Sicherheit auf finnisch. Finland und die Sowjetunion,* Stuttgart, 1972.
Pompidou, Georges, *Pour rétablir une vérité,* París, 1982.
Rupp, Hans Karl, *Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,* Stuttgart, Berlín, Colonia y Maguncia, 1978.
Sampson, Anthony, *A new anatomy of Britain,* Londres, 1971.
Schieder, Theodor, comp., *Handbuch der europäischen Geschichte,* vol. 7, Stuttgart, 1974.
Schwarz, Hans-Peter, *Handbuch der deutschen Aussenpolitik,* Munich, 2.ª ed. 1976.
Siegler, Heinrich von, *Dokumentation der Europäischen Integration,* 2 vols., Bon, Viena y Zurich, 1961-1964.
Sked, Alan y Cook, Chris, *Post-war Britain. A political history,* Londres, 1979.
Sontheimer, Kurt, *Das politische System Grossbritanniens,* Munich, 1972.
Temime, E.; Broder, A. y Chastagnaret, G., *Histoire de l'Espagne contemporaine,* París, 1979 [*Historia de la España contemporánea desde 1808 hasta nuestros días,* Barcelona, Ariel, 1982].
Vincent, Gérard, *Les Français 1945-1975. Chronologie et structure d'une société,* París, 1977.
— *Les Français 1976-1979,* París, Nueva York, Barcelona y Milán, 1980.
Wagner, Wolfgang, *Europa zwischen Aufbruch und Restauration,* Munich, 1968.
Weil, Gordon L., *The Benelux nations. The politics of small country democracies,* Nueva York, 1970.
Weinzierl, Erika y Skalnik, Kurt, comps., *Österreich. Die zweite Republik,* 2 vols., Graz, Viena y Colonia, 1972.

CAP. 5: DE LA MUERTE DE STALIN A LA ERA BREZNEV. LOS PAÍSES DEL COMECON DESDE 1953

(Cf. también la bibliografía citada para el cap. 3)
Agricultural policies in the USSR and Eastern Europe, comp. por Ronald A. Francisco, Betty A. Laird y Roy D. Laird, con una conclusión de Karl-Eugen Wädekin, Boulder (Colorado), 1980.
Altmann, Franz-Lothar y Clement, Hermann, *Die Kompensation als Instrument im Ost-West-Handel,* Munich y Viena, 1979.
Brahm, Heinz, *Der Kreml und die CSSR 1968-1969,* Stuttgart, 1970.
Bromke, Adam, *Poland's politics: idealism vs. realism,* Cambridge (Mass.), 1967.
Bröll, Werner, *Comecon (Rat für gegenseitige Wirstchaftshilfe). Der Integrationsversuch socialistischer Planwirtschaften,* Munich, 1975.
Change and adaption in Soviet and East European politics, comp. por Jane P. Shapiro y Peter J. Potichnyj, Nueva York, Washington y Londres, 1976.
The changing face of communism in Eastern Europe, comp. por P. A. Toma, Tucson (Arizona), 1970.
Catchlove, D., *Romania's Ceausescu,* Kent, 1972.
Communism in Europe. Continuity, change, and the Sino-Soviet dispute, vols 1-2, Cambridge (Mass.), 1964-1966.

The Communist States in disarray, 1965-1971, comp. por A. Bromke y T. Rakowska-Harmstone, Minneapolis, 1972.
Crankshaw, Edward, *Khrushchev: a career,* Nueva York, 1966 [*Kruschev,* Barcelona, Noguer, 1969].
Czismas, M., *Der Warschauer Pakt,* Berna, 1972.
Dallin, David J., *Soviet foreign policy after Stalin,* Westport (Conn.), 1961.
Dornberg, John, *Breschnew. Profil des Herrschers im Kreml,* Munich, 1973 [*Breznev,* Barcelona, Euros, 1976].
Ethnic diversity and conflict in Eastern Europe, comp. por Peter F. Sugar, Santa Barbara (Calif.), Oxford, 1980.
Fischer-Galati, Stephen, *The Socialist Republic of Rumania,* Baltimore, 1969.
Gierek's Poland, comp. por A. Bromke y W. Strong, Nueva York, 1973.
Golan, Galia, *The Czechoslovak reform movement. Communism in crisis, 1962-1968,* Londres, 1971.
Grifftih, William, *Albania and the Sino-Soviet rift,* Cambridge (Mass.), 1963.
Hamilton, F. E. I., *Yugoslavia: pattern of economic activity,* Nueva York, 1968.
Hamm, Harry, *Rebellen gegen Moskau. Albanien - Pekings Brückenkopf in Europa,* Colonia, 1962.
Hoensch, Jörg K. y Nasarski, Gerlind, *Polen. 30 Jahre Volksdemokratie,* Hannover, 1975.
The Hungarian Revolution, comp. por M. J. Lasky, Nueva York, 1958.
Inofrmationen für den Aussenhandel der Mitgliedsländer des RGW und der SFRJ. Allgemeiner Teil: RGW, Leipzig, 1977.
Jacobsen, S., *Soviet strategy - Soviet foreign policy: military consideration affecting Soviet policy-making,* Brunswick (N. J.), 2.ª ed. 1974.
Kulski, Wladyslaw M., *The Soviet Union in world affairs. A documented analysis, 1964-1972,* Syracuse, 1973.
Kulturpolitik der Sowjetunion, comp. por Oskar Anweiler y Karl-Heinz Ruffmann, Stuttgart, 1973.
Länderberiche Osteuropa. I.*Sowjetunion,* Munich y Viena, 1974. II. *Polen,* Munich y Viena, 1976. III. *Tschechoslowakei,* Munich y Viena, 1977.
Levesque, J., *Le conflit sino-soviétique et l'Europe de l'Est: Ses incidences sur les conflits soviéto-polonais et soviéto-roumain,* Montreal, 1970.
Lewytzky, Boris, *Sowjetische Entspannungspolitik heute,* Stuttgart, 1976.
Löwenthal, Richard, *Chruschtschow und der Weltkommunismus,* Stuttgart, 1963.
Montias, John M., *Economic development in Communist Rumania,* Cambridge (Mass.), 1967.
Moskau-Bonn. Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland 1955-1973. Dokumentation, compilación e introducción de B. Meissner, vols. 1-2, Colonia, 1975.
Nove, Alec, *The Soviet economic system,* Londres, 1977.
Die Organisation des Warschauer Vertrages 1955-1975. Dokumente und Materialien, Berlín, 1975.
Partizipation und Wirtschaftsplanung in Osteuropa und der VR China, comp. por H.-H. Höhmann, Stuttgart, 1980.
The People's Democracies after Prague. Soviet hegemony, nationalism, regional integration? comp. por J. Lukaszewski, Brujas, 1970.
Prifti, Peter R., *Albania and Sino-Soviet relations,* Cambridge (Mass.), 1971.
Raina, Peter, *Political opposition in Poland, 1945-1977,* Londres, 1978.
Raupach, Hans, *Wirtschaft und Gesellschaft Sowjetrusslands 1917-1927,* Wiesbaden, 1979.
Reform of the economic mechanism in Hungary, development, 1968-1971, comp. por O. Gadó, Budapest, 1972.
Reorientation and commercial relations of the economies of Eastern Europe. A compendium of papers submitted to the Joint Economic Committee, Congress of the United States, Washington, 1974.

Die Rolle der DDR in Osteuropa, comp. por Gert Leptin, Berlín, 1974.
Schiavone, Giuseppe, *The Institution of Comecon,* Londres, 1981.
Schrettl, Wolfram y Vincentz, Volkhart, *Realisierungschancen des 10. Fünfjahrplans der UdSSR,* Munich, 1976.
Schulz, Eberhard, *Moskau und die europäische Integration,* Munich y Viena, 1975.
Soviet and Chinese influence in the Third World, Nueva York, Washington y Londres, 1975.
Soviet foreign policy since the death of Stalin, comp. por H. Hanak, Boston (Mass.), 1972.
The Soviet invasion of Czechoslovakia: its effect on Eastern Europe, comp. por E. J. Czerwinski y J. Piekalkiewicz, Nueva York, 1972.
Soviet naval influence. Domestic and foreign dimensions, comp. por Michael McGwire y John McDonell, Nueva York, 1977.
Sowjetunion 1976/77. Innenpolitik, Wirtschaft. Aussenpolitik. Analyse und Bilanz, Munich, 1977.
Stiller, Pavel, *Sowjetische Sozialpolitik 1950-1977. Eine Analyse der quantitativen und qualitativen Zusammenhänge,* Munich, 1978.
Syrop, K., *Spring in October. The Polish Revolution of 1956,* Londres, 1957.
Tiedtke, Stephan, *Die Warschauer Vertragsorganisation. Zum Verhältnis von Militär- und Entspannungspolitik in Osteuropa,* prólogo de E. Jahn, Munich y Viena, 1978.
Uschakow, Alexander, *Der Ostmarkt im Comecon. Eine Dokumentation,* Baden-Baden, 1972.
Wettig, Berhard, *Frieden und Sicherheit in Europa. Probleme der KSZE und MBFR,* Stuttgart, 1975.
Die Wirtschaft Osteuropas und der VR China 1970-1980. Bilanz und Perspektiven, comp. por Hans-Hermann Höhmann, Stuttgart, 1978.
Yanov, Alexander, *Détente after Brezhnev: The domestic roots of Soviet foreign policy,* Berkeley (Calif.), 1977.
Yugoslavia and the Soviet Union, 1939-1973. A documentary survey, comp. por Stephen Clissold, Londres, Nueva York y Toronto, 1975.
Zieger, Gottfried, *Der Warschauer Pakt,* Hannover, 1974.
Zinner, P. E., *Revolution in Hungary,* Nueva York, 1962.

CAP. 6: EUROPA EN LA POLÍTICA MUNDIAL

(Véase el cap. 1)

Indice de ilustraciones

Indice analítico



impreso en editorial melo, s. a.
av. año de juárez 226-local d/col. granjas san antonio
del. iztapalapa-09070 méxico, d. f.
cinco mil ejemplares y sobrantes
29 de agosto de 1986

HISTORIA DE EUROPA SIGLO XXI

KING, P. D.: *La Europa de la Alta Edad Media (400-1000).*

SMAIL, R. C.: *La Europa de las cruzadas (1000-1250).*

* HOLMES, G. A.: *Europa: jerarquía y revuelta (1320-1450).*

* HALE, J. R.: *La Europa del Renacimiento (1480-1520).*

* ELTON, G. R.: *La Europa de la Reforma (1517-1559).*

* ELLIOTT, J. H.: *La Europa dividida (1559-1598).*

* PARKER, G.: *Europa en crisis (1598-1648).*

* STOYE, J.: *El despliegue de Europa (1648-1688).*

HATTON, R. M.: *Europa (1680-1730).*

* OGG, D.: *La Europa del Antiguo Régimen (1715-1783).*

* HUFTON, O. H.: *Europa: privilegio y protesta (1730-1789).*

* RUDÉ, G.: *La Europa revolucionaria (1783-1815).*

* DROZ, J.: *Europa: Restauración y Revolución (1815-1848).*

* GRENVILLE, J. A. S.: *La Europa remodelada (1848-1878).*

* STONE, N.: *Europa (1878-1919).*

* WISKEMANN, E.: *La Europa de los dictadores (1919-1945).*

* Volúmenes publicados.

HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI

1. **Prehistoria**
2. **Los Imperios del Antiguo Oriente**
   I. Del Paleolítico a la mitad del segundo milenio
3. **Los Imperios del Antiguo Oriente**
   II. El fin del segundo milenio
4. **Los Imperios del Antiguo Oriente**
   III. La primera mitad del primer milenio
5. **Griegos y persas**
   El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, I
6. **El helenismo y el auge de Roma**
   El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, II
7. **La formación del Imperio romano**
   El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, III
8. **El Imperio romano y sus pueblos limítrofes**
   El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, IV
9. **Las transformaciones del mundo mediterráneo. Siglos III-VIII**
10. **La Alta Edad Media**
11. **La Baja Edad Media**
12. **Los fundamentos del mundo moderno**
    Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma
13. **Bizancio**
14. **El Islam**
    I. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano
15. **El Islam**
    II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días
16. **Asia Central**
17. **India**
    Historia del subcontinente desde las culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés
18. **Asia Sudoriental**
    Antes de la época colonial
19. **El Imperio chino**
20. **El Imperio japonés**
21. **América Latina**
    I. Antiguas culturas precolombinas
22. **América Latina**
    II. La época colonial
23. **América Latina**
    III. De la independencia a la segunda guerra mundial
24. **Los inicios de la Europa moderna, 1550-1648**
25. **La época del absolutismo y la Ilustración, 1648-1779**
26. **La época de las revoluciones europeas, 1780-1848**
27. **La época de la burguesía**
28. **La época del Imperialismo**
    Europa, 1885-1913
29. **Los imperios coloniales desde el siglo XVIII**
30. **Los Estados Unidos de América**
31. **Rusia**
32. **Africa**
    Desde la prehistoria hasta los Estados actuales
33. **Asia contemporánea**
34. **El siglo veinte, I. 1918-1945**
35. **El siglo veinte, II. 1945-1982** (2 tomos)
36. **El siglo veinte, III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder.**

HISTORIA DE LA FILOSOFIA SIGLO XXI

1. El pensamiento prefilosófico y oriental.
2. La filosofía griega.
3. Del mundo romano al Islam medieval.
4. La filosofía medieval en Occidente.
5. La filosofía en el Renacimiento.
6. Racionalismo. Empirismo. Ilustración.
7. La filosofía alemana, de Leibniz a Hegel.
8. La filosofía en el siglo XIX.
9. Las filosofías nacionales. Siglos XIX y XX.
10. La filosofía en el siglo XX.
11. La filosofía en Oriente (la filosofía islámica, india y china hasta nuestros días).

Esta **HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI**, preparada y editada inicialmente por Fischer Verlag (Alemania), sigue un nuevo concepto: exponer la totalidad de los acontecimientos del mundo, dar todo su valor a la historia de los países y pueblos de Asia, Africa y América.

Resalta la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia.

Saca a la luz el despertar de la humanidad a su propia conciencia.

En la **HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI** han contribuido ochenta destacados especialistas de todo el mundo.

Consta de 36 volúmenes, cada uno de ellos independiente, y abarca desde la prehistoria hasta la actualidad.

